Ética psicosocial

Enfoque comunitario

Actores, valores, opciones y consecuencias

Alipio Sánchez Vidal

PIRÁMIDE

ALIPIO SÁNCHEZ VIDAL
PROFESOR TITULAR DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Ética psicosocial

Enfoque comunitario

Actores, valores, opciones y consecuencias

EDICIONES PIRÁMIDE

Índice

Prólogo

Introducción

1. Contexto social y crisis moral: modernidad, posmodernidad, globalización... y la historia continúa

1. La modernidad
   1.1. Crítica y ambivalencia del legado moderno
2. La revuelta antimoderna: ¿ética posmoderna?
   2.1. Irresponsabilidad social e indiferencia personal
3. Globalización y crisis económica
   3.1. ¿Fin de la historia o despertar del sueño del progreso continuo?
   3.2. El impacto de la crisis económica y la necesidad de regeneración ética
4. La crisis moral
   4.1. ¿Crisis temporal o deterioro crónico?
   4.2. Erosión de la alteridad e instrumentalización humana
   4.3. Desarrollo material, economicismo y anomia moral
   4.4. Dificultades de modulación moral y elevación de los medios a fines

Resumen e inconclusión: modernidad, posmodernidad, acción social y crisis moral

Palabras clave

2. Conceptos básicos: técnica, acción psicosocial con enfoque comunitario y ética

1. Técnica
   1.1. Relevancia temática y justificación de la técnica psicosocial
   1.2. Retos y problemas: industrialismo, capitalismo y mundo global
2. Técnica y ética: relaciones y abusos
   2.1. Interacciones
3. Acción psicosocial
   3.1. Contenido: lo psicosocial
   3.2. Tres significados de «lo social»
   3.3. Modalidades de actuación y relación psicosocial
   3.4. Conclusión: el significado de la APS
4. El enfoque comunitario
   4.1. Ideas básicas
   4.2. Método de actuación y posición ética
5. Ética
   5.1. ¿Ética social?
   5.2. Ética práctica: valores morales e ideales personales y sociales
   5.3. Sistemas de valores y modulación subjetiva y contextual
   5.4. Alternatividad, bipolaridad y bidireccionalidad de la ética
6. Estructura y dinámica de la acción moral
   6.1. Aspectos subjetivos: libertad, intenciones, conciencia y emoción
   6.2. Aspectos relacionales y teleológicos
   6.3. Aspectos objetivos: consecuencias y responsabilidad

Resumen: técnica, acción psicosocial y ética
Palabras clave

3. Ética psicosocial: actores, valores, opciones y consecuencias

1. El descuido de la ética en el campo psicosocial
   1.1. Actitudes y tendencias: «buenismo» retórico e insuficiencia de la deontología individual
   1.2. Plan del capítulo
2. Causas y consecuencias de la desatención ética en el terreno psicosocial
   2.1. El precio de la anomia moral
3. Justificación: ética, desarrollo humano y recreación del mundo
4. Postura básica y viabilidad: ¿es realizable la ética comunitaria?
   4.1. Viabilidad social
   4.2. Viabilidad práctica y autocuidado
5. Ética psicosocial realizable
6. Estructura y dinámica ética de la acción profesional
   6.1. Aspectos subjetivos
   6.2. Autonomía técnica, eficacia y responsabilidad profesional
   6.3. Intencionalidad
   6.4. Poder técnico
7. La relación profesional: objetividad e implicación personal
   7.1. La relación profesional en el escenario psicosocial
8. El destinatario de la acción psicosocial
   8.1. Destinatarios potenciales y concepciones de la APS
   8.2. Criterios de elección: justicia social y beneficencia
9. Aspectos objetivos: consecuencias y responsabilidad
   9.1. Alcance y límites: irresponsabilidad y sobrerresponsabilización
   9.2. Definiendo el bien y el mal y compartiendo la responsabilidad
   9.3. Responsabilidad por efectos indeseados: previsión científica, control técnico y reparación de daños
10. Práctica psicosocial: diferencias éticas
   10.1. Diferencias en la acción
   10.2. Diferencias en la generación y uso de conocimiento
11. Ingredientes básicos: actores, valores, opciones y consecuencias

Resumen: ética psicosocial realizable
Palabras clave

4. Valores y principios deontológicos y sociocomunitarios

1. Orientaciones valorativas y problemas morales
   1.1. La tarea práctica: «traduciendo» los valores a acción
   1.2. Sistema valorativo psicosocial: valores deontológicos y valores sociocomunitarios
2. Valores y principios deontológicos en la aps
   2.1. Beneficencia y no maleficencia
   2.2. Autonomía individual y autonomía compartida
   2.3. Confianza
   2.4. Veracidad factual y holística
   2.5. Justicia social (visión restringida)
   2.6. Interés propio y autocuidado: derechos básicos y optativos
3. Valores y principios sociocomunitarios
   3.1. Justicia social: Justicia distributiva, mínimo vital y equidad relacional
   3.2. Solidaridad y comunidad
   3.3. Compromiso social y responsabilidad social
   3.4. Diversidad y derecho a la diferencia

3.5. Desarrollo humano personal y colectivo
3.6. Empoderamiento
3.7. Participación y organización social
3.8. Eficacia
4. Sistema sociocomunitario de valores
Resumen
Palabras clave

5. Temas y cuestiones éticas psicosociales: tipos y contenido

1. Tipología de los problemas éticos: conflicto y anomia
1.1. Conflictos: Valores, actores, opciones y consecuencias
1.2. Anomia AVOC
1.3. Orientaciones y «soluciones» a la anomia y el conflicto ético psicosocial
1.4. Situaciones y factores generadores
2. Contenido de la problemática ética psicosocial: cuestiones previas
2.1. Contradicción medios-fines: actuación externa y desarrollo humano autodirigido
3. Legitimidad, intervencionismo y deber de ayudar
3.1. Intervencionismo social: liberalismo y planificación socialista
3.2. Intervencionismo profesional y desarrollo humano
3.3. Responsabilidad profesional por acción y por omisión
4. autoridad e intencionalidad
4.1. Autoridad política, técnica y moral
4.2. Intenciones, resultados, autobeneficio y agendas ocultas
4.3. Límites de la racionalidad científico-técnica: efectos secundarios y lógicas relacional y política
5. Temas y cuestiones éticas generales de la APS
6. Cuestiones y problemas éticos frecuentes en la APS
6.1. Algunas cuestiones éticas psicosociales
6.2. Roles duales
6.3. Confidencialidad y consentimiento voluntario e informado
6.4. Maltrato institucional, responsabilidad colectiva y cambio socioinstitucional
6.5. La necesidad del contrato
6.6. La actuación en situaciones de crisis
Resumen: temas y cuestiones éticas
Palabras clave

6. Metodología práctica y casuística: el esquema AVOC

1. Evaluación y resolución de problemas morales: intuición, racionalidad y aprendizaje social
1.1. Inducción intuitiva y deducción racional
1.2. Imitación y emulación social
1.3. Educación moral: cultivo de potencialidades, aprendizaje de normas e interacción social
1.4. Preparación para resolver problemas morales
1.5. Los límites de la racionalidad práctica: valoración, emoción y relación social
2. Procedimientos de abordaje de las cuestiones éticas: propuestas psicosociales
2.1. Derechos y deberes recíprocos en el trabajo microsocial
2.2. Externalizando el diálogo interior: un enfoque inductivo de toma de decisiones
2.3. Un proceso para la acción social
3. Modelos y enfoques de solución de dilemas éticos en el trabajo social
4. Actores, valores, opciones y consecuencias: una propuesta
4.1. Enfoques de evaluación moral
4.2. Criterios

5. Proceso analítico y resolutivo AVOC
5.1. Dinámica operativa
6. Casuística: presentación y solución de casos
7. Caso A. Mandato judicial, autonomía personal y responsabilidad profesional: un difícil dilema
7.1. Planteamiento del problema: actores y valores
7.2. Planteamiento de la solución: opciones, consecuencias y factores moduladores
7.3. Opción elegida
8. Caso B. Fidelidad al cliente vulnerable y responsabilidad social: un practicante atrapado
8.1. El problema: valores, derechos, deberes y brechas de titularidad y legitimidad
8.2. Planteando la solución: opciones, consecuencias y factores moduladores
8.3. Opción elegida y realización
9. Casos-problema
Resumen
Palabras clave

Referencias

Créditos

Prólogo

LA ROSA DE LOS VIENTOS

O cómo orientarnos, esa es la propuesta de Alipio Sánchez Vidal ante una ciudadanía huérfana de referentes, desorientada de valores, azotada por el consumismo, falta de espiritualidad, de anclajes culturales, de psicohistoria colectiva.

En un marasmo de individualidad, nihilismo, hedonismo, el autor nos propone una toma de conciencia, una regeneración para sentirnos ciudadanos concernidos.

Confundidos en el relativismo, cabe plantearse el contenido de términos como deber, responsabilidad y aun la siempre respetada deontología kantiana, donde libertad y voluntad se comprometen.

Permitan a este prologuista invitar a leer la obra de Viktor Frankl *El hombre en busca de sentido*.

Partimos de que no «todo vale», ni todo es relativo ni subjetivo. Dar la vida por alguien está bien, matar está mal. La ley de la gravedad es real.

Precisamos repetir el abecé de la moral.

Alipio sobrevuela con inteligencia los cambios sociales debidos a la globalización, las nuevas tecnologías, el eclipse de las ideologías, y la sensación de impotencia de la ciudadanía, de desnudez del individuo.

Hemos de agradecer al autor su capacidad para diseccionar lo que acontece, lo que lo motiva, y explicarlo con claridad pedagógica.

Coincidiremos en que *no soy, somos*. Yo soy en los otros, parte de los otros. Una sociedad donde el poder está en manos de multinacionales que utilizan al hombre como medio, que se permite hablar de recursos humanos, que incita al egocentrismo, degrada.

¿Enfrentamos una amoralidad colectiva, una corrupción galopante? ¿Padecemos de anomia colectiva?

Sánchez Vidal tiende un puente a la esperanza. La ética sustentada en la generosidad, en la solidaridad, en el desarrollo humano y en la justicia social. Nos está hablando del tú, del otro.

Resulta encantador apreciar en el autor su empeño en indicarnos que el objetivo del libro es práctico, siendo que se sustenta en un estudio también teórico portentoso. Avanzo en la lectura y me congratulo con su contenido, con el enfoque del deber ser, con la esperanza cimentada en la autoexigencia.

Responsabilidad, libertad, dos caras de la misma moneda, unidas por las emociones tan humanas y la conciencia moral.

Alteridad, el otro como objeto de la ética; el otro, que también soy «yo mismo».

Con una fluida redacción, Alipio nos lleva con coherencia por inexplorados dilemas de la justicia distributiva, del egoísmo y altruismo que se entrecruzan en el ser humano.

La implicación y autenticidad del profesional en su intervención es un pasaje reseñable. Asunción de tareas, responsabilización y definición de ante quién debe dar cuenta.

No menos certera es la diferenciación entre deontología individual y la compleja ética psico-social, donde la autonomía individual puede convertirse en disolvente social.

El texto que tenemos entre manos hará mucho bien a alumnos y profesionales a los que se exige confianza, veracidad.

Lea el dilema del practicante psicosocial.

Se agradece que al inicio de cada capítulo se nos explique de qué va a tratar el mismo, y el resumen final.

Sánchez Vidal es un experto que ha publicado continuadamente desde 1991, y específicamente sobre ética de la intervención social en 1999. Le agradezco su invitación a dejar plasmadas en estas líneas lo que aprendí con mi tesis doctoral sobre *Dilemas éticos de los psicólogos,* o en mi desempeño como presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Madrid durante seis años.

La ética psicosocial propuesta por el autor conlleva incertidumbre y es aquí donde se nos orienta de forma práctica. Es de agradecer a tan referente editorial la publicación de este volumen pilar sobre la forma de conducirse de una ciencia que trabaja con el individuo, pero también con grupos humanos.

Se aprecia un uso correcto, amplio del lenguaje y conocimiento de la realidad. He aprendido mucho sobre legitimidad y autoridad, sobre la justificación sociomoral para interferir en la vida de las personas y las credenciales que deben acreditar los profesionales.

Como profesor universitario y como profesional me he encontrado con algún compañero desequilibrado que no debería ejercer su función mientras esa situación incapacitante y de riesgo se mantenga. Ni el miedo, ni la comodidad, ni el corporativismo deben paralizar la denuncia a la comisión deontológica.

Los colegios profesionales (que ya han celebrado su 35 aniversario) tienen una misión esencial: garantizar el correcto desempeño de sus profesionales a favor de la ciudadanía y de cada persona.

Alipio no confunde la objetividad con la asepsia, con el inmovilismo, pero tampoco cae en el proteccionismo e intervencionismo. Estamos tratando del equilibrio inestable del profesional, del riesgo de mesianismo, de sentirse en posesión de la verdad, de no captar la responsabilidad que se contrae al intervenir en la vida de otro irrepetible ser humano.

Avanzamos hacia el final visionando distintas encrucijadas, tratando de la confidencialidad y el consentimiento voluntario e informado.

El autor propone procedimientos claros y específicos para dar respuesta a preguntas tan percutientes como ¿qué métodos debemos usar para aprender a resolver

los problemas morales? La propuesta es más que atractiva. Externalizar el diálogo interior, realizar un enfoque inductivo en la toma de decisiones.

Coincidencia plena con Alipio. La discusión de casos es una importante fuente de aprendizaje moral práctico. A los alumnos hay que plantearles dilemas éticos, y con los profesionales los supervisores deben hacer hincapié en conductas que no por generalizadas deben pasar inadvertidas.

Un buen libro, necesario. Tan importante como conocer nuestra ciencia es saber cómo emplearla éticamente. Más allá de nuestro discurrir deontológico, precisamos interrogarnos, cuestionarnos en la intervención individual y en la grupal. Aquí tenemos una fuente de reflexión y conocimiento para ejercer un correcto desempeño personal y profesional.

JAVIER URRA
Académico de número de la Academia de Psicología de España

Introducción

ACTORES, VALORES, OPCIONES Y CONSECUENCIAS: ÉTICA PSICOSOCIAL, ENFOQUE COMUNITARIO

La ética de orientación social es hoy más pertinente que nunca. En la sociedad, porque los excesos de la resaca de la grave crisis económica y social, que ahora emergen, hacen patente la necesidad de una regeneración ética que reafirme, y redefina si es preciso, los valores morales que sostienen la vida pública. En el nivel profesional, la ética ha oscilado entre los defectos de una deontología biomédica y los excesos de unos pronunciamientos político-sociales grandilocuentes, poco útiles para las distintas áreas de acción social. El énfasis en el individuo y la enfermedad tornan a menudo a la deontología biomédica —la ética práctica más elaborada y explícita— insuficiente y sesgada para encarar los problemas más sociales y los enfoques de trabajo orientados al desarrollo humano y social. Y aunque la gran retórica política, visible en no pocos campos y enfoques sociales, pudiera contribuir a la reflexión global, resulta escasamente útil, cuando no directamente frustrante, para gestionar los dilemas y conflictos éticos concretos de la práctica cotidiana.

Esas insuficiencias y sesgos de las éticas existentes, junto al crecimiento de las nuevas problemáticas humanas —cada vez más ligadas a las duras y complejas condiciones vitales y productivas de la vida moderna— y la «universalización» de las demandas positivas de bienestar y desarrollo humano, demandan enfoques éticos de orientación más social. Enfoques que sean más útiles para la orientación moral de los ciudadanos, pero sobre todo para guiar la práctica de los profesionales de la psicología, la salud, la educación, el trabajo social o la gestión política de orientación positiva y social. Este libro pretende llenar ese hueco en los campos citados desde una orientación específicamente comunitaria. Se propone una ética que, por un lado, incorpore la diferente relevancia que factores como las intenciones, las relaciones, el contrato establecido y las técnicas usadas tienen en el campo microsocial respecto al médico, teniendo en cuenta, por otro lado, la mayor complejidad, fluidez y ambigüedad de los dilemas éticos psicológicos y sociales. Una ética que, en tercer lugar, amplíe y reformule los principios deontológicos clásicos (beneficencia, no maleficencia, confianza y autonomía) en la dirección social incluyendo la autonomía compartida o el autocuidado —y la veracidad holística—, y defina lo más operativamente posible los valores sociales «clásicos» (solidaridad, justicia, responsabilidad social), así como «nuevos» valores como la diversidad y el empoderamiento.

ALIPIO SÁNCHEZ VIDAL
Universidad de Barcelona

1

Contexto social y crisis moral: modernidad, posmodernidad, globalización... y la historia continúa

Esbozo en este capítulo los grandes trazos socioculturales que encuadran históricamente la acción psicosocial y su consideración ética. Tomo la modernidad y su legado como cauce general y punto de partida de ese encuadre, en el que la posmodernidad y la globalización de la segunda parte del siglo XX, así como la gran crisis económica de principios del siglo XXI establecen nuevas coordenadas y tendencias. Doy por supuesto que, siendo esas tendencias fenómenos poliédricos que interactúan entre sí de formas inesperadas, y careciendo de la necesaria distancia y perspectiva histórica (que es siempre tentador suplir con la propia subjetividad) respecto de los sucesos más recientes, se pueden hacer no una sino varias lecturas de su significado y de cómo tales tendencias y sucesos afectan a la ética psicosocial. La lectura aquí ofrecida es, por tanto, una entre las varias posibles, y hará bien el lector en usar los datos de su propia subjetividad personal o particularidad contextual para corregirla o hacer su propia lectura a partir de los datos y perspectivas aquí sugeridos.

Cabe preguntarse, sin embargo, antes de comenzar la tarea contextualizadora, cuán valido y clarificador resultará ese marco para el tema de la ética psicosocial. El enmarque contextual habría de servir, de entrada, para situar social, cultural e históricamente el tema, ayudando a su comprensión dinámica global. Admitamos que, en general, el contexto sociocultural condiciona tanto la «construcción» de los problemas psicológicos y sociales (a los que siempre subyacen visiones de lo que es malo e indeseable) como los ideales de hombre y sociedad que guían las «soluciones» a esos problemas y las aspiraciones de desarrollo humano, y, en fin, los medios y métodos usados para lograr lo uno y lo otro. Pero el contenido, intensidad y dirección de ese *condicionamiento* de la problemática social y el desarrollo humano debe ser aclarado y especificado para cada asunto y contexto concretos; no se puede aceptar como algo lineal y general, salvo que nos limitemos a dejar constancia de lo obvio: en la vida psicológica y social todo está, de una u otra forma, relacionado con todo.

¿Hasta qué punto existe un condicionamiento contextual relevante en el caso de la acción psicosocial (APS en adelante) y cómo va a ayudar su comprensión a clarificar la ética de la APS? Para contestar a dicha pregunta, en estos tiempos de digestión del posmodernismo y de retroceso económico y social, debemos hacer algunas

matizaciones ligadas al contenido cultural de la rebelión posmoderna reciente y al nuevo clima creado por la cruel crisis económica y las reacciones (o falta de tales) a ella.

En primer lugar, la posmodernidad que impregnó el mundo intelectual en el último cuarto del siglo XX conllevaba —y alentaba— un serio cuestionamiento moral, repudiando los grandes sistemas éticos y de valor. El rechazo posmoderno de cimientos y certezas culturales y morales militaba (Sánchez Vidal, 1999) contra la propuesta de un marco cultural y social genérico —que como consenso global o acuerdo de mínimos fuera aceptable para la mayoría— en el que situar coherentemente —y desde el que dar sentido a— la ética de la APS. Pero, a su vez, y frente al esencialismo racionalista moderno, la visión posmoderna ensalzaba el significado y valor del contexto, como dato crucial para entender (y abordar) cualquier tema o asunto. De este modo, el legado posmoderno es ambivalente en relación al contexto, aunque claramente negativo respecto al empeño de elaborar una ética con una mínima pretensión de validez general.

Además, hay que añadir que esto pasaba antes, en la «era posmoderna». ¿Qué sucede hoy, pasado el «sarampión» posmoderno y enfrentados a unas condiciones económicas y sociales mucho más dramáticas que han barrido las cavilaciones posmodernas? El panorama que contemplamos desde el mirador de la segunda década del siglo XXI es, ciertamente, diferente: la crisis moral posmoderna parece casi un juego de niños, y la devastadora ferocidad de la crisis y sus secuelas han resultado tremendamente clarificadoras. Han resituado, en primer lugar, las distintas piezas de nuestra experiencia vital, poniendo las cosas en su sitio: las tribulaciones intelectuales y los debates culturales han sido relegados a un segundo plano ahora que algunas necesidades básicas o derechos fundamentales arduamente conquistados están en peligro.

El cataclismo económico ha trocado muchas de las dudas e incertidumbres posmodernas en *certezas brutales* y evidentes: el fin, en el «primer mundo», de la idea de progreso (nuestros hijos no vivirán mejor, sino peor, que nosotros), la implacable crueldad del capitalismo financiero y la impunidad de los grupos y élites que lo sostienen, la degradación personal y colectiva sobrevenida, la miseria de una política rehén del dinero, la constancia meridiana de dónde reside realmente el poder en nuestros días, el anhelo de una euforia material y un bienestar ahora inasequibles, el cóctel sentimental de desesperación, indignación e impotencia de incierta traducción operativa, etc. Las cavilaciones posmodernas nos parecen hoy, vistas desde la sima crítica, una macabra broma intelectual propia de un momento en el que, teniendo todo lo necesario y más, la alta cultura se podía permitir toda clase de juegos malabares. Se trataba, se dice, de una gripe que había que pasar. Pero ahora, sacudidos por la corrupción y otros excesos que la resaca de pasadas burbujas nos devuelve al cabo del tiempo, la conciencia de la necesidad de regeneración moral y de una ética social firme que impida la repetición de esos excesos es demasiado clara como para distraernos con dudas agónicas y frivolidades.

En segundo lugar, el contexto puede no resultar tan revelador ni condicionante en

el terreno concreto de la ética si la *lógica* contextual y la de la APS *no coinciden* ni tienen los mismos intereses y ritmos temporales. La divergencia es meridiana en el caso de la lógica contextual «posmoderna»: mientras ésta postulaba desmantelar la ética, al menos en su acepción de canon universal, la acción social, cada vez más consciente de sus implicaciones morales y de lo primitivo de su reflexión al respecto, intenta construir una ética operativa válida que la legitime socialmente y guíe al trabajador de lo social al enfrentar los problemas de la práctica cotidiana. Pero, de nuevo, eso era antes. Ahora, la indignación social y la conciencia de la necesidad de regeneración moral surgidos de la gran crisis crean un clima mucho más proclive a la reflexión y el rearme ético en el campo social. No podemos, en todo caso y como se ve, traspasar sin más a la APS las lógicas y climas sociales del momento. No sólo porque, por su propia naturaleza, los climas psicológicos y morales suelen ser temporales y mudables y la ética psicosocial debe aspirar a una mínima permanencia, sino porque además, aunque esa ética sea permeable al entorno debe gozar de una razonable *autonomía* en función de la particular misión social y valores morales que en el seno de cada sociedad o comunidad asuman los practicantes psicosociales.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, abordo ahora la modernidad y su legado, la reacción posmoderna y la globalización como contextos socioculturales y condicionantes globales del examen ético de la APS. Dedico también atención retrospectiva a la crisis moral que acompañó a la posmodernidad y concluyo con una síntesis de las relaciones entre modernidad, posmodernidad, globalización y APS. Como voy a usar continuamente la expresión «acción psicosocial», que explico extensamente en el capítulo 2, avanzo entre tanto una mínima definición de conveniencia: la *acción psicosocial* nombra a un conjunto de actuaciones realizadas en los niveles micro o mesosocial por varias profesiones que combinan de distintas formas (a menudo complementarias y multidisciplinares) lo psicológico y lo social.

1. LA MODERNIDAD

En el libro *Ética de la intervención social*, escrito en el fragor de la agitación posmoderna de finales de siglo (Sánchez Vidal, 1999) se describía así el enrarecido ambiente y el débil pulso vital y moral del momento: «Desaparecido el socialismo, huérfano de certezas, alternativas y “enemigos”, y desatadas las fuerzas de la diversidad —y algunos atavismos disgregadores—, el Occidente opulento y posindustrial encara en el fin del milenio un panorama crítico, complejo y desconcertante que, a falta de mayor concreción, algunos han bautizado como “posmoderno”» (p. 12). Y, siguiendo con mi retrato de la época, traía a colación el certero retrato de la filósofa Victoria Camps (1990): «Vivimos en un mundo plural, sin ideologías sólidas y potentes, en sociedades abiertas y secularizadas, instaladas en el liberalismo económico y político. El consumo es nuestra forma de vida. Desconfiamos de los grandes ideales porque estamos asistiendo a la extinción y fracaso de la utopía más reciente. Nos sentimos como de vuelta de muchas cosas, pero estamos confusos y desorientados... Hemos conquistado el refugio de la

privacidad y unos derechos individuales... El sujeto vuelve a aparecer, pero sin prepotencia... Quererse a sí mismo y no privarse de nada es el fin inmediato e indiscutible de la existencia... La libertad es el valor propiamente dicho» (pp. 7-8).

La pregunta es obligada: ¿cómo se llegó a semejante situación de desfallecimiento y revuelta antimoderna? Para responderla, debemos revisar el proyecto modernizador occidental, que desde el cierre renacentista de la época medieval combina un conjunto de desarrollos técnicos, demográficos, urbanísticos y sociales unificados por una optimista filosofía de fe en el progreso, la razón y la ciencia que llamamos Ilustración. Un proyecto que hunde sus raíces en el descubrimiento del nuevo mundo, en las revoluciones científica (constitución de las ciencias modernas), industrial y política (democracias inglesa, americana y francesa) y en el capitalismo comercial e industrial, edificado, según la hipótesis weberiana, sobre la cultura ética calvinista.

Un proceso que, siguiendo el guión sociológico al uso, está profundamente impregnado de unos valores —secularización, racionalidad instrumental e individualismo— que, junto a una fe inquebrantable en el progreso humano, crean las condiciones culturales para unos cambios materiales y sociales sin precedentes, aunque de significado y consecuencias polémicos. Visto *a posteriori*, y en función de la parte de tales consecuencias que el observador subraye, el proceso es valorado de forma marcadamente bivalente: mientras unos lo toman como espejo en el que mirarse —o, al menos, como proyecto inacabado a mejorar o completar—, para otros se trata de una herencia opresora y nefasta a desenmascarar y clausurar.

La sobriedad, el sentido del deber y la exaltación del trabajo penetrado de religiosidad calvinistas (o de la disciplina y dedicación del monasticismo benedictino, si seguimos a Mumford, 1971) son la plataforma cultural y psicológica sobre la que se edifica el capitalismo inicial. El uso del método científico —que combina racionalismo y verificación empírica— y los sucesivos descubrimientos y aplicaciones industriales y domésticas fortalecen la conciencia del propio poder y la creencia en el progreso humano basado en la ciencia y la razón. Las revoluciones políticas alumbran un nuevo orden democrático basado en la voluntad de los ciudadanos y la autodeterminación de los pueblos.

La revolución industrial posibilita, a través de las nuevas máquinas y métodos, la producción masiva y barata de bienes materiales. Pero ocasiona, también, desplazamientos masivos de la población y enormes dislocaciones sociales bajo las brutales condiciones de producción capitalista. Condiciones que si, por un lado, permiten que los hombres se liberen de los ligámenes feudales, alientan, por otro, su alienación y deshumanización, reduciéndolos a mercancía que se compra y se vende en un inclemente y despiadado mercado de trabajo (Polianyi, 1944). El tránsito de una economía agraria, de subsistencia, a una industrial, y la mejora de la medicina y de las condiciones públicas de salud, generan una «explosión» demográfica sin precedentes. El mundo se urbaniza. La ciudad pasa a ser el centro de producción y comercio, sede de la burguesía y de una cultura más heterogénea, sedentaria y dinámica característica de la modernidad.

La sociedad y la vida diaria sufren profundas convulsiones en sus distintas esferas.

El creciente papel del trabajo y la educación formal en la esfera pública es paralelo a la merma de la función social de la familia, reducida a poco más que un refugio de la afectividad y la vida privada. La imparable expansión del individualismo y el deseo de autonomía minan también la institución familiar, haciéndola más frágil, pequeña e inestable. El trabajo —la nueva religión secular— recoge muchas de las funciones psicosociales (como generar valor personal e identidad social) que la familia, la religión y la comunidad pierden, convirtiéndose en eje vertebrador de la vida pública. También el territorio pierde valor y significado con la modernidad, de forma que el arraigo y los vínculos comunitarios se deterioran bajo el impacto combinado de la movilidad física, los intercambios simbólicos y relacionales y el nuevo énfasis en el individualismo, el trabajo, la utilidad productiva y el interés particular, en detrimento de la interdependencia, la comunidad y el interés colectivo.

La emancipación del individuo torna conciencia e identidad individual lo que antes era conciencia colectiva, familiar y comunitaria. La secularización desmitifica el mundo, desplazando el papel de la religión, el mito, la costumbre y la trascendencia en favor de la razón humana. La creciente racionalidad instrumental e impersonal (visible en la ciencia y la técnica, en la ley, en la organización social y en la planificación económica) sustituye en gran parte a los lazos y valores tradicionales. Nace el individuo emancipado, agente autónomo de sí mismo y ciudadano titular de derechos, ya no, como antaño, agente de un dios o un señor feudal o mero engranaje de una familia y una comunidad inquebrantables. La sociedad pasa, en fin, de ser un todo cohesionado, integrado y relativamente estático, que aporta una seguridad y significado a todos sus miembros, a un conjunto diverso y dinámico de instituciones y sistemas especializados y autónomos, cuyos intereses y proyectos es preciso coordinar o, cuando menos, hacer compatibles.

TABLA 1.1

Modernidad y posmodernidad/globalización: características y clima sociomoral

Modernidad	Posmodernidad/globalización
• Industrialización mecánica e informativa (primeras olas). • Urbanización. • Capitalismo industrial e informativo (predigital). • Individualismo y autonomía. • Erosión de la comunidad y la solidaridad social. • Exaltación del trabajo y la utilidad productiva. • Egoísmo moral (*self-interest).* • Hedonismo materialista y consumismo. • Secularización. • Ilustración y racionalidad; burocracias centralizadas.	• Nuevas tecnologías de la información e Internet. • Predominio de los servicios. • Globalización económica y exaltación del mercado. • Hundimiento del socialismo, ruptura del equilibrio bipolar y emergencia del terrorismo global. • Capitalismo financiero. • Aumento de la desigualdad. • Neoliberalismo y «Estado mínimo». • «Flexibilidad» laboral y exclusión social. • Diversidad, localismo, contextos y periferias. • Devaluación de certezas, valores y razones. • Reconocimiento del poder y la emoción. • Hiperindividualismo. • Consumismo materialista y electrónico. • Conformismo social. • Crisis económico-financiera.

- Liberalismo.
- Socialismo y movimientos obreros.
- Movimientos antiglobalización, escarceos de articulación social de la indignación resignada.

1.1. Crítica y ambivalencia del legado moderno

Aunque la idea de crisis cultural es moneda corriente de la discusión intelectual del fin de siglo pasado, la naturaleza y alcance de esa crisis y de la bondad del legado moderno continúan siendo objeto de debate.

El perfil de la rebelión crítica (encarnado por la «posmodernidad») se puede retratar en la siguiente coreografía de hechos, estados y vivencias: fracaso del socialismo como alternativa general; renacimiento de los nacionalismos y fundamentalismos y recrudecimiento de las diferencias entre pobres y ricos; desencanto con la democracia formal, debilitamiento del estado nacional y fortalecimiento de los movimientos de base y «agendas» sociales alternativas (ecología, pacifismo, feminismo, nuevo asociacionismo, etc.); «mundialización» económica neoliberal y tránsito de una economía industrial a una centrada en los servicios y la información; apogeo del consumo como forma de vida y horizonte materialista de realización personal basado en tener y acumular, no en ser o relacionarse con otros; cuestionamiento de las conquistas sociales y el «Estado del bienestar»; fragmentación social; tránsito de los valores «capitalistas» iniciales (austeridad, ahorro, trabajo) al hedonismo consumista y la satisfacción inmediata; cuestionamiento del racionalismo moderno y de las certezas cognoscitivas (ciencia), valorativas (moral) y estéticas (arte); exaltación de la diversidad, el localismo y el contexto frente a la unidad y la uniformidad; explosión de la comunicación simbólica y la «información» en los medios de masas, la publicidad comercial o la propaganda política; dificultad creciente del sujeto para integrar y dar sentido al abrumador e inescapable bombardeo sensorial y simbólico; tecnificación y rutinización vital para enfrentar la incontenible avalancha de tecnología dura, electrónica y simbólica que inunda tanto la esfera laboral como la vida cotidiana en su conjunto.

La complejidad y rapidez de esos cambios, que avasallan al hombre común (tabla 1.1), da, además, pie a juicios *polivalentes,* y hasta contradictorios, en virtud del abigarrado multifacetismo y dinamismo de hechos y vivencias y de la diversa manera en que los cambios y aportes técnicos, económicos y culturales afectan a los distintos grupos sociales. El legado de la modernidad es visto de forma marcadamente bivalente (multivalente en realidad) por las diversas sensibilidades «posmodernas». Lo mismo sucede con la idea de «progreso», central en la constelación cultural moderna: la evidencia de que el avance tecnológico y económico no sólo no lleva al progreso social o al desarrollo humano (Mumford, 1934 y 1969; Ellul, 1954), sino que, por el contrario, relega a menudo al hombre al papel de servidor de la máquina o la economía (Ortega y Gasset, 1939; Sen, 1990) cuestiona la dirección misma de la modernidad. Repitiendo lo escrito hace unos años (Sánchez Vidal, 1993):

> «De ninguna manera puede afirmarse que el progreso económico y tecnológico ha traído consigo el avance social y humano. Si prescindimos de anteojeras ideológicas “progresistas” o bienpensantes que con demasiada frecuencia prejuician la realidad..., es difícil evitar la conclusión de que el progreso material no

> sólo no ha aumentado, sino que con frecuencia ha disminuido, la calidad de vida de los ciudadanos (de gran parte de ellos, al menos) en los países occidentales... Aunque el progreso ha creado, por un lado, las condiciones tecnológicas y económicas para una vida mejor, ha destruido, por otro, tramas sociales y relacionales básicas, creando escenarios psicosociales que degradan notablemente el bienestar de personas y grupos humanos. Se produce así una situación paradójica, compleja y frustrante en la que las mejores condiciones materiales de vida conviven con las peores condiciones de desintegración comunitaria y problemática psicosocial» (p. 13).

La extensión de esta *visión* panorámica y *dialéctica* del *progreso* a las condiciones actuales de vida permite captar la doble y contradictoria potencialidad del legado moderno: el tremendo potencial de progreso social y humano liberado y la extensa frustración y patología personal y social ocasionados. Así, el énfasis en el trabajo, frente a familia y comunidad, ha tornado críticamente frágiles e inestables las vinculaciones personales, acentuando el desarraigo personal. La tremenda expansión de las capacidades humanas de producir y actuar conlleva una elevación paralela de las exigencias funcionales de la sociedad y de la responsabilidad personal. Genera, también, unos apetitos y ambiciones psicológicos (reconocimiento social, éxito, logro o consecución de toda clase de metas, felicidad y realización personal, etc.) a menudo inasequibles para unos hombres y mujeres que deben incorporar tales ambiciones a su personalidad..., y tratar de hacerlas realidad para no frustrar a toda la maraña de expectativas y presiones propias y ajenas de las que pende su estima psicológica (Sullivan, 1953; Riesman y otros, 1950). Al riesgo de marginación social se une así el peligro de multiplicar las malformaciones y fracasos psicológicos (Horney, 1937), que son siempre relativos a las expectativas psicosociales, no a los medios materiales y económicos de que se dispone.

Las *contradicciones* se extienden a otras esferas: el dinamismo y frenesí psicológico en algunas esferas y momentos del trabajo contrasta llamativamente con el sedentarismo y la rutinización de la vida diaria, el ocio o el consumo; el ensanche de las posibilidades de comunicación material y simbólica va acompañado de una creciente incomunicación y aislamiento reales, acrecentado con una erupción de las adicciones electrónicas entre los más jóvenes. No está claro que la explosión de imágenes y mensajes y la «democratización» de la cultura haya acrecentado nuestro conocimiento real, sino más bien nuestra ignorancia (en relación al conjunto disponible de datos e información inconexos y en continua expansión), ni nuestra capacidad para captar lo que sucede, siempre amenazada por la manipulación mediática, la propaganda comercial y política y la frivolidad cibernética. Aunque el aparatoso bombardeo verbal e icónico nos hace conscientes de sucesos, sufrimientos e injusticia antes en la sombra, su exceso e imposición virtualmente ineludible tiende a aumentar, a la vez, nuestra perplejidad y cinismo, embotando nuestra sensibilidad, anestesiando nuestra conciencia y encerrándonos en nosotros mismos y en el dulce confort material y psicológico tan arduamente conseguido, por otro lado.

En una cultura que gira en torno al *individuo,* este se convierte en *protagonista obligado* de casi toda acción y dinamismo. Aunque eso le concede, de entrada, una tremenda capacidad de realización personal, le aboca también, en función de sus aptitudes personales y de las condiciones sociales, a una frustración incomparablemente mayor y lo expone a una dañina *sobrerresponsabilización,*

resultante de tener que hacerse cargo personalmente de un mundo duro e irracional (Cruz, 2013). Pues si, sobre el papel el bienestar y el éxito (las metas culturales generalizadas) están al alcance de todos, en la realidad son sólo asequibles a las personas y grupos que tienen acceso a los medios sociales sancionados —trabajo, excelencia productiva y consumo material—, excluyendo y exponiendo a la «anomia» y a la frustración (Merton, 1968) al resto, y fatigando a casi todos. De algún modo todos fracasamos: tanto los que no logran el éxito económico (los «perdedores»), que se autoflagelan psicológicamente y sufren el desprecio social; como los «triunfadores», al descubrir el vacío y la pobreza interior que a menudo coronan el enriquecimiento, los «logros» y el reconocimiento externo (la motivación extrínseca).

Y es que, en la medida en que la modernidad abre la caja de Pandora (Bell, 1977; Fromm, 1941) de los desmedidos deseos y apetitos humanos —antes contenidos por la estricta moralidad religiosa— y en que la economía, que pasa a dominar la vida social, está atravesada por poderosas pasiones (Polanyi, 1944; Galbraith, 1958), los individuos acaban siendo a menudo víctimas dobles: de sus propios deseos no realizados —ni probablemente realizables con sus propios medios psicológicos— y del deseo de conformarse a las expectativas y deseos de los demás (Rogers, 1961), que, en un mundo cada vez más social y «heterodirigido», son casi determinantes (Riesman y otros, 1950). En ese sentido, y atendiendo al argumento de Fromm, el hombre moderno no pecaría tanto de exceso de *egoísmo* como de su *defecto:* habría de pensar más en sí mismo y en lo que realmente quiere ser, y menos en lo que los demás (especialmente los «otros significativos») y la sociedad quieren que sea.

La bendición de la libertad humana lograda en la modernidad está, por otro lado y según Fromm (1941, 1955), acompañada de una maldición: la pérdida de la seguridad y la conciencia de la propia fragilidad. En el largo camino hacia la emancipación el hombre habría conquistado una libertad negativa, la libertad *de* las opresiones premodernas, pero habría rehuido temeroso la libertad positiva (la libertad *para* realizarse como ser social) para ganar seguridad, entregando su libertad a entes externos como el líder, la nación, las expectativas ajenas o la voluntad colectiva.

Y es que, habría que añadir, la libertad positiva no sólo implica en el mundo moderno la *liberación* de la tupida telaraña de dependencias y expectativas ajenas que pueden restringir la realización del propio proyecto vital, dirigiendo a la persona a ser alguien que ni es ni, aunque quisiera, puede ser; el desarrollo humano implica también la construcción de una sociedad justa y eficaz en términos productivos y políticos en que los hombres y las mujeres, además de satisfacer sus necesidades básicas, puedan elegir —y realizar— una forma de vida valiosa (Doyal y Gough, 1994; Sen, 1990, 1997). Ello implica, por cierto y cerrando el círculo argumental, un cúmulo de *interdependencias personales y obligaciones sociales,* como la cooperación o el diálogo entre personas y el esfuerzo para construir (y sostener) instituciones sociales justas y democráticas orientadas a forjar un mundo en el que la libertad personal o la elección y realización de una vida valiosa sean, en fin, posibles.

2. LA REVUELTA ANTIMODERNA: ¿ÉTICA POSMODERNA?

Uno de los aspectos en que los cambios y contradicciones legados por la modernidad y criticados por los posmodernos se han vivido más dramáticamente es el ético. Reviso ahora algunas posturas al respecto, reservando mi propia visión para cuando hayamos visitado los últimos episodios de la crónica histórica, la globalización y el choque económico. Situados tras lo que debió ser «última frontera», la modernidad, el panorama que los posmodernos dibujan para el hombre contemporáneo (Sánchez Vidal, 1999) es desolador.

Privado de los referentes morales externos que definían claramente el bien y el mal, huérfano de Dios, de su memoria colectiva (historia), del otro —y hasta de sí mismo— y asediado por un torrente de mensajes y apetitos, el hombre moderno naufraga en la complejidad y la confusión, encontrando cada vez más difícil distinguir lo bueno de lo malo, juzgar y obrar rectamente. Perplejo y extraviado, se plantea qué hacer y en qué creer. Enfrentado a la tarea de construir una ética secular y humanista, se pregunta si la desorientación, la angustia y la inseguridad que acompañan a esa tarea compensan las ganancias de esclarecimiento y autonomía que prometen coronarla. Oscila entre el vértigo del nihilismo y el nostálgico consuelo de las antiguas —¿irrecuperables?— certezas: religión, patria, clan, familia, líder carismático…, y a menudo acaba replegándose a la duda corrosiva, la negación total, el mutismo ideológico o el desapego personal.

No sólo habría muerto Dios, sino también, parece, el hombre como unidad psicológica autodeterminante, y el otro como realidad sólida con que convivir y constituirse como sujeto. Rotos el vínculo divino, base de la moral religiosa, el vínculo consigo mismo, en el que pudiera asentarse una ética existencial de la autenticidad, y el vínculo con el otro (la alteridad), fundamento de toda ética, la tarea moral del hombre moderno parece ardua, si no imposible. Si la alteridad ha sucumbido al asalto combinado del individualismo, la utilidad y el egoísmo modernos, y el otro ha sido suplantado por uno mismo, no cabe ya una ética de la vinculación y la solidaridad o de la justicia, sino, parece, sólo una ética del autointerés. Como remacha apocalípticamente González Casanova (1992): «no es que exista un vacío de valores en el campo de las estrategias sociales y políticas... Es que priman unos valores egoístas e inmediatistas que imposibilitan radicalmente la propia existencia de unas estrategias que merezcan el auténtico nombre de “sociales” y “políticas”... El capitalismo ha llegado a su culminación lógica: la destrucción de todo valor constitutivo de una comunidad social y política...» (p. 15).

Pero la conciencia de esa situación y las posturas sobre ella varían a lo largo de líneas ideológicas determinadas. Y, como ya se indicó, la crítica de la modernidad y la percepción de que existe, en efecto, una crisis moral —o una deriva secular indeseable— depende de la aceptación o rechazo de los valores racionalistas y utilitarios modernos —o, al menos, de una parte de ellos— y de sus deseables o indeseables efectos psicológicos y sociales.

Frente a los excesos del individualismo y el *self-interest,* los pensadores

comunitaristas ensalzan la comunidad y la responsabilidad social como manantiales de moral y como núcleos para generar formas de vida solidarias. MacIntyre (1984) sostiene que vivimos en una época posvirtuosa en la que, destruida la auténtica moral como consecuencia de los catastróficos cambios ocasionados por la Ilustración, apenas nos quedan apariencias fragmentarias de moralidad. La única manera de recuperar la moral es reconstruir comunidades que puedan dar sentido a la vida humana y de cuya textura resurjan verdaderas virtudes y valores humanos.

Bellah y otros (1989; también Waterman, 1981) señalan que el *individualismo* (la única realidad «ontológica», radical, del hombre contemporáneo) ha resultado cancerígeno para las sociedades industriales y posindustriales, destruyendo sus estructuras sociales y morales, la virtud cívica y el sentido del compromiso político. La regeneración social y política exige, entonces, reconstruir esa ecología sociomoral, fortaleciendo la responsabilidad social y una concepción del bien común compatible con las diferencias reales entre la gente, recuperar el valor de la vocación y las recompensas intrínsecas, reducir la escisión entre lo público y lo privado, limitar la omnipresencia de la competitividad, hacer visible la complejidad e interdependencia social y no culpabilizar a las víctimas (los pobres, los marginados, los «perdedores») de sus problemas.

TABLA 1.2
Ética posmoderna: características

- Posvirtuosa y posdeber: disuelve rigorismo y sentido fuerte de virtud y deber.
- Predominan valores individualistas, egoístas y hedonismo inmediatista.
- Declive de la comunidad sociopolítica constitutiva de la moralidad y de la noción de bien común.
- Concepción gradualista, no rigorista, de la moral: acepta subjetividad y felicidad.
- Busca moral autónoma, ambivalente, contradictoria, no universal (tampoco relativismo total).
- Es moralmente cuestionable: acaba produciendo indiferencia personal e irresponsabilidad institucional.

Los observadores liberales defienden una ética basada en la libertad y el interés individual y su maximización como satisfacción colectiva, aun cuando autores como John Rawls (1971) insisten en la justicia social y la equidad como contrapeso de las virtudes liberales individuales. Para otros observadores ilustrados (como Wright Mills, Erich Fromm o Jurgen Habermas), los valores modernos de democracia, libertad, igualdad y racionalidad forman el núcleo en torno al cual se debe construir la ética personal y la coherencia social que en otra época derivaban de la cohesión comunitaria «mecánica», la religión o el particularismo tribal. La línea dialógico-comunicativa (Habermas, Apple o Dewey) subraya la comunicación social y el diálogo interpersonal con los otros reconocidos como «interlocutores válidos» para acordar unas reglas morales básicas que, como *ética mínima* (Cortina, 1992), formen la moral civil adecuada a las modernas sociedades pluriculturales. Dicha ética mínima no sería incompatible con la existencia de «morales máximas» particularizadas para cada sociedad o comunidad.

Otras corrientes asumen una postura que bordea el relativismo y el nihilismo

moral. Lipovetsky (1994), por ejemplo, acepta los valores «liberales»: vivimos en una época «posdeber» en la que la moral individualista, pragmática y dialogada ha sustituido a la ética dogmática, maniquea y rigorista. No es que se desintegre la moral, sino la forma imperativa de entenderla, el deber austero, que es sustituido por una moral más gradualista y «realista» que acepta el deseo, la subjetividad y las humanas apetencias de felicidad. Una ética *light*, que, ya se ve, rechaza de plano la exigente deontología kantiana. La posición de Bauman (1993) critica por igual la visión moderna y la posmoderna. Negada la moral dada (desde la religión o el pensamiento moderno), clara y universal, la tarea de nuestro tiempo es construir una ética personal autónoma; una ética ambivalente, contradictoria (no exenta de contradicciones), que desborda lo racional y no universalizable, ya que los universales éticos suelen implicar la imposición universal de los intereses particulares de un grupo o institución. Esa moral ha de evitar también el relativismo absoluto.

El racionalismo habría fracasado, dice el autor, en su intento de subyugar la moral a la razón, tratando de mantener la gobernabilidad y la unidad de acción social del complejo mundo moderno frente a la fuerza disgregadora del individualismo. El posmodernismo acierta al denunciar el fracaso del intento de asfixiar la diversidad y al afirmar la pluralidad de trayectorias y proyectos de vida. Fracasa, en cambio, en la acción: desacredita las opciones globales previas, pero no aporta soluciones propias. Es más, la opresión centralizadora y uniformista que subyacía a la moralidad moderna ha sido sustituida en la posmodernidad por una opresión difusa y multiforme. Ambas tendencias, modernidad y posmodernidad, resultan igualmente negativas y restrictivas del hecho moral: las dos lo niegan y tratan de reducirlo a otra cosa, sea la razón, la estética o la socialidad. Pero la conciencia moral, concluye Bauman coincidiendo con Lipovetsky, sigue existiendo, anestesiada pero no amputada; no sólo es irreducible a cualquier otra cosa o esfera, sino que es la posesión humana más preciada e inalienable y no necesita excusas ni razones: el ser *para* el otro es previo al ser con otro.

2.1. Irresponsabilidad social e indiferencia personal

¿Qué decir, desde la distancia histórica y social que dan los años y los cambios, de la «ética posmoderna» (tabla 1.2)? Dejando a un lado la contradicción interna (no se puede afirmar aquello mismo que se está negando), se puede suscribir el grueso de la argumentación de Bauman con un matiz: lo que parecía (y parece) anestesiado no es la ética misma, sino su expresión y el comportamiento externo indeleblemente marcados, creo, por el clima de permisividad moral y por la omnímoda legitimidad social otorgada al autointerés («todo vale»), al éxito individual basado en la acumulación material y al enriquecimiento económico que ha trastocado esos medios en fines humanos universales que legitiman cualquier comportamiento encaminado a su consecución. Mi impresión es que el clima social creado y la benevolente aceptación psicológica que retrata Lipovetsky llevan tanto a la supuesta anestesia moral de las personas como a la adopción mimética o ventajista por su parte de

valores y comportamientos que, aunque no se juzguen moralmente apropiados, son socialmente aceptados y simbólica y materialmente premiados.

No se trataría entonces sólo de una *inmoralidad* individual, de cada persona, sino también *social,* de las instituciones. De este modo, podemos aplicar a la actualidad el implacable juicio que el sociólogo Wright Mills (1957) hacía de la situación posbélica estadounidense del siglo XX: «La inmoralidad mayor, el debilitamiento general de los valores más antiguos y la organización de la irresponsabilidad no han supuesto ninguna crisis pública; al contrario, sólo produjeron una indiferencia reptante y un aislamiento silencioso» (p. 320). Elaboro otros aspectos de mi propia postura al respecto al abordar, más adelante, el asunto de la crisis moral.

En el haber de la postura posmoderna está el reconocimiento de la diversidad, la emoción, el poder y el contexto frente a la peligrosa tendencia moderna a universalizar, uniformar y racionalizar ciertas tendencias e intereses con frecuencia particulares o locales. La crítica es en ese caso justificada y atendible, siempre que *no* asuma que *todo* lo humanamente considerado racional y universal es resultado de tal racionalización ideológica, pues esa sería una universalización argumentativa ilegítima y contradictoria para los posmodernos, en cuyo debe hay que añadir la falta de alternativas, y un celo particularista e irracionalista tan rechazable como el racionalismo universal que quería desplazar. Las ideas «posmodernas» dejan a menudo un sabor de boca *agridulce,* no sólo por la ambivalencia señalada, sino también por la superficialidad y truculencia conceptual de muchos de sus planteamientos y expresiones y por el tufillo de moda intelectual al servicio de una minoría ensimismada en la alta cultura.

La *mirada posmoderna* acaba dando una visión profundamente negativa del hombre como criatura perdida en un mundo confuso, a merced de fuerzas inexorables y opresivas y sin criterios morales directores. Es más, aunque se alcance alguna certeza moral, ésta tendrá un valor meramente particular y local, sin posibilidad de trascender el propio contexto comunitario o vital. Pero, de nuevo, ese es un apriorismo particularista inaceptable sin la correspondiente verificación empírica: la constatación de la singularidad moral personal y cultural es —como la propia postura posmoderna en su conjunto— perfectamente legítima como punto de partida, pero *inaceptable* e intelectualmente *ilegítima como punto de llegada* de una indagación que debe averiguar lo que de común, diferencial y singular tienen los valores y hechos morales de distintos sujetos y contextos sociales o comunitarios.

Tampoco casa bien el pesimismo y nihilismo de esa visión con la experiencia diaria, donde no se observa un colapso valorativo o moral (aunque sí dificultades significativas para asumir apropiadamente los papeles y tareas asignados), ni con teorías y datos empíricos que reafirman persuasivamente la generalidad personal y socio-cultural de ciertos procesos y valores morales. No parece, desde luego, que la gente sea incapaz de distinguir lo bueno de lo malo lo correcto de lo incorrecto en la mayoría de experiencias diarias, aunque haya ciertas áreas en las que se multipliquen las dudas y conflictos.

Cierto, también, que la vida actual multiplica las zonas de novedad, ambigüedad o

complejidad y conflicto, donde ni las reglas morales tradicionales parecen válidas ni disponemos de otras nuevas que las sustituyan y orienten la acción, y que nuestra forma de vida pone a hombres y mujeres en situaciones y papeles (adolescencia, paternidad, maternidad, conciliación de exigencias laborales y vida familiar, etc.) sumamente difíciles y estresantes —no sólo en el plano moral— para el común de la gente. También es lo que parecen escasear más los modelos personales positivos y las alternativas sociales que en otros momentos históricos, a la vez que se multiplican los casos de codicia y voracidad materialista, oportunismo o insaciable vanidad, ante la indiferencia —o abierto respaldo— colectiva y la interesada complicidad de los medios de masas.

Pero, pareciendo todo eso cierto desde nuestra perspectiva actual, es difícil establecer comparaciones aceptables con situaciones y problemáticas morales del pasado, por la variedad de filtros y mediaciones psicológicas que solemos interponer entre presente y pasado con el fin de autojustificar nuestra conducta y mantener nuestra autoestima. Ya se sabe que, enfrentados a dificultades y responsabilidades reales del aquí y el ahora, es psicológicamente comprensible (aunque ni sea justificable ni, desde luego, acorde con la realidad) deformar, embellecer y dulcificar el pasado de forma que «cualquier tiempo pasado fue mejor».

La existencia, por otro lado, de teorías como las de Piaget (1932) o Kohlberg (1992), que sostienen documentadamente la universalidad del desarrollo moral, o de otras, como la de Schwartz (1994), que muestran empíricamente la existencia de universales valorativos, desafía frontalmente el relativismo y particularismo posmodernos, aunque no lo refute directamente. El asunto dista, en este nivel de discusión teórico, de estar sentado. No sólo porque los datos empíricos difícilmente pueden refutar —aunque sí socavar seriamente— unas tesis ideológicas genéricas, sino porque otros estudiosos (por ejemplo, Inglehart y Welzel, 2006) han mostrado, con otro juego de datos empíricos masivos, el dinamismo y cambio histórico de los valores (sociales, no exclusiva ni centralmente morales), lo que negaría la estabilidad o universalidad transhistórica de estos, al menos la universalidad, tomada en su exigente literalidad de persistencia a lo largo de todas las épocas y en todas las sociedades y culturas, de los mismos valores (de todos los valores) en el mismo grado.

Está lejos de mi intención entrar en este libro, relativo a la orientación práctica, en el avispero filosófico y científico del relativismo y la universalidad valorativa que estos datos y análisis se limitan a arañar. Me interesa, sin embargo, subrayar aquí el malentendido que comúnmente subyace a esa disputa, así como una propuesta relativamente simple de compaginar en la teoría (y operar en la práctica) el particularismo y el universalismo moral, las posturas extremas y aparentemente contradictorias en la disputa. Entiendo que esa contradicción es sólo aparente: afirmar la existencia de valores morales universales no niega que su significado, relevancia y expresión no sean modulados y particularizados subjetiva y contextualmente, con lo que los valores abstractos adquirirían significado e intensidad (valía) concreta según los sujetos, el momento y el contexto. La *universalidad* se referiría a la presencia

transpersonal y transcultural de ciertos valores abstractos, mientras que la *particularidad* residiría en la manifestación (cuantitativa y cualitativa) y modulación concreta de esos valores.

Ese sería el caso de valores morales básicos como la vida, la seguridad psicológica, la justicia social o la confianza interpersonal. Habría, en cambio, otros valores —«periféricos» si se quiere— más específicos o característicos de cada subjetividad y contexto personal o social, cuya universalidad no necesitamos discutir. Esa propuesta casa bastante bien con el contenido de la idea de éticas mínimas y éticas máximas, aunque nada diga sobre el procedimiento dialogado para alcanzar tal contenido, que, pienso, es un asunto diferente, de más difícil encaje teórico y práctico en el complejo mundo de Internet y las «nuevas tecnologías» de la comunicación y manipulación de las masas.

3. GLOBALIZACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA

La aparición de la «globalización» como clave para descifrar el mundo de finales del siglo XX marca el retorno de la economía —y la tecnología— al primer plano intelectual. No es que desaparezcan las agonías y rebeldías posmodernas, sino que quedan relegadas a un segundo plano de la conciencia colectiva por la irrupción de otros eventos y preocupaciones humanas. Si la posmodernidad era una expresión cultural de la fragilidad humana ante las poderosas fuerzas tecnológicas, económicas e intelectuales desatadas por la modernidad y el industrialismo, y ante la rebelión psicológica contra la mecanización, el racionalismo y la uniformidad social que aquellos generaron, la globalización devuelve al primer plano el entramado técnico-económico que, de todos modos, siempre estuvo ahí, como trasfondo de la modernidad y como condicionante, si no causante, del desconcierto y la rebelión posmoderna.

Y es que la posmodernidad cultural tuvo su contrapunto socioeconómico en la *sociedad posindustrial*, una idea mucho más precisa del sociólogo Daniel Bell (1976). Bell describe las modernas sociedades industriales como entramados formados por tres esferas relativamente autónomas: la técnico-económica, dedicada a la organización de la producción y distribución de bienes y servicios, cuyo principio axial es la racionalidad; la política, asociada al uso legítimo del poder para resolver conflictos y realizar la justicia social, cuyos principios rectores son la legitimidad y la búsqueda de igualdad personal; y la cultural, ligada a formas simbólicas que dan sentido a las situaciones existenciales básicas, incluyendo una vertiente expresiva encarnada por el arte, la religión o la ciencia. La sociedad *industrial* desplaza la lucha contra la naturaleza a favor de la relación con los objetos manufacturados, creando un mundo técnico, racional y mecánico, regido por el tiempo del reloj, en el que la energía externa reemplaza a la fuerza muscular y en el que se pasa de la artesanía a la producción en masa. Es un mundo regido por los valores de racionalidad y progreso y por los horarios, la programación y la coordinación de personas y materiales, en un mercado en que los hombres son tratados como cosas.

La sociedad *posindustrial* que surge en la segunda parte del siglo XX gira, en cambio, en torno a los servicios humanos y profesionales, siendo la información y el conocimiento las bases del proceso productivo y la organización, la negociación colectiva, la cooperación y la participación en los procesos sociales básicos. Si la religión es el eje cosmológico de las sociedades preindustriales y el trabajo el de las industriales, la cultura (posmoderna) vertebra mundo posindustrial.

Tres elementos clave para entender el tránsito del posindustrialismo a la globalización (que de todos modos se solapan temporal y temáticamente) son el auge de las «tecnologías de la información y la comunicación» (*TIC) e Internet* en la vertiente técnica, la crisis del petróleo de 1973 —y la desregulación y el monetarismo acompañantes— en la vertiente económica, y el estruendoso hundimiento del socialismo a partir de 1989 en la vertiente política (tabla 1.3). Si la aparición del moderno ordenador digital y la conversión de la información en una mercancía habían alentado, tras la Segunda Guerra Mundial, una vertiginosa expansión de la información y el conocimiento circulantes (convertidos, por un lado, en mercancía fundamental y motor de la nueva sociedad posindustrial, y asociados, por otro, a la disolución de significados y certezas posmodernas), la irrupción de Internet en la última década del siglo XX supone un vuelco revolucionario, al posibilitar un nivel de conexión simbólica y relación sin precedentes.

TABLA 1.3
Posindustrialismo y globalización: causas y efectos

Causas/Origen	Efectos
• Tecnologías de la información e Internet. • Crisis económica del petróleo (1973). • Desregulación neoliberal (consenso de Washington). • Caída del muro de Berlín (1989) y desintegración de la Unión Soviética («fin de la historia»).	• Conectividad electrónica instantánea e ilimitada. • Encarece la materia prima básica de la industria. • Obliga a buscar alternativas para generar riqueza y mantener consumo (expansión financiera y crédito barato). • Facilita la libre circulación de dinero y productos financieros. • Desaparece la alternativa socialista; mundo unipolar capitalista dominado por Estados Unidos.

La *crisis de 1973* deja claro al Occidente rico que el petróleo barato que alimenta su industria ya no puede ser la materia prima base del crecimiento económico. Eso obliga a sustituir el petróleo por las finanzas y el dinero, cuya masiva circulación mundial sin trabas se asegura tanto a nivel tecnológico, mediante la conectividad electrónica que permiten las TIC e Internet, como a nivel social, eliminando las reglas sociales y políticas (desregulación neoliberal) que pudieran dificultarla. Impulsado por esa desregulación, por las directrices neoliberales del «consenso de Washington» y por el sostén de instituciones ideológicamente afines, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el capitalismo industrial del siglo XIX se

transforma en *capitalismo financiero,* cuyos hilos son movidos desde los centros neurálgicos de Wall Street y la City londinense. Margaret Thatcher y Ronald Reagan promueven un «capitalismo popular» que alimenta un peligroso endeudamiento consumista e infla las burbujas (inmobiliaria, puntocom, bancario-financiera, etc.), cuyo estallido al final de la primera década del siglo XXI precipita la gran crisis económica y social de la que estamos saliendo.

El *hundimiento* de la alternativa *socialista* a partir de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, así como la euforia consumista de Occidente, alientan la idea de que el capitalismo ha triunfado y que no hay alternativa al pensamiento único neoliberal (reminiscencia de la sociedad unidimensional marcusiana de los sesenta). Es el truculento «fin de la historia», cuya segunda parte es el fracaso estruendoso del capitalismo en la primera década del siglo XXI, el cual, sin embargo, se mantiene «vivo» como los zombis porque nadie, en el fondo, desea su muerte: ni los bancos y grandes acreedores económicos que lo alimentaron y quieren cobrar sus deudas, ni los deudores o el hombre común, atrapados entre la espada de esas deudas y la nostálgica pared de la euforia y el bienestar que lo acompañaron en sus años dorados. Tampoco se puede decir que no estuviéramos advertidos: los anuncios del «fin de la historia» se limitaran a confirmar la agonía del liberalismo y el marxismo como grandes ideologías del siglo XIX, anunciada por observadores como Wrigth Mills (1961) o Daniel Bell (1977) en el siglo pasado.

Sea como fuere, la convergencia de esos (y otros) factores da como resultado una ampliación a nivel mundial de los intercambios económicos e informativos, acompañada de una extensión de la comunicación e interrelación física (tráfico aéreo) y, sobre todo, simbólica, como *globalización* (tabla 1.4). Mientras unos asocian a la extensión de la democracia liberal el capitalismo y la libertad, otros, más críticos, limitan a la libre y asimétrica circulación de mercancías, dinero y productos culturales, sin el necesario complemento, la globalización de los derechos humanos esenciales. Como toda *moda* intelectual que se precie, la globalización se vende como inevitable y se reviste (ya sucedió con la modernidad, la información, el ordenador o Internet y sus divertimentos) de una aureola explicativa y benefactora casi mágica, como un *comodín* que todo lo explica y que no admite crítica u oposición, pues, al basarse en una tecnología superior y al extender la libertad y la democracia, sus efectos sólo pueden ser universalmente benéficos. Pero esa palabrería empalagosa, sospechosamente partidista y omnipotente, no ha podido resistir (como la propia Europa) el actual encontronazo con la «burbujeante» realidad.

Desde luego la actual no es *la* globalización, sino que se trata de *una* globalización más en la historia, con numerosos precedentes, que van desde la ruta de la seda, el camino de Santiago, las cruzadas, el invento de la imprenta o el descubrimiento de América, al ferrocarril o el correo, o la primera explosión de medios comunicativos que crea «la aldea global». *No* se trata tampoco de un proceso *irreversible:* de la misma manera que ciertos aspectos o áreas se han globalizado, se pueden volver a replegar a sus sedes locales o formas de vida preexistentes si así lo desean o demandan los agentes sociales o económicos. Es lo que de hecho se observa con la

«construcción» de Europa, otrora notable ejemplo de globalización política y que ahora se debate entre la mera supervivencia o el repliegue nacionalista, de una parte, y la apuesta por una mayor unidad, de otra. La suntuosa retórica globalista obliga, por otro lado, a cuestionar su verdadera naturaleza (tabla 1.4) y extensión, preguntándose ¿qué es lo que se globaliza realmente?

TABLA 1.4
Globalización: significado y cuestionamiento

Significados atribuidos
1. *Mundialización;* extensión al nivel mundial (libre circulación) de: • La información y comunicación física (transporte) y simbólica (TIC). • El comercio y los intercambios económicos e informativos. • El capitalismo, la democracia liberal y los valores occidentales. • La depredación ambiental, el miedo al terrorismo y la obsesión por la seguridad. 2. La *interrelación* de personas, grupos y culturas en base a la conectividad material y simbólica.
Cuestionamiento
• ¿Quién mueve/controla verdaderamente la globalización? ¿Es esta un proceso multidirigido, o la expresión económico-cultural del gran poder económico y financiero? • ¿A quién/qué beneficia el proceso globalizador, a la gente común o a las élites económico-financieras? • ¿Se distribuyen equitativamente los beneficios de las nuevas técnicas y formas de producción, o estos se concentran en ciertos grupos y sectores privilegiados? • ¿Mejora verdaderamente las condiciones de vida de la mayoría de la gente y de los más pobres o aumenta la desigualdad? • ¿Propicia la libre circulación de personas (trabajadores incluidos) o sólo de «información» y capitales? • ¿Se trata de una extensión a nivel mundial del poder económico y de los valores del occidente euro-americano, o de un desplazamiento del poder y la cultura eurocéntrica hacia el oriente emergente? • ¿Promueve la verdadera democracia, o se limita a multiplicar el poder económico extendiéndolo a nuevos ámbitos y esferas bajo una apariencia formalmente liberal? • ¿Es un concepto intelectualmente preciso y socialmente pertinente, o poco más que el programa ideológico de los nuevos poderes multinacionales cuyos intereses «blanquea» y promueve? • ¿Impulsa el intercambio y la hibridación cultural, o simplemente extiende el colonialismo cultural de la mano de nuevas formas de comunicar e informar?

Esencialmente, se han globalizado los flujos informativos y de datos (a través de las tecnologías informativas antiguas y nuevas), la circulación de capitales o los riesgos nucleares y la depredación ambiental. No se puede decir, en cambio, que la circulación de personas (salvado el turismo) se haya globalizado, al menos en la misma medida ni con el grado de automatismo con que lo hacen los capitales y la información. Tampoco se han globalizado suficientemente los derechos humanos básicos, que excluirían la explotación de los trabajadores en el tercer mundo e incluirían una auténtica justicia social, o la verdadera libertad personal para escoger y realizar una forma de vivir valiosa cuyas bases económicas y sociales (seguridad legal social y vital, autoridad, sistemas económico y político eficientes y justos, etc.) estén garantizadas.

3.1. ¿Fin de la historia o despertar del sueño del progreso continuo?

Esas consideraciones nos enfrentan a otra pregunta fundamental para esclarecer este asunto: ¿a quién *beneficia* la globalización real y la aparatosa propaganda que la envuelve? La evidencia señala como *ganadores* o beneficiarios a los grupos y fuerzas que promovieron las reformas neoliberales e impulsaron la globalización y la especulación financiera, y que tanto contribuyeron a inflar las burbujas en las que tan alegremente nos zambullimos y las consecuencias de cuyo reventón sufrimos ahora: el gran capital financiero (banca, aseguradoras, fondos soberanos y de pensiones...), las petroleras y empresas armamentísticas, las corporaciones informáticas que controlan la producción y difusión de productos y servicios informativos y culturales en el mundo y, en fin, los representantes sociales, políticos y económicos (el FMI, el BM o la OCDE) que, en su momento, animaron la expansión global y que ahora respaldan a los acreedores exigiendo austeridad de los deudores.

Es casi ocioso enumerar los *perdedores* de la globalización y la crisis: las clases medias occidentales, que se deslizan hacia la marginalidad y la nueva pobreza, los trabajadores expulsados al paro o que sufren el recorte de sus sueldos y derechos, y, en fin, los marginados de siempre, que, aunque encuentran nuevos e inesperados compañeros, sufren más que el resto el recorte de los servicios públicos y de los dispositivos de bienestar que otrora amortiguaban su pobreza y exclusión. Víctimas son también la propia democracia, como plasmación autónoma de la voluntad de los ciudadanos, los ideales social-demócratas, deslegitimados por su obscena rendición al gran capital, Europa como destino inefable y benéfico de tantos países, o la propia política, mostrada ahora en su desnudo papel de rehén de las grandes fuerzas económicas.

¿Y el *capitalismo*? Aunque su futuro sea —como todo— incierto, se detecta una extraordinaria y tensa ambivalencia: a pesar de que sus miserias, falsa retórica y crueldad han quedado en evidencia, al no haber una alternativa sólida (como «el socialismo» en su momento) y en la medida en que conservamos aún la memoria del dulce bienestar de los años dorados de crecimiento, el capitalismo no aparece sólo como el «mal menor», sino, además, como el horizonte añorado y la alternativa a salvar, aunque con correctivos y garantías. Parecemos anhelar un «capitalismo con rostro humano», parafraseando la expresión acuñada hace décadas para reivindicar un socialismo humanista.

Hay que añadir otra dimensión relevante para completar el sumario esquema trazado: el ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001 y la obsesión por la *seguridad*, que muestran la «otra cara», bastante más sombría, de la globalización. Su reflejo son las guerras asiáticas por el petróleo y contra el terrorismo, la restricción de derechos y libertades básicas, la legalización de la tortura y el asesinato por parte del Estado, el espionaje y la violación masiva de la intimidad de cualquier tipo de comunicación cibernética, telefónica o de otro tipo en nombre de la seguridad (que se une al ominoso acoso comercial que ya veníamos sufriendo a manos de grandes corporaciones de servicio y de telefonía) y valiéndose de las «nuevas tecnologías».

En torno a este eje podemos también situar la expansión islamista (y el terrorismo

asociado a sus versiones más integristas), pero también el turbulento despertar democrático de los países árabes, que ha venido a plantear la cuestión del islamismo y el terrorismo integrista (tan desenfocada por la histeria de la seguridad en Occidente) en sus justos términos, devolviendo a las propias sociedades árabes la cuestión de conciliar religión y Estado, así como la autonomía y responsabilidad por la construcción de sus propias formas de democracia. También, y en otros ejes, hay que notar el desplazamiento del poder económico hacia Oriente y el despertar democrático y económico de Sudamérica.

La crisis nos ha *despertado*, en fin, del *sueño globalizador* —o, al menos, de su carácter benéfico e inevitable— en el que estábamos sumidos (de hecho, uno de sus rasgos característicos es el «desacople» de los «países emergentes» —Brasil, China, India, Rusia, Chile, etc.— del conjunto del mundo «desarrollado» y sacudido por el seísmo financiero). La globalización parecía culminar las ideas e ideales modernos de racionalidad, ilustración, democracia y progreso para todos; sin embargo, en realidad, y vista desde el abismo crítico, cunde la desagradable sospecha de que respondía al programa del gran capital y las multinacionales, a las que servía casi monolíticamente el poder político (y algunos sectores intelectuales y mediáticos), que es quien —con la impagable y bobalicona complicidad del pueblo llano— se ha acabado beneficiando de la bonanza, impulsando a la gente a jugar al gran juego de la especulación inmobiliaria y financiera y del entretenimiento mediático y digital.

De este modo, la globalización podría ser también vista como un gran *lema publicitario*, que si, por un lado, enterró la posmodernidad, por otro, y tras la ruptura crítica, puede acabar —temporalmente al menos— con las ilusiones de ilimitado poder y progreso que Occidente tenía desde hace siglos. Creo que el empobrecimiento colectivo, el aumento de la injusticia y la desigualdad, la destrucción de derechos sociales y económicos que costó tanto tiempo conseguir, el debilitamiento de la vinculación interpersonal y la pertenencia comunitaria, la devastación ambiental y la irresponsable inundación de «información» (en gran parte propaganda, manipulación ideológica y comercial y desechos informativos), que dificultan, si no imposibilitan, el verdadero conocimiento y la construcción de significado, deberían hacernos meditar y replantear tanto la otrora luminosa idea de progreso social como el nuevo concepto de desarrollo humano.

3.2. El impacto de la crisis económica y la necesidad de regeneración ética

Desde el punto de vista moral que prevalece aquí, el efecto más grave de la crisis actual es la sensación del hombre común de ser espectador impotente de hechos y acontecimientos desencadenados por fuerzas y grupos anónimos en apariencia todopoderosos («los mercados», la troika, las grandes corporaciones y los reguladores económicos, etc.), que eluden el control democrático en lo político y el control ético en lo personal. El fatalismo y *sentimiento de impotencia* resultante —reverso del tan cacareado empoderamiento— es el caldo de cultivo de reacciones políticas y psicológicas irracionales y extremas, como el populismo y fascismo político, la

negación del propio poder o la violencia (May, 1972), el racismo o la xenofobia (véase tabla 1.5).

TABLA 1.5
El impacto de la gran crisis económica del siglo XXI

- Descrédito de la política por su subordinación al poder económico.
- Cuestionamiento de la viabilidad de la democracia ante la primacía del gran poder financiero.
- Pérdida de la confianza ciudadana y debilitamiento del vínculo ciudadanía-política.
- Polarización política, auge del populismo y de los movimientos xenófobos.
- Empobrecimiento y pérdida de poder de la mayoría.
- Sentimientos de miedo a perder bienes sociales vitales e indignación contenida.
- Conciencia de la necesidad de regeneración moral y política y de control social de las fuerzas económicas, no traducida en opciones políticas visibles o acciones globales de cambio.

Su superación exige imperativamente un doble control, social y moral, de los grupos económicos y fuerzas sociales que tan irresponsable e impunemente han usado la libertad (concedida por la desregulación neoliberal) y el poder (obtenido del control de la tecnología y la economía) para enriquecerse e imponer a la sociedad sus propios fines e intereses, destrozando los equilibrios económicos y políticos existentes y causando tanto sufrimiento personal y devastación social. Hay que restablecer, por un lado, unas reglas que devuelvan a la gente la libertad de elegir y realizar un proyecto de vida autónomo, y, por otro, la justicia social (por las vías de la legislación y el empoderamiento popular) en la distribución del poder y los beneficios aportados por la tecnología, la ciencia o la economía, ahora usurpados por ciertas élites y grupos. Las

reglas morales, la ética, lejos de ser un obstáculo para la autonomía, la justicia social y el progreso colectivo, como el economicismo neoliberal dominante intenta hacernos creer, son la única manera de garantizarlas; son hoy tan necesarias como siempre lo han sido, quizá más.

El camino de reconstrucción de las convicciones y valores morales recorrido desde el Renacimiento para desplazar la fe, la moralidad religiosa y los privilegios feudales, debe ser retomado. La indignación social provocada por la crisis y la crítica posmoderna del racionalismo y la uniformidad no pueden ser un punto de llegada —ni un punto muerto a secas—, sino, como se indicó, el punto de partida y el acicate para la doble tarea de reconstruir una democracia política —donde el dinero esté sometido a la voluntad popular, y no a la inversa— y una moral social asumible (y asumida) que impida la vergonzante irresponsabilidad institucional que denunciaba Mills. La ciencia, la tecnología, la economía, el mercado o la planificación son fuerzas poderosas, pero ciegas y deshumanizadas, incapaces por sí solas de resolver los problemas humanos u orientar nuestro futuro común.

Necesitan un *control político y moral* que las ponga al servicio de los ideales forjados en común, para evitar que, al amparo de lemas abstractos como la libertad, la competitividad, el progreso o la utilidad, queden en manos de élites y grupos y

ventajistas que, escudados en esos lemas, y sirviéndose de su poder legislativo y social y de su influencia política, usen egoístamente el tremendo potencial y dinamismo de las fuerzas económicas y tecnológicas en su propio beneficio y en detrimento del resto de los mortales. Esa es la justificación, y la responsabilidad, de la ética, tanto en su acepción común (la ética universal para todos) como en la versión deontológica de las profesiones que, en nombre de la sociedad, manejan segmentos de la técnica y el poder social en relación a sus respectivas clientelas. Convergen ahí genéricamente la ética general (la ética a secas), y las éticas regionales o deontológicas, aun cuando sus intereses o contenidos puedan divergir en ciertos casos o momentos.

4. LA CRISIS MORAL

Finalizado el recorrido histórico, retomo ahora el tema de la crisis (aguda) o la (crónica) deriva decadente de la moral, cuya discusión se abrió antes al comentar la reacción posmoderna, última manifestación del desasosiego crítico a la vista.

4.1. ¿Crisis temporal o deterioro crónico?

Aunque la crisis moral (o crisis de valores) era el tema del final de siglo, nadie la da por clausurada, porque —de haber existido— no ha sido resuelta sino, todo lo más, eclipsada temporalmente por los acontecimientos económicos y las nuevas urgencias vitales que ahora nos ocupan y preocupan. De forma que, aunque la idea de crisis moral ha desaparecido virtualmente del debate intelectual, sigue siendo parte —de distintos modos— de las preocupaciones vitales de la gente: las dificultades siguen estando ahí, pero ni se habla de ellas en los cenáculos intelectuales ni la gente las identifica siempre como problemas morales. La pregunta sigue, por tanto, siendo obligada: ¿atravesamos una crisis moral, o se trata sólo de una hipersensibilidad temporal a las dificultades prácticas de siempre, azuzada por el cuestionamiento valorativo posmoderno?

La respuesta a esta pregunta depende tanto de lo que entendamos por «crisis moral» como de la situación vital y los valores asumidos por el observador. Si por «crisis moral» entendemos una quiebra total de los valores y criterios morales o la incongruencia radical de esos valores y criterios con la realidad social y la conducta personal (no hay moral o, habiéndola, está desconectada de lo que sucede o de los comportamientos de la gente), carece de sentido hablar de crisis. Tampoco admitiremos que hay crisis si comulgamos con los valores individualistas, autointeresados y utilitaristas dominantes; desde esa posición nos veremos, al contrario, en la cúspide de la moralidad. Pero si una *crisis* implica, simplemente, que, aunque existen valores morales estos son percibidos por muchos como inadecuados para enfrentar situaciones y problemas vitales cotidianos, y eso genera malestar y desorientación generalizados, entonces creo inevitable hablar de crisis moral o, al menos, de crisis *focales* de ciertos grupos o quizá *transiciones* vitales críticas en

ciertos períodos evolutivos o históricos.

Es necesario señalar dos matices significativos. El primero, no reconocer abiertamente una situación de crisis o amoralidad ni implica que no exista ni es un signo de salud social; puede revelar, por el contrario y como señalaba Mills, una grave anomalía colectiva, una «inmoralidad mayor». Segundo, el término «crisis» se suele referir a una situación temporal de *agudo desequilibrio* entre las dificultades y retos presentes, por lado, y la insuficiencia de las capacidades personales y recursos aprendidos para enfrentar esas dificultades, por otro. El uso del término no sería así adecuado si nos referimos a situaciones o fenómenos que, como las dificultades éticas, tienen raíces más profundas y de larga gestación. Más que de «crisis» podríamos hablar, entonces, de derivas o deslizamientos crónicos indeseables (deterioro, retraso, decadencia, desorientación o anomia), coronados o punteados por episodios críticos.

Para entender el impacto personal y social de una falta o inadecuación de valores (crisis o deriva moral indeseable) hay que desvelar el *papel* que tienen *los valores morales en el desarrollo humano y social* (un tópico que retomo en el capítulo 3).

Los valores son necesarios, en primer lugar, para juzgar situaciones y enfrentar problemas prácticos, así como también para dar sentido a nuestra vida y orientarla hacia fines valiosos para uno mismo y para la sociedad. Por eso la conciencia de carencia, insuficiencia o inadecuación de valores morales *(anomia)* se vive subjetivamente con angustia y resulta objetivamente desorganizadora y hasta destructiva. Además, entorpece, si no imposibilita, el desarrollo personal o colectivo, que, en ausencia de ideales, puede ser negado en la mera y embrutecedora supervivencia física y psicológica, tan familiar en el pasado, o extraviarse por caminos de conveniencia, dependencia adictiva, alienación consumista, aislamiento e indiferencia, violencia u otras formas de desvarío y patología que llenan la «crónica negra» de la modernidad y sus continuaciones.

Asumo, en segundo lugar, lo evidente: las personas incorporamos valores universales (presentes en todos los humanos), sociales (compartidos con otros miembros de grupos —familia, amigos, comunidad, etc.— en los que interactuamos habitualmente) e individuales, derivados tanto de nuestra particular forma de percibir, sentir y reaccionar ante experiencias comunes, como de la «digestión» moral de la experiencia propia. Todo ello da como resultado final una configuración ética singular para cada persona, que incluye aspectos morales comunes, aspectos diferenciales y aspectos únicos. Hay, entonces, que reconocer a la crisis un doble potencial: negativo, por el riesgo de fracaso y retroceso; y positivo, por la oportunidad de aprender y crecer. Y bajo ese prisma, mientras que la conciencia de dificultad y el debate ético son signos positivos, de reacción social y regeneración moral, el sentimiento de impotencia, la tibieza de la reacción social y la falta de conciencia de las dificultades reales son signos negativos, de dejación y renuncia.

4.2. Erosión de la alteridad e instrumentalización humana

¿Cuáles serían, en cualquier caso, los signos y síntomas de la crisis moral sentida agudamente décadas atrás, pero que, como deriva pertinaz, subsiste en el nuevo siglo? Describo a continuación (Sánchez Vidal, 1999) siete signos (resumidos en la tabla 1.6): la erosión de la alteridad, la degradación del hombre de fin en sí a medio, el retraso relativo de lo moral respecto de lo material y productivo, la primacía de los valores económicos, la anomia moral, los problemas personales de articulación y modulación moral, y la confusión de medios y fines.

TABLA 1.6
Crisis/deterioro moral: características y manifestaciones

- Erosión de la alteridad (causada por utilidad productiva, individualismo y egoísmo ético).
- Degradación del hombre a mercancía o medio de los intereses de otros (*self interest*, capitalismo).
- Retraso de la esfera moral respecto a la productiva: la ética como rémora del progreso económico.
- Economicismo: primacía de valores económicos sobre cualquier otro valor social o moral.
- Anomia y desorientación moral de ciertos grupos en importantes áreas de socialización humana.
- Problemas de modulación y articulación moral de la gente en la vida cotidiana.
- Confusión de medios y fines (valores instrumentales y valores finalistas); medios «elevados» a fines; dificultad personal y grupal para forjar fines y metas vitales significativas.

La erosión de la alteridad y los nefastos efectos psicológicos y sociales que la acompañan son consecuencia lógica del individualismo, egoísmo y utilitarismo modernos, cuya fatal combinación corroe el vínculo con el otro, que fundamenta cualquier moral digna de tal nombre. Añadamos algunas consideraciones relevantes para entender la situación. Primero, individualismo, *self interest* y utilitarismo tienen un papel *social* central —son funcionales— para un mundo que pasa de la dependencia religiosa, familiar y comunitaria a la autonomía individual, el trabajo personal y la maximización de la producción. Suponen, en segundo lugar y como liberación de las dependencias premodernas (libertad *negativa*), avances meritorios hacia la autonomía personal. Pero también implican retrocesos y mutilaciones, pues la conquista de la verdadera libertad es, en algún momento, una empresa *colectiva* tejida de relaciones e interdependencias: difícilmente puede liberarse el individuo aislado (la liberación es, también, *personal* e intransferible; ni la liberación colectiva tiene por qué suponer, por sí sola, la liberación de la persona, ni, sobre todo, bastará para asegurar la libertad positiva que implica un proyecto vital hacia el que dirigir esa libertad; la liberación y los derechos sociales sólo crearán las condiciones que permitan la liberación de la persona y su libertad para proseguir sus ideales y proyecto de vida).

Quebrar el vínculo con el otro, negarlo, implica, en último término, negarse a sí mismo como sujeto intencional, afectivo y social, encerrándose en un absurdo laberinto racional de autosuficiencia y aislamiento egoísta. Autointerés y utilidad sólo son aceptables como base de una verdadera moral si conviven con el interés y la simpatía por el otro, que, por un lado, haga compatible mi propio desarrollo con el de los demás y no ponga en peligro, por otro lado, las vinculaciones e interdependencias

básicas que reproducen y vivifican la humanidad, individual o colectiva. Eso es justamente lo que ha sucedido con los excesos modernos: la balanza se ha desequilibrado tanto hacia el polo del *individualismo egoísta* y la utilidad productiva, que los vínculos sociales básicos se han vuelto frágiles e inestables, creándose unas condiciones de «liquidez» moral que dificultan notablemente la «cristalización» de estructuras personales o sociales donde las personas humanas se reconozcan como tales y las comunidades puedan cumplir apropiadamente sus funciones relacionales y socializadoras.

La toxicidad social del egocentrismo individualista se manifiesta, por último, en dos frentes sociales. Por un lado, alimenta la indiferencia ante la injusticia, la pobreza o el sufrimiento del otro, justificando la adopción de normas sociales y leyes que santifican los intereses egoístas de los mejor situados y la exclusión del extraño, del no productivo y del más frágil. Por otro, el «síndrome» del individualismo y egoísmo-utilitarista está en la raíz de muchas de las «patologías» psicosociales actuales: la «desaparición» afectiva y social de los padres a consecuencia de su absorción laboral, el fracaso socializador de la familia ante las nuevas tecnologías y formas de relación, el alarmante apego tecnológico de los hijos como reverso del desapego de los padres, la extrema agresividad y competitividad en el medio laboral, la mentalidad depredadora y «extractiva» de tantas formas aceptadas de relación personal, etc.

La *degradación* del *hombre* a *medio* de producción o mercancía que se compra y se vende en el mercado es otro signo de retroceso. Aunque inherente al sistema capitalista (Polanyi, 1944), esa degradación es parte integral del mundo del trabajo, socialista o liberal; en el primero, la persona es un instrumento de las ideas y planes colectivos a veces impuestos a sangre y fuego (Soltzhenitsyn, 1973), y en el segundo, del interés privado y la producción genérica. La inmoralidad de esa cosificación viene dada por la negación frontal que supone del imperativo categórico kantiano de tratar a la humanidad en uno mismo o en los otros siempre como un fin en sí, nunca *sólo* como un medio. Y su gravedad social es patente en el hecho de que tal degradación es la condición necesaria y el fundamento, no sólo del sistema económico actual, sino también del sistema de bienestar asociado que tanto defendemos y que es directamente alimentado por la eficiencia económica que lo financia.

Entendámonos, en la era premoderna el hombre común *era* una cosa, un mero apéndice ignorante e impotente de Dios (o sus representantes terrenales) o del señor feudal, que acaparaban el conocimiento y el poder. Pero con el nacimiento del individuo y la autonomía modernas el hombre adquiere conciencia de que *puede* ser una persona en sí y no está destinada a servir a otros. El descontento deriva, entonces, de las promesas incumplidas por la modernidad y sus instituciones: el hombre es consciente de que es usado por otros, cuando pudiera (¡debiera!) ser de otro modo.

De nuevo, la fatal alianza entre la sacralización del hecho económico y la maximización de la utilidad por la que se rige cimientan la degradación humana. En efecto, es en el mundo económico donde la instrumentalización humana es más patente y extendida hoy en día: el trabajador «empleado» (Dewey, 1930) como

mercancía productiva (literalmente «mano de obra»), el consumidor objeto del *marketing* avasallador, la incuestionada exigencia de competitividad y eficacia laboral, etc. Pero la cosificación humana (y su efecto alienante) desborda la esfera económica, impregnando, como ya se ha dicho, todas los áreas vitales y sociales: las relaciones personales (la multiplicidad y frivolización de la interacción urbana, de la mujer, y ahora también el hombre, como objeto romántico o sexual), el deporte (el futbolista como «esclavo de oro» que entretiene a la gente) y el ocio (hay que colocarse y pasarlo bien), la educación (la exigencia de resultados y de desarrollar «competencias»...), y así sucesivamente.

4.3. Desarrollo material, economicismo y anomia moral

También la *brecha* entre el impresionante *desarrollo material* y el empatanamiento, la anomia y los problemas de modulación *moral,* observados en diversas áreas y momentos evolutivos, manifiesta las dificultades morales presentes. Pero, aclaremos, no se trata sólo del socorrido desfase cultural *(cultural lag),* o de la insuficiencia o carencia de criterios morales apropiados para valorar y usar técnicas o artilugios nuevos que llevan al cambio tecnológico acelerado; eso es lógico y esperable. Los motivos de preocupación por la situación de la moral en el tecnificado mundo moderno son mucho más profundos: la cultura y la moral han sido frecuentemente vistas (Mumford, 1934; Ellul, 1954) como una *rémora* para la innovación técnica y económica, como obstáculos que han de ser removidos, sin pararse a considerar si las novedades suponen avances humanos verdaderos o si el precio psicológico y social a pagar por su generación e implantación social compensa las ventajas materiales aportadas para el conjunto de las personas.

Y es que la técnica (Sánchez Vidal, 2009) puede ser usada —y ha sido usada— para liberar y para dominar, para producir y para destruir. Baste con recordar la capacidad de aniquilación de los ingenios nucleares, el poder de vigilancia y control aportado por las «nuevas tecnologías» digitales e Internet, o el poder de destrucción social y política de la «ingeniería financiera» y la «nueva economía». En ninguno de estos casos las novedades técnicas o económicas han supuesto globalmente un progreso, sino, más bien al contrario, un retroceso y, a menudo, una ampliación de la dominación social (aunque en el caso de tecnologías tan versátiles como las comunicativas e Internet hay que añadir otras potencialidades y posibilidades que muchos consideran positivas). Esto desmiente la tesis ilustrada de que el avance científico y técnico se traduciría, más o menos inexorablemente, en progreso humano y moral.

La hipótesis más común para explicar ese desmentido y la falta de correspondencia entre desarrollo material (técnico y económico) por un lado y crecimiento moral por otro es la llamada *autonomía técnica*, según la cual la moderna técnica industrial ha adquirido tal poder y gigantismo que se ha hecho «autónoma» (Ellul) respecto de los humanos; o, en el caso de la economía (Sen, 1990), usa al hombre como un medio para generar riqueza y no como el fin —y definidor— de esa

riqueza, como exigiría el imperativo kantiano. En el fondo de esa anomalía late una doble y lamentable renuncia humana: la dejación de la tarea de desarrollar fines y deseos (Ortega, 1939; Dewey, 1930; Fromm, 1955), de los que esos potentes instrumentos y energías materiales sean medios, y la renuncia a elaborar controles sociales y personales (política y ética) que regulen la producción y uso de esos medios. Baste añadir la exaltación racionalista de ciencia y técnica como algo superior, casi sagrado, para tener la grotesca inversión entre medios técnico-económicos y fines humanos, entre criaturas técnicas y creadores humanos degradados a medios de sus propias criaturas.

En realidad, la relación entre técnica y valores es —como veremos en el capítulo 2 al examinar las interacciones entre ambas— bastante más compleja: aquí he levantado acta de los excesos (tecnocracia) perpetrados en nombre de la técnica, pero falta revisar los excesos, no menos temibles, asociados al fundamentalismo ético o ideológico. Merece la pena resaltar, para cerrar esta breve discusión, la tarea ética en este terreno, recordando el papel instrumental de la técnica y los medios materiales y proponiendo unos valores que regulen, *orienten* y marquen los límites de su producción y uso personal y social para beneficio del hombre común. Eso vale también para la ética psicosocial, que, como campo emergente, debe establecer orientaciones y criterios valorativos para asegurar que la *técnica psicosocial* es puesta al servicio de las verdaderas necesidades y del bien del conjunto de personas y grupos sociales, especialmente, y en aras de la justicia social, de aquellos más vulnerables.

Economicismo. El *cuasimonopolio de los valores económicos* en una sociedad volcada en la adoración del dinero y la posesión material es un indicador de quiebra moral, tanto más cuanto que, al ser el consumo material visto por el común de la gente como un medio eficaz para alcanzar el bienestar, no va acompañado de una conciencia generalizada de malignidad. Ensalzar socialmente algo que es sólo un medio para otros fines humanos genuinamente valiosos implica un doble desvarío intelectual y moral: no sólo da valor moral a algo (el dinero) que en sí mismo no lo tiene, sino que resta valía a aquellos otros aspectos vitales (felicidad, vinculación personal, desarrollo humano, justicia...) que, como valores finalistas, sí tienen valor intrínseco.

Pero en la medida en que, por un lado, el dinero y la posesión económica son vistos como medios necesarios para conseguir bienestar, y en que, por otro, son medios altamente valorados —y tenazmente recompensados— socialmente, hombres y mujeres acaban incorporándolos como valores propios, incluso si violentan sus convicciones internas, en la creencia (paralela a la convicción calvinista de que la acumulación económica anuncia la salvación) de que manifiestan la excelencia social de sus portadores y en la certeza de que la conducta consiguiente será reconocida y premiada.

El problema surge cuando, tras esforzarse lo indecible en lo laboral (a costa de descuidar las tareas familiares), muchos caen en la cuenta de que el dinero no trae la esperada felicidad, con lo que el éxito económico deviene en fracaso humano. Es la consecuencia de fiarlo todo a los medios olvidando los fines: los *medios no colman*

ninguna *ilusión* o anhelo que no haya sido previamente forjado y *elaborado* por las personas (habitualmente *como fin* o meta deseable); algo que la sensación de decepción o fracaso se limita a recordar iluminando el vacío de valor y bienestar que deja la ausencia de fines y deseos humanamente valiosos.

Y esa, la ausencia de valores morales y la nimiedad de las metas humanas ante la presencia avasalladora de valores impersonales e instrumentales como la técnica y el dinero, es la otra cara del asunto: como todo no puede ser importante, si lo que mueve a la gente son valores meramente sociales o instrumentales como el dinero, la fama o el éxito social, otros valores más centralmente morales son desplazados a un segundo plano. No sólo se abre así la puerta a la anomia moral, sino que aparece, además, un problema de *moral pública* (de inmoralidad o amoralidad pública, mas exactamente), pues lo que falla es «el sistema» que promueve y sostiene esa aberrante situación, que, aunque inmoral, resulta socialmente funcional. Situación que, por otro lado, no suscita apenas reacciones en el hombre común (que se beneficia de la bonanza económica y material aportada por el sistema) ni, lo que es más grave, en las élites intelectuales. Y no se trata de una crisis pasajera o socialmente limitada (a la cultura estadounidense, su principal valedora), sino una tendencia establecida, hace tiempo denunciada por observadores como John Dewey (1930) o Robert Merton (1968) en aquella cultura y visiblemente extendida hoy día por muchos rincones del planeta.

Si los valores son esenciales para juzgar lo que sucede e integrar la experiencia, para definir y confrontar los problemas y para dar sentido y dirección a la vida humana personal y colectiva, la extendida *anomia* y *desorientación* moral —reverso inevitable del secuestro económico de los valores humanos y de la relegación de la esfera moral respecto de la material— serán indicativos claros de anemia y crisis moral. Anemia más visible en las dificultades de los grupos sociales, como la familia, encargados primariamente de generar y transmitir los valores morales y sociales, en el descuido de las tareas de crianza propiamente humana a favor de los deberes laborales, en la brutal complicación adquirida por la socialización actual y en la multiplicación de «niñeras» electrónicas como la televisión, el ordenador y los móviles, que, en ausencia de unos padres y orientadores humanos, más necesarios que nunca, «perpetran» una eficacísima *deseducación* moral al servicio de los intereses económicos prevalentes (Lago, 2013).

La anomia práctica se torna crítica en situaciones de complejidad y ambigüedad humana (como las citadas) ligadas a nuevos hechos y procedimientos (como la gestión de la explosión informativa), a la desesperanza y el pesimismo posmodernos, a las nuevas fórmulas laborales y relacionales creadas por el mundo posindustrial y globalizado, etc. Dos factores que agudizan esa anomia son la eventual inadecuación de los valores incorporados en la niñez y adolescencia a las nuevas realidades encaradas por los adultos en un mundo que cambia frenéticamente, y la sustitución de los héroes y modelos morales de antaño por «triunfadores» y famosos, caricaturas fabricadas por los medios de masas y la conectividad cibernética, cuyo principal mérito parece ser el enriquecimiento a cualquier precio, el oportunismo social o la domesticación psicológica de las personas a las expectativas mercantiles de las

corporaciones y el gran capital y a los deseos ajenos.

4.4. Dificultades de modulación moral y elevación de los medios a fines

Articulación y modulación moral son procesos mediante los que el sujeto incorpora valores morales externos, los integra con las estructuras afectivas y cognitivas existentes (articulación), y elabora respuestas morales coherentes y proporcionadas (moduladas) a la relevancia y significado del reto encarado en base a una evaluación valorativa correcta. Se trata pues de procesos dinámicos de relación yo-entorno, en los que la incorporación y uso reactivo de los aspectos morales está internamente conectado con otros aspectos estructurales (afectivos y cognitivos) del *self*, y depende externamente de las relaciones con los «otros significativos» y de la valoración social y moral que estos hacen de las respuestas del sujeto. Parece que la incorporación de valores morales se produce durante la infancia y adolescencia, de manera esencialmente implícita, inconsciente y afectivamente mediada a través de los apegos, la dependencia infantil y las recompensas (afectivas o de otro tipo) existentes en la familia y otros grupos primarios.

Los problemas de articulación y modulación se pueden deber, según el esquema asumido, a causas endógenas (dificultades de captación, internalización o «fusión» de los valores morales con los afectos y cogniciones) o exógenas (inexistencia o confusión de valores en el medio social o dificultades afectivas o comunicativas de la familia y otros grupos primarios para transmitir las valoraciones morales del medio social e intermediar con el sujeto que debe incorporarlas). Implican a menudo una combinación de ambos tipos de factores, en forma de *desequilibrio* entre las aferencias y exigencias externas y las capacidades de asimilación y respuesta del sujeto, más o menos apoyadas por la acción mediadora de los grupos primarios.

De manera que, aunque sólo una porción significativa de las dificultades de incorporación, articulación y modulación moral sean nominalmente exógenas, tales dificultades son cualquier cosa menos inesperadas en un contexto socio-moral «líquido», complejo y exigente que con frecuencia «desborda» las capacidades del sujeto y sus apoyaturas mediadoras para integrar y dar sentido a la multitud de «mensajes» recibidos y para elaborar una respuesta integrada, proporcionada y estable en el tiempo. Así es que, enfrentados al asfixiante mundo material, simbólico y relacional en que vivimos, no es infrecuente carecer de una valoración coherente de un suceso o asunto, o ser incapaz de forjar una respuesta moralmente adecuada sobre asuntos de los que no solemos tener experiencia directa, aunque sí multitud de referencias cruzadas frecuentemente inconexas, incoherentes o contradictorias que involucran de pleno a los «otros significativos», los medios de masas y, hoy, a Internet.

Los problemas de articulación y modulación moral (y de articulación personal de valoraciones y valores) son también esperables en situaciones de ambigüedad o incertidumbre, como las transiciones vitales de ciertos grupos (adolescentes, adultos que se jubilan, etc.) u otras en las que nos enfrentamos a mensajes ambiguos,

moralmente indescifrables o contradictorios, careciendo, en general, de referentes vitales directos. Dichos problemas se manifiestan en la incapacidad de mucha gente de forjar criterios morales sobre hechos cotidianos y en la confusión, desorientación e indiferencia o embotamiento (la «anestesia» de que hablaban los posmodernos) ante hechos moralmente relevantes, y producen a nivel psicológico comportamientos morales inciertos o erráticos. Unos y otros son signos «blandos», pero ciertos, de crisis y dificultad moral.

Medios por fines. A la degradación del autoconcepto humano (de fin en sí a medio) cabe añadir la extendida confusión de medios y fines en la acción humana y, más precisamente, la elevación de los medios a fines y el olvido o postergación de los auténticos fines humanos ya descritos en la relación del hombre y la técnica o la economía. Los tres sucesos (cosificación humana, economicismo y tecnocracia, inversión práctica del binomio medios-fines) son signos fuertes de crisis y desorientación moral. Puntualicemos. Desde el rigor teórico hay que admitir que ni la distinción medios-fines ni la relación de subordinación de los primeros (valores instrumentales) a los segundos (valores finalistas) son «datos» absolutos y universales: casi todos los medios tienen un cierto valor intrínseco y pueden ser fines en algunas cadenas causales, aunque en el contexto de la vida cotidiana de la gente sean, en general, sólo medios para otros propósitos o acciones que consideraremos genéricamente fines.

Pero, en la práctica, la distinción es capital para discernir lo que es moralmente básico de aquello que es secundario y sustituible, para distinguir la meta del camino que lleva a ella y, en fin, para mantener un esquema moral coherente y ordenado —no una amalgama amorfa— de valores diferenciados, en el que unos están relacionados con —y a menudo supeditados a— otros. Así, la felicidad, la justicia, la dignidad, la autonomía, la verdad o la fraternidad serían considerados por muchos fines merecedores de ser buscados por sí mismos y de señalar metas humanamente significativas. El dinero, el esfuerzo, el trabajo, la eficacia, el poder, el consumo, la rapidez, el reconocimiento social o la fama serían, en cambio, sólo medios o instrumentos para alcanzar esos fines, adquiriendo valor moral únicamente en la medida que contribuyen a avanzar en los valores finalistas.

Así, el *esfuerzo* que tanto se demanda a los jóvenes de hoy sólo tiene sentido moral en relación a una meta a la que va destinado (y al grado en que esa meta ha sido autónomamente establecida por los sujetos titulares del esfuerzo, en vez de ser exigida por otros). La pregunta a hacerse aquí es, por tanto y como en cualquier valor instrumental, ¿esfuerzo *para* qué? Si esa meta (sacar buenas notas, prepararse para trabajar, etc.) no ha sido decidida por quien tiene que esforzarse, o su auténtico valor moral en su esquema vital o su relación con el medio perseguido no están claros, la exigencia carece de legitimidad moral y, desde luego, de poder de motivación psicológica. Es comprensible que suscite el desinterés y rechazo que, como ya señalé, suele acompañar (junto al riesgo de generar dependencia) a las metas extrínsecamente establecidas para la gente (A decide lo que es bueno para B y le marca sus metas vitales) frente a las metas intrínsecas que tienden a generar autonomía (Deci, 1975).

En la medida en que el *poder* es considerado en la acción social como un medio para el desarrollo personal (empoderamiento) o la justicia social (reduciendo las desigualdades y ayudando al fortalecimiento de los más débiles), su mérito moral dependerá del grado en que mejora el uno o la otra. ¿Y el trabajo? Aun cuando puede ser valioso para aportar estima personal y utilidad social, el grueso de su valor moral dependerá de cómo es el trabajo y qué se produce por medio de él: no puede tener la misma consideración moral producir caviar, coches de lujo o misiles que electrodomésticos o medicinas, ni es psicológicamente equivalente ser un robot en una cadena de montaje o en una central de ventas o información telefónica que diseñar edificios o enseñar. Podemos deducir de estos ejemplos una importante diferencia en la forma de evaluar moralmente las acciones realizadas en ambos casos: mientras que con los valores finalistas la evaluación es deontológica, basada en el propio mérito de los valores, en el caso de los valores instrumentales la evaluación moral habrá de ser indirecta, consecuencialista, centrada en las consecuencias de la acción (calibradas, eso sí, en función de los valores finalistas asociados, pues las consecuencias no son «datos» absolutos que se presten a una medida objetiva e incontrovertible).

La confusión de valores instrumentales y finalistas, la sustitución de unos por otros, la inversión de su relación o el olvido de los primeros son, recapitulando, signos e indicadores clave de la crisis (o deterioro) moral actual. Lo son por varias razones y en la medida en que indican:

1. La *dificultad* de las personas de *generar* sus propias *metas vitales* o, si las generan, de perseguirlas consciente y eficazmente.
2. La *deshumanización* y alienación que produce concentrar el esfuerzo personal en afanes y tareas cuyo único significado humano es la subsistencia vital o la sumisión a expectativas y demandas ajenas.
3. La *absorción* acrítica de la gente en una forma de organización social férreamente racional en su apariencia, pero profundamente irracional y alienante en sus efectos.
4. La *subordinación* de los *valores morales esenciales* para alcanzar la plenitud vital y el genuino progreso social a valores sociales materialistas y superficiales como la eficacia productiva, el éxito económico o la posesión material, entronizados como fines autónomos que gobiernan la vida personal y social.

Del análisis precedente sobre la crisis —o el deterioro— moral podemos extraer dos conclusiones.

Primera, trátese de una crisis aguda o de un deterioro profundo y prolongado, el problema moral y el malestar que lo acompañan continúan tras el hervor posmoderno que los elevó a primer plano; la posmodernidad ha pasado y han emergido nuevas «realidades», pero los problemas siguen ahí. Si, como es común en el campo cultural, consideramos que los problemas existenciales del hombre son eternos y sólo cambia la forma de presentarlos y las soluciones propuestas, podríamos ver la crónica cultural como una sucesión caleidoscópica de replanteamientos de las preocupaciones

humanas de siempre. Eso nos permitiría entender las cuestiones morales (una parte de la cultura) como un asunto de fondo que se aviva —o desvanece— con los nuevos acontecimientos y sucesos; o, si se quiere, como un eterno carrusel en que los temas e imágenes cambian —porque aparecen otros nuevos, o por el cansancio y la falta de soluciones para los viejos—, pero nunca se dan por zanjados.

Eso no significaría, en segundo lugar, que los problemas de antaño no fueran relevantes; simplemente aparecen otros nuevos; tampoco niega que haya clarificaciones valorativas y progresos morales parciales, sólo que tales avances son ensombrecidos o empequeñecidos por la aparición de problemas nuevos que pasan a ocupar la atención —y absorber la energía— de la gente, como el riesgo de una guerra o catástrofe, la globalización, la crisis económica o el espionaje electrónico. La presencia en el análisis de tendencias «continuas» (gestadas a lo largo de décadas o siglos) junto a eventos nuevos y discontinuidades temporales, sugiere que nos hallamos ante problemas de fondo que, debido a la agudización de la sensibilidad moral del momento, la ocurrencia de acontecimientos históricos o acciones humanas, o a una combinación de ambas posibilidades, devienen en episodios críticos más o menos delimitados socialmente.

RESUMEN E INCONCLUSIÓN

Modernidad, posmodernidad, acción psicosocial y crisis moral

Acontecimientos y acciones deliberadas, como el derrumbe del socialismo y el bloque soviético, el advenimiento de Internet y las TIC, la pujanza del proselitismo islamista y del terrorismo fundamentalista, el ataque a las Torres Gemelas y la obsesión por la seguridad en Occidente, el largo fermento de la especulación financiera de la mano de la desregulación neoliberal y el reventón de las correspondientes burbujas, la emergencia de China y la traslación del eje de poder económico a Oriente, la desaparición de dictaduras y guerrillas y el despertar económico y democrático de América Latina, las revoluciones democráticas árabes o el estancamiento del otrora animoso proyecto de Europa, tejen un abigarrado tapiz que no admite ninguna lectura simple y coherente sobre la marcha de la humanidad en el nuevo siglo. Tampoco es precisa en un capítulo como este, que únicamente busca encuadrar social y culturalmente la APS y su consideración ética. Sólo trato aquí de extraer algunas conclusiones relativamente simples y palmarias del examen realizado para la ética psicosocial.

Como producto genuinamente moderno que es, la acción psicológica y social deliberada, refleja bastante fielmente la dualidad de aspectos positivos y negativos —la cara y la cruz— del *proceso modernizador*.

Aspectos positivos. Como intento deliberado de cambiar situaciones sociales indeseables o injustas, la APS encarna cumplidamente el proyecto moderno de emancipación e ilustración humana, afirmando, frente al resignado fatalismo

precedente, que consideraba inalterables («naturales») las condiciones dadas, la posibilidad de cambiarlas para crear un mundo mejor y más humano. Para realizar sus proyectos humanos el hombre necesita dotarse de un conocimiento válido del mundo físico, psicológico y social (la filosofía no es ya suficiente), así como de una técnica, física primero, psicológica y social después, de la que la APS sería parte. Asume también la APS las aspiraciones seculares modernas de búsqueda del bienestar y el desarrollo personal, considerándolas como metas que es lícito perseguir en este mundo, no como premios a esperar en la posteridad. Y conlleva la democratización del bienestar, que pone sobre el papel esas metas al alcance de todos, aunque la escandalosa comercialización materialista y consumista y las trampas y alienaciones varias descritas a lo largo del capítulo acaben empañando, si no traicionando del todo, la democratización secular de la felicidad.

La APS también encarna, sin embargo y de alguna forma, la faceta sombría y *negativa* de la modernización. Primero, en la medida en que se puede ver como un intento de paliar los desequilibrios y problemas creados por la industrialización, el capitalismo, el individualismo y el utilitarismo productivo modernos, la APS reflejaría no sólo la ambición del progreso social moderno, sino también, y con similar fidelidad, el retroceso y la barbarie que a menudo la han acompañado. Hasta el punto de que la acción social es a menudo acusada de hacer el «trabajo sucio» del capitalismo, amortiguando y haciendo digeribles el sufrimiento humano y la devastación social creados por aquel sin conseguir modificar sustancialmente las condiciones estructurales y procesales que generan y mantienen ese sufrimiento y devastación.

Igualmente recoge la APS los *valores* fundantes de la *modernidad,* que, como veremos en el capítulo 4, son tan centrales a la ética psicosocial como lo eran —en parte— a la deontología médica: la autonomía personal, la justicia social y el igualitarismo, la fraternidad y solidaridad o el desarrollo y perfectibilidad humana y social. A ellos habría que unir los valores morales «eternos» de beneficencia y confianza, y también enfoques y valores *posmodernos* (a veces de raíz secular) como: el construccionismo social (que restituye al *self* o sujeto, y a la multiplicidad de visiones subjetivas, el papel negado por el objetivismo positivista); la diversidad personal y socio-cultural y la pluralidad metodológica (como expresión de la multiplicidad de intereses y visiones sociales que compense «la subjetividad» abstracta); el papel informativo y constitutivo del contexto para las realidades psicológicas y sociales; y el poder, siempre implícito, pero ahora explicitado como ingrediente básico de la «construcción» de los problemas sociales y de sus soluciones en la idea de *empowerment* o empoderamiento.

Muchos de esos valores y tendencias han mantenido su vigencia en la *globalización* real, que puede ser considerada genéricamente como una profundización y ampliación (no exenta de tensiones y contradicciones internas) del racionalismo, liberalismo, economicismo capitalista y tecnificación modernos a la esfera mundial por un lado, y a la «virtual» (cada vez más irreal e inmaterial, como corresponde a la posmodernidad y al nuevo capitalismo financiero) por otro. Otra

cosa es que la *crisis económica,* ya vivida antes en otros lugares y momentos, ponga en solfa, siquiera temporalmente, algunos de esos valores y certezas. En la medida en que muchos de esos valores son los atributos ideales de las clases medias —surgidas con el crecimiento económico, la democracia liberal, el obrerismo socialista, la urbanización metropolitana y la comunicación de masas—, a cuyo eclipse asistimos, podríamos ser testigos de interesantes cambios de valores que sería temerario vaticinar en este momento de estancamiento y transición.

Así, la noción de empoderamiento (la gente común tiene, o puede adquirir, el poder para dirigir su propia vida), como contrapartida de la idea fatalista de que el poder lo tienen los otros, tenía sentido en momentos de expansión económica y psicológica como los años ochenta del siglo XX, cuando nació la idea. Pero ¿sigue siendo vigente ese valor cuando sus bases objetivas (el poder técnico-económico y la representación democrática del poder popular) se desvanecen ante la evidencia de la servidumbre política al poder económico, la migración de ese poder a Oriente y el conformismo y la resignación colectiva dominantes? Por otro lado, la extinción de las grandes ideologías y sistemas del siglo XIX (marxismo, liberalismo y capitalismo) es una profecía antigua que no se acaba de cumplir, porque, al parecer, no tenemos recambios, alternativas explicativas y operativas globales apropiadas para articular nuevas opciones políticas. El declive de las clases medias euro-norteamericanas podría ser perfectamente compensado con el ascenso de sus homólogas asiáticas o sudamericanas, con aspiraciones y valores esencialmente equivalentes a los de las primeras.

Una constante moral acompañante de la modernidad cultural es el *deterioro moral* (periódicamente coronado por crisis episódicas o focalizadas), cuyo último repunte impulsa el posmodernismo cultural de fin del siglo pasado, pero que aún persiste bajo las turbulencias y acontecimientos externos, rematada hoy por la exigencia de regeneración ante los excesos desvelados por el cataclismo económico. El trasfondo del deterioro moral (o la crisis temporal) es la erosión de la alteridad resultante del embate combinado del individualismo, la utilidad y el egoísmo *(self interest)* modernos; la instrumentalización utilitarista del hombre (su degradación a medio para la utilidad productiva y los fines de ciertas élites) y la grotesca elevación de medios sociales a fines humanos son signos mayores del deterioro; y el economicismo, la brecha entre el trepidante avance material y técnico y el empantanamiento moral, la anomia valorativa y las dificultades de articulación y modulación valorativa, son manifestaciones acompañantes, signos, quizá menores o más «blandos», del deterioro crítico.

PALABRAS CLAVE

- Modernidad.
- Legado de la modernidad.
- Posmodernidad.
- Crisis moral.
- Erosión de la alteridad.
- Inversión medios-fines.

- Ética posmoderna.
- Globalización.
- Crisis económica.
- Economicismo.
- Anomia moral.
- Modulación moral.

2

Conceptos básicos: técnica, acción psicosocial con enfoque comunitario y ética

Trazadas ya las coordenadas sociales y críticas de la ética de la APS, debemos definir ahora las ideas básicas —ética y acción psicosocial— en base a las cuales haré una propuesta integral de ética psicosocial (capítulo 3), que incluye unos contenidos valorativos (capítulo 4) y temáticos (capítulo 5) y una metodología operativa (capítulo 6). Además de la ética y la acción psicosocial, directamente tratadas por este libro, debemos ocuparnos de la técnica, que fundamenta la acción profesional y que, al otorgar a los profesionales un importante poder de cambio personal y social, de cuyo uso deben responder ante la sociedad, tiene un papel ético clave. La APS puede ser considerada, en ese sentido, una técnica de cambio psicológico y social que precisa regulación individual (ética) y colectiva (política): técnica y ética serían, así y en el nivel microsocial, el corazón de la APS. Podríamos resumir que la suma de técnica objetiva y los valores humanos subjetivos daría como resultado una *práctica* social asumida y realizada por una profesión (una multiprofesión en el caso de la APS).

Organizo la exposición del capítulo de forma «envolvente», progresando desde los temas más periféricos (la técnica, ingrediente definitorio de la APS) a los más cercanos (la APS con enfoque comunitario), finalizando con la ética práctica, el núcleo sustantivo del libro.

1. TÉCNICA

Para los especialistas y la gente común la palabra «técnica» hace casi siempre referencia a artefactos materiales físicos, biológicos o arquitectónicos como un coche, un ordenador, un gas anestésico, un clon o un rascacielos. Pero la técnica es, sobre todo, una manera de hacer las cosas, una práctica humana orientada hacia el logro eficaz de resultados deseados (Sánchez Vidal, 2009) que incluye, además de artefactos y máquinas, actividades y estructuras conductuales (como habilidades, hábitos y métodos) y, en fin, organizaciones sociales —como la burocracia, el ejército o un equipo de investigación— que coordinan y conectan personas y artefactos (Winner, 1977).

De manera que lo psicosocial está presente en la técnica no sólo de modo *sustantivo*, como un conjunto de técnicas psicológicas y sociales «blandas» (como la

terapia familiar o la organización comunitaria), sino también como acompañante esencial *implícito* en la técnica «dura» mecánica o arquitectónica en forma de procedimientos psicológicos y estructuras sociales. Hasta tal punto que para Jacques Ellul (1954), un destacado estudioso del tema, la verdadera técnica no la forman las máquinas o artefactos materiales, sino los métodos y procedimientos «blandos» (economía, organización, medicina, publicidad o pedagogía) mediante los cuales el hombre es adaptado a las máquinas y artefactos, constituyéndose así un mundo mecánico y tecnificado en el que el hombre, antaño dueño de las máquinas y herramientas, es ahora su servidor, una pieza más del gran engranaje técnico.

¿Cómo se llega a esa grotesca inversión de papeles (la «autonomía de la técnica»)? Veamos. La técnica tradicional era relativamente simple y manejable, sirviendo a las necesidades y deseos elementales del hombre. Pero el desarrollo de las ciencias modernas, basadas en la razón y la prueba empírica —y en el rechazo de las premisas filosóficas y teológicas del mundo medieval—, hace posible y alimenta un desarrollo técnico sin precedentes. En ese momento, los ideales ilustrados de emancipación humana y mejora social dan sentido a las ideas —en sí mismas neutras y adireccionales— de progreso y cambio social (Wolin, 2008) que acompañan a la técnica y a la «nueva» ciencia que la alimenta. Los devastadores efectos de la Revolución Industrial del siglo XIX y las oleadas técnicas que se suceden a lo largo del siglo XX deshacen, sin embargo, ese vínculo, dejando en evidencia los ideales ilustrados de emancipación humana y progreso social y la fe casi ilimitada en la ciencia y la técnica como medios racionales para hacerlos realidad.

La Revolución Industrial no sólo libera nuevas energías productivas y económicas, sino que provoca también enormes convulsiones sociales y ocasiona una nueva barbarie humana: los hombres quedan atrapados por las nuevas máquinas y por las duras condiciones laborales y sociales creadas por la insensata aplicación del credo liberal y la institucionalización del lucro como motivo humano universal (Polanyi, 1944). La concentración de poder económico modifica radicalmente a lo largo del siglo XX el mercado doméstico inicial (Noble 1977, 1984): las grandes corporaciones se adueñan de la ciencia y la técnica, con lo que estas, en lugar de guiarse por ideales de humanización y emancipación colectiva, pasan a servir los intereses económicos del gran capital. Las ideas de progreso y cambio social pierden su sentido inicial en favor de conceptos oportunistas como «desarrollo» e «innovación», y la producción industrial no se centra tanto en lo que la gente necesita como en lo que produce más beneficio a las corporaciones. La primera técnica comunicativa —que ya no fabrica bienes materiales, sino emociones y convicciones— ayuda, por un lado, a crear nuevas necesidades y a estimular el consumo para vender los excedentes industriales, y consolida, por otro, la adhesión a los regímenes totalitarios de entreguerras.

Tras la Segunda Guerra Mundial el dominio de Estados Unidos se afianza, no sólo por su victoria bélica y su poderío militar (bomba atómica), sino también por el desarrollo acelerado de la técnica «comunicativa», auspiciada materialmente por el ordenador y simbólicamente por la expansión masiva de su cultura popular. La falta de control efectivo de los grandes grupos empresariales, auspiciada por el

neoliberalismo, la alianza del poder militar y corporativo y la subordinación del poder político al económico (Mills, 1957), configuran, tras el hundimiento del socialismo en el fin del siglo, un panorama distinto, en que el papel de la técnica ha cambiado sustancialmente: ha pasado de promover el progreso al servicio de la emancipación humana y la mejora social, a servir a los intereses de élites económicas y grandes corporaciones dedicadas a ganar dinero y mantener su poder. No sólo las clases medias occidentales dejan de creer seriamente en el progreso, sino que son activamente «animadas» a conformarse y consumir para mejorar su «calidad de vida». Los movimientos sociales de los años sesenta (ecologismo, pacifismo, feminismo, comunitarismo, etc.) del siglo XX y el posmodernismo cultural que los sigue contribuyen notablemente al descrédito de la razón y el progreso, y a la *desmitificación de la ciencia y la técnica*.

1.1. Relevancia temática y justificación de la técnica psicosocial

¿Cómo encaja la técnica psicosocial en este panorama de imparable ascenso y posterior desencanto de la técnica mecánica? ¿En qué sentido podemos hablar de técnica psicosocial, y cuál es, en caso afirmativo, su papel en el mundo de hoy? Como se ha sugerido, lo psicosocial tiene un doble papel en la técnica genérica inicialmente mecánica y más adelante electrónica e informática:

1. Como acompañante procedimental de la técnica dura, en forma de métodos y destrezas psicológicas y de estructuras sociales para coordinar a las personas con las máquinas y aparatos.
2. Como técnica en sí misma, un conjunto de formas de actuar que combinan la interacción personal y la influencia social para prevenir o resolver problemas —e impulsar el desarrollo— de personas y colectivos.

Esas dos funciones explicarían la emergencia de— y *justificarían* socialmente— la técnica psicosocial, señalando sus dos objetivos generales: mitigar o subsanar los destructivos efectos humanos de la tecnificación industrial e informática, por un lado, y encauzar las energías científico-técnicas y las fuerzas sociales en la dirección de un desarrollo humano y socioeconómico convertido en el siglo XX en aspiración universal, por otro lado.

1.2. Retos y problemas: industrialismo, capitalismo y mundo global

Esa orientación dual se puede desdoblar en cuatro factores, que explican la relevancia actual de los temas psicosociales y justifican socialmente la técnica psicosocial: *a*) la producción industrial masiva como matriz y modelo de la forma de vida moderna; *b*) las demandas del mundo posindustrial y «comunicativo»; *c*) la democratización de las exigencias de desarrollo humano y «calidad de vida», y *d*) la orientación aplicada y activista de la psicología y las ciencias sociales (tabla 2.1).

TABLA 2.1
Técnica psicosocial: justificación y objetivos

1.Paliar *problemas psicosociales* derivados de:

- La Revolución Industrial (siglo XIX): mecanización, alienación, uniformidad, desvinculación, marginación social, etc.
- Las revoluciones comunicativas (siglos XX y XXI) y la sociedad posindustrial global: comunicación de masas, exceso de información y pérdida de significado, hiperindividualismo, aceleración vital...

2. Responder a *retos* psicológicos y sociales planteados por la sociedad industrial y posindustrial: vinculación interpersonal y ansia de pertenencia, comunicación social, organización productiva, planificación y evaluación, participación social, etc.
3. Responder a *demandas* generalizadas de *desarrollo humano y calidad de vida* propiciadas por: hedonismo, contracultura humanista y movimientos sociales de los sesenta (siglo XX); descolonización, caída del «telón de acero» y proclamación de los derechos humanos; desarrollismo económico impulsado por Naciones Unidas.
4. *Activismo y «aplicacionismo»* de ciencias humanas y sociales (psicología social, sociología, economía, ciencia política) en distintas áreas productivas y sociales.

La producción industrial como matriz y modelo de la forma de vida actual. Las condiciones de producción industrial masiva, y el mercado «libre» de trabajo que ese modo de producción exige, no sólo resultan profundamente degradantes para hombres, mujeres y niños, tratados como mercancías y sometidos a la dura disciplina de las máquinas, a la brutalidad y monotonía del trabajo en serie y a los ritmos impuestos por los patronos (Mumford, 1934). Tales condiciones se convierten también en el modelo de deshumanización, alienación y uniformidad impersonal, que se repite en los diversos ámbitos de *masificación* de la vida social en el siglo XX (la metrópoli urbana, los medios de comunicación, el consumo, etc.), en las *relaciones* cada vez más despersonalizadas con los demás y con los objetos (consumo) y en el *acelerado ritmo vital* que esos fenómenos imprimen a cada esfera vital. De modo que, simplificando, la técnica industrial masiva no sólo tiene devastadores efectos directos (la servidumbre humana a la máquina y a la organización social industrial y el capitalismo a su servicio), sino que genera, mimética e indirectamente, una *forma de vida mecánica* y rutinaria, plagada de alienación personal.

Tampoco se pueden olvidar, sin embargo, las *posibilidades* que el industrialismo ofrece. La reunión de trabajadores en la fábrica y en la ciudad brinda la ocasión y el incentivo para organizarse y combatir la explotación económica resultante de la tecnificación industrial y para crear asociaciones que mejoren la dura vida de los obreros. De ese modo, la industrialización es precursora y modelo de ciertas líneas (organización para el empoderamiento, asociación para el bienestar conjunto, etc.) de APS.

Los retos del mundo posindustrial global. Como se vio en el capítulo anterior, el paso de una sociedad industrial (centrada en la producción material) a otra posindustrial y globalizada, centrada en la información, la comunicación y los servicios, y dotada de mayor movilidad y conectividad entre personas y grupos

sociales, trae al primer plano ciertos procesos psicológicos y sociales. En ese mundo cada vez son más relevantes las técnicas de comunicación interpersonal y social, la negociación, la organización y la participación social para adquirir poder y defender los intereses colectivos, la concienciación, la planificación y evaluación de programas, la gestión del conflicto y el consenso, la mediación entre personas y grupos enfrentados, el desarrollo de la subjetividad y la individualidad para resistir las poderosas presiones sociales, el desarrollo comunitario o la planificación y organización de servicios. El paso de una economía productiva (centrada en producir bienes y servicios) a una economía orientada al consumo y la venta de productos, actividades y personalidades, exige, por otro lado, el desarrollo de grandes estructuras de influencia, «creación de imagen» y manipulación social, como la publicidad, el *marketing* o las relaciones públicas.

Demandas de bienestar social y calidad de vida. Una tercera línea justificadora de la técnicas psicosocial es la respuesta a las extensas demandas de bienestar social y calidad de vida generadas por el encuentro del hedonismo que impregna la cultura juvenil de los años sesenta, con los programas de «salud para todos» y de «desarrollo humano» auspiciados por diversas agencias de Naciones Unidas (Organización Mundial de la Salud y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) tras la Segunda Guerra Mundial.

Activismo y «aplicacionismo» de las ciencias humanas y sociales. Una cuarta fuerza impulsora de la técnica psicosocial es «endógena», emanando del activismo social y la orientación cada vez más «aplicada» de las ciencias humanas y sociales, a menudo asociada a eventos y catástrofes sociales, exigencias humanas o avances científicos o técnicos.

Podemos citar muchos ejemplos: la publicidad y los servicios a la industria y la «organización científica» del trabajo surgidos a principios del siglo XX; la clínica (luego prevención y promoción de la salud) en la tradición médica y psiquiátrica para atender a los heridos y afectados por las guerras; la atención a los problemas del desarrollo y aprendizaje cuando se universaliza la educación; los problemas sociales y la «desestructuración» familiar que acompañan a la urbanización, el industrialismo y la Gran depresión de los años treinta del siglo xx; la selección de personal y el trabajo de propaganda en las guerras mundiales y el nazismo; el auge de la prevención, la rehabilitación y el trabajo comunitario al compás del movimiento comunitario en los años sesenta; las protestas contra las injusticias de la globalización y la demanda de «otro mundo posible» ligadas al desarrollismo de fines del siglo xx y a la creciente conciencia de la desigualdad; el nuevo asamblearismo cibernético mediado por las redes sociales y espoleado por la crisis económica del siglo XXI, etc.

Una vez presentada y justificada la técnica psicosocial, debemos examinar sus relaciones con la ética, la otra dimensión constitutiva de la APS, que centra, además, nuestro interés en este libro.

2. TÉCNICA Y ÉTICA: RELACIONES Y ABUSOS

¿Qué relaciones mantienen ética y técnica en la APS? ¿Cuáles son las interacciones de esas dos dimensiones de la APS y los riesgos asociados al abuso de una u otra en la práctica psicosocial? El punto de partida para responder a esas dos preguntas es una doble constatación:

1. *Técnica y valores* (morales o de otro tipo) son los componentes genéricos de cualquier forma de acción humana.
2. La diferencia esencial entre la acción específicamente *profesional* y la acción humana común radica, precisamente, en la presencia de una técnica válida (de base empírica o científica) que confiere al practicante profesional un *poder* potencial —pero también una responsabilidad— superior al del hombre común.

Añadamos que, aunque el análisis que sigue (basado en mi exposición de 1999) está particularizado para la APS, es en general aplicable a cualquier forma de acción profesional y —en la medida en que la técnica tenga un papel significativo— de acción humana.

Autonomía temática e integralidad de la APS. Al ser técnica y ética dimensiones lógicamente distintas y funcionalmente *autónomas* de la APS, han de ser inicialmente consideradas por separado, cada una en sus propios términos conceptuales y metodológicos. Ni la ética va a responder cuestiones esencialmente técnicas, ni la técnica resolverá problemas nuclearmente éticos. Técnica y ética tienen, además, *intereses* y *ritmos temporales distintos*. Ya hemos visto que la técnica trata explícitamente de conseguir los mejores resultados usando los medios más eficaces y menos costosos en un plazo relativamente corto de tiempo. A la ética, en cambio, no sólo le interesa la bondad de los resultados para los sujetos, sino también, y sobre todo, el proceso de actuación, así como las relaciones establecidas y los valores promovidos en ese proceso y en las interacciones acompañantes. Y es claro que todos esos factores procesales y relacionales suelen permanecer implícitos y operar en el medio o largo plazo.

Asumida, sin embargo, la autonomía inicial de técnica y ética, y dado que la que la acción final ha de ser unitaria y coherente, habremos de aceptar que esa autonomía sólo puede ser temporal y relativa, ya que las dos dimensiones deben ser finalmente puestas en relación y consideradas conjuntamente. ¿Cómo? Teniendo en cuenta y combinando los dos elementos respectivamente asociados a esas dimensiones: por un lado los *valores* morales implicados en los objetivos y el planteamiento general de la acción (también en la técnica a usar, que siempre promueve implícitamente unos u otros valores), y por otro los *resultados* esperables (o realmente producidos) al aplicar una técnica determinada y el beneficio (beneficencia) o perjuicio (maleficencia) que esos resultados aportarán a los sujetos en función de los valores.

Abusos y excesos. Del análisis realizado se deduce que el sacrificio de una de las

dos dimensiones (ética o técnica) será perjudicial para la APS en su conjunto: ni la ética debe sucumbir a cualquier consideración técnica o estratégica, ni el logro de una beneficencia cierta para los sujetos mediante una técnica eficaz debe ser subordinada sin más a cualquier imperativo moral o valor abstracto. El abuso de cualquiera de las dos dimensiones será, por tanto y en general, negativo, condenando a la APS a la ineficacia práctica, el fundamentalismo moral o la tecnocracia humanamente empobrecedora.

El abuso de la técnica (el más frecuente en la práctica) conducirá al sacrificio de las consideraciones éticas y valorativas a favor de los resultados, en la creencia de que la técnica resuelve por sí sola los problemas y colma las aspiraciones de los humanos *(tecnocracia)*. La postura tecnocrática conlleva tres riesgos principales:

1. Imponer implícitamente (y con la falsa coartada de la neutralidad de la técnica) los valores o intereses del profesional a aquellos con quienes trabaja.
2. Conducir a una forma de actuar excesivamente racionalista y mecánica en la que el logro de fines y la obtención de resultados justifican actitudes autoritarias o acciones, métodos y formas de relación potencialmente dañinos para los clientes.
3. Ignorar los efectos procesales o relacionales de la técnica usada y su papel —esencial, aunque implícito— en la construcción de la agencia y en el desarrollo humano de los clientes.

Al dar respuestas técnicas a cuestiones valorativas, los enfoques tecnocráticos no sólo deforman y mutilan las realidades psicológicas y sociales a las que se aplican, sino que sacrifican las posibilidades reales de desarrollo humano y social, en gran parte asociadas al proceso de integración subjetiva e intersubjetiva de significados y valores implícitos en lo que se está haciendo, en cómo se está haciendo y en las relaciones establecidas en las correspondientes acciones e interacciones.

El abuso simétrico, el *fundamentalismo moral,* llevará a ignorar las dimensiones técnicas y estratégicas de la APS, dando respuestas morales a problemas técnicos y tendiendo a afirmar —e imponer— unilateralmente los valores propios y a ignorar o despreciar los de los demás. El fundamentalismo moral es especialmente tentador entre los profesionales de una APS sobreideologizada, sostenida por una base científica y técnica aún débil. Los riesgos de tal postura son obvios:

1. La ineficacia de la APS y la llamativa discrepancia entre la retórica de los grandes valores y principios y la pobreza de los resultados reales.
2. La frustración de los profesionales ante la discrepancia de intenciones y logros reales.
3. La inviabilidad de una actuación voluntarista sin una base técnica y científica sólida.

La tentación final es convertir al practicante psicosocial en *predicador* de cualquier credo —laico o religioso— que, en absurda simetría con la actitud

tecnocrática, falsea la realidad sobre la que actúa y la viabilidad estratégica de los cambios deseados, para acomodar ambos a sus intenciones o convicciones subjetivas.

La conclusión que podemos extraer del somero examen de los riesgos a que los abusos éticos y técnicos exponen a la APS y a sus participantes es que el practicante debería tratar de combinar armónicamente (o al menos con la menor tensión posible) los aspectos técnico-estratégicos y los aspectos morales de la APS, promoviendo el cambio racional con un fundamento moral, e intentando modificar las realidades personales y sociales en base a ideales y valores, pero también a la evaluación correcta y objetiva de la realidad y de los medios actuales y potenciales con los que cuentan los profesionales y los clientes y comunidades con las que trabajan.

2.1. Interacciones

La exploración de la autonomía respectiva de ética y técnica, y de sus diferencias y excesos unilaterales, no agota el análisis de las relaciones entre los dos componentes de la APS (resumida en la tabla 2.2): es preciso examinar también las distintas formas en que esos componentes inicialmente autónomos interactúan en la APS. Tres de esas interacciones son examinadas a continuación para ilustrar en la práctica la dinámica ética-técnica: el condicionamiento que las asunciones valorativas (o de otro tipo) ejercen sobre la elección de las técnicas de actuación, la influencia de los valores en la fijación de objetivos y la supuesta universalidad de las técnicas.

TABLA 2.2
Técnica y ética en la acción psicosocial: relaciones, abusos e interacciones

Relaciones técnica-ética	• Autonomía lógica y metodológica. • Intereses y características operativas diferentes. • *Técnica*. Centrada en los resultados y la eficacia de medios y métodos; explícita; opera a corto y medio plazo. • *Ética*. Centrada en la bondad humana de métodos y en los resultados; proceso y relaciones importan tanto como resultados; implícita; opera a medio-largo plazo.
Abusos/Primacía	• Técnica: *tecnocracia*. Soluciones técnicas a problemas humanos complejos; resultados y fines justifican y determinan medios; se ignoran valores, ética, poder y relaciones interpersonales y sociales; riesgos: ausencia de crecimiento personal, mecanización, deshumanización y totalitarismo tecnológico. • Ética: *fundamentalismo moral*. Soluciones éticas a problemas humanos complejos; valores morales (no técnica y evidencia empírica) determinan objetivos y medios; riesgos: ineficacia, imposición de ideología y valores propios.
Interacciones ética-técnica	• Al establecer objetivos: predomina ética y valores; los parámetros técnico-sociales (necesidad, capacidad) y la viabilidad técnica también importan. • Al elegir métodos: predomina técnica; importan también implicaciones y efectos éticos de medios y métodos usados y relaciones establecidas.

Elección de la técnica de actuación. Conviene recordar, en primer lugar, que toda estrategia de acción social o psicológica descansa sobre ciertas concepciones

explícitas o implícitas del hombre y la sociedad (*asunciones valorativas* en definitiva), con lo que los valores y supuestos del practicante psicosocial encajarán mejor con unos enfoques que con otros. La concepción moral o ideológica asumida al abordar un tema *condicionará* u orientará, por tanto, la acción en una determinada dirección estratégica, incluyendo —o siendo compatible con— un tipo de técnicas y procedimientos y excluyendo —o siendo incompatible con— otros. Así, una concepción optimista e interdependiente de los humanos como sujetos con poder y recursos potenciales orientará la acción hacia la «activación» psicosocial, la participación y la cooperación; una concepción pesimista y socialmente determinista la dirigirá hacia la lucha por el poder y el cambio estructural; una visión individualista y centrada en la autonomía personal centrará la acción en la asertividad y la responsabilidad y el aprendizaje individual, etc.

Desde luego, la elección de la estrategia general de acción no puede depender sólo de las asunciones sociofilosóficas previas, sino, además y sobre todo, de cómo *evaluemos* el *problema* (cómo lo «construyamos»), a sabiendas de que la evaluación (o «construcción») amalgama hechos y valores, datos e ideología social. Si la pobreza es vista como un asunto de pereza personal trataremos de activar a los individuos afectados o «reestructurar» sus cogniciones o actitudes; pero si es definido como una falta de oportunidades sociales (asumimos que la gente desea salir adelante pero no tiene los medios para ello) habremos de mejorar la justicia distributiva poniendo los medios y oportunidades sociales (como la educación y el trabajo) al alcance de todos. Si se piensa que el fracaso escolar deriva de la indolencia y falta de dedicación de algunos para adaptarse a un currículo escolar preestablecido, los que fracasan son ciertos individuos que deben aplicarse y esforzarse más; si es, en cambio, visto como fruto de un sistema pedagógico deficiente o demasiado exigente, se buscará mejorar ese sistema y preparar mejor a los educadores.

Maticemos: aunque los valores orienten las *estrategias técnicas* a usar, no deberían ser el factor crucial para definirlas, puesto que, según se ha indicado, el tema de los medios técnicos a usar para alcanzar unos objetivos dados es una cuestión técnica (*la* cuestión técnica) que debe ser esclarecida a través de criterios técnicos (datos empíricos, experiencia subjetiva de malestar, indicadores sociales, etc.), *no* por criterios de valor. Más concretamente, las estrategias técnicas deben ser elegidas primordialmente en función de los problemas (o aspiraciones) revelados por la situación encarada y por las expectativas de la gente, cuyo conjunto conforma las *demandas funcionales* a las que ha de responder la estrategia técnica (información, concienciación, apoyo psicológico, movilización, etc.) adoptada.

El condicionamiento técnico ejercido por las asunciones morales o ideológicas del profesional tiene entonces, a la luz de los riesgos de abuso descritos, indicaciones precisas y acotadas. Está plenamente justificado para limitar el uso de técnicas dañinas o moralmente cuestionables —según algún valor relevante—, aunque eficaces: se consigue el fin buscado a costa de degradar al sujeto, debilitar vínculos valiosos o dañar la justicia social, por ejemplo. Pero ese condicionamiento es del todo inadecuado si se limita a excluir técnicas eficaces, que no presentan impedimento

moral significativo sólo porque no cuadran con las asunciones ideológicas o morales del profesional. Ese proceder es doblemente inaceptable: porque empobrece técnicamente la APS y porque orienta esa acción ilegítimamente hacia las preferencias (o el beneficio) del profesional, no del cliente.

Fijación de objetivos. Casi todo lo escrito para la elección de la técnica de actuación es aplicable a la fijación de objetivos, aunque con una diferencia sustancial: los valores tienen aquí un papel mucho más relevante —a menudo central—, aunque no único, pues otros factores objetivos o ajenos a la evaluación moral —como la situación social, el estado de necesidad o riesgo, la percepción subjetiva de sufrimiento o malestar o los recursos de los actores— deben ser también tenidos en cuenta. Y ya se ve que, en la medida en que en cada uno de esos factores confluyen y se mezclan datos y valores, hechos y percepciones subjetivas, ninguno de ellos puede ser anulado sin mutilar las realidades psicológicas o sociales a calibrar ni, en consecuencia, establecer los objetivos de actuación sobre bases deformes y deficientes.

El papel primordial de los valores tiene, en todo caso, mucho que ver con la intencionalidad moral del practicante y las instituciones actuantes, puesto que es esa intencionalidad la que define qué parte de la realidad psicológica y social se considera moralmente buena (aceptable al menos) y cuál mala o inaceptable y debe, por tanto, ser cambiada. Ese es un juicio esencialmente moral, que ha de iluminar (junto a otros datos factuales y estratégicos sobre la situación, los sujetos y los medios disponibles) la fijación de los objetivos de actuación y su jerarquía. Así, sólo si la pobreza o el fracaso escolar son considerados por las instituciones y practicantes moralmente inaceptables e incorporados a sus intenciones interventivas, serán elevados a la condición de objetivos prácticos a alcanzar en la APS.

Validez técnica y valores subyacentes. Una última consecuencia que podemos extraer del análisis relacional de técnica y valores es que las técnicas para resolver un problema X o colmar una aspiración Y *no son traspasables* sin más de una situación o comunidad a otra. Puesto que las técnicas de actuación conllevan ciertas asunciones ajustadas a las condiciones de la realidad psicosocial en que fueron generadas, habrá que ver hasta qué punto difieren esas asunciones o condiciones de la nueva realidad subjetiva y social a la que se van a aplicar. Una metodología de investigación-acción puede ser indicada y eficaz en una comunidad interesada y participativa, pero inviable en un tejido urbano individualista y competitivo; un programa contra la droga basado en el cambio individual (o la comunidad terapéutica) puede estrellarse contra la realidad social construida sobre potentes clanes familiares o, al contrario, un programa centrado en la familia y la cooperación puede fracasar en un tejido social muy fragmentado e individualista que funciona en base al autointerés personal, y así sucesivamente.

3. ACCIÓN PSICOSOCIAL

En la medida en que la APS es una técnica —una manera de actuar para obtener resultados deseados—, ha sido ya genéricamente retratada en las páginas precedentes. Sin embargo, la APS no es sólo técnica (una técnica especial, distinta y distante de la técnica mecánica, desde luego), sino algo más. Para identificar ese «algo más» y definir con mayor precisión la APS necesitamos concretar el significado del adjetivo *psicosocial* y sus contenidos, y aclarar el sentido de la *acción* a que nos vamos a referir. Precisar el significado de la expresión «acción psicosocial» exige, por un lado, aclarar qué es lo que entendemos por «social», y obliga, por otro, a justificar la opción por la denominación «acción psicosocial» frente a la de «intervención psicosocial» dominante en una literatura ya caudalosa (Barriga y otros, 1987; Luque, 1988; Musitu y otros, 1993; San Juan, 1996; López Cabanas y Chacón, 1997; Fernández González y Musitu, 2000; Bueno, 2005; Abello y Gallego, 2007; Blanco y Rodríguez Marín, 2007; Maya, García Ramírez y Santolaya, 2007; Cardozo, 2009) sobre el tema, así como en revistas *(Intervención Psicosocial),* perfiles profesionales y laborales de los servicios sociales y otros ámbitos.

Hay que apuntar, en fin, que se han sugerido otras denominaciones, más o menos convergentes, como «praxis psicosocial» (Rueda, 1986), «trabajo psicosocial» (Castaño y otros, 1994; Bernler, 1997) o «modelo psicosocial» de trabajo social (Du Ranquet, 1996), que, aunque en ocasiones hacen aportes semánticos y prácticos de interés, tomadas en conjunto oscurecen, en vez de aclarar, el perfil conceptual de lo psicosocial asociado a las ideas iniciales de «intervención psicosocial» y «acción psicosocial».

3.1. Contenido: lo psicosocial

La multiplicación de escritos y referencias en el tema de lo psicosocial indica el nacimiento de nuevas formas de actuación —llámense intervención, trabajo, praxis o de otro modo— que combinan lo psicológico y lo social en respuesta a retos y problemas emergentes para los que las estrategias tradicionales no resultan adecuadas. Mi meta en este apartado es bucear en los contenidos de esas formas de actuación, para luego optar por un significado concreto de la APS cuya ética intento perfilar en este libro. En el caso de la «acción psicosocial» (y las variantes nominales citadas) la clarificación conceptual debe incluir, como señalé, los dos términos de la expresión:

1. Los distintos modos de *acción* o actuación.
2. Los contenidos tentativos del adjetivo «psicosocial», conectado, como he señalado, con el significado atribuido a «lo social».

Empezando por esta segunda parte, lo *psicosocial* puede ser entendido de distintas formas (Sánchez Vidal, 2002 y 2012), siete de las cuales son descritas a continuación. Lo psicosocial puede hacer referencia a:

1. El conjunto de esfuerzos que los *psicólogos* hacen en el *campo social*, no

clínico, o el conjunto de *acciones psicológicas* de los *trabajadores de lo social*. Es esta una definición descriptiva y abarcadora, pero demasiado genérica y escasamente clarificadora del concepto y la práctica implicados en un conjunto bien diverso de esfuerzos y acciones.

2. Los *efectos psicológicos* de la intervención o *acción social*, entendiendo esta como el conjunto de actuaciones sociales que producen cambios personales y colectivos. La APS trataría aquí genéricamente sobre la relación de las variables sociales con las variables psicológicas. Esa relación —y la práctica asociada— se puede contemplar en dos direcciones: de arriba abajo (asociada a la «*intervención* psicosocial» a la que esta acepción se refiere concretamente) y de abajo arriba (cuya práctica derivada llamaríamos «acción psicosocial», a la que se refiere la acepción 7).
3. La intervención centrada no en los agregados sociales ni en las personas individuales, sino, justamente, en los *aspectos interactivos* o *intersectivos* —psicosociales— entre lo social y lo psicológico: significados y sentidos, actitudes, relaciones, valores, sentimientos de pertenencia o de poder y así sucesivamente.
4. La *actuación* en grupos humanos *cara a cara*, en la que se da una modificación a la vez de actitudes y comportamientos *personales* y de climas y procesos (como la comunicación, el liderazgo, la interacción personal, la elaboración de metas comunes, etc.) *microsociales*. Los procesos de «descongelación» y «recongelación» de fuerzas dinámicas en distintos estados de equilibrio, y los cambios personales que los acompañan para mantener la conformidad con el grupo descritos por Kurt Lewin, ilustran bien este tipo de cambio microsocial.
5. La *vertiente psicológica* de los problemas y *temas sociales*, tanto en lo referente a sus determinaciones causales como a sus consecuencias y soluciones; por ejemplo, la vulnerabilidad psicológica como factor contribuyente a las adicciones, o la reconstrucción de metas y rutinas vitales precisos para la superación terapéutica de esas adicciones.
6. La *subjetividad* (los aspectos no estructurales u objetivables) implicada en la acción social en los tres aspectos (causas, consecuencias y soluciones) mencionados.
7. Las modalidades de acción social (como el enfoque comunitario) en que las *personas*, además de ser objeto del cambio, lo protagonizan como *sujetos agentes*.

Ya se ve que estas siete visiones de lo psicosocial no son mutuamente excluyentes, conteniendo varias áreas de solapamiento y expresando a menudo sentidos complementarios del concepto que, vistos en perspectiva, podemos extractar en tres núcleos semánticos o maneras diferenciadas de entender la APS resumidas en la tabla 2.3.

TABLA 2.3

- *Relaciones* entre *aspectos psicológicos* (subjetividad, emotividad, agencia) y *sociales* (supraindividuales, socioestructurales, justicia social).
- De arriba abajo: efectos psicológicos de la estructura y la acción social.
- De abajo arriba: acción social en que las personas son sujetos agentes, no objetos de la acción de otros.

- *Intersección* de { lo psicológico. / lo social. }
- Aspectos *intermedios* (psicosociales): *interacción* de personas y grupos; aspectos intersectivos (relaciones, significados compartidos, valores, actitudes); espacios micro o mesosociales (familia, grupo pequeño, comunidad) que posibilitan la interacción humana y el cambio de aspectos intersectivos.

- *Subjetividad* y *agencia humana* (individual o colectiva): acción social protagonizada por las personas (agentes); constitución yo/*self* (aspectos no objetivos de la acción).
- APS combina mecanismos de { influencia social difusa (acción social). / relación interpersonal. }

— *Relación* entre lo *psicológico* y *lo social* (concepto 2), que puede ser transitada bidireccionalmente en los planos conceptual o analítico-práctico. *Conceptualmente*, como relación entre los aspectos sociales o estructurales y los aspectos psicológicos o personales, donde cualquiera de ellos puede ser tomado como causa u origen (variable independiente) o como efecto y punto de llegada (variable dependiente). En la *práctica* la APS designaría aquí los efectos psicológicos de las acciones sociales (concepto 2) o la acción (o activación) psicológica para producir cambios sociales relevantes (concepto 7).

— Cruce o intermediación entre lo *social y* lo *psicológico*, que incluye aspectos como: la *interacción* de personas y grupos y las relaciones que resultan de ella, un componente central de cualquier acción psicosocial; los *aspectos intersectivos* (concepto 3), que ni son atributos estrictamente individuales (rasgos de personalidad o cualidades psicológicas) ni de agregados sociales mayores (características estructurales o dimensiones de la sociedad o sus instituciones), sino que vinculan o relacionan personas (y grupos) entre sí de forma que su modificación acarrea cambios en las distintas partes (personas o grupos) vinculadas; los *espacios microsociales*, que facilitan la interacción y propician el cambio de los aspectos intersectivos (actitudes, vínculos, significados, valores, etc.) mencionados: el pequeño grupo (concepto 4), la familia o la comunidad. Una singularidad adicional de lo psicosocial asociada a esta última concepción son las posibilidades de encuentro que brindan los espacios microsociales, con lo que permiten *combinar* el *cambio personalizado* (basado en la relación psicológica y la interacción cara a cara) con la *influencia* global asociada al cambio *social*.

— *Subjetividad* y *agencia* humana (en ambos casos se puede entender de forma individual o colectiva), implicadas en los problemas y actuaciones colectivas (conceptos 5, 6 y 7). Esta acepción dual de lo psicosocial añade importantes matices cualitativos a los conceptos espaciales y relacionales anteriores:

1. La capacidad humana de ser sujeto agente de la acción (y de los cambios producidos), no objeto de ellos, y de generar autonomía y poder personal.

2. La consideración de los aspectos no objetivables de los problemas, aspiraciones y acciones sociales.

Agencia y subjetividad compendian en el análisis y la acción la vertiente genuinamente *humana* de una APS que, de otro modo, podría quedar reducida a un frío catálogo de temas, sucesos y procesos técnicos deshumanizados, regidos por inexorables leyes científicas y técnicas ajenas a las decisiones y la voluntad de las personas, que son siempre —como sujetos conscientes y activos o como objetos inconscientes y pasivos— parte esencial de la situación de partida y de los intentos para modificarla.

Sólo falta añadir a los tres núcleos de significado identificados el concepto 1, puramente descriptivo (y por tanto más realista y abarcador), para tener el retrato inicial aceptable de la APS. Debemos, sin embargo, introducir antes algunas precisiones sobre el significado de lo *social* implicado en la expresión «acción psicosocial», que hasta ahora ha reflejado sólo lo supraindividual, el aspecto *cuantitativo* del término.

3.2. Tres significados de «lo social»

El calificativo «social» incluye en realidad al menos dos significados adicionales al meramente cuantitativo que le es comúnmente asociado (véase tabla 2.4). Un segundo sentido, *cualitativo* o estructural, se refiere a la estructura estable de un conjunto humano organizado o trabado, que es más que el mero agregado de individuos (un colectivo): si la personalidad es el «esqueleto» estructural de las personas, la estructura social (concebida como cristalización o equilibrio dinámico de fuerzas sociales en interacción) lo es de los conjuntos sociales.

TABLA 2.4
Lo social (y la acción social): tres significados

Lo social	Acción social
Cuantitativo: supra-individual.	Acción *colectiva*, dirigida a grupos y colectivos, no a individuos.
Cualitativo: estructura social; conjunto organizado de personas, grupos e instituciones.	Cambio *estructural:* fortalecer/modificar la estructura social o algún aspecto clave: estructura de poder; normas y leyes, relaciones sociales; sistemas de comunicación, producción o participación política, etc.
Político-moral: ligado a necesidades y desequilibrios sociales.	Confrontar necesidades y problemas sociales básicas; promover la *justicia social.*

Un tercer sentido de «lo social» (Sánchez Vidal, 2002), implicado en expresiones

como «la cuestión social», tiene que ver con las necesidades e injusticias en una sociedad y con los conflictos y luchas entre grupos para satisfacer las unas o eliminar los otros. «Los problemas sociales» o «los agentes sociales» pueden, entonces, significar tanto problemas que afectan a muchos y tienen que ver con la estructura de la sociedad, como que esos problemas implican desigualdades y necesidades sociales relevantes, en el primer caso, o representan a muchas personas y sectores significativos de la estructura social, que tienen intereses comunes y enfrentados a los de otros grupos en base a las desigualdades e injusticias, en el segundo caso.

El significado de la acción o intervención social, con los dos sentidos añadidos (que puede de alguna forma extrapolarse a la APS), sería la acción que no sólo busca el cambio de muchas personas (supraindividual), sino, además, la modificación de la estructura (de poder, de responsabilidades y papeles, etc.) constitutiva de un colectivo (lo que podríamos llamar cambio cualitativo) y, en fin, la mejora de la *justicia social* (incluyendo la satisfacción de las necesidades humanas básicas), redistribuyendo el poder y recursos existentes en aras de una mayor equidad. Aunque este último sentido diverge bastante de los habitualmente atribuidos a la acción social (o psicosocial) y hasta desdibuja el perfil meramente conceptual o cuantitativo con el que se la suele identificar, lo clarifica mucho en el terreno *moral*, al señalar rotundamente a la justicia social (y el cambio estructural, si se añade el segundo significado) como ingrediente básico de la acción social en general o de la APS en particular.

3.3. Modalidades de actuación y relación psicosocial

Al aclarar el contenido sustantivo de lo «psicosocial» han surgido ya varias modalidades de actuación respecto a ese contenido y a los aspectos relacionales y procesales (subjetividad, agencia, trabajo de abajo arriba y de arriba abajo e intermediación, papel de la relación y la cooperación, etc.) implicados en la forma de actuar. Aunque la forma de actuación dominante en la literatura y el discurso es la intervención, se mencionan otras como «praxis» o «trabajo» social, que involucran unos valores morales y una forma diferente de elegir el objeto de trabajo y relacionarse con él.

La *acción* social se puede entender de dos maneras, que corresponden a diversas acepciones de lo social sugeridas: *a*) la actuación colectiva que persigue eliminar algún problema o deficiencia social estructural y alcanzar la justicia social, y *b*) la actuación de un grupo social por sí mismo, no a instancias de otro agente social (profesional o no) externo que actúa como impulsor de la acción o mediador social entre instituciones o grupos sociales y el grupo actuante, el cual es, por tanto, en el sentido aquí indicado, *sujeto* de la acción y *agente de sí mismo*. La suma de los dos significados nos da una idea más completa y coherente de la acción social, que —como incursión en lo social de un grupo que actuando como agente de sí mismo busca cambios sociales predeterminados— contrastaré luego con la idea de intervención social. La mayoría de las veces, la acción social autónoma de un grupo social se puede considerar (en la medida en que se ocupa de *sus* propios asuntos, no

de los de otros grupos) como una forma de autogestión.

La *intervención social* (Sánchez Vidal, 1991, 2007) es una interferencia deliberada para modificar situaciones sociales que, en base a un criterio objetivo (necesidad, pobreza, desigualdad, riesgo, etc.), se juzgan indeseables o alejadas de una situación ideal y precisan cambio o mejora. Se sobreentiende que la intervención externa es algo ocasional o excepcional, debido a que el grupo humano ha perdido su capacidad de gobernarse por sí mismo o a que tal capacidad no basta para enfrentar un determinado reto o problema o para colmar una aspiración. Por eso, y para preservar la autonomía básica del grupo, es preciso aportar un criterio razonablemente objetivo para intervenir y una doble justificación, profesional (que muestre la competencia o autoridad técnica del interventor) y político-moral, de que la intervención respeta la capacidad de autodeterminación del grupo. La intervención profesional es *deliberada*, no fruto del azar, incluyendo intenciones benéficas por parte del interventor, pero también una *autoridad* científico-técnica (basada en conocimientos aplicables, la experiencia y el uso de métodos de actuación y evaluación válidos) que se produce idealmente (pero no siempre) en respuesta a una demanda de ayuda.

Aunque existen varias posibilidades intermedias, acción e intervención social (o psicosocial) corresponden aproximadamente a las dos formas «puras» de actuación mencionadas al referirnos a las maneras de conectar lo psicológico con lo social: la actuación desde abajo, protagonizada por el propio grupo humano, no organizada (técnicamente al menos), sin implicación o mediación profesional y que prima el proceso sobre los resultados (acción psicosocial); y la actuación desde arriba, planificada y organizada, impulsada profesionalmente y con énfasis en los resultados y objetivos más que en el proceso y las interrelaciones involucradas, es decir, la intervención psicosocial. Ninguna de las dos modalidades de actuación es buena en sí o genéricamente mejor que la otra, pues cada una tiene sus propias indicaciones, ventajas y límites.

La fortaleza principal de la *acción social* es el desarrollo de la autonomía, el poder y la cohesión interna del grupo o comunidad. Su mayor debilidad radica en las exigentes asunciones de aplicación, limitada a los casos y situaciones en que el grupo es consciente de que existe un problema (o una aspiración relevante) y tiene la capacidad y el poder de resolverlo por sí mismo. Otro punto débil es la exclusión implícita de la iniciativa profesional externa (cooperativa o interventiva), que puede ser esencial para ayudar a identificar y resolver los problemas (o alcanzar aspiraciones) de grupos y comunidades y para potenciar o fortalecer los recursos de aquellos aportando métodos y estrategias de actuación válidos. El papel del científico o del profesional como tal no existe en ese enfoque, tal y como ha sido definido.

Los problemas y virtudes de la *intervención social* al uso son el espejo de los de la acción social: la relegación del grupo humano a un papel secundario o dependiente, el énfasis en la eficacia y los resultados sobre bases de la pericia profesional, y la definición de un papel profesional diferenciado que, con el planteamiento cooperativo y aditivo respecto a las capacidades del grupo social, no tienen por qué impedir, sino que, al contrario, pueden (¡deben!) ayudar al empoderamiento y desarrollo de las

personas.

Acción desde abajo e intervención desde arriba admiten, de todos modos, posibilidades intermedias, que incluyen diversas formas de cooperación y colaboración horizontal entre los profesionales o agentes externos, por un lado, y las comunidades o grupos sociales, por otro, en acciones cuya iniciativa puede corresponder a cualquiera de las dos partes. Acción autodirigida e intervención externas son sólo «tipos puros» o polos de un conjunto mucho más amplio y variado de estrategias que, aunque basculen hacia uno u otro polo, pueden combinar varios de los rasgos de uno u otro. De hecho, las diferencias en los programas psicosociales a menudo radican más en las asunciones ideológicas y morales que hacen y en la retórica de su presentación social que en las acciones reales. Tampoco las modalidades o enfoques de actuación social (o psicológica) se deben limitar a las dos discutidas, pudiendo ampliarse, al menos, a cuatro variantes (tabla 2.5):

TABLA 2.5
Formas de relación y modalidades de actuación psicosocial

Formas
Según el tipo de relación y la posición de los sujetos: *a*) Intervención psicosocial: de arriba abajo (cambio planificado u organizado). *b*) Acción psicosocial: de abajo arriba (autogestión social, activación y organización social). *c*) Colaboración horizontal (e igualitaria).
Modalidades de actuación
• Cambio planificado. • Autogestión social, acción social autónoma. • Organización y activación social. • Experimentación social.

a) *Cambio planificado:* la intervención racionalmente diseñada y organizada en torno a objetivos, acciones y medios precisos para conseguirlos, que incluye la evaluación de resultados; se asocia, *grosso modo*, a la intervención social desde arriba, aunque, desde luego, admite muchos grados de cooperación con los sujetos afectados.

b) *Acción social* de una comunidad o grupo para buscar autónomamente su emancipación o desarrollo social, dando, usualmente, tanta o más importancia al proceso y a la manera de actuar como a los resultados: la investigación-acción lewiniana y sus derivados, la educación popular freiriana y otros enfoques más o menos autogestionados.

c) *Experimentación* social de distintos métodos o estrategias, cuyas consecuencias y efectos son cuidadosamente evaluados a la luz de sus resultados para ir mejorando el contenido y método de las acciones. Esta metodología, más útil y frecuentemente utilizada de lo que podría parecer a primera vista, es capaz de

combinar la creatividad de los intentos de cambio psicológico y social con el control científico y reflexivo. La investigación-acción encaja también aquí, en la medida en que la reflexión colectiva (subjetiva) y la evaluación objetiva de efectos (que no son incompatibles sino complementarios) tienen un papel relevante.

d) *Organización* social en torno a ciertos objetivos o intereses comunes para conseguir el empoderamiento personal y colectivo, con la participación como mecanismo central. La *activación* social sería un proceso, menos organizado, que incluiría la toma de conciencia de la situación (y del propio poder) y el subsiguiente paso a la acción social (que puede o no darse, siendo esa posibilidad de conectar conciencia y acción la incógnita crucial de una fórmula aún por explorar en cuanto al conjunto de mecanismos que median ese paso de tomar conciencia para «activarse», implicarse en la acción).

Ya se ve que, como en el caso de otros esquemas y descripciones de lo psicosocial, estos enfoques carecen de la pureza taxonómica que algunos pudieran desear, presentando no pocos solapamientos y reiteraciones discordantes, de forma que estrategias concretas de actuación pueden encajar a la vez en varios enfoques. Así, la investigación-acción es a la vez un enfoque experimental (*c*) y una forma de acción social autogestionada (*b*), donde la iniciativa de un grupo para actuar por sí mismo y generar una reflexión interna sobre el proceso y los resultados se puede complementar con una propuesta experimental donde se documenten externamente los cambios; la organización o activación social sería un intermedio entre la acción social autónoma y autoiniciada y la intervención social, ya que implica habitualmente algún tipo de estímulo o «empujón» externo.

Es preciso también apuntar que cualquier programa social o comunitario con cierta complejidad o amplitud territorial y poblacional contendrá generalmente tanto aspectos y acciones participativas y con un cierto grado de autoorganización o autogestión como aspectos planificados que aseguren disponibilidad y coordinación de personas, acciones, territorios y logística necesarios para la correcta y eficiente realización de las acciones y programas. Nótese que los dos tipos de contenidos (comunitarios desde abajo, planificación y coordinación global desde arriba) no son por principio incompatibles, sino más bien complementarios —se necesitan el uno al otro—, aunque las lógicas que los animan sean contrarias y, en muchos sentidos, difíciles de coordinar en la práctica.

3.4. Conclusión: el significado de la APS

Recapitulemos. Ya se ha visto que las diferencias entre enfoques y modalidades de actuación psicosocial a menudo radican más en la retórica «purista» o el posicionamiento ideológico de quienes las sustentan, y en su deseo de distinguirse de otras posiciones y retóricas, que en las acciones reales. Y que, además, varios rasgos (aunque no todos) de un enfoque o modalidad se pueden combinar para adecuarlos a

las condiciones de cada practicante y situación concreta. Si los enfoques son combinables y cada etiqueta («intervención psicosocial», «acción psicosocial», «praxis psicosocial», etc.) no pasa de ser un tosco envoltorio verbal para designar una concepción y forma de actuar no tan diferente de otras, carece de sentido malgastar tiempo y energía intelectual en tratar de definir con precisión la APS o buscar una etiqueta semántica definitiva para ella. Aunque explorar las características y cualidades del modo de actuar buscado tiene pleno sentido, carece de él caer en el nominalismo esencialista. Bastará entonces, para nuestros actuales propósitos elegir una denominación o etiqueta, y especificar las características atribuidas ella y el modo en que va a ser usada en el texto

¿En qué sentido usamos en este libro la expresión «acción psicosocial», visto el abanico de posibilidades de entender las modalidades de la «acción» y de lo «psicosocial», las grandes posibilidades de hibridación y la diferencia entre la retórica (el dicho) y la realidad (el hecho)?

a) En principio, en cualquiera de las tres *posibilidades* (conexión de lo social con lo psicológico, nivel microsocial intersectivo o intermedio, y acción social protagonizada por las personas) básicas de lo psicosocial (tabla 2.6). En cuanto a las modalidades de actuación, dado que se prima el enfoque comunitario (descrito a continuación), más proclive a la acción desde abajo que a la intervención desde arriba, uso en ese sentido el nombre «acción psicosocial», sin excluir añadidos interventivos (que complementan la acción colectiva, exigen definir el rol profesional activador, no directivo, y plantean algunas cuestiones éticas previas esenciales) o de los otros enfoques, de organización-activación (que es una variante de la acción social desde abajo) o la experimentación social. Eso significa, quede claro, que también se podría haber usado el término «intervención psicosocial» con enfoque comunitario, abriendo esa expresión al desarrollo de recursos, la participación de la gente como protagonista (o coprotagonista) de la acción y el respeto de sus valores e intereses básicos (Sánchez Vidal, 2007).

TABLA 2.6
Significado de la APS

a) Tres posibilidades de *lo psicosocial:*

- Conexión bidireccional de lo psicológico con lo social.
- Nivel intermedio o intersectivo de lo social y lo psicológico.
- Acción social protagonizada por las personas como sujetos agentes.

b) Uso social de la técnica o la actuación psicológica; uso psicológico de la técnica o el trabajo social.
c) Acción basada en (y dirigida a modificar) *ingredientes psicosociales básicos*: subjetividad, agencia humana, interacciones y relaciones, influencia social personalizada.
d) Actuación que privilegia *espacios microsociales*, que facilitan el encuentro e interacción de las personas, la conexión de lo psicológico y lo social y el uso (y cambio) de los ingredientes psicosociales básicos (*c*): familia, grupo pequeño, comunidad.

b) La APS podría ser también definida, de modo más prosaico, como el uso social (entendido en los tres sentidos, supraindividual, estructural y promotor de la justicia social) de la técnica psicológica o el uso psicológico (que incluye la interacción personalizada y las emociones) del trabajo social tomado en sentido amplio.

c) La acción basada en los *ingredientes psicosociales esenciales:* la subjetividad (personal o social), la agencia social de las personas, las interacciones entre personas —y entre grupos— y la combinación de las emociones psicológicas y las relaciones interpersonales, por un lado, con la influencia social propia del cambio social, por otro.

d) Se entiende también que la APS privilegia los *espacios y contextos micro y mesosociales* de *encuentro entre* las *personas* y entre *lo psicológico y lo social*, que priman y hacen posible la actuación de esos ingredientes: la familia, el pequeño grupo y la comunidad.

Concluyo articulando sintéticamente la exploración precedente de lo psicosocial. Sugiero así *definir* la *acción psicosocial* como un conjunto de formas de actuación que conectan lo psicológico y lo social (desde arriba como intervención, desde abajo como autogestión asistida), centrándose en los aspectos intersectivos y en ingredientes psicosociales esenciales —como la subjetividad, la agencia humana, la interacción personal y la influencia social personalizada— en espacios micro y mesosociales (como la familia, el grupo pequeño y la comunidad), que mediante la interacción y el encuentro personal facilitan la conexión de lo psicológico y lo social, movilizando —y permitiendo modificar— esos ingredientes psicosociales.

Dado que el foco de atención de este libro no es la APS en sí, sino sus dimensiones éticas —que no siempre varían sustancialmente con los diversos significados de la APS identificados—, usaré en general —y salvo que me refiera a algún significado o variante concretos— la denominación «acción psicosocial» de forma más vaga y permisiva, como una *etiqueta de conveniencia* para nombrar diversas líneas de actuación que combinan y conectan (en los niveles micro o mesosocial) genéricamente lo psicológico y lo social. Como, por otro lado, he convenido en asignar a la APS los valores éticos comunitarios, debo describir ahora brevemente el enfoque comunitario y su posición ética, que en todo caso será explicitado más ampliamente en el capítulo 3.

4. EL ENFOQUE COMUNITARIO

He mostrado en las páginas precedentes distintas formas de entender la APS, una de las cuales, el enfoque comunitario, consideraba a las personas como protagonistas del cambio, además de destinatarios de él. Frente a una APS con un perfil conceptual y operativo difuso y bastante aséptico en el terreno moral, el enfoque comunitario muestra un perfil operativo y moral bastante más nítido y rotundo. Tiene, por tanto, sentido usarlo para definir la ética de la APS, en el sobreentendido que puede haber

variantes psicociales de actuación que reclamen conceptos, métodos de actuación o valores morales diferentes. Perfilo el enfoque analítico y operativo comunitario (Sánchez Vidal, 1991 y 2007) con una perspectiva multidisciplinar, dejando para el próximo capítulo el examen detenido de la postura ética y valorativa implícita y de su eventual viabilidad.

4.1. Ideas básicas

La *acción comunitaria* (tabla 2.7) persigue la mejora global y equilibrada de las personas (el *desarrollo humano* integral) y el desarrollo de las comunidades mediante el cambio «desde abajo» (gestionado o dirigido por la comunidad), asumiendo a las personas como *sujetos* potencialmente *agentes*, con recursos y capacidades que el activista o profesional externo puede activar, potenciar o catalizar. La base de la acción o intervención comunitaria es la *comunidad*, entendida en un triple sentido: como sujeto colectivo «activable» y con recursos y potencialidades, como territorio en que la gente se siente arraigada, y como un conjunto de vínculos psicosociales (pertenencia, mutualidad, reciprocidad, compromiso social, etc.) interpersonales e intergrupales. En el enfoque comunitario no interesan tanto los problemas personales o sociales como las capacidades y potencialidades de los grupos humanos para superar esos problemas y *llegar a ser todo aquello que humana y socialmente pueden ser;* ese es el horizonte utópico de la acción comunitaria.

TABLA 2.7
Enfoque y método comunitario

Enfoque: actuación psicosocial
• Dirigido al desarrollo y a las potencialidades y capacidades humanas. • Promueve el cambio social desde abajo (autogestión asistida). • Basado en la comunidad, entendida como proximidad territorial, psicológica y social. • Orientado al empoderamiento personal logrado en acciones colectivas.
Método de actuación
• Centrado en comunidades y colectivos, no en individuos aislados. • Integral e integrador, promueve interdisciplinariedad e integración social. • Positivo, basado en asumir y promover recursos y capacidades personales y colectivos. • Promueve la participación y el protagonismo de la comunidad. • Establece relaciones igualitarias que redistribuyen poder y redefinen roles de participantes. • Utiliza la empatía personal y cultural y los mediadores comunitarios. • Proactivo y preventivo; evaluación y actuación global y contextualizada. • Asume una perspectiva temporal de medio y largo plazo.

La comunidad puede ser también ser entendida como mediador esencial entre la sociedad abstracta y lejana y las personas singulares y concretas, asumiendo importantes funciones (identitarias, prestación de servicios, establecimiento de

significado, interacción y participación humana, etc.) en los dos sentidos, de arriba abajo y de abajo arriba. La actuación comunitaria tiene como punto de partida la comunidad existente, y persigue el desarrollo y mejora de sus tres aspectos citados: del sentido de sujeto y la agencia colectiva, del soporte físico vital de sus moradores, y de las vinculaciones psicosociales —especialmente la pertenencia comunitaria—, entendiendo que esa triple mejora es uno de los fundamentos del desarrollo humano. La iniciativa comunitaria y la participación de la comunidad son el eje del método comunitario de trabajo y de la adquisición de poder *(empoderamiento)* personal y colectivo, considerado (junto a la comunidad) un segundo ingrediente clave del desarrollo humano.

Como *enfoque analítico,* la visión comunitaria de la realidad se interesa no por lo que las personas tienen de singular o específico, sino por lo que comparten y tienen en común. Tampoco se centra en las instituciones o contextos o sociales amplios, sino en aquéllos próximos y cercanos desde el punto de vista territorial, psicológico (la familia, los amigos, los próximos) y social (asociaciones, grupos organizados en torno a intereses compartidos, etc.) y en la relación de esos contextos comunitarios —punto de partida y palanca para la acción— con el comportamiento personal y los problemas o intereses positivos compartidos por la gente. Los temas de interés del campo comunitario son, por tanto, el cambio social autogestionado y cooperativo (y la participación, activación y capacidad de agencia de los sujetos), el desarrollo humano integral, el poder personal, el proceso de empoderamiento y la comunidad en sus diversas acepciones (cercanía social, sujeto de acción social, territorio y vinculación psicosocial).

4.2. Método de actuación y posición ética

Como enfoque práctico, la actuación comunitaria se puede definir a través de las siguientes características e intereses (tabla 2.7):

— Se centra en *comunidades* territoriales y en *colectivos* sociales, no en los individuos, que son, en todo caso, punto de partida (como líderes o informadores) para el trabajo sociocomunitario; más específicamente nos interesa la subjetividad y agencia de la gente, así como las *relaciones* e interacciones de las personas y lo que éstas tienen de *común* y compartido: padecimientos, dificultades y problemas, pero también recursos, proyectos, deseos, ilusiones e intereses.
— Es *integral* —lo que exige un abordaje interdisciplinar de temas y acciones— e *integrador*, promoviendo la comunidad psicosocial y rechazando la segregación territorial, social o educativa (realizada en centros como la prisión, el hospital o las escuelas especiales para «retrasados»).
— Es *positivo, de recursos,* asumiendo capacidades en las personas y comunidades. El enfoque comunitario, comienza a actuar a partir de los recursos (personales, territoriales, económicos, interpersonales y sociales)

existentes, trata de potenciar las capacidades personales y los recursos sociales, y aporta recursos (principalmente técnicos) externos, en lugar de limitarse a «diagnosticar» problemas y prescribir soluciones estrictamente profesionales.

— Prioriza la iniciativa de la comunidad y la *participación* y *protagonismo* de sus miembros en todas las fases de actuación: evaluación inicial y definición de objetivos, desarrollo y realización de las acciones y evaluación de resultados.

— Se basa en el establecimiento de *relaciones igualitarias* entre partes desiguales (profesionales y comunidad) que, al promover la confianza y el reconocimiento de la capacidad de agencia del otro, permitan la colaboración y cooperación sinérgica e integradora. Pero implica también importantes *cambios* en la *actitud y* el *papel* de las dos partes: la gente, la comunidad, ha de estar dispuesta a asumir mayor poder e iniciativa (mayor responsabilidad, por tanto), mientras que el profesional debe ser más humilde y respetuoso con la gente con la que trabaja (no deben ser ya tratados como «pacientes» psiquiátricos o deficientes sociales, sino como las personas potencialmente capaces que son) y ceder parte del poder y estatus consustancial a los gremios profesionales.

— Hace uso de la *empatía sociocultural,* que combina la capacidad psicológica de sintonizar con el otro con la experiencia de situaciones de pobreza, exclusión o desigualdad (a través de las prácticas y estancias en la comunidad), que habitualmente quedan fuera de la órbita vital del profesional de clase media. El ejercicio de la empatía no debe excluir la *capacidad de distanciarse* y ver las cosas desde fuera, pues esa capacidad es una de las aportaciones clave que el profesional externo puede hacer para complementar y corregir la visión —a menudo unilateral y subjetivamente distorsionada— que los miembros de la comunidad tienen de sus propios asuntos. Esa empatía puede resultar imposible cuando la distancia social con la comunidad es muy grande, en cuyo caso es recomendable incorporar *mediadores* que ayuden a descifrar los códigos culturales del grupo o comunidad y las implicaciones sociales y culturales que las propuestas de acción tendrán para aquéllos.

— El enfoque comunitario es *proactivo,* procediendo desde las raíces y determinantes de los problemas para poder prevenirlos y situando la acción *cerca* de la comunidad —no en instituciones distantes y segregadoras—, lo que permite familiarizarse con la vida comunitaria y anticipar los conflictos y problemas. El enfoque comunitario debe ser también *flexible,* tratando de optimizar los recursos existentes, no duplicar roles y no hacer por el grupo o la comunidad lo que ellos pueden hacer por sí mismos.

— Se sirve de una *evaluación y actuación global* —no fragmentaria— y contextual, de manera que los fenómenos y eventos se interpretan y cobran sentido, no tanto —o no sólo— en relación a variables transituacionales, sino en relación a los datos aportados por el contexto y el momento evolutivo o histórico en que se produce la acción.

— Tiene una *perspectiva temporal* de medio y *largo plazo,* más adecuada a unos problemas y asuntos psicosociales particularmente difíciles de abordar si:

tienen raíces culturales (de forma que han cristalizado en el período de socialización personal); suponen ganancias secundarias (como la evitación de responsabilidades o las ayudas económicas), y están trenzados en el ejercicio de unos roles o relaciones socialmente normalizadas y legitimadas, de forma que modificar el asunto X exige que, por un lado, cambien los distintos actores implicados y que, por otro, se retire la legitimidad social de los papeles, normas, relaciones o conductas involucrados. La existencia variable de este tipo de factores *mantenedores* de los problemas y situaciones psicosociales hace recomendable ver la APS más como un *esfuerzo* encaminado en la dirección correcta que como una acción que erradicará de una vez por todas, y en un plazo corto de tiempo, un problema, o alcanzará sin más la aspiración acariciada por la gente. Es también importante asegurar que las acciones a realizar tienen sólidas raíces comunitarias para garantizar su *continuidad* temporal cuando los profesionales (y las instituciones u organizaciones que los apoyan) cesen su actuación directa.

Postura ética. La somera descripción precedente permite vislumbrar los valores y la postura ética comunitaria que apunto ahora telegráficamente, dejando para el próximo capítulo una descripción y discusión más amplia. La misión moral del enfoque comunitario es promover al otro como ser humano vinculado (miembro de una comunidad); esa misión asume una postura básicamente altruista en la que el practicante no sólo renuncia a parte del poder y prestigio profesional, sino que busca activamente el desarrollo de aquellos con quienes trabaja en un contexto de cooperación o de servicio social.

Los valores nucleares subyacentes a esa postura ética son: la *comunidad* (hermandad o solidaridad social «natural»), el *desarrollo humano* (como aspiración realizada a través de la solidaridad y el poder compartido) y la *justicia social*. Los valores asociados (a menudo instrumentales para el logro de los anteriores) incluyen: el *poder* y el empoderamiento personal, la *responsabilidad* social y el compromiso con los más vulnerables (ligados a la justicia social), y el *derecho* a la *diferencia*, relevante para manejar en la práctica la diversidad personal y sociocultural.

El fugaz examen de la postura ética comunitaria nos conduce naturalmente a abordar el último tema de este capítulo, que centra, además, el interés del libro en su conjunto, la ética.

5. ÉTICA

La ética (tabla 2.8) busca *identificar y realizar el bien en las acciones y relaciones humanas*. Trata, pues, tanto sobre las concepciones de lo que es humanamente bueno (o malo), encarnadas en *valores* morales (como la justicia, la autonomía, la honestidad o la verdad), como sobre la bondad (o maldad) de las *consecuencias* reales (beneficencia o maleficencia) derivadas de las acciones y relaciones humanas. Asumo que el bien y el mal no son absolutos, sino que —como los valores morales que los

representan— admiten graduación, de forma que podemos valorar una acción, o relación A como mejor o más deseable moralmente que una acción o relación B. La misión de la ética es, entonces, doble: juzgar las acciones humanas como buenas o malas, a la luz de ciertos valores y principios morales, así como apoyar y sancionar el *deber* de actuar de acuerdo con esos valores.

Aún se podría añadir una tercera acepción, en la que —en respuesta a la pregunta ¿cómo he de vivir?— la ética señalaría el camino de búsqueda de la *vida buena* y virtuosa, cuyo resultado esperable sería la felicidad. Estos tres significados de lo ético (el bien expresado en los valores morales, la obligación moral y la felicidad como producto del vivir bien) parecen converger y mantener una sólida coherencia racional: si uno descubre el bien debería perseguirlo obrando en consonancia, cultivando la virtud y llevando una vida buena culminada por la felicidad. Pero tal coherencia es engañosa y oculta *divergencias* significativas entre distintos conceptos de la ética, entre las distintas éticas.

TABLA 2.8
Ética: misión y carácter

Ética	Busca	• Identificar y realizar el bien/lo bueno en acciones y relaciones humanas (valores morales). • El deber y la obligación moral. • La vida buena, la felicidad humana.
	Implica	• Alternatividad respecto de la realidad dada: lo que *debe ser* no lo que es. • Bipolaridad { Lo malo, indeseable (censura/reproche moral). / Lo bueno, deseable (modelos positivos de realización y conducta). • Niveles { Abstracto: valores, principios. / ↑ Inferir ↓ Aplicar / Concreto: conducta, cuestiones concretas.
Ética social		• Tema concernido social, trasciende límites de lo privado y personal. • Sujeto de acción/relación supraindividual, actuación y responsabilidad colectiva. • El proceso de deliberación y discusión es social, pero el contenido (razonamiento + criterios) es explícitamente moral.

Por ejemplo, entre la ética entendida como deber u obligación moral de realizar el bien y la ética de la autenticidad asociada a ciertas líneas de pensamiento oriental, el aristotelismo o la psicología humanista. La primera conlleva una tensión entre el ser (y hacer) por un lado, y el deber ser (y deber hacer) por otro, de forma que la constancia de una discrepancia entre lo que uno es (o hace) y lo que debiera ser (o hacer) llevaría aparejada la obligación de cambiar en la dirección señalada por el deber. El ideal moral implica, así, un deber, una meta a perseguir y un cambio (personal o colectivo) en la dirección del ideal personal o colectivo (la justicia, la autonomía y la verdad) identificado como «el bien».

La ética de la autenticidad y la felicidad, por el contrario, instará al sujeto no a perseguir el deber, sino a convertirse en lo que verdaderamente es, a ser «él mismo»:

el deber moral o la convención social (lo que los otros quieren que uno sea o haga) serían, en el fondo, una forma de inautenticidad y alienación, no teniendo aquí cabida explícita la idea de cambio (aunque sí las nociones de «realización personal» o «desarrollo humano»),lo que, por otro lado, suscita serias objeciones morales, en la medida en que pudiera llevar a aceptar, en uno mismo o en la sociedad en la que vive, estructuras o comportamientos inaceptables como la mentira, la injusticia o la dominación. Las posibilidades de incoherencia aumentan si se incluyen otros núcleos de significado ético, como la bondad de las consecuencias de las acciones (el *consecuencialismo* o «utilitarismo») o la *justicia,* como un área de ética en sí misma esencialmente distinta del «bien» moral general o de la virtud personal.

Se puede también, en fin, entender la ética como un conjunto determinado de principios, valores y normas que gobiernan la conducta individual y social, en la medida en que, aceptados como «el bien» o el «deber moral», orientan u obligan a personas y grupos sociales a conducirse de conformidad con ellos. Esta acepción, más sustantiva o de contenido, es a veces llamada «moral», en contraposición a la connotación, más dinámica y procesal, de «ética», que en filosofía designa también el estudio más genérico del hecho moral. Sea cual sea la consistencia de esa distinción, apenas tiene sentido en este libro, que, al tener vocación eminentemente práctica, no está directamente interesado por la teoría moral (como la naturaleza de los valores o las teorías del bien), sino por su uso *práctico* en la APS en los sentidos que en cada caso se explicitan y donde la distinción entre «ética» y «moral», enfatizada por algunos, carece de relevancia.

Salvo que se diga otra cosa, la palabra ética se usa a lo largo del libro en referencia a lo que es bueno (o malo) para las personas, concretado en los dos primeros sentidos señalados: un conjunto de valores morales (y de consecuencias evaluables como benéficas o maléficas) y una serie de deberes asociados a esos valores, en nuestro caso recogidos como deontología profesional. Concedo que la acción **(**personal o profesional) acorde con esos valores morales puede contribuir a la felicidad de quien así obra y —en el caso del profesional— contribuir al bienestar y felicidad de aquellos con quienes trabaja. Pero, habría que matizar, el bienestar y la felicidad son estados (o logros) psicológicos multideterminados que no sólo dependen de la satisfacción moral derivada de obrar bien o cumplir con el deber, sino de otros muchos factores (generalmente más significativos que esa satisfacción), como las consecuencias reales de las acciones, el ejercicio de las aptitudes y capacidades predilectas del sujeto y en las que ése es competente, o la satisfacción y el placer psicológicos que lo que se hace —o las relaciones con las personas y objetos que acompañan a esas acciones— proporciona al sujeto actuante.

Perfilar la ética práctica (se puede sostener que *toda* la ética es práctica, aunque una parte de ella se ocupe de fundamentar esa práctica) que buscamos exige aclarar el sentido y la dinámica de los valores morales, ya que, como se puede deducir de lo escrito, los valores morales son la sustancia misma de la ética, los «ladrillos» con los que esta se construye. Pero, como los términos «valor» y «ética» se usan profusamente con significados variados y frecuentemente nebulosos, y dado que

propugno una ética *psicosocial*, debo justificar y aclarar antes la dimensión social de una empresa, la ética (y de sus valores constituyentes), que tradicionalmente ha sido entendida de forma casi exclusivamente individual y personal.

5.1. ¿Ética social?

¿Podemos, entonces, hablar con propiedad de *ética social* y de «valores morales sociales»? Deberíamos poder, pues tratamos sobre una ética doblemente social:

1. Como ética de acciones en buena parte sociales, en los distintos sentidos de «lo social» identificados.
2. Por ser una ética cuyo titular no son individuos, sino colectivos profesionales.

Sintetizando, la ética es social por ser una ética *de* lo social *para* profesiones sociales.

Según Bauman, como ya se vio en el capítulo precedente, lo moral es irreducible a cualquier otra dimensión humana, incluida la social, pues la bondad o maldad trasciende los datos biológicos o psicológicos, el consenso grupal o el acuerdo político, que no bastarían, por ejemplo, para justificar moralmente un acto por más apoyo social o conveniencia política que lo sustenten, o en función de ciertas características físicas o psicológicas del actor. Sin embargo, otros autores (Bilbeny, 1992; Black, 1993) sostienen justo lo contrario: los valores morales son un instrumento de la vida personal y la acción social, teniendo el papel de preservar la especie humana y su equilibrio ecológico. La conducta moral tendría así una explicación extramoral: la prohibición del incesto o la muerte protegen la base biológica de la especie, el mandato de no robar protege el intercambio comercial, o la veracidad trata de mantener el valor que la información y la confianza personal tienen en la vida social. Black no sólo incluye a la moral entre los sistemas de control social, sino que desentraña «la estructura social del bien y el mal», que obviamente desemboca en un incontestable relativismo ético de carácter sociologista.

¿Como se pueden compaginar los dos aspectos del dilema sociomoral dibujado (irreductibilidad del hecho moral frente a impregnación social y vital de ese hecho), si es que se puede? Empecemos reconociendo que, en sentido estricto, toda ética es social, pues, además de basarse en la alteridad y las intenciones hacia algún otro, la conciencia moral, que podríamos identificar como un atributo individual, se construye en un proceso dinámico de interacción y transacción social. En la práctica, y evitando el fondo de la cuestión del relativismo ético, podemos —debemos— hablar de ética social (y su derivada psicosocial) con las siguientes condiciones (tabla 2.8).

1. El asunto o *tema* considerado —un programa, el comportamiento de un equipo interventor, una filosofía o una técnica— es social, trascendiendo los límites de lo privado y personal y afectando a colectivos, grupos sociales o comunidades.
2. El *sujeto* de la acción y la evaluación moral es supraindividual: un equipo

interventor, una institución, una asociación benéfica, una comunidad… El titular de la acción es, en otras palabras, un «actor» social, no individual, que se rige por valores y *criterios* morales *compartidos* (por ejemplo, un código deontológico) y asume conjuntamente las *responsabilidades* morales.

3. Para que podamos tildar esas acciones —de temática social y titular colectivo— como «éticas» será preciso que, aunque el proceso de deliberación y decisión sea social (ha de serlo por fuerza), su *contenido* —es decir, el razonamiento y los criterios usados— es *moral*, de forma que el mero consenso mayoritario sea insuficiente por sí solo para decidir la bondad o maldad de una acción; de este modo, la discusión y deliberación (que no excluye la reflexión personal anterior o posterior) son *explícitamente* morales, no simples añadidos a discusiones técnicas, organizativas o estratégicas, y así les consta a quienes participan en la discusión. No se trata sólo de que el planteamiento explícitamente moral de la deliberación garantice operativamente la autonomía funcional de la ética en la APS, sino de que ese enfoque *exige* que los argumentos y criterios aportados sean esencialmente morales (valores, consecuencias humanas, deberes, derechos, etcétera), aunque el acuerdo final se base en el consenso social, la negociación o la persuasión razonada.

5.2. Ética práctica: valores morales e ideales personales y sociales

Retomo ahora la tarea de aclarar el significado y papel de los valores morales en la práctica ética (véase tabla 2.9). Aunque, debido al empeño práctico de este libro, dejo de lado importantes cuestiones teóricas suscitadas por los valores (la sustancia vital de la ética, según se dijo), es precisamente especificar más significado y función ética, así como sus propiedades y dinámica funcional, de forma que podamos gestionarlos con cierta soltura y claridad en la práctica psicosocial.

TABLA 2.9
Ética práctica personal, profesional y social

Ética aplicada	A	• Conducta/vida *personal:* ideal de persona (virtudes) y comportamiento. • Conducta *profesional:* ideal profesional, virtudes y buena práctica profesional. • Comunidad/grupo/*sociedad:* ideal de comunidad, grupo, sociedad e instituciones sociales (la buena comunidad, la familia ideal, las virtudes públicas).	
	Implica	• Elegir/optar. • Juzgar • Tomar decisiones. • Actuar. • Relacionarse.	En base a valores morales (y consecuencias humanas).

Una forma sencilla e intuitiva de entender ese significado es concebir los valores morales como *cualidades* deseables de las personas (honestidad, autonomía, veracidad) o las instituciones sociales (justicia social, solidaridad, reciprocidad relacional), de forma que el conjunto limitado de esas cualidades conformarían el

ideal concreto de persona o de sociedad, el «perfil moral» personal, que desearíamos para nosotros mismos (o nuestros hijos), o social (deseable para la comunidad en que querríamos vivir).

¿Qué *función* tienen los valores en la APS? ¿Cuál es su relación con la actuación del practicante psicosocial? En la medida en que los valores dibujan cualidades personales (valores morales personales) o sociales (valores morales sociales) deseables, el practicante debe *promoverlos* explícitamente, pero sobre todo implícitamente, en sus actitudes, relaciones y actuación profesional. Así, su relación con los clientes o la comunidad ha de ser veraz, equitativa y respetuosa con los otros, y su actuación social ha de contribuir a aumentar la justicia social, la solidaridad o reciprocidad de la comunidad, y la autonomía, honestidad y veracidad de sus miembros. Por el contrario, valores negativos como la desigualdad, la infidelidad o el engaño señalarían formas de actuar rechazables, aquello que no debemos hacer, no sólo por emanar de valores indeseables sino, también, porque al actuar de acuerdo a ellos contribuiríamos a crear un mundo en el que no desearíamos vivir.

Los valores éticos deben, en resumen, guiar la conducta del practicante psicosocial y orientar la APS en su conjunto, al identificar las características de la sociedad en que queremos vivir y de las personas con las que merece la pena convivir. Como se ha visto, son uno de los pilares que sostienen la ética psicosocial; las consecuencias, de las que nos ocupamos más adelante, son el otro pilar. La misión de la ética en la acción personal (y profesional) es, entonces, juzgar, tomar decisiones, relacionarse y actuar de acuerdo a aquello que consideramos humanamente valioso (valores) y a la bondad de las consecuencias previsibles de tales decisiones, acciones y de las relaciones interpersonales y sociales implicadas.

5.3. Sistemas de valores y modulación subjetiva y contextual

Para poder manejar adecuadamente los valores en la ética psicosocial (tabla 2.10) necesitamos una visión totalizadora en la que, lejos de ser algo absoluto, de «valía» inmanente y fija, los valores formen sistemas o constelaciones de valía acordada, que la gente —personas o instituciones sociales— tiende a asociar e interrelacionar. Aunque esa presunción conlleve un cierto relativismo moral —un peaje inevitable en la ética social—, parece la única forma razonable de proceder en una práctica en la que es preciso *jerarquizar* los valores según su valía en un contexto y coyuntura subjetiva dados, y examinar las *relaciones* mutuas entre los diversos valores relevantes según su *significado concreto* en la situación subjetivo-contextual.

TABLA 2.10
Valores morales: concepto y dinámica

- La sustancia de la ética.
- Concepciones del bien/lo bueno (justicia, autonomía, verdad) y el mal/lo malo (injusticia, dominación, mentira).

- Constelaciones/sistemas organizados: valores inter-relacionados, jerarquizables.
- Modulados (en cualidad y cantidad) subjetiva y contextualmente.

Dado que en la práctica el conocimiento, la capacidad y los medios de que los sujetos disponen son limitados, no se pueden impulsar todos los valores a la vez (ni, aunque se pudiera, convendría, ya que tienen distinto mérito moral), por lo que el actor —profesional o no— habrá de elegir entre valores deseables (o indeseables) pero no en el mismo grado, y promover algunos valores especialmente deseables, desechando otros considerados menos valiosos. A menudo, promover unos valores exigirá relegar otros o renunciar a ellos: favorecer la autonomía individual puede socavar la interdependencia y la solidaridad social; garantizar una mayor seguridad puede conllevar el recorte de las libertades personales; priorizar el derecho a la información pública puede llevar a quebrantar la confidencialidad debida a un cliente privado, o viceversa, podría suceder que la particular vulnerabilidad de ese cliente haya de primar sobre la información pública en ciertos asuntos, y así sucesivamente.

Dada la heterogeneidad cultural y pluralidad valorativa de los escenarios sociales actuales, estas reglas prácticas son vitales para la APS, donde jerarquizar los valores y reconocer sus inter-conexiones específicas en cada caso permite tomar decisiones y actuar en función tanto de esa jerarquía como de la bondad o maldad previsible que —según los valores de los actores— tendrán las consecuencias para el conjunto de afectados por la acción. Un paso *previo* a los anteriores será, obviamente, *identificar qué valores* son relevantes para los sujetos y la situación y *en qué medida* lo son.

Un segundo factor a considerar en la práctica de la ética social es el efecto *modulador* que sobre el peso y significado de los valores tienen la experiencia subjetiva y el contexto sociocultural e histórico, aunque ese efecto sea más pronunciado en los valores más «periféricos» y menor, pero no desdeñable, en aquellos que —como la vida, la seguridad, la dignidad, la libertad o la justicia social — consideramos valores «fuertes», primarios o universales. Así, la justicia social no tendrá la misma importancia y fuerza movilizadora para las personas en una situación de gran desigualdad y pobreza que en una sociedad más uniformemente rica y con menores diferencias entre personas o grupos sociales. Tampoco significa lo mismo la libertad para una persona encarcelada o viviendo bajo una dictadura que para otra que lleva su propia vida en una sociedad con las libertades básicas garantizadas (y las necesidades vitales cubiertas).

Nótese que aun cuando en abstracto los dos valores ilustrativos (libertad y justicia) pueden ser considerados universales (en el sentido de ser reconocidos como valiosos por la gran mayoría de sujetos y sociedades), adquieren una valía y un significado concreto diferente según los sujetos y contextos singulares. Reconocer, entonces, la importancia de la modulación subjetiva y contextual de los valores morales *no* niega la existencia de valores acordados como universales (Doyal y Gough, 1994), sino el *absolutismo* práctico de cualquier valor singular y su *constancia* evaluativa; niega, en otras palabras, que un valor determinado tenga siempre, y en cualquier lugar, un mérito moral fijo e invariable, independiente de las circunstancias personales y el

contexto social.

5.4. Alternatividad, bipolaridad y bidireccionalidad de la ética

Recalco para cerrar esta parte descriptiva tres características esenciales de la ética (tabla 2.8): su «alternatividad» respecto de lo realidad, su bipolaridad y los dos niveles (abstracto y concreto) que la tejen.

Alternatividad y autonomía relativa. Como se ha repetido, la ética no se refiere a la realidad (o la conducta) existente, lo que es (o lo que hacemos), sino a las alternativas deseables a esa realidad (y comportamiento), lo que *debe* ser (o debemos hacer). Implica y exige, por tanto, una autonomía práctica respecto de la realidad dada, un juicio moral sobre ella y un potencial de actuar para cambiar la realidad y la conducta dadas a partir del ideal moral, lo que debe ser. Esa autonomía niega la aceptación automática de cualquier realidad personal o social dada (legitimando lo establecido) y dibuja siempre un horizonte de *esperanza* —las posibilidades de mejora humana— pero también de *autoexigencia*: no hay ninguna magia ni automatismo externo, somos nosotros quienes debemos definir los ideales y perseguir su realización aportando los medios humanos y materiales precisos.

Pero el reconocimiento de la autonomía de la ética respecto de la realidad demanda, también, prudencia práctica: la tensión entre ser y deber ser (conducta real e ideal) debe administrarse juiciosamente en uno mismo y en la relación con otros, asegurándose que los cambios son, además de deseables, *posibles*, de modo que tenemos los medios personales, científico-técnicos y morales para hacerlos realidad. Las personas no debemos ser dirigidas hacia valores abstractos o metas quiméricas o «adaptadas» a reglas impersonales absurdas que a menudo sirven a ciertos intereses individuales o sociales. Tampoco somos los humanos guiados en exclusiva por criterios morales, sino por un magma de razones, deseos, emociones, esperanzas y expectativas, cuya interacción con los deberes morales teje una tupida y sutil trama personal y relacional que nos hace personas humanas, no «autómatas» moralmente teledirigidos.

Bipolaridad. La ética tiene una doble e irrenunciable potencialidad: *negativa*, en tanto que establece límites y prohibiciones (lo que no se debe hacer, *aunque* se pueda) en función de lo que consideramos malo, incorrecto o indeseable; pero también *positiva* (Knapp y VandeCreek, 2006), en la medida en que orienta la conducta y el desarrollo personal o social en la dirección de lo que se juzga bueno, correcto o deseable. No sólo no debo engañar al otro o actuar socialmente en función exclusiva de mis necesidades, sino que debo ser honesto y generoso y —como profesional psicosocial y en función de mis capacidades— ayudar al otro a satisfacer sus legítimas necesidades y mejorar la justicia social. Reducir la ética a un catálogo de obligaciones, prohibiciones y sanciones es desfigurarla, amputándole la mitad de su ser, que, como construcción humana de los bienes por los que merece la pena vivir y esforzarse, debería acabar mostrando *lo mejor* de los humanos.

Niveles y análisis ético. Toda la descripción precedente descubre dos dimensiones o niveles del hecho ético cuya interrelación dialéctica conviene apuntar. El nivel general o *abstracto* está habitado por valores (libertad, justicia, verdad...) y principios (autonomía, beneficencia, igualdad) que orientan la acción. Los principios serían reglas generales de actuación, basadas en los valores: así, del valor justicia se deriva el principio de perseguir la igualdad, y del valor autonomía el principio de promoverla en la vida personal y social. El nivel *concreto* es el de la actuación y comportamiento personal o conjunto de los actores sociales, incluyendo las cuestiones éticas singulares y reales que se plantean y el juicio moral que merecen. Se suele asumir que el análisis ético debe proceder de *arriba abajo*, «aplicando» valores y principios éticos generales a situaciones y comportamientos singulares en una situación.

Pero esa es sólo la mitad del trabajo ético real, que debe incluir también la otra mitad: el recorrido de *abajo arriba*, en el que a partir de las cuestiones y dilemas éticos cotidianos, reflexionamos y deliberamos sobre las alternativas y «soluciones» y sobre el comportamiento moralmente correcto, infiriendo desde ahí los criterios y principios de actuación y los valores apropiados. De este modo, el trabajo ético integral es *bidireccional*, pudiendo (debiendo) ser recorrido, tanto desde las cuestiones y conductas concretas hacia los principios y valores generales como desde estos hacia las conductas, resultados y problemas observables. Algo especialmente necesario en un área, la APS, poblada de indeterminación y complejidad valorativa, donde la combinación de ambos recorridos debe ser más regla que excepción.

6. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ACCIÓN MORAL

Aun reconociéndola como empresa humana, hasta aquí hemos proyectado una imagen estructural y algo abstracta de la ética. Debemos ahora completar ese retrato viéndola como un *proceso* o forma de actuación *humana*, que pone en relación a varios actores, está insertada en un contexto socioinstitucional y descansa sobre unos supuestos que condicionan la evaluación moral. La visión estructural-dinámica del acto moral es, en su versión individual, bastante simple: se basa en una relación entre un sujeto que actúa y un otro receptor (objeto) de la acción, a la que también puede responder si se establece una interacción. Si el sujeto es un profesional que usa una técnica propia y también es profesional la relación establecida, entramos en la órbita de la deontología, la ética profesional. Si los dos sujetos son sociales y también lo son los asuntos tratados y las técnicas usadas, nos adentramos en la ética social, quedando la ética psicosocial en los niveles medios o las relaciones entre lo psicológico y lo social, donde, como se señaló, la subjetividad y la agencia humana tienen un papel relevante.

Ampliando el foco, podemos ver que la acción ética individual (tabla 2.11) incluye, de izquierda a derecha, aspectos *subjetivos* y previos, aspectos teleológicos y relacionales, y aspectos objetivos. En los primeros, previos al encuentro del sujeto

con el otro, los significados morales son configurados por la visión del sujeto y su entorno socio-moral; incluyen la libertad, la conciencia moral, las intenciones, y la empatía, entre otros sentimientos. La elección del otro y la relación establecida con él son los núcleos *finalistas y relacionales* intermedios, anclados, en parte, en las intenciones iniciales y conectados, también, con la «región» *objetiva.* En esta, los significados éticos tienen un carácter más factual, asociado a las consecuencias de las acciones para los distintos actores (cuya significación y efecto sobre cada uno dependen también de los particulares valores de cada actor) y a la responsabilidad contraída por esas consecuencias.

TABLA 2.11
Estructura dinámica de la acción moral (profesional)

Área subjetiva	Área finalista y relacional	Área objetiva
Sujeto/profesional →	Cliente-destinatario →	Consecuencias
• Libertad (autonomía profesional). • Intenciones y emociones (empatía, vergüenza, indignación). • Conciencia. • Poder técnico. • Autointerés.	• El «otro» (destinatario acción). • Relación profesional cooperativa. • Benéfica para el destinatario. • De base objetiva y con implicación emocional limitada.	• Corresponsabilidad por efectos y consecuencias múltiples y polivalentes (buenas y malas).

La polaridad subjetivo-objetivo vendría a corresponder a la distinción de Max Weber (1919) entre ética de la convicción (la ética subjetiva ligada a los valores y las convicciones) y ética de la responsabilidad (la ética objetiva ligada a las consecuencias), aceptable si la consideramos una distinción «territorial» de dos aspectos complementarios a sumar en el hecho moral, *no* como una *dicotomía* de aspectos mutuamente excluyentes. No se trata, por tanto, de crear una divisoria gratuita, sino de subrayar la naturaleza mixta y plural de los procesos éticos y la necesidad de tener en cuenta en el análisis práctico los dos aspectos o *lógicas* (intenciones subjetivas, resultados objetivos) que la tejen, a las que en realidad hay que añadir una tercera lógica intermedia, de transición entre ambas, la *relacional*.

Esa distinción tiene, por otra parte, repercusiones metodológicas relevantes: mientras los aspectos previos y subjetivos pueden ser examinados *antes* de la acción (también después en relación a los resultados), los objetivos (consecuencias y responsabilidad) sólo pueden ser tenidos en cuenta —como datos empíricos— después, una vez se ha actuado. La elección del «otro» y la relación pasajera o continuada con él marcan, como he indicado, la transición entre las dos lógicas, al situarse en su confluencia y regirse por una lógica y metodología diferente, más psicológica y relacional, aunque anclada en las intenciones subjetivas iniciales.

6.1. Aspectos subjetivos: libertad, intenciones, conciencia y emoción

En el acto ético individual asumimos que un sujeto con libertad, intenciones, conciencia y sentimientos (como la empatía o la indignación) actúa (o se relaciona) con otro sujeto (objeto de la acción o relación), generándose unas consecuencias de las cuales el primero es responsable. Revisemos los ingredientes y supuestos, recorriendo el esquema desde la izquierda (polo subjetivo) a derecha (polo objetivo).

Libertad. Es la base del acto moral. Un acto es moral y genera responsabilidad en la medida en que el sujeto tiene libertad para elegir, decidir, relacionarse y actuar. La responsabilidad es, pues, el «precio» a pagar por el uso de la libertad, y la vinculación de la responsabilidad con la libertad (y el poder detentado) fundamenta la acción moral. A diferencia de la técnica y la ciencia, que asumen determinación, la moral presupone libertad, de manera que el sujeto no puede dejar de elegir o responder —por acción u omisión— a una incitación interpersonal o situación social, siempre que conserve algunos «grados de libertad». Pero, como en realidad los sujetos no siempre gozan de los grados de libertad que serían deseables o necesarios para ejercer de forma óptima su influencia benefactora, la cuestión de la responsabilidad a asumir en condiciones de libertad restringida se torna particularmente aguda en la acción profesional. Habremos, pues, de volver sobre esa cuestión en el capítulo 3.

De momento, dejo en el aire la pregunta clave: ¿anulan las limitaciones a la libertad del sujeto la responsabilidad por las acciones en que participa? Y me limito a añadir una observación obvia: al juzgar moralmente los actos humanos no sólo debemos tener en cuenta los grados de libertad (o su reverso, las restricciones y límites a la libertad) que los sujetos tienen en la actualidad, sino también en qué medida se aplicaron, o no, activamente a ampliar los márgenes de la libertad de elección y acción que hoy poseen, lo que, por supuesto, incluye la creación de opciones entre las que después se pueda elegir.

Intencionalidad. Las elecciones y acciones humanas no son casuales y erráticas, sino *deliberadas,* tienen intenciones y propósitos más o menos conscientes y están *dirigidas hacia otras personas*. Maticemos: ambos aspectos (deliberación y orientación hacia otros) de la intencionalidad asumida son disputables. Aunque nos gusta pensar, en primer lugar, que nuestro comportamiento (o la porción más significativa de él) es deliberado y consciente, basta repasar retrospectivamente nuestras decisiones y acciones de días pasados para ver que buena parte de ellas han sido fruto de impulsos o automatismos inconscientes, del azar, de las condiciones ambientales o de las presiones, expectativas o decisiones de otros (o se derivan voluntariamente de acciones involuntarias así iniciadas). Por ello, en la práctica habremos de examinar, hasta el límite que sea posible, la intencionalidad real de cada acción.

La motivación personal de la acción ética (en cuya raíz encontramos intenciones y sentimientos hacia otros) no es compartida por todas las corrientes éticas, quedando excluidas de las éticas consecuencialistas o aquellas basadas en el propio interés. Asumo aquí una visión integral de la ética, que, como acto humano, involucra siempre (con las reservas que acabo de expresar) intenciones hacia otros y relaciones

y vínculos interpersonales. Lo cual permite (exige) incorporar al análisis ético tanto las cualidades deseables de la relación humana (como la confianza) y las intenciones (benéficas o maléficas) como las consecuencias reales del uso y abuso de tales intenciones en la ética personal y profesional. Sea como fuere, es la suma de intencionalidad, libertad y poder lo que —junto a una conciencia moral que funcione correctamente— genera responsabilidad en las acciones y relaciones humanas, personales o profesionales. En los capítulos 3 y 5 examinamos las consecuencias potencialmente malignas del abuso de las buenas intenciones (como la ayuda personal o la mejora social) en la ética psicosocial.

Conciencia moral. Es la instancia y el proceso personal que permite distinguir lo bueno de lo malo y hacer juicios morales, censurando (remordimientos) o premiando (satisfacción moral) las acciones del sujeto. En la medida en que la conciencia moral, aunque construida socialmente, es un atributo personal y un «reducto» privado, es preciso cuestionar su uso como criterio moral básico o único en decisiones colectivas —por ejemplo, en un grupo de trabajo—, donde habría de ser suplementada por el diálogo interpersonal y la deliberación conjunta propios de la ética social. A propósito de la conciencia moral se pueden plantear dos cuestiones teóricas de gran consecuencia práctica: la universalidad y univocidad del juicio moral y la capacidad humana de evaluar los grados de bondad o maldad de una acción. Sólo si respondemos afirmativamente a ambas cuestiones (univocidad de los hechos morales y capacidad humana de valorarlos correctamente) es posible evaluar moralmente cualquier asunto o acción A y comparar su bondad o maldad con los atribuibles a otro asunto o acción B. Ese supuesto positivo niega a su vez la posibilidad de zonas de amoralidad, ambigüedad o neutralidad moral (incluso, llevado al extremo, la tesis arendtiana de la «banalidad del mal»).

No es difícil ver las implicaciones prácticas de esas cuestiones teóricas en el complejo, cambiante y ambiguo mundo psicológico y social actual: ¿es ahí posible construir criterios morales claros y unívocos al enfrentarnos a asuntos nuevos, complejos o valorativamente multivalentes, que difícilmente admiten un juicio moral único, nítido e integrado? Y es que en tal situación no se trata ya —como en la casuística ética tradicional— de valorar conductas individuales, como robar o mentir, sino acciones colectivas o de personas interrelacionadas, que tienen consecuencias múltiples y polivalentes (unas buenas, otras malas) según los distintos valores e intereses de sus destinatarios. Estoy, como se ve, poniendo de relieve la dificultad y complejidad de una evaluación moral integrada, y la ambivalencia, dispersión y ambigüedad ética que aqueja en nuestros días, tanto al hombre común como al profesional psicosocial, que refleja tales dificultades en forma de conflicto de intereses, dualidad de roles, anomia práctica o simple perplejidad a la hora de juzgar, decidir o actuar. Esa era, por otro lado y verbalizada en términos filosóficos, la raíz de la queja posmoderna.

Emociones. El excesivo racionalismo y objetivismo consecuencialista que lastra la modernidad occidental ha impuesto una ceguera involuntaria ante lo obvio: las

dimensiones emotivas y volitivas —las emociones, deseos, la voluntad— que empapan todas las acciones y relaciones humanas y su consideración ética, tangencialmente notadas en la intencionalidad y cuidadosamente traducidas a razones (racionalización) por el psicoanálisis. Aunque sólo sea por el hecho, evidente para cualquiera que prescinda de las diversas formas de ceguera con que la cultura nos va programando, de que la emoción y el sentimiento son el fundamento de la vinculación humana, a la vez que el sustento y residuo «palpable» de esa vinculación, y porque, como se ha reconocido, la relación humana, producto y productor de la emoción, es el fundamento de la ética.

En la medida en que el reconocimiento del otro como ser humano (compañero de humanidad) me mueve afectivamente a desear su bien (y ayudar a aliviar su sufrimiento y malestar), la simpatía con el otro, la *empatía* hacia él, es la base emocional del impulso ético. Y la incapacidad generalizada de tener empatía psicológica con los otros o la exclusión moral (Opotow, 1990) ideológica o socialmente inducida (el odio al judío o la exclusión del negro o el inmigrante como titulares de la consideración y derechos humanos) serían patologías radicales de la moralidad. Si, como parece, la empatía depende de la experiencia (es más fácil empatizar con el que sufre o es pobre si uno ha sufrido o ha sido pobre o si está en contacto con los sufridores o los pobres) y de la preparación, debe ser «educada» y mejorada. Otros sentimientos y emociones juegan también un papel motriz relevante en los actos morales. Así, la *indignación* moral (Fuller y Myers, 1941) ante la injusticia, la opresión o el maltrato, o la *vergüenza* provocada por situaciones degradantes o humanamente intolerables que estarían en la raíz del impulso ético hacia la justicia o la dignidad humana.

Ya se ve, por estos apuntes, que no se pueden amputar las emociones del hecho moral llenando artificialmente el espacio que ocupan en él de razones, reflexiones, deliberaciones y contratos sociales. Aunque tan grosera racionalización reafirme la imagen de racionalidad laboriosamente construida por el hombre occidental a lo largo de los siglos, desfigura la ética (y la acción humana), que se compone, además, de emoción, deseo, voluntad, intención y vinculación interpersonal.

6.2. Aspectos relacionales y teleológicos

La relación con el otro puede o no preexistir a la acción humana común, pero es parte integral de la acción profesional, que asume una interacción benéfica con otro en el contexto relacional concreto. Me ocupo, por tanto, de ella al considerar la ética profesional en el capítulo 3. Baste apuntar aquí la íntima asociación que intencionalidad, elección del otro y relación mantienen en general: dependiendo de nuestras intenciones elegiremos una u otra persona como destinatario de la acción, y viceversa, las intenciones hacia ese destinatario dependerán de quién sea este o de cuáles son sus cualidades y sentimientos o posición respecto del sujeto actuante. La existencia de una relación previa con el otro, además de introducir vínculos y elementos psicológicos moralmente relevantes, cualificará sustantivamente la acción

ética: una relación armoniosa y positiva no sólo funcionará como catalizador o fermento de la acción cooperativa —que hace posible—, sino que potenciará sus efectos. Y una relación negativa o afectivamente vacía dificultará o imposibilitará la colaboración, devaluando, en todo caso, los efectos potenciales de otras formas, no cooperativas, de acción.

El esquema sujeto-otro-acción-consecuencias (tabla 2.11) es, sin embargo, demasiado simple y unidireccional: encaja sólo en situaciones en que no existe una relación previa sujeto-otro ni se espera o contempla la posibilidad de una respuesta o reacción del otro; si introducimos esas posibilidades *dinámicas* (la *interacción,* la *relación* interpersonal y el *contexto relacional* de la acción) tendremos una imagen más realista y matizada de la acción moral que nos acerca a la ética humana o profesional que buscamos, una ética plenamente psicosocial.

El «otro». He asumido que la alteridad fundamenta la moral —el acto moral tiene siempre un destinatario, siquiera potencial, «el otro»—, revelando las interconexiones entre las intenciones del sujeto, el otro y la eventual relación entre ambos. Elevándonos a un plano más macrosocial que ignore los aspectos más estrechamente interpersonales, la cuestión moral aquí suscitada es la elección del «otro» (quién es, quién debe ser) y los criterios morales que han de guiar esa elección: una cuestión central de *justicia social* que abordaré más extensamente en el próximo capítulo. Baste apuntar aquí, en clave de higiene moral, el peligro de *exclusión moral* de ciertas categorías o grupos sociales si elegimos el destinatario en función exclusivamente de nuestras simpatías psicológicas o capacidades técnicas (de lo que nos gusta o sabemos hacer), o de culpabilizar a las víctimas de sus propios males y problemas sirviéndose de manidos estereotipos ideológicos (los parados son culpables de no tener trabajo porque «no quieren trabajar», los pobres por su indolencia, los chicos que fracasan en la escuela por su desinterés y pereza, etc.).

Ya se ve que la elección del otro es un asunto algo más complejo de lo que pudiera parecer a primera vista, involucrando, en el acto humano o profesional, criterios morales (la justicia social), pero también psicológicos y relacionales (intenciones y existencia o no de relaciones previas), sociales (prejuicios y fundamentalismo ideológicos) y técnicos en la APS (estado de necesidad o riesgo, recursos psicosociales, potencial de cambio, etc.).

6.3. Aspectos objetivos: consecuencias y responsabilidad

Las relaciones y actos humanos (acciones u omisiones) tienen siempre efectos (deliberadamente buscados y a menudo previsibles) y consecuencias (deliberadas o no, previsibles o imprevisibles) en los «otros» (destinatarios de acciones e interacciones), pero también en otras personas y grupos circundantes y ajenas a las intenciones del sujeto. En la medida en que la multiplicidad de consecuencias afectan de formas variadas a sujetos con valores e intereses diferentes, resultan, en el terreno psicosocial, polivalentes: una consecuencia X puede ser buena para A, pero mala para B e indiferente para C; sin embargo, otra consecuencia Y puede ser mala para A pero

buena para B y C, y así sucesivamente. Las consecuencias son, en fin, el eje de la *responsabilidad* de la acción (que también depende de las intenciones, la libertad y el poder a disposición del sujeto actuante), el tema central de la ética objetiva, que es retomado y amplificado en el próximo capítulo: la ética psicosocial.

Discutiremos allí tres cuestiones críticas sobre la responsabilidad ética en la acción profesional:

1. ¿Quién define una consecuencia como buena o mala, y en base a qué criterios?
2. En una relación cooperativa e igualitaria, como la que se postula para fundar esa práctica, ¿es el practicante psicosocial totalmente responsable de las consecuencias, o debe compartir la responsabilidad con el destinatario de la acción?
3. ¿Debe asumir el practicante, en todo caso, responsabilidad por todas las consecuencias generadas (buenas o malas, buscadas o no buscadas) incluido el daño causado al destinatario o a terceras partes en principio ajenas a las intenciones y al acuerdo inicial en que se basa la acción?

RESUMEN

Técnica, acción psicosocial y ética

He presentado en este capítulo los conceptos necesarios para definir la ética psicosocial.

La *técnica* busca el camino (medios y procedimientos) más eficaz y menos costoso para alcanzar objetivos deseados o resultados esperados en cualquier esfera de acción humana. Lo psicosocial está presente en la técnica de tres maneras complementarias: como acompañante (métodos y procedimientos psicológicos, estructuras socio-técnicas) de la técnica dura mecánica, biomédica o arquitectónica; en los profundos efectos psicológicos y sociales (cambio de la autopercepción, deshumanización, disciplina, nuevas formas de relación y organización, etc.) de la producción industrial en serie, que se constituye en matriz y modelo de la forma de vida moderna; y como conjunto de técnicas que combinan las formas de actuar psicológica y social para ayudar a resolver o prevenir los problemas psicosociales creados por el industrialismo, y colmar las aspiraciones de desarrollo humano y social difundidas por el desarrollismo económico y las ansias hedonistas en la segunda mitad del siglo XX.

Técnica y ética (valores morales), los dos pilares sobre los que se construye la acción profesional, son funcionalmente *autónomas*, teniendo misiones, intereses y ritmos temporales diferentes: a la técnica le interesan los resultados y la eficiencia de los medios para alcanzarlos, mientras que a la ética le preocupa el desarrollo humano obtenible en el proceso establecido y la beneficencia de los resultados a la vista de valores morales predeterminados. Ni la ética puede resolver cuestiones técnicas ni la

técnica puede contestar preguntas morales. Sin embargo, ambas dimensiones, técnica y ética, deben ser finalmente integradas en la acción, sin sacrificar la una a la otra. El sacrificio de la ética a la técnica (tecnocracia) encierra el riesgo de deshumanización y alienación humana, al subordinar las personas a los medios técnicos y al logro de fines a cualquier precio; el sacrificio de la técnica a la ética (fundamentalismo moral) puede llevar a una actuación retórica e ineficaz, personal y profesionalmente frustrante, y permitir la imposición a los demás de los propios valores o ideas.

Existen *interacciones* múltiples entre técnica y valores en los distintos aspectos de la acción profesional: al fijar los fines y evaluar los resultados, al elegir la estrategia para alcanzar los fines y a lo largo del proceso de actuación y en la relación con sus destinatarios. Esos procesos combinan de modo variable las técnicas adecuadas para obtener resultados esperables con el menor esfuerzo, y los valores de los distintos actores implicados que iluminan la bondad de los medios técnicos y los resultados a obtener, pero sobre todo de los fines a perseguir.

La *acción psicosocial,* suma de técnica y valores, se puede entender de distintas formas según las modalidades de «acción» contempladas y el contenido específico que adquiera lo «psicosocial». Las diferentes acepciones de lo *psicosocial* se pueden condensar en torno a tres núcleos de significado.

— La *relación* bidireccional entre los aspectos o variables *sociales* y los aspectos o variables *psicológicos,* sea considerada (o recorrida) de arriba abajo (los efectos psicológicos de los fenómenos y problemas sociales) o de abajo arriba (la afectación social de la acción psicológica conjunta).
— Los aspectos *intersectivos* o *intermedios* entre lo psicológico y lo social: la interacción de personas y de grupos, junto a las actitudes, vínculos, significados y valores resultantes de esa interacción facilitada en espacios microsociales como la familia, el grupo pequeño y la comunidad.
— La *subjetividad*, *emotividad* y *agencia humana*, involucradas tanto en la afectación personal de los problemas y alteraciones sociales como en las iniciativas de cambio, mejora y construcción de lo colectivo (la acción social protagonizada por personas y los aspectos no objetivables de esa acción y de sus efectos).

Existen distintas *modalidades de actuación,* a menudo simplificadas a tres: la *acción* autónoma —sin mediación profesional— de personas o colectivos desde abajo; la *intervención* desde arriba, dirigida o mediada por profesionales; y, entremedias, la *colaboración* igualitaria de ambas partes. Cada modalidad tiene sus propias ventajas, inconvenientes y condiciones de aplicación, siendo la mayoría de actuaciones híbridos o intermedios de esos «tipos puros». Podemos también distinguir cuatro modos de actuación y relación con el cambio a producir: cambio planificado (equiparable a la intervención organizada desde arriba), centrado en los resultados; acción social, idealmente autogestionada y más centrada en el proceso; experimentación social, que privilegia la innovación social controlada; y organización y activación social, asociadas al empoderamiento y la concienciación. Tampoco son

estas variantes excluyentes, conteniendo solapamientos prácticos y conceptuales y admitiendo mixturas e hibridaciones potencialmente fructíferas.

La *APS* puede ser entonces entendida en cualquiera de los tres significados básicos mentados: conexión bidireccional de factores psicológicos y sociales; acción centrada en la interacción social y los aspectos intersectivos o intermedios en espacios micro y mesosociales; y acción social, donde la agencia, la subjetividad y la emoción tienen un papel significativo. Dado que el enfoque comunitario es el adoptado aquí, la expresión genérica «acción psicosocial», parece preferible a la de «intervención psicosocial», que, con ciertas modificaciones, podría ser también usada. Y puesto que el libro trata sobre la ética de la actuación psicosocial, cualquiera que sea su forma, no es necesario concretar más el significado de la expresión *acción psicosocial*, usada en general como etiqueta de conveniencia que representa actuaciones realizadas en los niveles micro o mesosocial y que combina de formas diversas lo psicológico y lo social, la agencia personal, la relación interpersonal y la influencia social personalizada.

El *enfoque comunitario* es una modalidad de APS que asume que el sujeto tiene recursos y capacidades, deviniendo agente del cambio psicosocial a la vez que destinatario de él; sus referentes operativos son la comunidad, entendida como lugar, como actor social, y como cercanía territorial, psicológica y social, y el empoderamiento personal como medio para alcanzar el fin de desarrollo humano integral. Además de definir una determinada forma de APS, el enfoque comunitario es particularmente apropiado en este espacio porque, en contraste con el silencio moral de la APS, asume una rotunda (¿y excesivamente idealista?) postura ética centrada en la potenciación del otro, la comunidad y la justicia social basada en el poder compartido.

La *ética* trata del bien y el mal en las acciones y relaciones humanas: de los valores morales que concretan las concepciones de lo bueno y lo malo y de las consecuencias benéficas o maléficas reales de esas acciones y relaciones. En la práctica los *valores* pueden ser vistos como cualidades deseables de las personas o la sociedad que los humanos pensamos merecen ser perseguidas como metas vitales, orientando así la conducta personal o colectiva. Para operar con los valores necesitamos una visión dinámica y global en la que se reconozcan las relaciones entre el conjunto de valores relevantes y se puedan jerarquizar para elegir y tomar decisiones en caso de duda o conflicto. Conviene también reconocer que, como nociones abstractas o genéricas, el contenido y mérito moral de los valores es concretado y modulado en cada caso por los sujetos y el contexto sociocultural específico.

Al referirse a lo que debe ser, la ética dibuja siempre un horizonte alternativo y una tensión con lo que es, implicando —exigiendo— la posibilidad de cambio personal o colectivo; es una empresa bidireccional, negativa —que censura y establece prohibiciones y límites— pero también positiva, que orienta y aporta ideales, modelos y criterios de actuación. El comportamiento y análisis ético bascula entre dos niveles, uno abstracto (ideales, valores y principios) y otro concreto

(acciones y cuestiones singulares), que pueden, y deben, recorrerse y conectarse bidireccionalmente.

La acción moral se compone de, y asume, aspectos *subjetivos* y previos, aspectos *relacionales* y finalistas, y aspectos *objetivos*, posteriores y objetivables. Los primeros incluyen la libertad del sujeto, sus intenciones, la conciencia moral y ciertas emociones motrices, como la empatía y la indignación moral; en la actuación profesional habría que añadir el poder técnico. La *relación* entre el sujeto y el otro puede o no existir en la acción humana común, pero es requerida en la acción profesional. La elección del otro (el destinatario de la acción) es una cuestión moral relevante y compleja que involucra criterios éticos y técnicos. Los aspectos *objetivos* incluyen los efectos y consecuencias (múltiples y valorativamente multivalentes) de la acción para los distintos actores y la responsabilidad del sujeto actuante ligada a la conciencia moral, los grados de libertad y las intenciones (y en su caso el poder) del sujeto actuante.

PALABRAS CLAVE

- Técnica psicosocial.
- Relaciones e interacciones técnica-ética.
- Tecnocracia.
- Fundamentalismo moral.
- Acción psicosocial.
- Contenido de lo psicosocial.
- Modalidades de actuación psicosocial.
- Enfoque comunitario.
- Método de actuación comunitario.
- Ética práctica.
- Ética social.
- Valores morales.
- Sistemas de valores.
- Modulación subjetiva y contextual.
- Ingredientes subjetivos de la acción ética.
- Ingredientes relacionales de la acción ética.
- Ingredientes objetivos de la acción ética.

3

Ética psicosocial: actores, valores, opciones y consecuencias

Al ser la APS un paraguas conceptual que cobija un conjunto heterogéneo de formas de actuar, no deja de ser temerario hacer juicios sobre su postura y valores morales que sean aplicables a la totalidad del espectro técnico, ideológico y temático del campo. Con esa reserva en mente, mi impresión es que el campo psicosocial en su conjunto ha descuidado —si no ignorado— durante mucho tiempo sus dimensiones valorativas y sus implicaciones éticas, que con frecuencia se han dado por descontadas, siendo si acaso, merecedoras de una atención lateral o secundaria.

1. EL DESCUIDO DE LA ÉTICA EN EL CAMPO PSICOSOCIAL

La afirmación del descuido de la ética en el campo psicosocial debe, sin embargo, ser matizada, mencionando en primer lugar un número creciente de excepciones al desinterés dominante, aun cuando los discursos o publicaciones que componen esas excepciones no formen un conjunto coherente y sistemático, sino más bien una colección de aportes fragmentarios escorados a menudo en tres direcciones: hacia la gran retórica política e ideológica (de limitada utilidad práctica), hacia la casuística concreta en lo temático y hacia la deontología biomédica en lo práctico.

Se puede así encontrar un nutrido grupo de publicaciones sobre ética psicosocial en inglés y en español. En inglés, según el área temática: investigación y evaluación de programas (Sieber, 1982; Warwick, 1978; Cowen y Gesten, 1980; Conner, 1990); prevención (Trickett y Levin, 1990; Pope, 1990); grupos (Back, 1978; Glidewell, 1978); consulta (Gallesich, 1982; Lippitt, 1983; Snow y Gersick, 1986); abogacía social (Brumlik, 1991; Glidewell, 1984; Knitzer, 1980); salud mental comunitaria (Golann, 1969; Perlman, 1977; Backlar y Cutler, 2002); intervención comunitaria (Laue y Cormick, 1978; Levine y Perkins, 1987; Bond, 1989; O'Neill, 1989; Heller; 1989; Riger, 1989; Serrano García, 1994; Prilleltensky, 1997, 2001;Nelson y Prilleltensky, 2005; Snow, Grady y Goyette, 2000; Kofkin, 2003; Sánchez Vidal, 2004b, 2005 y 2016; Rabinowitz, 2012), e intervención y trabajo social (Kelman, 1965; Bermant y Warwick, 1978; Kelman y Warwick, 1978; Timms, 1983; Tropman y Cox, 1987; Reamer, 1990; Congress, 1999; Banks y Nohr, 2012).

Por su parte, el grueso de las publicaciones en castellano (y catalán) se agrupan en torno a los epígrafes de psicología comunitaria (Cronick y García, 1998; Montero,

2004; Saforcada y Sarriera, 2008; Sánchez Vidal, 2007 y 2014; Castillo y Winkler, 2010; Winkler, Alvear, Olivares y Pasmanik, 2012a y 2012b), intervención comunitaria (Cantera, 2004; Sánchez Vidal, 2004a), intervención psicosocial (Blanco, 1987; Rey, 1994; Conill, 1996; Sánchez Vidal, 1990, 1996, 1998, 1999, 2012) y trabajo social (Kisnerman, 1970 y 2001; Colomer, 1988; Rubí, 1988; López, 1992; Alvárez y Maureta, 1997; Banks, 1997; Bermejo, 1997 y 2002; Martínez Antoñanzas y Landa, 1997; Uriz, 2000, 2004; Uriz y otros, 2007; Cortina y otros, 2010; Idareta y Ballestero, 2013).

El gran número de citas ofrecido (que podría incrementarse según el grado de parentesco con la ética y con la APS de los materiales a incluir) parece contradecir la tesis del descuido o desinterés de la ética en la APS, al menos en las áreas comunitarias y de trabajo social. Pero la contradicción es sólo aparente, porque el desinterés por los temas éticos no es una cuestión meramente cuantativa, sino sobre todo de *cualidad* y función de los temas éticos en las áreas psicosociales, lo cual es revelado por dos datos. Primero, la limitada importancia dada a la ética y los valores en relación al peso que tales dimensiones tienen en la práctica psicosocial, como refleja, por ejemplo, el reducido espacio dedicado a los temas éticos en los manuales, discusiones y conferencias del área.

Un segundo dato revelador del menosprecio de lo ético es la posición periférica de las dimensiones valorativas y éticas, que muy raramente son tratadas en el discurso o el escrito como temas de interés *en sí*, sino como aspectos adjetivos o *secundarios de otros* temas sustantivos o metodológicos. Esto podría ser explicado, en tercer lugar, por la frecuencia con que los valores o la ética psicosocial se dan por sentados (como si en el campo existiera un único juego de valores o de posturas éticas) y —por esa y otras razones— permanecen *implícitos*: lo importante, aquello de lo que merece la pena hablar y discutir, es otra cosa.

El examen de las referencias ofrecidas (y sus fechas) revela el predominio (sobre todo en español) de publicaciones provenientes de la intervención y el Trabajo social, por un lado, y de la Psicología comunitaria, por otro, y el interés creciente (sobre todo a partir de los años ochenta del siglo pasado) en los diversos aspectos éticos psicosociales. El énfasis en la orientación comunitaria se explica —más allá de mi propio interés e implicación en el tema— por la rotunda intención y postura ética del trabajo comunitario, y por la más reciente conciencia de la necesidad de hacer explícita esa postura (históricamente implícita y sobreentendida) confrontando las meritorias intenciones con las consecuencias reales de las acciones realizadas. Esa es la razón por la que, como señalé, adopto aquí la posición y los valores morales comunitarios para el conjunto de una APS mucho más aséptica y heterogénea en el terreno moral e ideológico. Dejando en todo caso claro que, en el estado actual de cosas, no cabe asumir una convergencia o uniformidad moral en las distintas áreas de APS, donde, como en cualquier forma de acción humana, pueden coexistir visiones morales diversas.

1.1. Actitudes y tendencias: «buenismo» retórico e insuficiencia de la deontología

individual

¿Cuál ha sido la actitud predominante de la APS en el terreno moral? Manteniendo la citada reserva a la generalización incondicional y la asimilación de la ética psicosocial a la del campo comunitario, se detectan tres notas dominantes —aunque discordantes— en el discurso ético del campo: el *idealismo «buenista»* doblado de maniqueísmo, la omnipotencia retórica de una parte de los pronunciamientos, y el apego a la deontología clínica de otra parte más cercana a la práctica. Como señala Davidson (1989), la práctica psicosocial ha asumido una insostenible posición de pureza angélica y maniquea superioridad sobre otras áreas de trabajo («nosotros somos los buenos y tenemos los valores correctos, los otros fingen neutralidad cuando en realidad están apuntalando el estado de cosas dado y sosteniendo los valores prevalentes»).

La práctica psicosocial no ha sido, sin embargo y en general, suficientemente explícita ni sobre su propia postura moral ni sobre los problemas encarados ni los valores y métodos para abordarlos. Lo que es peor, atrincherados tras la *grandilocuencia retórica,* la utopía y los grandes valores sociopolíticos (justicia social, solidaridad, empoderamiento, cambio social, etc.), ciertos sectores de la práctica psicosocial han evitado explicar los medios (poder social, valores, métodos y técnicas) con los que cuentan para hacer realidad esos valores o mostrar los progresos (o retrocesos) realizados en su práctica colectiva. El problema de esa postura es que alienta una práctica literalmente *irresponsable,* en la medida en que ni se justifica previamente la posesión de los medios para alcanzar los ideales declarados ni la actuación se traduce *a posteriori* en unos resultados empíricos acordes con la postura inicial.

No es de extrañar, entonces, que el discurso del campo psicosocial haya oscilado entre la vaga y grandilocuente proclama sociopolítica en las conferencias y foros públicos y el recurso a los códigos deontológicos clínicos, insuficientes —cuando no inadecuados— para encarar las complejas cuestiones sociales planteadas en una arena psicosocial poblada de diversidad, ambigüedad e intereses políticos divergentes. El campo de la APS parece serpentear incómoda y dificultosamente entre los grandes principios, la gran ética *de* la APS —de cuestionable viabilidad práctica— y la ética más humilde de la práctica cotidiana (la ética *en* la APS), que *tiene que ser viable* y definir un papel asumible por el practicante de carne y hueso. Tampoco debe extrañar que, enfrentado a la grandilocuencia y vaguedad del discurso académico, y sin los medios para promover sus envidiables valores, el practicante se vea abocado a la frustración y el desánimo o acabe adoptando pautas morales deontológicas a menudo inadecuadas para la tarea encarada, pero concretas y existentes.

1.2. Plan del capítulo

¿Qué tipo de ética estamos buscando? Siguiendo el esquema delineado en el capítulo anterior y adoptando el enfoque ético comunitario, en este capítulo propongo una *ética* distintivamente *psicosocial,* centrada en la promoción del otro como sujeto

vinculado e interdependiente; una ética diferenciada de, pero relacionada con, la *deontología* de base biomédica, por un lado, y con la teoría filosófica y política, por otro. Una ética práctica asumible por la APS que, aunque tenga su punto de partida en la deontología clínica, tomará en consideración tanto las condiciones (complejidad, ambigüedad y dinamismo) diferenciales de lo psicosocial como los *valores socio-morales* (justicia social, solidaridad, poder y autonomía compartidos) y las filosofías que inspiran las relaciones sociales y la vida en común. Esa ética debe evitar en lo posible el esencialismo y abstracción típicos de la teoría filosófica, incluyendo la mundana concreción y diversidad de la vida psicológica y las relaciones sociales. Y debe ser, en fin, *realizable*, de modo que, aunque gire en torno a valores morales e ideales sociales, pueda ser incorporada al papel del practicante psicosocial en su actuación cotidiana.

Me valgo para ello de la literatura citada, especialmente de varios capítulos del esclarecedor libro editado por Bermant, Kelman y Warwick (1978) y de los artículos citados de O'Neill, Heller, Davidson y otros autores en el número especial de la revista *American Journal of Community Psychology* (1989). Me apoyo también en los artículos de Lippitt (1983), Snow y Gersick (1986) y en mis propios escritos anteriores, especialmente los de 1999 y 2007 (capítulo 9) y 2016. Antes de perfilar la ética psicosocial buscada es preciso, sin embargo, desgranar las razones y consecuencias del descuido de la ética en la APS y precisar la posición ética básica del campo y su eventual viabilidad psicológica y social.

2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DESATENCIÓN ÉTICA EN EL TERRENO PSICOSOCIAL

Al menos cuatro razones (tabla 3.1), de naturaleza distinta, pero con efectos convergentes, parecen explicar la actitud de descuido o ignorancia ética de la APS: el activismo, la debilidad de la base científica y técnica, el positivismo racionalista y las buenas intenciones (Davidson, 1989; Kofkin, 2003; Sánchez Vidal, 2004b).

TABLA 3.1
Causas del descuido de la ética en la APS

1. Activismo.
2. Debilidad de las bases científica y técnica.
3. Sesgo racionalista y positivista: ciencia «libre de valores», práctica neutral.
4. Resistencia ambivalente de la psicología y las ciencias sociales a involucrarse en la acción.
5. Maniqueísmo «buenista»: nosotros somos «los buenos» y puros; el resto son egoístas o interesados.

1. El *activismo* (tendencia a actuar e intervenir) dominante en el campo lleva a menudo a los practicantes psicosociales a embarcarse en la acción ignorando los fundamentos morales (y teóricos) que toda acción habría de tener. El descuido de la ética puede ser, así visto, como un efecto secundario del ansia

activista y transformadora de la APS, donde la clarificación de valores y la construcción de criterios éticos pueden ser consideradas tareas marginales, o incluso como obstáculos para la acción.

2. La *debilidad* de la *base científica y técnica* en los temas y la metodología psicosocial —en relación a otras áreas con mayor tradición científica y técnica —, que dificulta la previsión y el control de los efectos de la APS, minando una de las bases de la acción profesional responsable: la competencia técnica (y científica) del practicante psicosocial.
3. La perspectiva abiertamente *racionalista y positivista* de la investigación científica y del análisis y la práctica dominante en muchos sectores de la APS. Para alcanzar la respetabilidad científica de la «ciencia dura» (la física o la biología), la producción de conocimiento psicosocial debe estar libre de valores y la práctica psicosocial debe ser neutral (como la ingeniería), evitando la «contaminación» de los valores morales (o de cualquier otro factor valorativo, volitivo o emotivo «irracional»). Al ser vistos como un obstáculo para obtener conocimiento positivo y actuar neutral y distanciadamente, los valores morales (o los sentimientos o la voluntad) deben ser excluidos de la investigación y la acción psicosocial.
4. El «buenismo» y el *maniqueísmo* asociado, que desembocan en un doble rasero de las áreas más sociales (concernidas con la justicia social) del campo. Puesto que la APS —a diferencia de otros campos que sirven a las clases medias y a su alienante adaptación a un mundo irracional e injusto— trabaja con los más debiles o necesitados, promoviendo el cambio y la justicia social, no necesita justificar ni su posición ética ni el verdadero resultado de sus acciones: basta con las buenas intenciones y los valores altruistas.

A la luz de las causas (más bien coartadas) precedentes, la negligencia ética de la APS parece estar más ligada al descuido y a una ingenua mezcla de ansia de reconocimiento científico y legitimación profesional que a un plan premeditado de excluir las consideraciones morales del quehacer del campo. Ninguna de estas razones resiste, sin embargo y como se verá a lo largo del capítulo, un análisis riguroso. Lo cierto es que el descuido de la ética en la APS y la adhesión a postulados y actitudes cientificistas y tecnocráticas ha pasado una considerable factura psicológica y social a los practicantes.

2.1. El precio de la anomia moral

Y es que cada asunción y cada postura previa tienen su precio al actuar en el mundo real: no sólo generan beneficios y facilidades, buscados conscientemente, sino también dificultades y perjuicios, a menudo ocultos e imprevistos. Ni la psicología ni las ciencias sociales, en el plano del conocimiento, ni la APS, en el plano de la actuación, escapan a esa regla. En las *ciencias* humanas y sociales predominan los enfoques objetivistas, que mandan evitar o suprimir cualquier atisbo de valor para

poder alcanzar el estatus de ciencias «duras», positivas. Se nota así que cuando los temas éticos asoman a los foros científicos suelen ser despachados con evasivas, formulismos retóricos y recordando el credo positivista de la ciencia libre de valores. Es bastante común observar en el científico psicosocial una *resistencia* ambivalente a involucrarse en la acción: percibe la necesidad e importancia de tal implicación para generar conocimiento y cambio deseable, pero teme los riesgos e imprevistos que la acompañan, tan alejados de la permisividad intelectual e inconsecuencia práctica propias del trabajo académico. A menudo acaba racionalizando el distanciamiento y la desimplicación consiguientes, subrayando interesadamente las dificultades de la APS y sus imperfecciones metodológicas a la luz de los supuestos de la ciencia «pura».

Esa postura de desconfianza y temor se puede extender también a la *práctica* profesional, donde las cuestiones valorativas son cualquier cosa menos evitables o triviales. Al practicante psicosocial se le ve incómodo tratando de enfrentar las cuestiones éticas y valorativas para las que la lógica científica y técnica en que ha sido educado no tiene respuesta, debiendo recurrir a «divagaciones filosóficas» que no admiten el contraste empírico. Pero las cuestiones éticas y valorativas no son aquí acompañantes más o menos secundarios o prescindibles, sino ingredientes esenciales e inevitables de la tarea a realizar y del papel a asumir. La inhibición y el distanciamiento científicos no son actitudes genéricamente sostenibles o apropiadas, y, aunque lo fueran, implicarían importantes riesgos para el practicante y para la comunidad o grupos con quienes este trabaja, como ya se vio al examinar en el capítulo 2 los abusos tecnocráticos, propios de una situación de anomia.

TABLA 3.2
Consecuencias de la desatención ética en la APS

1. Anomia normativa y desamparo moral.
2. Sobrerresponsabilidad y estrés personal.
3. Repliegue al uso de pautas deontológicas insuficientes o inadecuadas en la APS.

En efecto, la *anomia moral* producida por la actitud de inhibición y recelo de los valores y la subjetividad, tan característica de los enfoques científicos objetivistas, y su traslación directa y simplista a la APS, dejan al practicante psicosocial en una situación delicada. Por un lado, y como miembro de una profesión, es responsable de lo que hace y de lo que, debiendo hacer, no hace. Pero, por otro lado, las teorías y principios científicos positivistas no tienen nada que decir sobre aspectos de la realidad que sus presunciones filosóficas y metodológicas han expulsado de entrada del campo científico. Y la profesión apenas aporta, en la modalidad usual de formación, los criterios éticos y las orientaciones conductuales adecuadas a los complejos retos psicosociales.

No debe, por tanto, extrañar que, a falta de tales orientaciones y criterios, el practicante recurra bien a las pautas éticas deontológicas que aportan la seguridad de

lo conocido y reconocido, bien a la retórica de los grandes valores y principios —de dudosa consecuencia práctica— para orientar la acción y apuntalar su frágil autoestima profesional. A menudo acaba absorbiendo personalmente los efectos de la anomia ante las incertidumbres y los conflictos de la práctica diaria, pagando un alto precio de insatisfacción personal, sentimiento de fracaso profesional y debilitamiento del compromiso social. La elaboración de una ética psicosocial es, por tanto, una tarea apremiante.

3. JUSTIFICACIÓN: ÉTICA, DESARROLLO HUMANO Y RECREACIÓN DEL MUNDO

La ética no es únicamente apremiante por motivos negativos como orientar la solución de dilemas prácticos y evitar el estrés y la desilusión de los practicantes. Es esencial para el logro del *desarrollo humano* el objetivo general de una APS ambiciosa que, desde una visión comunitaria, trascienda la persecución de metas negativas —la liberación de la necesidad, la opresión o el riesgo—, buscando el desarrollo de las capacidades potenciales de personas y comunidades (Jahoda, 1958; Caplan, 1964; Maslow, 1962; Rogers, 1961; Lebret, 1966; Sen, 1990; Doyal y Gough, 1994; Sánchez Vidal, 2007). ¿Qué papel tiene la ética en el logro de ese objetivo de desarrollo humano?

Veamos. Si la persona se construye en el ejercicio responsable de la libertad y el poder que posee; si se desarrolla al explorar las opciones de que dispone (y al contribuir a generar y ampliar esas opciones en el largo plazo), al elegir y tomar decisiones en base a concepciones de lo que es bueno y al responsabilizarse de las consecuencias de las acciones consiguientes; si todo eso es cierto, no habrá desarrollo personal sin desarrollo moral, porque todos los procesos citados (optar, tomar decisiones en base a valores y consecuencias humanas, y responsabilizarse del uso del poder, la libertad y las propias acciones) son parte esencial y definitoria de la ética (tabla 3.3).

TABLA 3.3
Justificación de la ética psicosocial

General, para otros	• Fundamental para el desarrollo humano (despliegue de potencialidades personales y ampliación de opciones sociales que permiten elegir y realizar un proyecto de vida valioso). • Implica asumir libertad y poder, que posibilitan autodeterminación personal y colectiva. • Exige responsabilizarse del mundo, para recrearlo como producción humana donde merece la pena vivir y convivir. • Demanda responsabilidad personal/colectiva por el uso que hacemos de poder y libertad.
	• Permite el desarrollo profesional y personal propio. • Exige asumir responsabilidad por poder técnico y social suministrado por sociedad, para fomentar justicia social y desarrollo humano (metas):

Para practicante

— Facilitando conocimiento personal y de las fuerzas sociales que moldean la vida humana.
— Ayudando a crear/clarificar el proyecto vital.
— Facilitando la obtención del poder y medios personales y sociales precisos para realizar el proyecto vital.

- Obliga a esclarecer/explicitar el proyecto de persona y sociedad que guía la APS.
- Permite la evaluación social del progreso valorativo alcanzado por la APS.

Y no es que la ciencia y la técnica no puedan contribuir al desarrollo humano, sino que, en la realidad, el despliegue de la humanidad personal o colectiva sólo será posible en la medida en que el poder y el conocimiento aportados por esas empresas se «humanice», poniéndolo al servicio de determinados valores morales e integrándolas en un esquema de fines humanos de los que poder y conocimiento sean medios. De lo contrario, y como ya se advirtió en el capítulo 2, corremos el riesgo de convertir ciencia y técnica en entes «autónomos», fines en sí, que dificultan, en vez de facilitar, un desarrollo que sólo si están sometidas a valores morales y sociales adquirirá un significado «inmanente», auténticamente humano. Y en el terreno social, ¿cómo se articulan técnica y ciencia por una parte y ética por otra, y qué papel corresponde a cada una?

Mientras ciencia y técnica presuponen determinación (para poder identificar las causas y prever los efectos de las acciones humanas y profesionales), la ética asume *libertad:* los humanos podemos elegir y autodeterminarnos. A la luz de esa presunción, la sociedad aparece como el fruto de la elección y la acción humana (no de «fuerzas» despersonalizadas, aunque racionales, como la ciencia, la técnica o la economía). La ética «exige», por tanto, que nos *responsabilicemos* de nuestro *mundo* y que usemos la libertad y el poder que poseemos para *recrearlo* como producto humano y para humanos, en vez de aceptarlo como un dato externo e inalterable. Como otras empresas humanistas, la ética es, así, complemento imprescindible de la ciencia y la técnica, que dan una visión parcial y sesgada de la realidad y las personas como materiales inertes o pasivos sometidos al dictamen de inapelables leyes externas. Resumiendo, la importancia de la ética reside no sólo en su capacidad de complementar —como reverso humanizado— a una economía y una técnica deshumanizadas, sino también en su virtualidad de «domesticar» ambas, al insertarlas en esquemas de valores y fines humanos.

Desarrollo humano y misión de la ética psicosocial. Dando un paso más en esta introducción genérica al significado y función de la ética, cabe cuestionar su dimensión socioprofesional: ¿cómo puede, si es que puede, el *practicante psicosocial contribuir* al desarrollo moral y humano de aquellos con quienes trabaja? Explicitemos, para poder contestar esa pregunta, los tres componentes del desarrollo humano:

1. La conciencia y el conocimiento de uno mismo (persona o comunidad) y de las fuerzas sociopolíticas que moldean la vida humana.
2. La identificación de aquello que, al ser considerado bueno y valioso, puede

fundamentar un proyecto consciente de vida.

3. La obtención del poder y dominio sobre la vida personal y comunitaria que capacite a personas y comunidades para hacer realidad el proyecto de vida elegido.

Sin restar protagonismo de los propios sujetos y comunidades, el practicante psicosocial puede —debe— hacer contribuciones a los tres procesos: a generar conciencia y conocimiento (de sí y del mundo), a clarificar y aportar valores y significados humanos, y a adquirir los recursos y el poder necesarios para realizar los proyectos de vida personal y colectiva. Pero para ayudar a formular los valores y hacer realidad los proyectos y fines de los otros, los practicantes psicosociales deben antes adquirir conciencia y claridad de sus propios valores y proyectos socioprofesionales, así como de los medios personales, intelectuales y morales que pueden usar para perseguirlos. Esa es la tarea previa y el poder potencial de una ética profesional ambiciosa y altruista no encerrada en sí misma; una ética sólidamente asentada en la dimensión positiva de orientación y capacitación humana reivindicada en el capítulo 2.

Aclarar las propias concepciones del bien y el mal y de lo que se tiene por valioso obliga a la APS a explicitar el *proyecto de persona y sociedad* que debe orientar el trabajo teórico y práctico y al que *define* como una práctica social responsable, que trasciende tanto el ejercicio meramente técnico como la ideología abstracta. Clarificar y hacer explícitos los valores que como práctica social se abrazan es, desde luego, preciso para generar criterios que orienten y permitan evaluar la acción. A nivel más global, comprometerse públicamente con ciertos valores (como la autonomía o la justicia social) hace posible que la sociedad *evalúe* a la APS en base al progreso logrado en la realización de esos valores. Permite, en otras palabras, el control social de la conducta moral de los practicantes psicosociales, calibrando en qué medida el conocimiento, la técnica y el poder —que por encargo de la sociedad administran— son usados para mejorar la vida de la gente (sobre todo de los más desvalidos y necesitados) y no para su propio beneficio.

4. POSTURA BÁSICA Y VIABILIDAD: ¿ES REALIZABLE LA ÉTICA COMUNITARIA?

La propuesta del desarrollo humano como objetivo genérico de la APS nos lleva a proponer como misión ética básica del campo *la promoción del otro como ser humano vinculado, respetando al máximo su dignidad y su capacidad de autodeterminación*, así como a postular la comunidad, el poder compartido (participación y justicia social), la colaboración y la confianza en los demás como valores básicos (Prilleltensky, 1997 y 2001; Sánchez Vidal, 2004b). Pero, siendo esa posición irreprochable desde el punto de vista puramente moral, plantea no pocas dudas y preguntas que deberían ser respondidas si ha de ser trasladada a la práctica: ¿quién es el «otro»?, ¿tiene en la realidad las capacidades personales y recursos

sociales asumidos en teoría?, ¿existe en la realidad el grado de vinculación psicológica y solidaridad social que asumimos?, ¿es socialmente viable esa postura ética en el clima sociomoral actual?, ¿es realizable en la práctica un mandato ético tan altruista como potenciar al otro cuando el egoísmo autoconservador parece la regla «natural» del comportamiento humano?

La cuestión de «el otro», el destinatario de la APS, será retomada más adelante; abordo ahora, a partir de una exposición anterior (Sánchez Vidal, 2004a y 2005), la doble cuestión de la viabilidad (social y personal; tabla 3.4), crítica para cualquier ética práctica como la que propongo aquí.

4.1. Viabilidad social

Como producto genuino de los años sesenta del siglo XX, el enfoque comunitario mantiene una posición ética y unos valores (comunidad, alteridad, reciprocidad, confianza, poder compartido) abiertamente contraculturales, que desafían directamente los mandatos de interés propio, autonomía individual, competitividad y utilidad que, a modo de «programa implícito», articulan la modernidad cultural y el capitalismo. Si la APS ha de mantener una cierta coherencia entre su discurso moral (lo que se dice) y su práctica (lo que se hace), es preciso examinar la viabilidad y sostenibilidad social del mandato de potenciar al otro en nuestro mundo. De forma que, por un lado, puede ser necesario establecer unas *condiciones mínimas* de viabilidad social (y práctica) de

TABLA 3.4
Ética comunitaria: misión, problemas y condiciones de viabilidad (realismo estratégico)

Misión **Valores asociados**	• Promover el desarrollo humano del otro como ser vinculado, respetando al máximo su dignidad y capacidad de autodeterminación. • Comunidad, poder compartido (participación, justicia social), colaboración, altruismo, confianza.
Problemas prácticos	Desafía { Valores sociales axiales de cultura moderna y capitalismo. Poderosas tendencias de autoconservación y autoafirmación humana.
Condiciones de viabilidad social	1. Tomar conciencia de poder/funcionalidad social de los valores dominantes y de la dificultad de sustituirlos por otros. 2. Plantear un debate social sobre las flaquezas de los valores dominantes y la bondad de los valores antagonistas. 3. Proponer alternativas basadas en valores humanistas y comunitarios. 4. Organizar experiencias y programas psicosociales que muestren la efectividad vital y social de los valores alternativos. 5. Colaborar con fuerzas/movimientos sociales con valores/objetivos convergentes.
Condiciones de viabilidad práctica	1. Valoración realista de recursos y capacidades de otros y de la comunidad. 2. Compartir conocimiento y poder con otros, no acapararlos para sí. 3. Incluir el poder y los intereses sociales en la evaluación y actuación psicosocial. 4. Incorporar el autocuidado el rol y pautas éticas de actuación del practicante. 5. Reconocer el papel del conocimiento válido y de la técnica efectiva como base de APS. 6. Encarar la complejidad, ambigüedad y dinamismo de la ética respecto a los actores, valores, opciones y consecuencias.

la ambiciosa postura ética comunitaria, y por otro, y en función del grado en que esas condiciones se den en la realidad, puede ser preciso complementar el altruista mandato de potenciar al otro con un cierto *realismo estratégico* que facilite la viabilidad real de la APS y evite enfrentar a los practicantes a la frustración y la sensación de fracaso producidos por el choque con encargos y tareas irrealizables.

¿Cuáles serían las condiciones de viabilidad de la ética psicosocial esbozada y su sostenibilidad en el mundo actual? Sugiero algunas condiciones y tareas que harían posible o facilitarían el cumplimiento de esa ética.

1. Adquirir *conciencia* del poder y la funcionalidad de los valores dominantes y de la *dificultad* de la tarea de contrarrestarlos o sustituirlos por otros. El *poder* de los valores de la modernidad se debe a que: son *funcionales* para el mundo productivo y del trabajo que vertebra toda la vida social y personal actual; gozan de una extensa reputación benefectora, al vérseles como causa del progreso económico (cuando la economía va bien, claro está) y de la protección social que se financia con los beneficios de ese progreso; y son sostenidos por una maquinaria propagandística avasalladora (e implícita, *ergo* dificilmente combatible) y por la presunción de que no hay alternativa social y económica viable («pensamiento único»), lo cual asegura un alto grado de conformidad social con esos valores y con la forma de vida asociada.

   La *dificultad* para *contrarrestar* esos valores y sustituirlos por otros está servida: al ser el cimiento cultural de la lógica productiva que arma el sistema económico, enfrentarse a esos valores (autonomía individual, autointerés, utilidad, racionalidad, etc.) supone desafiar las bases económicas sobre las que se asienta nuestro bienestar material. La pregunta es entonces obligada: ¿cómo convencer a «nuestra» gente del primer mundo de que tenga menos bienestar,

para que los pobladores del resto del planeta puedan tener lo mínimo y necesario? No es fácil hacer llamamientos a una justicia social abstracta si ello implica una disminución de *nuestro bienestar* concreto, aunque esa tarea sea más asequible en tiempos de descalabro económico, que mina las mencionadas bases de legitimación moral de la modernidad capitalista.

2. Sostener en el *debate* social e intelectual la bondad de los valores comunitarios y humanistas, a la luz de las flaquezas y problemas de los valores a enfrentar. La afirmación intelectual y social de los valores alternativos es sólo un primer paso que debería ser facilitado por la actual crisis económica, que tanto malestar ha provocado, dejando al descubierto las fallas del sistema cultural y económico sustentado por los «antivalores» a desterrar. Esa tarea exige a la postre que la APS se asuma colectivamente como una fuerza ideológica y moral humanizadora que busca la solidaridad y la justicia social, y no como una mera técnica de cambio psicológico y social, lo que obviamente demanda un amplio debate interno.
3. El segundo paso de la tarea de cambio de valores es proponer *alternativas*. No basta desafiar un juego de valores, debiendo ofrecer *valores sustitutivos* con un atractivo y «efectividad» práctica (efectos sobre el bienestar psicológico y sobre la forma de vivir de la gente) suficientes para compensar la (percepción de) pérdida de funcionalidad social y personal de los «antivalores» rechazado aprovechando, en todo caso, las flaquezas de esos valores y los perjuicios que su predominio causa en la vida personal y social. Creo que en ese terreno la postura moral comunitaria tiene, frente al individualismo egoísta y la utilidad, un gran potencial y atractivo, al reafirmar la alteridad y la vinculación social como ingredientes esenciales de cualquier forma de vida y de desarrollo genuinamente humanos.

   ¿Cómo se podría traducir esa postura en valores humanistas concretos antagónicos de los citados? Reconociendo al otro como persona con dignidad, capacidad y poder (enfoque positivo, de recursos) y como humanamente igual (justicia); compartiendo con él/ella el poder y facilitando el acceso a los recursos sociales (generosidad, participación y justicia social) que permiten hacer socialmente efectiva la igualdad humana genérica; y confiando en el otro y colaborando con él/ella en la realización de las tareas compartidas y en la solución de los conflictos sociales que los pueden enfrentar. Esos son los valores que podemos ofrecer a la gente. Maximizar la viabilidad de la empresa de renovación moral nos llevaría en último término, y haciendo uso del realismo estratégico ya postulado, a alcanzar algún tipo de compromiso entre los altruistas valores comunitarios y los valores individualistas e interesados, que no sólo están fuertemente arraigados en las sociedades occidentales sino que forman parte del legado ético de la modernidad como valedores de la dignidad personal, la autoconciencia y la autonomía individual asociados a ella.

   Otro ítem relevante para la tarea de renovación valorativa es la propuesta de una nueva concepción, no materialista, del desarrollo humano como núcleo

catalizador y meta general del quehacer psicosocial, cuyos cimientos ya existen en la literatura comunitaria y de salud mental, la Psicología humanista y existencial, el psicoanálisis cultural y las nuevos planteamientos —más socioculturales— del desarrollo económico.

4. La teoría y el debate están bien, pero para convencer a la gente de que cambie es crucial *mostrar en la práctica la efectividad funcional y vital de los nuevos valores* y de la forma de vida que sustentan, generando experiencias y proponiendo acciones y programas que muestren convincentemente la viabilidad y potencia de esos valores. Eso requiere un buen trabajo de comunicación social y de realización técnica (en línea con la experimentación social o la investigación acción) y puede hacerse en dos niveles: uno macro y otro micro. Exige también, como prerrequisito, el reconocimiento objetivo de la actitud de la sociedad y las comunidades ante el cambio que se propone, ya que sin la voluntad y el deseo de mudanza de la gente el cambio psicosocial participativo es imposible y la APS puede quedar relegada al trabajo con minorías marginadas o degenerar en una pelea casi estéril de los profesionales del cambio contra la pasividad y apatía de las mayorías desinteresadas. De nuevo, la actual coyuntura crítica, y el malestar con lo establecido que la acompaña, abre un portillo estratégico interesante para las propuestas de cambio.

Es evidente que la viabilidad de una estrategia *macro* de cambio depende de la *colaboración* de la APS, por abajo, con actores y *movimientos sociales* que posean objetivos y valores convergentes que busquen reconstruir las instituciones sociales en base a metas acordes con las necesidades y aspiraciones de la gente (y no de las de las élites políticas que administran los intereses económicos del gran capital). Esa tarea requiere, obviamente, alianzas con las fuerzas sociales que quieren cambiar lo establecido. Pero los cambios más importantes y fructíferos para nosotros son, con toda probabilidad, aquellos en el *nivel micro* y mesosocial en los que la APS pueda mostrar formas de relación y organización que realmente supongan una mejora en la vida de la gente común. Eso se puede conseguir a través de *experiencias* o programas, generalmente participativos (cooperativas, sistemas de intercambio económico o ayuda mutua, etc.) que, sirviéndose de la experimentación social más objetivista o del modelo de investigación-acción, aporten un avance convincente a la salud, el bienestar o la calidad de vida de la gente y se puedan así institucionalizar en el conjunto de la sociedad.

4.2. Viabilidad práctica y autocuidado

Hay que reconocer que potenciar el ser y las capacidades del otro —en vez de los propios— es un mandato ético sumamente altruista, de dudosa viabilidad en un mundo social saturado de un egoísmo moral que se diría consustancial a la autoconservación humana. Es por tanto aconsejable tomar ciertas cautelas e imponer

algunas condiciones para asegurar la viabilidad práctica de una APS orientada hacia la promoción del otro. En realidad, los dos extremos del binomio egoísmo-altruismo en la actitud del profesional acaban siendo peligrosos. Asumir plenamente el egoísmo prevalente no sólo rozaría la inmoralidad (la amoralidad, al menos, al sacarnos de la esfera moral), sino que garantiza el inmovilismo social al reforzar los valores dominantes que sustentan el *statu quo*. Pero abrazar incondicionalmente el altruismo puede hacer personalmente insoportable y globalmente insostenible la APS, al poner en peligro la integridad psicológica de cualquier practicante que no sea un ser enteramente abnegado que se niega, literalmente, a sí mismo para servir a los demás.

Parece sensato proponer que la práctica haga, en consecuencia, compatibles el altruismo que fundamenta la ética y el egoísmo, que, al sostener la autoconservación humana, posibilita la realización práctica de las acciones psicosociales. Evitaríamos así la doble negación que supondría abrazar sin condiciones cualquiera de las dos posturas opuestas: la negación de uno mismo (el practicante) a que puede llevar el altruismo total, y la negación de los demás (aquéllos con quienes trabaja) implicada por el egoísmo absoluto.

Las sugerencias para viabilizar la práctica psicososical (tabla 3.3) que vemos a continuación están, por tanto, ligadas a la gestión cuidadosa por parte del practicante, en sí mismo o en otros, de la autoestima, el poder y otros ingredientes estratégicos relevantes para la autoconservación y autoafirmación humana. Pretenden aportar una doble garantía: la de aquellos «clientes» para los que trabaja el practicante, asegurando que el profesional les sirve a ellos y no a sí mismo; y la del propio practicante, garantizando unos límites en ese servicio profesional y en la relación establecida que le permitan mantener su salud y su integridad personal. Así se asegura que ni el practicante usa a los clientes para sus propios fines ni es usado por aquéllos más allá de los límites pactados (que siempre deben preservar la dignidad personal e integridad psicológica del trabajador psicosocial).

1. Hacer una *valoración realista de los recursos* y capacidades del otro y de la *comunidad* psicosocial realmente existente. La promoción del desarrollo humano se basa, precisamente, en tener en cuenta y estimular esos recursos personales y sociales; sin embargo, asumir un potencial inexistente generará muy probablemente el fracaso del programa y la frustración de las expectativas de sus participantes, al estar ambos erigidos sobre bases ilusorias.
2. *Compartir el poder* y otros recursos individuales y sociales. Si de verdad se persigue el crecimiento y fortalecimiento de la comunidad, el practicante debe estar dispuesto a compartir el conocimiento, la técnica y el poder con otros, no a acapararlo para engordar su prestigio, su currículo o su ego. Eso implica, por una parte, una actitud básica de generosidad y humildad en el trabajador psicosocial, en ausencia de la cual vale más que se dedique a otro tipo de trabajo. Por otra parte, y al ser el poder (o el conocimiento aplicable) un valor instrumental, el practicante habrá de preguntarse siempre al gestionar su propio poder (técnico) y el poder social que detenta: «poder, ¿para qué?» y «poder,

¿para quién?». El mérito moral de la acción dependerá de la causa o el valor a cuyo servicio se pone el poder y del grado en que el empoderamiento (Laue y Cormick, 1978) beneficia a los más débiles y necesitados, aumentando la justicia social.

3. Incluir el *poder y los intereses sociales* como factores psicosociales clave. Si, como parece, la conducta humana no está dirigida sólo (ni principalmente) por valores morales, sino también por la búsqueda de autoafirmación personal (May, 1972) y por los intereses sociales, el análisis de estos intereses y de la distribución del poder en un grupo o comunidad ha de ser parte de la evaluación y de la actuación consiguiente. Por tanto, y aunque se abogue por la colaboración como valor y postura relacional básica, necesitamos también *modelos de conflicto* que permitan entender y manejar situaciones marcadas por una *incompatibilidad* básica entre los *valores* e intereses de los grupos sociales donde los modelos («blandos») de colaboración y cooperación entre actores sociales serán inviables.
4. Tener en cuenta las necesidades básicas del practicante (no sacrificables a las expectativas y deseos sociales) y del resto de actores, definiendo un *autobeneficio legítimo* (Sánchez Vidal, 1999 y 2002) que, por un lado, preserve su integridad moral y psicológica e impida su explotación personal por parte de la comunidad (autocuidado) y le permita, por otro, servir eficazmente a los otros como técnico (también, si lo desea, como persona, teniendo en cuenta, no obstante, las salvaguardias de la dignidad e integridad mencionadas). Ese autobeneficio incluiría, como se verá en el capítulo 4, la preservación de la propia estima y reputación profesional o el acceso a los medios para conseguir fines pactados.
5. El poder es necesario, pero *no* suficiente: la competencia profesional exige, como ya quedó claro en capítulos previos, disponer de *una técnica y un conocimiento científico* aplicable y válido, en ausencia de los cuales la exigencia de responsabilidad por los resultados de la APS queda en entredicho. El practicante psicosocial que quiera actuar moralmente debe, por tanto, hacer una cuidadosa evaluación de las situaciones, problemas y soluciones en base al conocimiento existente, y utilizar la mejor técnica disponible (no la técnica o el enfoque preferidos) a la luz de la evidencia empírica.
6. Tener en cuenta y saber *manejar la complejidad*, *ambigüedad* y *dinamismo* típica de las situaciones psicosociales en términos de actores, valores, opciones y consecuencias. Definiré para ello más adelante un esquema cuatripartito basado en esos cuatro elementos, que facilita el análisis de las zonas de incertidumbre y complejidad que pueblan el trabajo ético en la APS.

5. ÉTICA PSICOSOCIAL REALIZABLE

Basándose en la ética dialógica propuesta por Habermas, tiene sentido identificar una «ética mínima» (Cortina, 1992) que recoja el consenso moral alcanzado en el

diálogo entre los diferentes actores y sectores sociales reconocidos como «interlocutores válidos» y que se distinga de las éticas «máximas», que añadirían a ese consenso civil mínimo los valores y mandatos particulares de cada sociedad o comunidad en un momento dado.

Conill (1996) ha resumido la convicción de Norbert Elias de que los *profesionales* pueden tener un *papel civilizador* si usan benéficamente la técnica (la técnica psicosocial en nuestro caso) en las interacciones con sus clientes. Como con la modernidad el compromiso personal ha devenido en responsabilidad impersonal, se hace preciso controlar socialmente el ejercicio social de las profesiones para garantizar que su influjo civilizador contribuye al fomento de la autonomía personal. Y puesto que los profesionales tienen, además, un importante *papel educativo* (por tanto, moralizador) en los distintos modos de interactuar con sus clientes al operar en sociedades (y comunidades) moralmente plurales, reconocer a sus clientes como interlocutores válidos asegura una actitud moralmente respetuosa hacia ellos como sujetos dignos y capaces, permitiendo a la vez que el profesional ejerza benéficamente su influencia educativa. Ese reconocimiento debe ayudar, además, a elaborar esa ética mínima (o «transaccional») que, en nuestro caso, habría de basarse en el diálogo con los grupos y comunidades con los que interactúa el practicante psicosocial.

Contando con estas consideraciones generales sobre el papel de las profesiones y lo escrito en el capítulo 2, podemos resumir ahora los *rasgos distintivos* de la ética psicosocial que propongo y resumo en la tabla 3.5.

TABLA 3.5

Ética psicosocial realizable, funciones y marco de la interacción profesional

Papel social de profesiones	Civilizador Educativo-moralizador Benefactor } A través de interacción con clientes/comunidad
Marco de actuación de «profesiones de ayuda»	• Estado de bienestar (marco socioideológico). • Intenciones profesionales (subjetividad profesional). • Formación e ideología social (socialización académica y social).

Ética psicosocial

- Componentes { Valores morales / Papeles sociales
- Misión { «Aplicar» valores morales a papel (profesiones) psicosocial(es) / Introducir valores morales en decisiones/relaciones/acciones profesionales / Elaborar implicaciones (y valores) morales de actuación profesional
- Bases { Deontología clínica / Filosofía(s) moral(es)
- El practicante debe responder ante clientes/comunidad del uso de { Autonomía profesional / Poder técnico
- Decisiones/relaciones/acciones basadas en libertad personal (autonomía profesional).
- Elegir entre opciones relevantes en base a { Valores (del profesional + de la comunidad) / Consecuencias humanas de acciones y relaciones
- Importa tener en cuenta la viabilidad técnica y humana de las opciones, en función de los medios de que dispone el practicante y los clientes/la comunidad.

— La acción del profesional psicosocial (Rey, 1994) está enmarcada por la ideología formal del estado del bienestar en el nivel social y por las intenciones profesionales en el nivel psicosocial, y es influida en gran medida por el entrenamiento recibido y por las convicciones sociales del practicante. Tres aspectos relevantes de la acción psicosocial son, por tanto: la relación profesional, la técnica usada y las intenciones profesionales. El profesional debe, en consecuencia, controlar sus afectos, pero también los efectos de la técnica usada para evitar el riesgo primordial de la acción psicosocial: anular al otro, a aquel con quien se trabaja.

— Si al seguir a Downie (1971) consideramos que la ética social se construye sobre los pilares de los *valores morales* y los *papeles sociales*, nuestra tarea consistirá en «aplicar» la ética al papel del practicante psicosocial, ayudándose de las dos plataformas existentes, una práctica, la deontología clínica (pensada para interacciones entre individuos), y otra teórica, la filosofía moral, que habremos de adaptar a las condiciones psicosociales concretas.

— La tarea ética es eminentemente práctica: implica hacer *juicios de valor* y tomar *decisiones* en base a valores relevantes. Su aportación consiste, por tanto, en introducir los valores morales en los procesos de actuación y toma de decisiones psicosociales, que tradicionalmente incluían sólo conocimientos técnicos y estratégicos (y datos concretos de la situación y los sujetos).

— Los *valores morales*, la base de la ética, son ideales o cualidades deseables de las personas y sus relaciones y de las instituciones sociales. En la práctica

psicosocial, asumimos que no son entes absolutos, sino relativos (a otros valores y a la subjetividad y contexto que los singulariza y modula); que pueden ser jerarquizados en función de su «valía» relativa y singular; y que suelen ser agrupados en constelaciones o «sistemas» interconectados, en cuyo conjunto admiten evaluación moral comparativa. Habrá, por tanto, que tomar en consideración en el análisis y la acción los valores y la dinámica personal y social concretos en que esos valores se inscriben y adquieren significado singular.

— El practicante debe *responder* ante la comunidad del uso que hace de la autonomía profesional y del *poder técnico* que la sociedad ha puesto en sus manos, garantizando que uno y otro serán usados en beneficio de la gente, no en beneficio propio. El practicante es responsable porque, además de conciencia e intenciones, tiene libertad y poder; debe, pues, responder de cómo y para qué usa la una y el otro en su actuación psicosocial; cuanto mayor sea la autonomía y el poder de que dispone, más responsabilidad deberá asumir.

— Las *decisiones* a tomar en la APS implican libertad para elegir entre *opciones* o alternativas de actuación, que han de ser sopesadas tanto desde el punto de vista de los valores (del profesional y de los actores sociales) como desde la perspectiva de las *consecuencias* previsibles de las acciones derivadas de cada opción.

Debemos adentrarnos ahora, una vez caracterizada la ética psicosocial, en la identificación y descripción de sus componentes estructurales y en el examen de algunas dinámicas que esos componentes establecen en la APS. Parto para ello de la descripción de esos componentes realizada para el acto ético general en el capítulo 2, que estimo globalmente aplicable a la acción profesional individual con sólo sustituir el término «sujeto» allí usado por el de «practicante psicosocial», y el de «otro» por «cliente», «usuario» de un servicio o «destinatario» de la acción.

6. ESTRUCTURA Y DINÁMICA ÉTICA DE LA ACCIÓN PROFESIONAL

La *deontología*, la ética profesional de origen médico, se construye sobre la base de una relación diádica entre un profesional y un cliente individual, donde las acciones del primero producen consecuencias presumidamente benéficas para el segundo, de las que el profesional es, en principio, responsable. Parto, como he indicado, del esquema estructural dibujado en el capítulo 2, que es preciso complementar introduciendo algunos matices y diferencias relevantes en las tres regiones (subjetiva, finalista-relacional, objetiva) entre la acción del lego y la acción profesional, desarrollando más los aspectos relacionales y objetivos (como la responsabilidad) que fueron allí únicamente apuntados.

6.1. Aspectos subjetivos

En la acción profesional al uso asumimos que un profesional con autonomía decisoria, intenciones y conciencia actúa (o se relaciona) en base a una técnica científica con un cliente o destinatario, produciendo unas efectos y consecuencias de los que es, en principio, responsable. La tabla 3.6 resume los aspectos subjetivos en la ética psicosocial.

TABLA 3.6
Aspectos subjetivos de la ética psicosocial

Autonomía profesional
• Limitada por: — Libertad de otros participantes en la APS. — Participación de la actores sociales/comunidad. — Exigencias metodológicas, organizativas y estratégicas de una APS viable y eficaz. • La restricción de autonomía/libertad cualifica responsabilidad por consecuencias, no la anula. • La acción colectiva u organizada difunde/reparte responsabilidad, no la elimina.
Intencionalidad y emocionalidad
• Tienen importante función motivadora, movilizadora y de vinculación interpersonal. • Conviene controlar abusos/excesos (paternalismo, intervencionismo, etc.) de tres formas: socialmente; diálogo interpersonal; reflexión y deliberación colectiva. • Técnicamente: evaluación y actuación competente que garantice eficacia y resultados.
Poder técnico (y social)
• Destrezas válidas, conocimiento contrastado y aplicable (prestigio social de profesiones psicosociales). • Para empoderar a comunidad/grupos vulnerables (fines: desarrollo humano y justicia social), no a sí mismo.
Autocuidado
• El practicante, como sujeto (no sólo medio técnico del bienestar de otros), tiene el derecho (y el deber) de cuidarse a sí mismo/a (autobeneficio legítimo), asegurando también beneficencia y sostenibilidad objetiva de la APS.

6.2. Autonomía técnica, eficacia y responsabilidad profesional

Si el profesional ha de ser responsable de la acción, debe tener autonomía para decidir el curso de acción a seguir y los medios técnicos a usar para alcanzar unos objetivos que asumimos acordados con el destinatario. Pero en la realidad la libertad de acción absoluta no existe... y, aunque existiera, si operamos bajo los supuestos éticos comunitarios de justicia social, desarrollo humano y empoderamiento cooperativo debemos compartir esa libertad con aquellas personas o grupos con quienes se trabaja. Ése es un primer matiz práctico relevante: la autonomía decisoria del profesional en el terreno técnico debe ser compatible con la participación activa

de las personas y grupos sociales, que facilita el empoderamiento y el desarrollo autónomo de estos, manteniendo la eficacia de la actuación y evitando confundir lo uno (la participación y autonomía de la comunidad) con lo otro (la *autonomía decisoria* en el terreno técnico, que habría de garantizar la *eficacia* de la acción). El reto es combinar ambas cosas (eficacia de la acción y autonomía de la comunidad) sin confundirlas en cada caso concreto. Hay que ser consciente de que esa pretensión puede generar muchas dudas y dificultades que, naturalmente, pueden y deben ser resueltas en la casuística práctica.

En la realidad, la libertad del profesional no sólo topará, como en cualquier proceso social, con la libertad de los otros (sean éstos clientes o colegas), sino también con las restricciones (económicas, ideológicas, informativas, organizativas, etc.) presentes en toda acción psicosocial concreta, planteando algunos interrogantes éticos que no admiten respuestas simples y unívocas. ¿Es el profesional responsable de las consecuencias de las acciones realizadas en condiciones de autonomía decisoria restringida en las que no puede elegir o llevar a cabo aquello que considera mejor para sus clientes en un caso dado, o, al carecer de la autonomía *total* —o de los medios precisos para alcanzar los objetivos marcados— está exento de *toda* responsabilidad? ¿En qué medida debe responder un profesional por las consecuencias de acciones decididas —o realizadas— conjuntamente con otros? ¿Tiene, en fin, la responsabilidad individual sentido en el caso de las tareas interdependientes (asignadas a un equipo profesional o una institución compuesta de diversas instancias más o menos autónomas entre sí) o de las decisiones colectivas, como aquellas que dieron lugar a la supuesta «banalización del mal»?

Parece evidente que la *limitación de la autonomía* de actuación (o de los medios disponibles) *no anula* la responsabilidad del profesional individual, pero sí la matiza y *cualifica.* La responsabilidad personal o colectiva debe, por tanto, ser valorada en función de los dos factores señalados: los «grados de libertad» y los medios disponibles para alcanzar los fines acordados. Pero al actuar en el marco de instituciones sociales (o en las decisiones colectivas) hay que tener también en cuenta —como se indicó en el capítulo 2— los esfuerzos anteriormente realizados, para, por un lado, ampliar los márgenes de autonomía y la disponibilidad de medios precisos para realizar un buen trabajo profesional y para, por otro, dar a conocer (o denunciar), dentro o fuera de la institución, la situación de limitación de autonomía decisoria (o de medios materiales, personales o de otro tipo) para llevar a cabo un trabajo eficaz y benéfico para los destinatarios de la acción.

Una *acción colectiva* (como es en general la APS), cuya preparación y realización (y consecuencias) dependen de una red de personas —e instancias institucionales— sometidas a determinadas reglas sociales y organizativas, debe obviamente generar una *responsabilidad social* o compartida, que *no* anula la responsabilidad individual sino que la delimita en función de la tarea realizada por cada persona o instancia y del significado de esa tarea en la actuación global. A esas múltiples responsabilidades singulares de cada persona o sector habría que añadir la responsabilidad de los directores u organizadores de la acción en su conjunto y de la elaboración de las

reglas que la rigen. Las responsabilidades singulares de cada persona o sector estarían cualificadas por el grado en que han contribuido a establecer, rechazar o modificar las reglas organizativas y la toma de decisiones global que pudieran limitar la autonomía de los profesionales o producir efectos dañinos a los usuarios del sistema. Aunque pueda resultar algo complejo, el análisis sugerido *niega* tanto la *difusión de la responsabilidad* (o su disolución en el magma grupal) en las acciones colectivas como la supuesta banalidad del mal o el daño cuando las personas se insertan (como en el caso del genocidio judío a manos de los nazis) en una organización colectiva y jerárquica.

6.3. Intencionalidad

La práctica profesional tiene una clara intencionalidad benevolente —ayudar, ensanchar la autonomía y la humanidad, y promover la justicia social— en base a ciertos sentimientos asociados de simpatía psicológica, vergüenza o indignación moral. Por supuesto, mejor abordar una tarea con intenciones benéficas (hacer el bien y ayudar) que con intenciones maléficas (dañar o hacer el mal o, quizá, perseguir exclusivamente el interés propio). Pero ya dice el refrán que «el infierno está empedrado de buenas intenciones»: al ser un aspecto subjetivo que motiva y guía al profesional, la benevolencia de sus intenciones no garantiza en absoluto la bondad objetiva de los resultados, que depende, por un lado, de la corrección del conocimiento general (y la evaluación concreta) de los temas abordados y sus soluciones y, por otro, de la efectividad de la técnica usada. Así es que, junto a las intenciones, el análisis ético habra de tener en cuenta los resultados finales de la acción, lo que se consigue (desde la objetividad externa —ajena a las intenciones del practicante— aportada por la visión del cliente, por una parte, y por la métrica del evaluador externo, por otra).

Los problemas morales asociados a las buenas intenciones suelen estar ligados al interés propio y a las distorsiones y excesos (como el paternalismo o la intromisión indebida en la vida y las relaciones sociales de los demás) que el altruismo puede introducir en la APS. La frecuencia de esas distorsiones y la relativa confusión que rodea este tema lo hacen merecedor de un escrutinio más detenido, a realizar como parte de las cuestiones previas y generales de la APS, en el capítulo 5. Examinaré allí tres de sus problemáticas relevantes: intenciones y resultados (aspectos subjetivos y objetivos de la APS), intenciones latentes y autobeneficio tanto del practicante como del resto de actores sociales («agendas ocultas»), y riesgos del intervencionismo profesional asociado al abuso de las buenas intenciones.

6.4. Poder técnico

La diferencia más importante entre la acción profesional y la acción genéricamente humana radica en el poder técnico, que fundamenta la primera pero está ausente de la segunda. ¿Cuál es la fuente de ese poder? El poder técnico deriva

primariamente de la pericia o destreza técnica (y, secundariamente, de los conocimientos aplicables) que posee la profesión y el profesional, pero también del prestigio social (una forma de poder social, al fin) que la sociedad les otorga para que lo administren en su nombre. Como es natural, ese plus de poder técnico y social sobre las personas comunes genera en la acción profesional una responsabilidad añadida: cuanto más poder real tenga el practicante, más responsabilidad acumulará al usarlo. Así, un médico o un ingeniero tienen en general un poder técnico y social mayor que un psicólogo o un trabajador social, porque poseen una técnica más poderosa y un reconocimiento social mayor; y estos tienen, a su vez, mayor responsabilidad que un lego desprovisto del conocimiento científico, la pericia técnica y el prestigio social propio de esos gremios profesionales.

Pero, como ya se ha visto, en el plano psicosocial el poder figura (como la autonomía) en los dos lados de la acción: en el del profesional, como poder técnico (y «empoderador»), y en el lado del cliente como sujeto «a empoderar», que debe adquirir poder. Las dinámicas de poder en la APS son por tanto más dialécticas de lo que se puede pensar en un primer momento. El único modo razonable de hacer compatible el poder del practicante con el que debe adquirir el cliente es, siguiendo el enfoque comunitario, que el primero esté dispuesto a compartir su poder (*no* que renuncie a él) y que, en consecuencia, lo use para potenciar al segundo, sin perjudicarse o «debilitarse» a sí mismo. La única manera de cerrar ese círculo dialéctico es mediante una cooperación que haga posible la mejora y el poder de autoafirmación del profesional, a la vez que el empoderamiento de los clientes más desvalidos.

El tema del poder profesional está ligado al de la autoridad técnica, que discuto como cuestión previa en la APS en el capítulo 5. Dos cuestiones relevantes asociadas en un plano más social son la postura política de la APS (y la de cada línea o practicante singular) y la aportación global de la APS a la justicia social (tema abordado en el capítulo 4 al hilo de los valores del campo), es decir, el valor cardinal de la ética social.

7. LA RELACIÓN PROFESIONAL: OBJETIVIDAD E IMPLICACIÓN PERSONAL

Los *aspectos finalistas y relacionales* (tabla 3.7) son, como he repetido, fundamentales tanto en la ética general de la APS (erigida sobre la base de una relación entre dos partes) como en cada línea y tipo de actuación, que casi siempre proponen destinatarios y formas de relación propias y diferenciadas. Como esos aspectos presentan, además, diferencias reseñables en la APS respecto del esquema genérico de acción humana examinado en el capítulo 2, habremos de dedicarles una mayor atención.

TABLA 3.7

Relación profesional

- Benéfica (para cliente).
- Con un fin objetivo, profesional (no personal): resolver problemas, alcanzar objetivos del cliente.
- Sin implicación emocional/personal del practicante (o con implicación limitada).
- Multilateral:
  - Más difusa y menos cargada afectivamente que el vínculo psicológico interpersonal.
  - Posibles conflictos de lealtades del practicante hacia distintos actores.
- Cooperativa/de colaboración: no siempre posible por conflictos de intereses; relaciones conflictivas (y luchas por el poder) también presentes.
- Heterogénea según actores y valores implicados.
- Marcada por el poder y los intereses sociales.

Destinatario

- (El «otro»):
  - *a*) La comunidad.
  - *b*) El gobierno/institución representativa.
  - *c*) Los más débiles/necesitados.
  - *d*) El cliente nominal (patrocina y paga la acción).
- Criterios morales para elegirlo:
  - Justicia social (*c*, favorecer al más débil/necesitado): acción política, se redistribuye el poder.
  - Beneficencia (*a* o *b*, beneficiar a la mayoría): acción global, se prima el bienestar de mayorías/clases medias.
- Ideal: combinar *a* (o *b*) y *c*, mejorando el bienestar general pero primando la satisfacción de necesidades básicas y el avance de los más vulnerables.

El tema de la relación profesional está directamente conectado con la concepción y elección del otro, el destinatario de la acción. Según sea este visto como un igual, como alguien con capacidades y recursos, como un receptor pasivo de informaciones y acciones, o como alguien a quien servir, mantendremos una relación horizontal y cooperativa, desarrollista y fortalecederadora o vertical, sea de subordinación del cliente al profesional sea de supeditación de este a aquel. Por otro lado, el contenido y calidad de la relación profesional varían con cada cliente, cada situación y cada forma de vinculación, de manera que, en la realidad, hay tantas variantes de relaciones profesionales como clientes, practicantes, vínculos establecidos y circunstancias singulares.

La relación *profesional* es una relación basada en la confianza entre un profesional y un cliente (o usuario), específicamente orientada a solucionar los problemas —o alcanzar objetivos— de un cliente, al que se asume motivado para trabajar cooperativamente en la solución de los problemas o el cumplimiento de los objetivos pactados. Se da por sentado que, como experto en los temas abordados y en las técnicas para gestionarlos, el profesional dirige la evaluación de la situación y actuación, manteniendo la iniciativa del proceso y evitando implicarse personalmente o esperar otros beneficios que los legítimamente pactados con el cliente (como el pago de sus servicios o su motivación y cooperación).

Pero esa descripción canónica de la relación profesional incluye algunas estipulaciones psicológicas y sociales (como la tajante separación de lo personal y lo técnico y la postura directiva o neutral del profesional) que son *cuestionadas* o rechazadas desde diversos frentes teóricos y prácticos. De hecho, buena parte de los

problemas y dudas éticas de la práctica psicosocial giran en torno a los dos tipos de objeciones. Los primeros, los problemas *psicológicos*, tienen que ver con la interferencia de emociones y preocupaciones personales en una relación supuestamente objetiva y vacía de emociones e intereses en la parte profesional. La frecuencia con que esas interferencias emergen en la práctica profesional muestra la dificultad de separar estrictamente los aspectos personales y técnicos en una forma de actuar en que la relación y las emociones (y el propio practicante) son parte integral de la técnica utilizada.

La preocupación moral estriba, en todo caso, en la incidencia que la intromisión de la emoción y el interés del profesional puede tener sobre la beneficencia de la actuación para el cliente: se trata de garantizar que la implicación personal del profesional sea consciente y sirva a las necesidades y metas del cliente, *no* a las necesidades e intereses —en general inconscientes— del practicante. Al pensar así estamos asumiendo sólo las virtualidades negativas de la emoción y el interés personal, y usando la ética en su mitad unidireccional de controlar y censurar; falta considerar la otra mitad que considere la potencialidad *positiva* de esos factores psicológicos. Ya sostuve en el capítulo 2 que el carácter profesional de la relación no habría, en principio, de excluir en la APS *sentimientos* como la empatía por el otro, la vergüenza ante la humillación y el escarnio o la indignación ante la injusticia. Es más, para la Psicolgía Humanista (especialmente para Carl Rogers) los sentimientos y la autenticidad de los participantes en cualquier encuentro humano (incluido el profesional) no sólo no merman la efectividad de la ayuda psicológica sino que son su componente primordial, el motor del desarrollo humano.

7.1. La relación profesional en el escenario psicosocial

Un segundo grupo de cuestiones y objeciones, *sociopolíticas*, más propiamente psicosociales, se refieren a la corrección moral de que el practicante adopte la postura relacional de superioridad o neutralidad implícita en el modelo médico —frente a la opción activista por una postura comprometida o de servicio a la comunidad— y la conveniencia estratégica de una u otra postura para promover el desarrollo humano de los participantes en la APS y la justicia social general. Y, de nuevo, hay corrientes de la acción social que se oponen a la neutralidad profesional y asignan al practicante el papel de servidor de aquellos grupos con que trabaja (particularmente de los más vulnerables u oprimidos), mientras que otras sostienen que la práctica debería incluir —e incluso centrarse en— la *autogestión* social y la potenciación de las capacidades personales y sociales (o rescatar y utilizar, al menos, las capacidades de relación y ayuda de agentes no profesionales de cambio).

La interacción profesional al uso, forjada por el modelo médico, define una relación jerárquica donde el profesional ocupa —por su saber, poder técnico y estatuto social— una posición superior y el cliente es relegado a un papel subalterno de colaborador pasivo. Ese formato relacional no es, sin embargo, apropiado si nuestra meta es el desarrollo autónomo de las personas, no la mera ayuda técnica. En

ese caso necesitamos una postura relacional diferente: una *relación cooperativa* que anteponga la capacidad de ser agente de los clientes a la jerarquía, y la igualdad humana básica de practicante y cliente a las diferencias y asimetrías. La relación cooperativa aparece así como la postura más defendible moralmente (al respetar la dignidad, cualidad de sujetos agentes y capacidad de autodeterminación de los participantes), más eficaz estratégicamente (los sujetos, al ocuparse de aquéllo que les interesa, están intrínsecamente motivados) y más sostenible socialmente (al generar sinergias y mantener la cohesión social entre los participantes en la acción).

No debemos, sin embargo, ignorar los problemas y límites de esa opción relacional. Habrá, por ejemplo, situaciones y actitudes de alguna parte que pueden dificultar o hacer imposible la colaboración igualitaria, y existen ciertas asimetrías y diferencias psicosociales —en el saber, el poder o en la responsabilidad a asumir por cada parte— que obligarán a introducir (Bond, 1989) límites en esa colaboración. Lo cierto es que la relación profesional tradicional es finalmente inadecuada para la APS. ¿Por qué? Por una sencilla razón, notada por O'Neill en 1989 en el debate sobre el tema que trataba de responder dos preguntas acerca de la responsabilidad realizadas por Kelman y Warwick (1978) once años antes: ¿ante quién es responsable el practicante social? (¿quién es el «cliente» de acción social?) y ¿de qué es responsable? (¿cuál es el contenido de la responsabilidad?).

Ese planteamiento de las preguntas es, alerta O'Neill, erróneo: preguntar por el «cliente» o destinatario de la acción comunitaria o social (a las que asimilo aquí la APS) carece de sentido. ¿Por qué? Porque la cuestión asume un modelo relacional médico —una única relación diádica, jerárquica y homogénea en el tiempo y a través de los contextos— patentemente inadecuado para la APS, que implica un tipo de relacion distinto (Sánchez Vidal, 1998 y 1999). A saber: una relación *múltiple* (que incluye simultánea o secuencialmente varios grupos con mayor o menor iniciativa y protagonismo), de *colaboración* o de *servicio* a la comunidad (aunque ambas posturas hayan de ser especificadas y matizadas); *heterogénea* (en función de las demandas de la situación y el destinatario elegido) y *cambiante,* según la dinámica de las interacciones y los acontemientos e influencias del contexto.

Si no hay una sola relación (*la* relación profesional de los códigos deontológicos) sino varias, que pueden conllevar, además, la asunción de papeles diferentes y lealtades enfrentadas, las estipulaciones deontológicas clásicas son casi papel mojado, adentrándonos en un terreno social y moral nuevo, sembrado de incertidumbre y dificultad: ¿Qué contenido deben tener las distintas relaciones? ¿Serán esas relaciones compatibles entre sí, de modo que el practicante (persona o equipo multiprofesional) las pueda asumir e integrar en un papel coherente y sostenible en el tiempo? ¿Cómo resolvemos los conflictos de lealtades que podemos esperar, dada la diversidad de intereses de los distintas actores (padres e hijos, grupos comunitarios enfrentados, instituciones y ciudadanos, etc.)? ¿Podemos trabajar con las distintas partes sin sufrir tensiones psicológicas y morales intolerables? ¿Podrá el practicante, además, mantener la confianza de los distintos actores y realizar un trabajo técnico eficaz?

Ya se ve que a la extralimitación de la relación profesional hacia lo personal, o a la

posible maleficencia que eso pudiera comportar (las preocupaciones de la deontología tradicional), debemos añadir en la APS nuevos retos y preocupaciones, y que a los valores (confianza y fidelidad) dirigidos a paliar aquellos problemas tenemos que añadir otros valores sociocomunitarios como la justicia social) que iluminen moralmente la actuación del practicante en el laberinto de la interacción psicosocial.

8. EL DESTINATARIO DE LA ACCIÓN PSICOSOCIAL

El examen de la relación en la escena psicosocial nos encamina irremisiblemente a preguntarnos por el destinatario —o destinatarios— de la APS y la forma en que vamos a gestionar moralmente ese tema en la práctica, vista la pluralidad, incertidumbre y dinamismo del escenario psicosocial.

Valores implicados: justicia social y beneficencia. Identifiquemos, para comenzar, los valores éticos primariamente concernidos en este asunto. Por lo pronto la justicia social: la elección del destinatario (una cuestión obviada en la deontología clínica) supone asignar ciertas energías profesionales y recursos sociales a unos y denegarlos implícitamente a otros, con los que el practicante podría trabajar pero no lo podrá hacer, al ser esas energias y recursos limitados. El asunto concierne también a la beneficencia*:* elegir destinatario implica decidir a cuántas personas y sectores comunitarios vamos a beneficiar (y también de qué manera se verán beneficiados) y cuántas van a ser excluidas de la beneficencia o resultar perjudicadas. La opción implica también decidir quiénes se van a ver beneficiados y quiénes no, que es otro modo de plantear la cuestión de la justicia social, esta vez desde el ángulo de la beneficencia.

El hecho de que una parte de esa opción dependa del escalón político, que define los objetivos genéricos y los destinatarios prioritarios de la acción social en su conjunto, limita el espacio de elección (y la responsabilidad) profesional, pero no lo elimina. Tampoco la selección implícita de destinatario en función de sus posibilidades económicas (se trabaja con quienes pueden pagar por los servicios) o reivindicativas («el que no llora no mama»), características de la práctica liberal (de mercado) y social al uso, resuelven el problema de la justicia social: ambas rutinas son patentemente injustas, porque excluyen a aquellas personas y grupos carentes de capacidad económica o reivindicativa y porque no toman en consideración la necesidad y el potencial de desarrollo como criterios morales relevantes.

8.1. Destinatarios potenciales y concepciones de la APS

¿Cuáles son entonces los destinatarios potenciales de la APS? La reflexión y análisis de casos y el examen de la literatura social y comunitaria revelan cuatro destinatarios principales (Sánchez Vidal, 1998):

1. La *comunidad* o el conjunto de personas, grupos e instituciones sociales (la

«sociedad») de un área o territorio determinado.
2. El *gobierno*, los representantes políticos (locales, regionales, etc.) de los ciudadanos, que encarnan, por tanto, el interés público, el del conjunto de la comunidad.
3. Las personas o grupos sociales *más necesitados*, vulnerables o desposeídos de poder, recursos y dignidad personal.
4. El *cliente* designado, la persona, grupo, institución u organización que hace el encargo de trabajo y paga la actuación y los servicios de los practicantes.

Cada opción presupone ciertos valores centrales y da uno u otro tipo de respuesta a la cuestión de justicia social nuclearmente implicada en la elección de destinatario. La cuarta opción (preferida en la clínica y en el trabajo con empresas) ha sido ya descartada, por tanto inadecuada para la APS, por razones, tanto éticas (es injusta, al favorecer a aquellos que pueden pagar olvidando a los más necesitados y vulnerables) como técnico-estratégicas, pues no corresponde a la complejidad, ambigüedad y dinamismo de la APS. Si se opta por la comunidad (o el gobierno que la representa formalmente) como destinatario, estamos primando la amplitud de la población atendida (la extensión de la beneficencia) y el servicio público como valores centrales, en la confianza de que los políticos representan fielmente (además de legítimamente) las aspiraciones y necesidades del conjunto de la población. Elegir, en cambio, a los más débiles o vulnerables otorga primacía a la justicia social sobre el interés público o la cobertura poblacional.

Las dos opciones restantes (combinamos las dos primeras en una sola en esta discusión) reflejan dos concepciones de lo social descritas en el capítulo 2 y que dan lugar a dos formas diferentes y complementarias de APS: la más *global*, dirigida al conjunto social (o a sus representantes políticos), y aquella de orientación más *política*, dirigida a fortalecer a los más débiles e incrementar la justicia social, reduciendo las desigualdades sociales (Sánchez Vidal, 1995). O, si se quiere y entrando en el abordaje dinámico de los problemas morales, las opciones ponen de manifiesto un conflicto clásico entre los dos valores ya identificados como básicos en el tema: la beneficencia y la justicia social. En cualquier caso, esta, como tantas cuestiones de ética psicosocial, no tiene una respuesta clara y evidente (*la* solución), sino más bien opciones o alternativas que difieren según la postura moral e ideológica del practicante, la prioridad asignada a la estrategia de viabilidad de la acción y la coherencia entre valores declarados y acciones reales. De hecho, y tomando estos dos últimos factores en consideración, la solución que sugeriré a la cuestión de elegir destinatario contempla combinar dos criterios (y los valores subyacentes): la extensión poblacional (beneficencia, criterio consecuencialista) y la necesidad o desequilibrio psicosocial (justicia social, criterio valorativo o «deontológico»).

Cada opción presenta sus correspondientes ventajas y desventajas. Trabajar con la *comunidad* requiere que los valores e intereses del conjunto de personas o grupos implicados sean globalmente compatibles (algo poco frecuente), de forma que podamos beneficiar a todos aunque sea en distinto grado. Trabajar con el *gobierno*

implica aceptar que, como representante legítimo del conjunto de sectores sociales, sirve por igual al interés y necesidad general, de todos, lo que resulta algo incierto: lo más común es que los gobiernos favorezcan en su legislación y acción social a los grupos más organizados (e informados), a los más reivindicativos y con mayor poder de conformar e influir en las decisiones gubernamentales, y a aquellos que le son ideológicamente más afines (y lo sostienen electoralmente), primando así la conveniencia y el clientelismo sobre la justicia social o el bien común. Debemos ser conscientes de que, al trabajar en ese contexto y ser sostenida por la legitimidad política y los recursos de los gobiernos, la APS puede convertirse en brazo ejecutor de actuaciones injustas o éticamente cuestionables, que traicionan las convicciones morales del conjunto del campo o de algunos practicantes singulares.

Aun cuando elegir como destinatario al grupo *más vulnerable* o necesitado (los «oprimidos») parece ser la opción más meritoria moralmente —al menos desde el punto de vista de la justicia social—, no está exenta de problemas prácticos y estratégicos. Así, en un colectivo o comunidad mínimamente heterogéneos tendremos varios candidatos, no uno solo, a grupo más necesitado o vulnerable. Pero es que, incluso aunque la opción sea clara, la ética poco tiene que decir sobre *cómo* servir las necesidades o intereses de ese grupo, pues para eso debemos hacer un buen trabajo técnico y disponer de unos medios económicos o sociales que a menudo han de ser aportados por una sociedad (o una comunidad) que debe ser persuadida para que se implique en la lucha contra la injusticia y renuncie a una parte de su bienestar general para financiar las acciones consecuentes que favorezcan a los sectores más vulnerables o desafortunados.

8.2. Criterios de elección: justicia social y beneficencia

¿Cómo podemos, en fin, abordar la elección del destinatario en la práctica psicosocial? Dado que se trata de una forma de actuación colectiva, no individual, parece correcto asumir de entrada que existen varios destinatarios potenciales cuyo bien conjunto debe ser tenido en cuenta. Elegir a uno de ellos como *destinatario primario* no excluye responsabilidades morales (aunque de diferente intensidad y contenido) hacia el resto de actores, pero exige disponer de criterios morales que permitan jerarquizar los valores e intereses implicados, ordenar la dedicación del practicante a cada grupo y resolver los conflictos de interés de los grupos o las demandas divergentes que puedan hacer a aquel. Si, por ejemplo, la justicia social es el valor prioritario, el interés del grupo más débil o perjudicado debe tener preferencia, tratando secundariamente de no dañar los intereses o bienestar del resto de grupos; si las desigualdades no son, en cambio, notables, y se juzga más importante fomentar la beneficencia conjunta, el desarrollo humano general o la solidaridad social, se primará el trabajo con todos y la evitación de conflictos y tensiones.

En general, el practicante deberá tratar de armonizar o compatibilizar los valores de los distintos grupos y la distribución de la beneficencia de las acciones previstas,

lo que permitiría trabajar cooperativa y productivamente con todos ellos. Pero eso sólo es posible en situaciones de *consenso valorativo;* si existen divergencias relevantes entre los valores o fines de los actores, el trabajo global, armónico y productivo no será posible y habremos de jerarquizar los actores o los valores en juego, seleccionando un destinatario primario y otros «secundarios» o «terciarios». Esa situación de *disenso* o conflicto —frecuente en la APS— nos obligará también a revisar la viabilidad de la relación de colaboración con cada uno de los actores, contemplando la eventualidad de simultanear ese tipo de relación con otras conflictivas o de colaboración restringida, únicamente algunos actores. Y es que en la APS convergen, según Heller (1989), tres tipos de demandas y presiones distintas: las expectativas y normas sociales, los derechos de los clientes individuales, y las responsabilidades y necesidades profesionales. Enfrentado a situaciones complejas, el practicante deberá ponderar esos tres tipos de demandas tratando de alcanzar un equilibrio óptimo entre ellas. No se trata tanto, concluye Heller, de preguntar «quién es "cliente"» como de ver la manera en que la acción va a afectar, a corto y largo plazo, a los distintos grupos presentes.

También, en fin, las características de los sujetos y de la situación encarada deben ser tenidas en cuenta al elegir destinatario, en la medida en que esas características sujetivas y contextuales traen al primer plano valores determinados. Así, en situaciones de gran pobreza la vida y la salud básica deben ser prioritarias; en contextos de violencia extrema primarán la seguridad y la vida de las personas; en casos de gran injusticia y desigualdad la justicia social será el valor preferente; en situaciones en que la gente no está aquejada por ninguna de las calamidades citadas, sino por el malestar, la alienación o la falta de sentido vital, el bienestar, la humanización o el retorno a formas de vida y actividades dotadas de significado humano serán valores pertinentes.

En *resumen,* la elección de destinatario en la APS debería combinar (y tratar de optimizar) en la teoría dos criterios básicos: la extensión de la población beneficiada (criterio consecuencialista) y la necesidad, vulnerabilidad o desequilibrio social a corregir (criterio de valor o «deontológico») a la luz de las características de los sujetos y la situación social. O, si se prefiere, habría que compatibilizar dos valores profesionales básicos: la beneficencia y la justicia social. Que eso sea posible en cada caso y situación práctica ya es otro cantar.

9. ASPECTOS OBJETIVOS: CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDAD

El tratamiento integral de la responsabilidad ha de incluir (Bermant y Warwick, 1978) tres aspectos: su orientación (ante quién se es responsable), su alcance y límites (de qué se es genéricamente responsable) y su contenido (deberes concretos a asumir y tareas de las que uno es responsable). Aunque la responsabilidad sea el tema más importante de la ética «objetiva» (y quizá de toda la ética), no podemos profundizar aquí en cada uno de sus aspectos. Entre otras razones porque, por su comentada importancia y ubicuidad, ha aparecido ya al revisar otros temas como la autonomía

profesional, la relación profesional y el destinatario de la acción, encadenados todos ellos de una u otra forma a la responsabilidad. Así, la pregunta por el destinatario de la APS se refiere a la orientación de la responsabilidad profesional.

9.1. Alcance y límites: irresponsabilidad y sobrerresponsabilización

La importancia de la responsabilidad no radica sólo en que, siendo el «precio» de la libertad y el poder (su «contrapeso» moral), permite el control de ambos, sino también, como se señaló, en su crucial contribución al desarrollo humano: las personas nos constituimos y crecemos como humanos haciéndonos responsables de nuestras acciones (y, hasta un punto, de nuestras «inacciones»); y lo mismo se puede decir de los profesionales. Ni debemos renunciar a la responsabilidad propia ni, si queremos obrar bien, privar a los demás de la suya, aunque podamos hacerlo. Pero la responsabilidad debe tener límites: ni podemos ser responsables de todo lo que sucede (y nos sucede) ni, aunque pudiéramos, debemos serlo. ¿Por qué?

Porque si la falta de responsabilidad nos anula como sujetos humanos, su exceso nos destruye psicológicamente, al enfrentarnos a una tarea inabarcable que consumirá estérilmente nuestras energías, abocándonos además a una injusta e inmerecida sensación de fracaso personal. Basta contemplar, por ejemplo, las tremendas tensiones de nuestros adolescentes, enfrentados a exigencias, y responsabilidades educativas sin fin (ni sentido), o la angustia de los adultos sometidos a insaciables exigencias laborales y sociales que absorben tanto sus capacidades de concebir una vida con sentido como sus medios psicológicos para cumplir los sueños y proyectos vitales. La crítica del mundo industrial y postindustrial global podría, de hecho, resumirse en el descabellado y cancerígeno exceso de responsabilidad que se pone sobre los hombros de la gente en asuntos de relevancia humana o moral menor (ligados al ámbito técnico y productivo), dejando a las personas sin energías morales para asumir la responsabilidad debida en el resto de áreas (humana y moralmente más relevantes), reducidas así a eriales de irresponsabilidad —frente a las selvas de *sobrerresponsabilidad* de las áreas productivas— y generadoras de una innecesaria culpabilidad personal al adquirir el hombre moderno conciencia de ese desequilibrio.

El catálogo de cuestiones asociadas a la responsabilidad y sus límites en la APS es, sin embargo, casi inabarcable: ¿debe el practicante psicosocial responder por todos los efectos de las acciones que induce o genera directamente, incluidos los no intencionados (los «efectos secundarios»)?, ¿y de aquellas consecuencias negativas generadas por otros en actuaciones o dispositivos colectivos (como el trabajo de grupo, en familia o en la comunidad) donde el practicante participa?, ¿debe responder por todo lo que *no* hace, sus omisiones o «inacciones»?, ¿en qué circunstancias y bajo qué supuestos será responsable por omisión, y quién establece, en todo caso, cuándo debe el profesional actuar y cuándo debe abstenerse para favorecer la iniciativa y agencia de los otros actores?, ¿debe abstenerse el practicante de actuar si no tiene *toda* la evidencia científica y los datos concretos necesarios para diseñar adecuadamente una actuación y prever sus efectos?

Todas ellas son preguntas complejas que no admiten respuestas fáciles de validez general, más allá de exigir la combinación de pericia técnica, conocimiento científico y buen juicio moral y estratégico. Las referidas a los efectos secundarios (un tema clásico de la ética profesional) las retomo después.

Warwick (1978) ha abordado el tema del alcance de la preocupación ética al constatar la insuficiencia de la base científica en la acción social y los límites que eso impone a la asunción de responsabilidad en una práctica diferencialmente basada, precisamente, en un conocimiento que permite diseñar racionalmente las acciones y prever sus efectos. El riesgo es, entonces, que, llevando la preocupación al límite, se acabe «haciendo montañas morales de los granos de arena interventivos» (Sánchez Vidal, 1999), de modo que el exceso de escrúpulos morales al enfrentarnos a los problemas o aspiraciones psicosociales nos inmovilice, por temor a generar algún tipo de consecuencia imprevista o negativa. El *inmovilismo* es, pues, uno de los riesgos genéricos de la sobrerresponsabilización, en ausencia de asideros científicos y técnicos sólidos. La juiciosa recomendación de Warwick es mantener la perspectiva global de actuación avanzando simultánemente por los dos caminos involucrados (acción e investigación psicosocial por un lado, y deliberación moral por otro) y manteniendo el contacto y el diálogo entre ambos.

Retomo ahora las tres preguntas hechas en el capítulo 2, cuya ordenada consideración permitirá, espero, ofrecer una mínima guía moral para la práctica psicosocial. Me preguntaba allí:

1. ¿Quién define una consecuencia como buena o mala, y en base a qué criterios?
2. En una relación cooperativa e igualitaria, como la aquí postulada, ¿es el practicante psicosocial totalmente responsable de las consecuencias, o debe compartir la responsabilidad con los participantes en la acción?
3. ¿Debe asumir el practicante responsabilidad por todas las consecuencias generadas (buenas o malas, buscadas o no buscadas), incluido el daño causado al destinatario o a terceras partes ajenas a las intenciones y al acuerdo inicial base de la acción?

Examinemos brevemente esas cuestiones (tabla 3.8).

TABLA 3.8
Aspectos objetivos de la ética psicosocial: consecuencias y responsabilidad

Responsabilidad

Derivada de (varía con):
- Autonomía profesional.
- Poder técnico (y social).
- Filosofía sociomoral (grado en que se ve deseable compartir poder y responsabilidad).

Consecuencias

Efectos totales:
- Previstos y positivos/deseados.
- Imprevistos y/o indeseados (efectos secundarios).

a) Definición de lo bueno/lo malo (consecuencias positivas/negativas):
- Acuerdo negociado practicante-destinatario.
- Si no hay acuerdo, debe primar el criterio del sujeto (destinatario).

b) Corresponsabilidad practicante-comunidad agencia/responsabilidad compartida:
- En función de relación cooperativa/igualitaria.
- Para promover el empoderamiento y desarrollo humano de actores sociales.

c) Responsabilidad por consecuencias negativas/efectos secundarios:
- Usar conocimiento general e información específica (temas, métodos, resultados empíricos) para predecir efectos de actuaciones (ciencia).
- Emplear mejor técnica (y forma de ejecución concreta) disponible para evitar o minimizar efectos dañinos o indeseados (profesión).
- Reparar el daño psicológico, social u otro; la responsabilidad final puede ser: singular (del practicante) o colectiva (de las ciencias o profesiones psicológicas o sociales), si se usa el mejor conocimiento y la mejor técnica disponibles.

9.2. Definiendo el bien y el mal y compartiendo la responsabilidad

Para juzgar ciertos efectos (previstos y deseados) y consecuencias (que incluyen, además, los resultados imprevistos e indeseados) como buenos o malos (la beneficencia o maleficencia a alcanzar) debemos aclarar primero quién define lo que es bueno y lo que es malo en la APS en general y en cada actuación singular. Asumir una relación de colaboración practicante-destinatario implica que la definición de lo que es bueno o malo debe ser acordada por las dos partes. Pero, ¿qué sucede si hay un desacuerdo significativo sobre la bondad a alcanzar y la maldad a evitar, que no se puede resolver mediante el diálogo y la transacción? La cooperación no será posible sin que una de las dos partes ceda. Y puesto que decidir lo que es bueno para uno mismo (persona, grupo o comunidad) es la base de la autonomía (y del desarrollo humano), su definición concierne primera y esencialmente a la persona o comunidad en cuestión. El practicante no tiene ningún derecho a imponer a otros su concepto de bondad o maldad, aunque pueda (incluso deba) ilustrarlos con los conocimientos válidos que posee (e incluso, y si es apropiado, con su experiencia vital) sobre los problemas, aspiraciones y procedimientos psicosociales.

¿Cómo puede el practicante ayudar efectivamente al desarrollo humano de sus clientes? De dos formas: ayudándolos a *clarificar* sus propios *valores* y orientaciones morales como experto —si lo es— en esos temas y *ofreciendo* valores y orientaciones que pueden ser relevantes al caso, pero evitando, al mismo tiempo, la tentación de sustituir los valores del cliente por los propios o de imponer, aunque sea inadvertidamente, sus propios valores e intenciones a aquellos. Para ello es preciso

que el practicante:

1. Haya aclarado antes —y sea consciente de— sus propios valores.
2. Tenga conciencia de las implicaciones valorativas de los procedimientos de actuación profesional, de forma que, por un lado, evite imponer unilateralmente sus valores a los actores sociales, y facilite, por otro, que esos actores exploren y asuman realistamente sus propios valores.

Recapitulando, la iniciativa técnica corresponde al profesional, mientras que la iniciativa moral y la forja de valores debe corresponder, si se persigue el desarrollo humano, a los actores y a la comunidad.

Responsabilidad y corresponsabilidad. Aunque el practicante psicosocial debe ser responsable de las consecuencias de sus acciones profesionales (incluyendo aquí lo que hace y lo que, debiendo hacer, no hace), *no* es deseable desde el punto de vista moral que asuma *toda* la responsabilidad. No sólo porque, como acabo de ilustrar, la responsabilidad debe tener límites, de manera que el profesional no puede responsabilizarse de todo lo que sucede en un proceso de actuación o investigación. La razón principal para limitar esa responsabilidad es estrictamente moral, y ha sido ya enunciada. ¿Qué sucedería a los participantes de la APS si el practicante asumiera toda la responsabilidad por lo que pasa? Lo anularíamos como sujeto y agente humano, puesto que, como he repetido, asumir la responsabilidad de lo que se hace es la condición básica del ser humano y el «método» principal para desarrollarse como persona. Como el practicante tampoco puede ser irresponsable, la posición moralmente lógica y deseable es la corresponsabilidad, compartir la responsabilidad (y el poder a través de la participación) con la comunidad y la gente con la que se trabaja.

Ese compartir debe entenderse de forma genérica: no tiene por qué ser rigurosamente simétrico en cada área y aspecto del actuar, pues se refiere a los aspectos básicos o humanos de la acción, en los que, como acabo de ilustrar para la clarificación y forja de valores, las personas o la comunidad pueden tener un grado considerable de autonomía e iniciativa. El practicante tendrá, como he señalado, más responsabilidad en las áreas y tareas técnicas en las que es competente. Obviamente, la corresponsabilidad sólo será posible en el contexto relacional cooperativo.

9.3. Responsabilidad por efectos indeseados: previsión científica, control técnico y reparación de daños

¿Debe asumir el practicante responsabilidad objetiva por las consecuencias negativas o el daño causado a los participantes de la APS en que participa, sean esos destinatarios de la acción o no? Esta es una pregunta difícil que uno estaría tentado de contestar negativamente desde la subjetividad de las intenciones: parece injusto que el practicante asuma responsabilidad por unos efectos o consecuencias que no tenía intención alguna de causar. Recordemos, sin embargo, que la responsabilidad está

situada en el cuadrante objetivo de la ética. ¿Qué sucedería si en la sociedad o en las relaciones humanas hubiera asuntos o áreas que eludieran la responsabilidad, de manera que nadie fuera responsable de lo sucedido? Esa sociedad y ese tejido relacional no podrían subsistir. Si admitimos entonces que la responsabilidad debe valorarse desde el prisma objetivo, en el que toda acción debe tener uno (o varios) responsables y nadie puede eludir la responsabilidad por las acciones y procesos en que participa, la conclusión es cristalina: el practicante psicosocial debe ser responsable (corresponsable según lo argumentado) de aquellas acciones en las que participa y de los efectos en ellas generados.

Hilemos algo más fino: la responsabilidad profesional depende (Sánchez Vidal, 1999) de dos factores:

1. El grado en que las consecuencias pueden ser *previstas* usando el mejor conocimiento general y la mejor información concreta disponibles: la cuestión científica.
2. El grado en que esas consecuencias pueden ser *domeñadas* y controladas usando las mejores técnicas y procedimientos existentes: la cuestión técnica.

Si el practicante es negligente, de forma que no hace acopio de la mejor información o conocimiento o no usa (en base a preferencias personales o ideológicas) la técnica más apropiada y eficaz, contrae una *responsabilidad personal* por su conducta incompetente. Pero si hace uso del mejor conocimiento y de la mejor técnica disponibles, la responsabilidad será colectiva, recayendo respectivamente sobre la *ciencia psicológica o social* —que debe investigar y generar conocimiento válido y aplicable— y las *profesiones* psicosociales, que habrán de desarrollar y poner a prueba los métodos y procedimientos adecuados para encarar los problemas psicosociales y contribuir al desarrollo humano.

Quede claro que, siguiendo el principio de no-maleficencia, el practicante psicosocial debe tratar de *evitar o minimizar* los efectos negativos o dañiños para las personas y comunidades con las que trabaja. Pero si esos efectos se producen, tanto la beneficencia como la justicia social exigen que *repare* el daño —psicológico, social, económico o de otro tipo— generado. En la medida en que esa reparación puede exceder sobradamente las capacidades singulares de cada practicante, la profesión correspondiente debe asumir solidariamente las responsabilidades a través, por ejemplo, de seguros de responsabilidad civil.

Beneficencia, maleficencia y prudencia. Resta aún por examinar otra arista de este asunto: la íntima conexión de beneficencia y maleficencia frecuente en la acción profesional. La observación de diversas áreas de actuación profesional muestra que las *técnicas* más potentes y eficaces (fármacos, psicoterapia, acciones sociales, etc.) y, por tanto, con mayor *potencial benéfico* para los clientes, tienen, al mismo tiempo, el mayor *potencial maléfico* (efectos secundarios). La paradoja está servida: usando una técnica potente o «agresiva» podemos generar grandes mejoras en algunos sectores o personas, pero también daños importantes en otros. Pero si, por el

contrario, usamos técnicas menos potentes para minimizar los efectos secundarios, los beneficios generales se verán muy probablemente reducidos.

¿Solución? El proceder más sensato es combinar el principio de *prudencia* (y hasta de «intervención mínima») con una cuidadosa *experimentación* previa (incluyendo diseños apropiados, ensayos «clínicos» y programas piloto) para conocer (y tratar de paliar) los efectos negativos de la una técnica sin renunciar a los positivos. Y, segunda parte, el practicante debe conocer apropiadamente los sujetos personales y los contextos socioculturales en que actúa para modificar y *ajustar* las acciones y procedimientos técnicos generales según las características concretas de los actores y las situaciones, de forma que podamos optimizar el binomio beneficencia-maleficencia en cada clase de sujetos y circunstancias.

10. PRÁCTICA PSICOSOCIAL: DIFERENCIAS ÉTICAS

Tras la detenida visita a los aspectos estructurales y dinámicos de la acción moral psicosocial, debemos examinar las diferencias éticas de la acción y la construcción de conocimiento psicosocial respecto de la deontología clínica, por un lado, y la investigación de corte más positivista y objetivista, por otro.

10.1. Diferencias en la acción

Aunque la *deontología* resulte apropiada para la acción profesional individual, es insuficiente o inadecuada para guiar la APS, con la que, como ya debe estar claro a estas alturas, presenta importantes diferencias estructurales y dinámicas. En efecto, mientras la acción profesional individual involucra una relación entre dos individuos —un profesional y un «otro» destinatario de sus intenciones y acciones—, la ética psicosocial a menudo implica un practicante grupal que establece relaciones múltiples con varios destinatarios potenciales, de las que se derivan consecuencias polivalentes en un contexto que influye marcadamente en cada aspecto del proceso. Concretemos las diferencias del formato ético psicosocial respecto del individual (en parte explicadas al examinar la estructura y dinámica de la acción profesional) en esos distintos aspectos: destinatario, relaciones, contexto, base técnica y científica, carga política y distancia cultural practicante-destinatario (tabla 3.9).

TABLA 3.9
Diferencias entre ética psicosocial-deontología clínica

- *Practicante colectivo* o múltiple (equipo uni- o multiprofesional): exige diálogo interpersonal y deliberación y reflexión colectiva.
- *Destinatario social*/múltiple: problemas de elección de destinatario primario; posibles conflictos de interés entre destinatarios potenciales.
- *Diversas relaciones* significativas: pueden plantear demandas divergentes y conflictos de rol y de lealtades en el practicante.
- Complejidad de *consecuencias:* más *numerosas* y *polivalentes* para los actores; más difíciles de predecir

y dominar, por menor poder de la base científico-técnica.

- *Contexto* más *relevante:* influye en practicante (organización o institución marco), elección de destinatario de acción, relaciones apropiadas y responsabilidad por consecuencias.
- Mayor *carga política* de acciones, relaciones y consecuencias; el poder (y su distribución) es clave.
- Mayor posibilidad de *diferencias* significativas de *valores* e intereses del *practicante* y los *actores* sociales o la comunidad.

— En la APS el *destinatario* es *social,* no individual, y existen otros actores sociales (familias, grupos, instituciones, asociaciones, etc.) directamente implicados o interesados en la acción y sus consecuencias. Los actores suelen, además, estar *interrelacionados,* por lo que los efectos de las acciones selectivamente dirigidas a algunos de ellos acaban afectando también de una u otra forma al resto. Con frecuencia, por ejemplo, los actores pugnarán por obtener bienes sociales escasos (incluida la ayuda profesional o la protección social), de forma que si unos los consiguen es porque les han sido negados a otros.

— Existen *varias relaciones* significativas que a menudo plantean demandas materiales, psicológicas o sociales divergentes o contradictorias, lo cual puede a su vez crear en el practicante tensiones internas y conflictos de lealtades externas, hacia los distintos actores.

— El *contexto* social ejerce una mayor influencia en los actores, los valores, el contrato relacional establecido y en la forma de definir las consecuencias como buenas o malas y asumir las responsabilidades consiguientes. Así, el entorno organizativo o institucional tiene una doble virtualidad para el practicante: negativa, imponiendo unos valores y una filosofía interventiva; y positiva, aportando los medios materiales y simbólicos y la legitimidad para actuar. El entorno social y cultural influye también en los actores definiendo en qué consiste una relación profesional correcta y qué aspectos relacionales son inaceptables: ¿puede, por ejemplo, actuar un varón con mujeres en casos de maltrato, o una mujer en la gestión de conflictos con adolescentes islámicos para quienes la posición superior de la mujer puede parecer inaceptable (caso-problema P, capítulo 6)?, ¿puede colaborar un equipo profesional de adultos con unos jóvenes en un conflicto que implica enfrentamientos generacionales? También la bondad o maldad de las consecuencias —y el alcance y contenido de la responsabilidad— vienen en parte definidos por los valores social o culturalmente dominantes. Así, la pérdida de trabajo o el debilitamiento de la cohesión comunitaria tendrán distinta consideración moral para un punto de vista individualista o liberal que para uno socialista y colectivista; y la responsabilidad, que será más individualizada en el primer caso y más colectiva o compartida en el segundo.

— El *practicante* es colectivo, con frecuencia un *equipo* multiprofesional, lo que complica doblemente el análisis ético en función de la naturaleza más social de la discusión ética y de la pluralidad de valores, tradiciones (y hasta lenguajes) éticos ligados a las distintas profesiones que componen el equipo interventor.

— La *base científica y técnica* es en general más *débil* en la APS que en el trabajo

individual. Ello no sólo genera en la práctica abundantes zonas de incertidumbre y ambigüedad en las que florecen las dudas y dilemas éticos, sino que también reduce la competencia profesional, por las dificultades para la predicción de consecuencias que, como se indicó, es la base para diseñar y realizar acciones eficaces sobre las que descansa la competencia y la asunción de responsabilidad profesional.

— La ética psicosocial está más cargada *políticamente*, al ser el poder (político, técnico u otro) un ingrediente clave —en parte detentado o administrado por el practicante— en las relaciones sociales y en los asuntos colectivos.

— Si en la actuación clínica u «organizacional» (con las empresas) practicante y clientes comparten muchos valores y supuestos metodológicos (creencia en el cambio, cultura social, valoración de la acción profesional, etc.), en las áreas más sociales de la APS la distancia social y cultural entre ellos es más marcada, lo que da pie a diferencias, malos entendidos y conflictos a menudo de carácter moral.

Por tanto, y en general, la dificultad del análisis ético crecerá a medida que subamos en el nivel y complejidad social y en la «densidad» y heterogeneidad de ese nivel en términos de valores e intereses. En los niveles sociales superiores, como el comunitario, la trama relacional es más tupida, el contexto más relevante, la acción más compleja y multidisciplinar y la base científica global más incierta, resultando, por tanto, menos aplicable la deontología individual. En cambio, en niveles más microsociales (como la familia y el grupo pequeño) las condiciones se aproximan más a las situaciones interindividuales, donde las pautas deontológicas son más útiles y adecuadas.

10.2. Diferencias en la generación y uso de conocimiento

No sólo existen diferencias en la actuación sino también en la investigación psicosocial, entendida como proceso de generación del conocimiento utilizable en la acción. Buceando en la literatura centrada en la consideración ética del análisis y la investigación psicosocial (por ejemplo, Rappaport, 1977; Warcwick, 1978; Sieber, 1982; Conner, 1990), podemos detectar dos visiones polares sobre las que pivotan los puntos de vista de los distintos autores.

La primera visión reconoce que, aunque los contextos y acciones psicosociales no son ideales para realizar investigaciones o evaluaciones experimental y métricamente rigurosas, el *conocimiento* es fundamental para la APS, por lo que la *veracidad* (decir la verdad) y la gestión adecuada de la información son ingredientes básicos del papel y la ética psicosocial. La segunda visión subraya la importancia del *poder* y los intereses sociales en la definición de los problemas psicosociales y de las acciones para resolverlos, ya que toda actividad científica (y técnica) es inherentemente política, sustentando —y contribuyendo a avanzar— unos intereses sociales en detrimento de otros. La concienciación social y política y la equidad relacional son,

por tanto, ingredientes esenciales de la práctica psicosocial y del rol asociado.

Pero estas visiones no son contradictorias, sino complementarias, expresando los dos «cuernos» de un dilema al que a menudo se enfrenta el practicante psicosocial: ¿debe buscar el conocimiento y la verdad (sean estos entendidos como una afirmación objetiva de los hechos y los datos o como una construccion subjetiva que involucra creencias y valores), o debe perseguir la mejora humana y el progreso social, cualquiera que sea la forma en que estos son entendidos? Y aunque el dilema implica condicionantes metodológicos y sociales (Sánchez Vidal, 2012) y genera no poca controversia intelectual y conflicto profesional, admite diversas opciones alternativas que corresponden a las diferentes combinaciones y equilibrios que los practicantes pueden alcanzar entre los valores «verdad» y «conocimiento», por un lado, y «justicia social» y desarrollo humano, por otro (tabla 3.10).

TABLA 3.10

Generación y uso de conocimiento e información: visiones y condicionamientos

Visiones	Principios estratégicos y éticos derivados
a) **Conocimiento** esencial en APS.	• Investigación y evaluación según método científico • Gestión de la información • Veracidad } Básicos para APS
b) **Poder e intereses** sociales fundamentales en APS.	• Investigación/evaluación incorporan intereses sociopolíticos. • Gestión del poder e intereses • Empoderamiento y justicia social } Básicos
Dilema { *a*) Buscar el conocimiento y la verdad (acción científico-técnica guiada éticamente). *b*) Mejorar vida comunidad; cambio social (acción sociopolítica éticamente regulada).	
Visiones *a* y *b*: definen opciones personales { Complementarias no incompatibles. Condicionadas metodológica y socialmente.	
Condicionamientos	
• *Condicionamientos metodológicos:* divergencia entre exigencias: — De metodología, para obtener conocimiento científicamente válido. — De estrategia de diseño y realización de APS, para obtener cambios relevantes. • *Condicionamientos sociales:* rol socioprofesionalmente «prescrito» como legítimo (por ejemplo, investigación científica en academia, activismo partidista/experto neutral según medio social). • *Condicionamientos personales:* capacidad y preferencias personales orientadas hacia análisis-conocimiento o acción.	

Los *condicionantes metodológicos* que constriñen la elección del practicante derivan de las exigencias que el diseño de actuación y el método científico imponen a las relaciones establecidas con los sujetos y a los datos sobre los efectos de la actuación que queremos obtener. Así, el control experimental implica en la práctica un *control personal*, forzando al practicante a tratar a los sujetos como objetos (basando la relación con ellos en la obtención de ciertos datos, ocultando información y dejando sin tratamiento a ciertos grupos, manipulando las condiciones ambientales

sin conocimiento de los sujetos, etc.). Aunque utilizando enfoques alternativos (correlacionales, investigación-acción, simulaciones, etc.) muchas de las condiciones de control personal desaparecen, se debilita a la vez la potencia de los métodos alternativos para establecer la conexión causal entre variables, y, en general, obtenemos un conocimiento diferente (no necesariamente inferior, sólo diferente, más útil en unos aspectos pero menos en otros).

Otras condiciones socioprofesionales que restringen las opciones personales al dilema incluyen la obsesión académica por el conocimiento objetivo y el informe empírico y la tendencia profesional a «prescribir» (reconocer como legítimo) sólo determinadas posturas de rol —el experto neutral o el activista comprometido—, dependiendo de dónde se realiza la práctica. Hay que señalar, sin embargo, que el campo psicosocial (especialmente en sus enfoques comunitarios) ha sido particularmente activo en el desarrollo y uso de métodos alternativos al clásico objetivismo positivista, como la investigación-acción, la metodología cualitativa y los enfoques socio-construccionistas, la devolución de los resultados de la investigación a los sujetos o a la comunidad, la investigación evaluativa, la coincienciación de corte freiriano o la elaboración del saber popular.

Lo que interesa subrayar aquí es que muchos de esos enfoques asumen una perspectiva diferente del proceso investigador y que el uso de sus resultados es visto como medio, no sólo de obtener conocimiento válido, sino también de promocionar humanamente a los particpantes, al tratarlos como sujetos agentes y copartícipes del proceso, lo que incrementa, además, la equidad relacional de las acciones. En esa línea, he propuesto (Sánchez Vidal, 2007) un modelo de generación y uso del conocimiento en la APS (tabla 3.11) que incluye tres actores básicos: la comunidad o grupo poseedor de los «datos brutos», el metodólogo psicosocial que elabora e integra esos datos, y la institution pública (o el cliente privado) que impulsa y paga el proceso. Dado que en nuestro mundo social conocimiento e información son claves para actuar eficazmente, hacer a los sujetos partícipes de la información es una vía relevante de desarrollo humano; al permitir acceder al conocimento sobre sí mismo (y sus problemas y capacidades), los sujetos individuales o colectivos pueden actuar como actores (o agentes) sociales conscientes e informados.

TABLA 3.11
Valores/principios implicados en la generación y uso de conocimiento

Actores	Valores (derechos y deberes)	Función/misión psicosocial
Sujetos-comunidad (S)	• Derecho a la información pública (y a confidencialidad de datos privados). • Deber de veracidad.	• Ilustración colectiva. • Posibilita a S convertirse en agente social consciente e informado.
Institución pública	• Deber de información/conocimiento público (para promover bien colectivo).	• Impulsa el desarrollo de conocimiento público, preciso para promover bien y justicia social (diseño-realización de política pública marco

	• Derecho a los medios (información veraz, económicos, legitimidad, etc.) para diseñar y realizar acción social.	de APS).
Investigador / evaluador	• Derecho a datos precisos para elaborar conocimiento relevante y aplicable. • Derecho a veracidad de info aportada por S. • Debe devolver conocimiento elaborado a S (equidad relacional). • Deber de confidencialidad de datos privados.	• Integra y elabora datos «brutos» para obtener info-conocimiento válido y significativo para APS. • Contribuye a ilustración (¿y empoderamiento?) de S y comunidad.

La ética psicosocial habría de tomar en consideración, por tanto, los tres valores asociados a esas tres partes constituyentes del conocimiento psicosocial: el derecho del grupo o comunidad al *conocimiento público,* el derecho del *investigador* a los *datos* necesarios para elaborar teorías y diseñar acciones encaminadas a la beneficencia futura de la comunidad, y la *confidencialidad* debida al cliente privado o institucional. El practicante psicosocial deberá sopesar cuidadosamente esos tres derechos, tratando de hacerlos compatibles en la APS; si eso no es posible, habrá de elegir uno como prioritario. Mientras que el derecho a la información pública será considerado a menudo más importante que la confidencialidad, puede haber casos en los que la confidencialidad debida al cliente tenga prioridad: por ejemplo, cuando violar la confidencialidad cause un daño mayor a un sector vulnerable de la comunidad que el bien inmediatamente asociado al derecho de la gente a saber o la beneficencia que el investigador pueda derivar del conocimiento público en el medio y largo plazo.

11. INGREDIENTES BÁSICOS: ACTORES, VALORES, OPCIONES Y CONSECUENCIAS

Podríamos resumir el análisis anterior de los aspectos estructurales de la ética psicosocial y su dinámica afirmando que, comparada con la deontología individual, la *ética psicosocial* es más compleja, incierta y dinámica en los cuatro ingredientes básicos de la ética: actores, valores, opciones y consecuencias. Aclaro ahora su significado especificado y diferenciado para la APS, que es resumido en la tabla 3.12.

TABLA 3.12
Ingredientes básicos de la ética psicosocial: actores, valores, opciones y consecuencias (AVOC)

Ingredientes	Contenido

Actores sociales relevantes (precisos para analizar y cambiar situación)	• Practicante: equipo uni o multidisciplinar (institución pública u organización privada de la que el equipo es parte). • Cliente público o privado: patrocina, impulsa y paga la actuación. • Destinatario al que va primariamente dirigida la acción (y el análisis/evaluación). • Afectados e interesados *(stakeholders):* asociaciones, grupos y personas previsiblemente (o realmente) afectados por la acción o interesados en sus resultados.
Valores significativos explícitos (e intereses implícitos)	• Valores deontológicos de aplicación psicosocial (beneficencia, autonomía compartida, confianza, etc.). • Valores sociocomunitarios (justicia social, solidaridad, empoderamiento, etc.). • Si el conjunto de valores es concordante, se podrá trabajar cooperativamente con todos los actores (acción cooperativa globalmente benéfica). • Si el conjunto valores es discrepante, habrá que elegir valores o actores prioritarios (acción cooperativo-conflictiva orientada al beneficio selectivo y la redistribución de poder a favor de los más débiles).
Opciones-alternativas de actuación diferenciadas	• Relacional y temporalmente encadenadas en APS. • Viabilidad estratégica: ¿son opciones realizables con los medios de los que dispone el practicante y la comunidad? • Dilemas: entre opciones buenas/deseables (bueno-bueno); entre opciones indeseables (malo-malo); el «mal menor».
Consecuencias reales o previstas	• Múltiples para el conjunto de actores. • Polivalentes: bueno para A, malo para B (y mezcla de aspectos buenos y malos para A o para B de la misma opción). • Concordancia de consecuencias: acción global, concertada (opción beneficiosa para el conjunto de actores). • Discrepancia de consecuencias: acción sectorial, conflictiva (la opción beneficia sobre todo a algunos actores y perjudica a otros).

Actores. Además de los dos protagonistas —profesional y destinatario— incluidos en el esquema dinámico individual, en la APS hay que tener en cuenta otros actores analítica y operativamente relevantes: un cliente (que impulsa y paga una investigación o acción en la que probablemente tiene unos intereses concretos), que puede o no coincidir con el destinatario; las personas o grupos afectados por la acción, y aquellos (asociaciones, «entidades», grupos de interés, etc.) que, aunque no estén directamente afectados, están positiva o negativamente interesados en ella, pasando a ser *reactores* potenciales —a favor o en contra— a la acción prevista. Por otro lado, y como se ha indicado, el destinatario de la acción puede ser múltiple o plural (hay varios destinatarios potenciales o un destinatario compuesto de personas o grupos con intereses divergentes), al igual que el practicante, que podemos restringir al equipo multipersonal que interviene directamente o ampliar a la institución u organización de la que ese equipo forma parte.

Ya he señalado que la multiplicación de actores *densifica* considerablemente el *tejido relacional y moral*, aumentando el número de relaciones, intereses y valores potencialmente divergentes, ambiguos (no tenemos claro el papel de cada uno, quién es el practicante, quién el destinatario, qué grupos van a ser afectados, etc.) y cambiantes. Todo ello hace a su vez más complejo, incierto e inestable el análisis

ético, aumentando las disyuntivas y dificultades, pero también las posibilidades de interacciones y sinergias positivas.

Valores. Cuantos más actores, más valores. La pluralidad y diversidad de valores y relaciones multiplica los espacios de ambigüedad (acerca de los valores e intereses reales de cada actor) y la posibilidad de divergencias o conflictos entre los valores o la eventualidad de interacciones y dinámicas de efectos imprevisibles. Esa pluralidad y diversidad incrementa también la carga política de la investigación y la acción psicosocial (con frecuencia ligadas a la lucha por el poder y los recursos escasos), enfrentando al practicante con la clásica y polémica cuestión de la neutralidad o el compromiso partidista. Si en la deontología tradicional sólo contaban los valores del profesional (los valores deontológicos), en la ética psicosocial han tenerse también en cuenta otros valores *sociales,* que se pueden concebir como los valores de otros actores sociales (o valores asociados a la especial situación —de marginación, explotación, vulnerabilidad, degradación personal— social de esos actores).

La tarea de identificar y «aplicar» los valores es en la APS bastante más difícil. ¿Por qué? Porque mientras en el trabajo individual el profesional asumía simplemente unos valores deontológicos relativamente claros y bien perfilados, en el trabajo psicosocial debe tener en cuenta otros actores y otros valores (los de los actores sociales relevantes) mucho menos claros. Puede albergar así dudas importantes sobre quiénes son «los otros» (o a quiénes representan realmente los actores presentes), o cuáles son sus auténticos valores morales. Desde el punto de vista moral nos enfrentamos, en todo caso, a una de dos posibilidades genéricas:

1. El conjunto de valores de los actores son concordantes, o al menos *compatibles* entre sí.
2. Ese conjunto es discordante, de forma que los valores de unos actores son sustancialmente diferentes de los de otros.

En el primer caso (concordancia valorativa general) el practicante podrá trabajar global y armónicamente con todos los actores; en el segundo (discordancia valorativa) habrá de jerarquizar los valores, priorizando los de unos actores sobre los de otros.

Tiene por otro lado sentido incluir en el análisis ético psicosocial (o al menos tener en cuenta) no sólo los valores *explícitos* o declarados (casi siempre positivos y altruistas) sino también los valores *implícitos* (que suelen corresponder a «antivalores» o intereses). Esos intereses están en general ligados a aspectos que, aunque por su carácter «egoísta» o «autobenéfico» (la búsqueda para sí de poder, estatus o prestigio social) no son externamente explicitados, ejercen una gran influencia sobre el comportamiento de los actores en muchas situaciones y casos. Hay que ser consciente de que al introducir los intereses o valores egoístas estamos, no obstante, cruzando las fronteras entre la ética y la política y mezclando el análisis ético con el estratégico-político. Ese mestizaje puede ser una buena idea, siempre que no confundamos unos aspectos (éticos) con otros (políticos), aunque los mezclemos en el análisis y la acción.

Opciones. La complejidad de los asuntos psicosociales, la pluralidad de actores y valores, la menor familiaridad con las técnicas de actuación y sus efectos y las condiciones cambiantes de la APS producen espacios de ambigüedad y «opcionalidad» (de *anomia,* en definitiva) muy superiores a los que existen en la acción individual. En otras palabras, en la APS no sólo existen más opciones, sino que, además, esas opciones están *relacional y dinámicamente «encadenadas»,* de forma que lo que suceda en un momento de la actuación a un actor condiciona tanto las opciones subsiguientes de ese actor como las reacciones del resto de actores. En la práctica no sólo debemos identificar las opciones o alternativas realmente diferenciadas, sino que conviene tener en cuenta la *viabilidad estratégica,* es decir, la medida en que son realizables con los medios a nuestro alcance. Eso nos facilitará, por otro lado, la selección de aquellas opciones viables, frente a las que, aun siendo moralmente meritorias, no son viables en la coyuntura subjetiva y contextual concreta.

Consecuencias. La complejidad de la ética psicosocial no radica sólo en la multiplicidad de consecuencias (unas positivas y otras negativas) sino en que, además, las consecuencias afectan a más actores (a veces a *terceros* que no han hecho solicitud alguna ni dado su consentimiento a la actuación) y son más *polivalentes* en función de los distintos valores en juego. Lo que es bueno para A puede ser malo para B y relativamente indiferente para C. Unos preferirán que en su comunidad se construya una escuela, otros que se mejore la seguridad, que se creen más puestos de trabajo o que se ayude económicamente a las familias más necesitadas. Es obvio que, en tales condiciones, la evaluación que los miembros de un colectivo o comunidad hagan de las consecuencias de una acción determinada va a ser diversa.

Para hacer moralmente inteligible la APS asumimos que los actores evalúan las consecuencias a la luz de sus *valores*. La identificación de los valores de los actores tiene entonces una doble función e importancia: *per se,* como parte del análisis ético de la situación (planteamiento del problema), o como base para anticipar las consecuencias que las acciones a realizar tendrán para los actores (por lo menos la parte de esas consecuencias «determinada» por los valores éticos) y, a partir de ahí, sus reacciones ante las acciones previstas. Si, como se ha señalado, añadimos los intereses o valores implícitos, habríamos de tener una base comprensiva y predictiva más sólida dentro de la relativa complejidad y opacidad de todo comportamiento humano, sea este personal o colectivo.

Ya se ve que el esquema AVOC (actores, valores, opciones, consecuencias) no sólo nos ayuda a identificar los ingredientes básicos de la ética de la APS y las diferencias que en ellos presenta respecto de la ética profesional individual, sino que sienta las bases para abordar las cuestiones éticas: al identificar los actores y sus valores estamos «planteando el problema» ético, y al determinar las opciones y sus consecuencias estamos desplegando las «soluciones» a esos problemas. Aunque, conviene aclarar, el proceso AVOC no encierra ningún elemento o automatismo metodológico que evite elegir y optar, es útil, como se verá en el capítulo 6, para identificar y realzar los materiales básicos (actores, valores y consecuencias) que nos

permiten hacer esas opciones de forma más consciente y ordenada.

RESUMEN

Ética psicosocial realizable

Tomada en su conjunto, la APS ha tendido a *minusvalorar* o ignorar sus *implicaciones valorativas* y su *responsabilidad ética*. El activismo moralmente irreflexivo, la debilidad de su base técnica y científica, el predominio de la visión positivista e hiperracionalista del análisis y la acción psicosocial para ganar credibilidad científica y técnica, así como el «buenismo» maniqueo que privilegia la autoindulgencia y las buenas intenciones frente a la eficacia y la responsabilidad objetiva por los resultados, son razones que explican la desatención de los aspectos éticos y valorativos de la praxis psicosocial. Como la evitación del tema resulta tan ineficaz e inadecuada como el recurso a la gran retórica declarativa (hacia el exterior) y a la deontología clínica (en la práctica interna), se ha producido un vacío relativo de valores y pautas morales de actuación adecuados (anomia moral), a menudo «absorbido» por los practicantes en forma de tensión personal, frustración profesional y debilitamiento del compromiso social.

El abordaje de la ética psicosocial no es sólo prácticamente apremiante; se justifica también por centralidad de la moral para el *desarrollo humano* —la meta positiva de la APS—, en la medida en que elegir y tomar decisiones en base a concepciones reflexivas del bien y el mal y responsabilizarse de las propias acciones y sus consecuencias —la quintaesencia de la ética— fundamenta un desarrollo humano al que la técnica y la ciencia sólo pueden contribuir si han sido articulados como medios de fines y proyectos humanos conscientemente forjados. El practicante psicosocial puede contribuir al desarrollo humano de aquellos con quienes trabaja, ayudándolos a: conocerse a sí mismos y ser conscientes de las fuerzas que moldean su vida personal y social, identificar en qué valores fundar un proyecto conscientemente elegido de vida personal y colectiva, y obtener el poder y otros medios precisos para hacer realidad ese proyecto. Para ayudar a otros el practicante psicosocial debe antes definir y hacer explícitos el ideal de persona y sociedad (ética) que guiará su actuación y posibilitará que la sociedad evalúe la APS en función de su aportación al logro de esos ideales.

Adoptar el desarrollo humano como meta global de la APS lleva a proponer *la promoción del otro como ser humano vinculado, digno y capaz de autodeterminación* como postura ética básica en este campo. Pero asumir un mandato moral tan altruista y ambicioso como base de la práctica psicosocial suscita serias dudas ligadas sobre todo a la viabilidad de tal mandato en el mundo real. En la medida en que la ética comunitaria que fundamenta tal postura se asienta sobre valores (comunidad, alteridad, reciprocidad, confianza, poder compartido) frontalmente opuestos al individualismo, autointerés y utilidad, que cimentan la modernidad capitalista, corre

serios riesgos de inviabilidad *social*, cuya minimización exige introducir un cierto *realismo estratégico*. Ese realismo recomienda que la APS: sea consciente de la dificultad de la tarea contracultural y del poder de los valores a combatir, sostenga convincentemente la bondad de los valores antagonistas y su efectividad para lograr una forma alternativa de desarrollo humano, y coopere con otras fuerzas y movimientos que persigan cambios socioculturales convergentes.

Asegurar la *viabilidad práctica* de la ética psicosocial exige: valorar realistamente la solidaridad y los recursos personales y sociales existentes; compartir el poder y los recursos propios con otros; tener en cuenta los intereses y el poder externo (además de los valores morales), así como el autobeneficio legítimo que garantice el autocuidado del practicante y evite su «quema» psicológica; perfeccionar la técnica y el conocimiento psicosocial; y manejar competentemente la complejidad, ambigüedad y dinamismo distintivos de la ética psicosocial frente a la deontología de base biomédica.

En vista de lo anterior, se propone una *ética psicosocial realizable* que, en base al potencial civilizador y benefactor de las interacciones profesiones, «inyecte» valores morales en el ejercicio del rol psicosocial. La tarea de la ética en la APS consiste en hacer juicios de valor y tomar decisiones en base a valores (y consecuencias) humanamente relevantes a tener en cuenta, junto a los conocimientos y la pericia técnica a la hora diseñar, realizar y evaluar las investigaciones y acciones prácticas. El practicante debe responder ante la comunidad de cómo usa la autonomía de actuación, el poder técnico y social y el conocimiento científico, para qué (fines) y para (beneficio de) quién los usa.

La *deontología*, la ética profesional de origen médico, asume una relación diádica entre un profesional y un cliente individual, en que las acciones del primero generan consecuencias para el segundo de las que el profesional es responsable. Se compone estructuralmente de aspectos subjetivos y aspectos objetivos que, junto a una relación profesional que conecta unos y otros, interactúan dinámicamente en la acción moral. Los *aspectos* previos y *subjetivos* incluyen: la autonomía del profesional para decidir el curso de acción a seguir y los medios técnicos a utilizar para alcanzar unos objetivos acordados con el cliente, la conciencia moral, una intencionalidad que presumimos benefactora y un poder esencialmente técnico (la pericia científico-técnica para predecir y obtener efectos beneficiosos para el cliente) pero también sociorrelacional (derivado del prestigio social y la capacidad de movilización de la interacción profesional). Aunque la *relación* profesional se asume objetiva (para lograr resultados tangibles), sin implicación emocional (más allá del compromiso con la mejora del cliente y el logro de objetivos especificados), cooperativa y basada en la confianza mutua, varios de esos supuestos son cuestionables —y cuestionados— en algunas líneas de actuación individual y psicosocial.

La elección del *destinatario* es otro aspecto intermedio relevante ligado a los valores de justicia social y beneficencia. La comunidad en su conjunto, el gobierno que la representa políticamente, los sectores y grupos más vulnerables, y el cliente que patrocina y paga la actuación son los destinatarios potenciales comunes en la

APS. El destinatario elegido en cada caso dependerá del valor privilegiado en un contexto específico: si se prima la justicia social, el destinatario serán los más débiles; si se prefiere la beneficencia total, la comunidad. El ideal es combinar ambos valores (beneficencia y justicia social), lo que permitirá trabajar con todos; si eso no es viable habrá que elegir entre unos y otros actores (o entre los valores asociados).

La *responsabilidad* por las consecuencias de las acciones es el tema más importante de la ética objetiva (y quizá de toda la ética profesional), no sólo como «precio» a pagar por la libertad sino porque constituye a la persona humana, que privada de responsabilidad queda anulada. En la acción profesional depende de la autonomía profesional y el poder técnico y sociorrelacional a disposición del practicante y plantea un cúmulo de cuestiones teóricamente relevantes y prácticamente apremiantes conectadas con los distintos aspectos de la acción moral: ¿ante quién es responsable el practicante?, ¿de qué es responsable?, ¿debe tener límites la responsabilidad profesional?, ¿debe asumir el practicante responsabilidad por consecuencias negativas?, ¿quién define qué es una consecuencia negativa o positiva?, etc. El enfoque cooperativo y potenciador aquí adoptado aporta algunas orientaciones de respuesta. Es por tanto preferible compartir la responsabilidad con los clientes, adoptando una postura de *corresponsabilidad* que, sin rehuir la responsabilidad del practicante, permita (y obligue) a los clientes o comunidades a asumir la suya y facilite la colaboración y el crecimiento mutuo. La bondad (o maldad) de las consecuencias debería ser acordada por el practicante y el cliente o comunidad, en base a los objetivos conjuntamente considerados deseables; pero si hay un desacuerdo debe primar el criterio moral de los segundos, ya que siendo la elección del bien el fundamento de la autonomía, el practicante no tiene ningún derecho a imponer a otros sus criterios de elección, aunque sí a retirarse de una acción cuyos fines no comparte.

La responsabilidad por las consecuencias de las acciones profesionales depende del grado en que sean científicamente *previsibles* y técnicamente *controlables*. En general, el practicante debe asumir responsabilidad por las consecuencias (positivas y negativas, buscadas o no buscadas) de las acciones que profesionalmente dirige o realiza (y que puede razonablemente anticipar y controlar), llevando a cabo el mejor trabajo de documentación científica, diseño, realización y evaluación posible, y manteniendo la relación profesional óptima para las dos partes en función de los recursos y capacidades de cada una. Si aun así se producen *efectos* negativos e *indeseados*, la responsabilidad de esos efectos corresponderá a las ciencias y profesiones psicosociales, existiendo en todo caso el deber colectivo de *reparar* o compensar los daños causados por la actuación profesional.

La ética psicosocial se diferencia de la individual tanto en su vertiente interventiva (en la *acción*) como en la analítica e investigadora. Comparada con la deontología clínica, la ética de la APS: tiene un destinatario social, no individual, donde las personas están interrelacionadas; contiene no una sino varias relaciones significativas, que pueden provocar en el practicante conflictos de lealtades; el contexto tiene un mayor peso en la definición y modulación de cada aspecto del proceso de actuación;

el practicante suele ser colectivo (a menudo un equipo multiprofesional); las bases técnica y científica son más débiles e indefinidas, lo que complica la elección de estrategias de actuación y la asunción de responsabilidades; está más cargada políticamente, y puede implicar una mayor distancia social y cultural entre practicante y destinatario.

También hay diferencias en la generación y *uso de conocimiento* en el ámbito psicosocial respecto a la metodología científica tradicional. Mientras que en la tradición objetivista la veracidad —entendida como reflejo de la realidad existente— es el valor básico, la visión subjetivista asigna un papel central al poder y la cultura en la «construcción» del conocimiento, con lo que la equidad relacional y el empoderamiento serían también valores a tener en cuenta en la generación y uso de conocimiento. Aunque las dos posiciones son en principio compatibles, tienen implicaciones relevantes tanto para el tipo y calidad de conocimiento obtenido como para el papel de los informantes y la relación establecida con ellos. Conviene, en ese sentido, reconocer el potencial de los enfoques comunitarios y comprensivistas de combinar el conocimiento de la realidad mediado por el investigador psicosocial con la promoción humana de los participantes, reconocidos en su cualidad de sujetos agentes y no sólo como meros objetos o fuentes de información, de forma que, al poner a su disposición el conocimiento generado con apoyo público, puedan convertirse en actores sociales conscientes e informados.

Se identifican los cuatro ingredientes básicos de la ética de la APS, que podemos usar tanto para resumirla estructuralmente como para abordar y buscar solución a los problemas y dilemas de la práctica: actores, valores, opciones y consecuencias (AVOC).

— *Actores.* Además del profesional (con frecuencia colectivo) y el destinatario (a menudo social), la APS contiene otros actores (y reactores) que debemos considerar analítica y operativamente: un cliente (que patrocina y paga la investigación o la acción) y que puede ser distinto del destinatario, los afectados por la actuación y aquellos que, aun no estando directamente afectados, están interesados en la actuación (*stakeholders, reactores* potenciales a favor o en contra).
— *Valores:* tanto aquéllos tradicionalmente asumidos como propios de la profesión (valores deontológicos), como los valores de los distintos grupos comunitarios, que pueden o no converger entre sí y con los del practicante, lo que genera un amplio y dinámico mosaico proclive al conflicto y necesitado de clarificación y negociación entre grupos y posiciones.
— *Opciones* o alternativas entre las que elegir, notablemente más amplias (e indeterminadas) que en la actuación individualizada; esas opciones suelen ser interdependientes y estar dinámicamente encadenadas, condicionándose mutuamente y su viabilidad estratégica es un dato relevante para tomar la decisión final.
— *Consecuencias* de la investigacion o acción múltiples, polivalentes (en

términos de valores y significado moral para los actores) y más difíciles de preveer y dominar que en la acción individual, lo cual torna más compleja y difícil la evaluación de la responsabilidad del practicante.

PALABRAS CLAVE

- Descuido de la ética.
- Causas y consecuencias de la desatención ética.
- Anomia moral profesional.
- Ética comunitaria.
- Viabilidad social de la ética comunitaria.
- Viabilidad práctica.
- Autocuidado.
- Etica psicosocial realizable.
- Aspectos subjetivos de la ética psicosocial.
- Autonomía profesional.
- Intencionalidad.
- Poder técnico.
- Relación profesional.
- Destinatario de la acción psicosocial.
- Aspectos objetivos de la ética psicosocial.
- Responsabilidad por las consecuencias.
- Corresponsabilidad.
- Efectos indeseados.
- Diferencias entre ética psicosocial-deontología clínica.
- Diferencias en la generación y uso del conocimiento.
- Actores.
- Valores.
- Opciones.
- Consecuencias.
- Modelo AVOC.

4

Valores y principios deontológicos y sociocomunitarios

Como encarnación del bien, de lo humanamente valioso, los valores fueron reconocidos en el capítulo precedente como la materia prima de la ética. Y, aunque el término «valores» sea frecuentemente usado de modo vago o equívoco, convenimos en identificarlo con los ideales o cualidades deseables de la persona, la sociedad y la relación interpersonal, como representación respectiva de los valores personales, sociales y relacionales. Se acordó también que, en la medida en que son fuente de acción y práctica social, es necesario identificar y definir un conjunto de valores asumible (y asumido) por los profesionales que, al especificar las nociones de lo que es bueno, iluminen moralmente los problemas y aspiraciones de esa práctica y los métodos para abordar unos y otras y ayuden, además, a aclarar las dudas y resolver los conflictos éticos surgidos en la práctica cotidiana.

Para cumplir la función de orientación práctica de los valores morales, asumimos una concepción holística donde unos valores están interconectados con otros y se pueden graduar u ordenar (en base a la «valía» humanamente asignada) mediante juicios de valor. La identificación de esas constelaciones valorativas y la ordenación jerárquica de los valores (incluyendo la modulación subjetiva y contextual) hacen posible que el profesional tome decisiones y actúe de forma moralmente correcta, en vista de las opciones disponibles y de las consecuencias previsiblemente derivadas de la realización de esas opciones.

Dado que esas consecuencias (positivas o negativas) están incorporadas en los valores de beneficencia y maleficencia, podemos concluir que la consideración conjunta de los valores relevantes en cada caso y situación —incluyendo la especificación de la beneficencia y maleficencia esperables— permite la evaluación y toma de decisiones morales mediante constataciones de hecho y juicios de valor que tengan en cuenta las intenciones y condiciones iniciales del practicante (autonomía y poder técnico), las relaciones establecidas (y las posibilidades de colaboración asociadas), los factores contextuales (y su incidencia sobre actores, valores, opciones y consecuencias) y la base técnico-científica que permite predecir y dominar varias de las consecuencias esperables.

1. ORIENTACIONES VALORATIVAS Y PROBLEMAS MORALES

La misión de este capítulo es especificar los valores deontológicos y sociocomunitarios apropiados para esclarecer moralmente los problemas psicosociales y para orientar las opciones de actuación y valorar las consecuencias humanas de esas opciones. Estamos tratando de identificar las *soluciones* a los problemas y cuestiones éticas que descubriremos en el capítulo 5. Pero esa pretensión puede suscitar algunas dudas.

Cabe, primero, preguntarse: ¿los valores que buscamos son verdaderas «soluciones», en el sentido que se suele dar a esa palabra en la resolución racional de problemas, o bien aportan un tipo de respuesta diferente más acorde con las características del hecho moral? Y, segundo, se trate o no de verdaderas soluciones a los problemas éticos, ¿no deberíamos plantear primero los problemas y proponer después las soluciones o respuestas? Veamos.

Las «soluciones» éticas que buscamos en los valores no tienen, en primer lugar, el mismo significado que las soluciones científicas o técnicas; *no* son, en verdad, auténticas soluciones en el sentido usual del término. En las soluciones racionales —científicas o técnicas— buscamos la explicación racional y empíricamente válida a una cuestión o problema y el mejor procedimiento de abordarlo en base a esa explicación, con lo que, aceptados ciertos presupuestos, obtenemos una solución que se puede demostrar empíricamente superior a otras posibles, *la* solución. Las «soluciones» morales son, en cambio, *orientaciones valorativas* para actuar, que ni especifican el modo de resolver un problema o la respuesta a una cuestión (esa especificación corresponde, como se indicó, a la técnica y la ciencia), ni siguen una lógica racional o empírica (colección de datos y constatación de hechos; interconexión de hechos o datos; derivación, contraste y verificación empírica de hipótesis), sino una lógica, esencialmente diferente, de valoración de aquello que es humanamente bueno o valioso en las acciones y relaciones humanas (y sus consecuencias), así como en los enfoques, medios y métodos usados para resolver los problemas planteados.

Con lo que, como colofón, ni existe un criterio empírico decisorio ni, por tanto, una única respuesta válida (*la* solución), sino más bien varias opciones o alternativas algunas de las cuales pueden ser preferidas según criterios de valor intrínsecos o adscritos a consecuencias constatables. Que las orientaciones valorativas no sean verdaderas soluciones técnicas o científicas no significa, como se ha razonado en los capítulos precedentes, que carezcan de importancia: al contrario, el énfasis habitual del hombre común y el profesional en los esquemas racionales de solución de problemas hace imprescindible introducir criterios morales que actúen como contrapesos al encarar unos problemas y aspiraciones humanas siempre preñados de intenciones y subjetividad. La mirada evaluadora y posibilista de los valores morales complementa, de ese modo, la restrictiva visión racional-determinista de la ciencia y la técnica.

La constatación del carácter supra-racional de las guías morales sí implica, en cambio, que no debemos esperar «soluciones» estrictamente éticas a los problemas psicosociales, como tampoco podremos esperar soluciones exclusivamente técnicas

para ellos, en la medida en que esos problemas contienen dimensiones objetivas y subjetivas, científicas y morales. Con lo que, como se argumentó en el capítulo 2, el abordaje de las cuestiones humanas individuales o colectivas habrá de combinar necesariamente soluciones técnicas y estratégicas de base racional con orientaciones morales de base evaluativa.

TABLA 4.1
Funciones de los valores y principios éticos en la acción psicosocial

- Iluminar/cualificar moralmente los temas y métodos psicosociales y los problemas y aspiraciones personales y colectivos.
- Despejar dudas y orientar moralmente el abordaje práctico de las dudas y problemas éticos.
- Sugerir opciones y alternativas de actuación ante los problemas y aspiraciones examinados.
- Valorar éticamente los efectos y consecuencias de las opciones y acciones psicosociales.

Segundo, ¿por qué tratar antes las «soluciones» (orientaciones, en realidad) morales que los problemas (abordados en el próximo capítulo)? Aunque no se me ocurre ninguna razón definitiva para apoyar ese proceder, tampoco la veo para invertirlo, de forma que nos ocupemos primero de los problemas y luego sus soluciones. Este procedimiento, que he usado frecuentemente, sigue la lógica práctica primigenia en que los retos o problemas preceden a la búsqueda de soluciones; sin embargo, desde un punto de vista expositivo obliga a tratar una serie de tópicos cuyo abordaje queda inconcluso (o pendiente de una larga búsqueda), porque el valor o principio que iluminaría moralmente esos tópicos no ha sido aún explicado. Abordar, por ejemplo, el tema del intervencionismo sin haber aclarado el significado del valor autonomía, o tratar los efectos de una actuación sobre la distribución de poder en una comunidad sin definir el valor justicia social, obliga a una indagación inductiva de los valores apropiados a cada caso que puede ser excelente para el análisis casuístico (inductivo), pero no para la exposición general aquí realizada.

El proceder contrario (aquí adoptado) arroja un saldo igualmente mixto de ventajas e inconvenientes. Exponer primero el catálogo de «soluciones» (los valores pertinentes a los temas y problemas de un área de actuación) y ver luego cuáles son aplicables a un problema o tema determinado de ese área es una táctica esencialmente deductiva que, aunque desde el punto de vista práctico se salta la derivación de valores y principios (la mitad inductiva de la ética), resulta expositivamente conveniente porque, una vez definidos los valores fundamentales, aporta las referencias para pensar cuál o cuáles de esos valores serán moralmente adecuados («aplicables») al tema o problema a mano.

Así, al contemplar el excesivo intervencionismo del practicante, en base, por ejemplo, a sus intenciones psicológica o socialmente benefactoras, al analista o practicante habría de venirle a la cabeza tanto el daño a la autonomía (o el desarrollo humano) que el exceso de intervención puede causar, como el defecto de beneficencia que la inhibición de actuación puede ocasionar. O cuando una actuación tenga lugar

en contextos sociales de gran desigualdad o con sectores sociales extremadamente pobres, el practicante no puede ignorar la justicia social o la redistribución del poder, aun cuando tenga también en cuenta la beneficencia del conjunto social.

1.1. La tarea práctica: «traduciendo» los valores a acción

La tarea de identificar y definir el catálogo de valores pertinentes para la investigación y acción psicosocial propuesta para este capítulo presenta una dificultad desigual en sus dos vertientes, la deontológica y la sociocomunitaria. Explicar los valores deontológicos no entraña grandes dificultades, pues esos valores gozan de un amplio consenso y familiaridad entre profesionales. El problema es que, al estar pensados para la acción individual, debemos reconsiderar su significado y pertinencia en el terreno psicosocial. Identificar y definir los valores sociocomunitarios es, en cambio, más problemático y azaroso: al no gozar del consenso y aceptación general explícita de los valores deontológicos, su formulación no deja de ser una mera propuesta que puede o no ser aceptada por las distintas orientaciones, áreas y, en último término, practicantes del trabajo psicosocial.

Aclaremos algo más la tarea. La pretensión del capítulo se debe limitar a ofrecer un *catálogo* general *y «horizontal»* de valores pertinentes al conjunto de la APS y de su significado genérico en ella. Hay, sin embargo, tres tareas complementarias (ya sugeridas en el capítulo 2 al examinar la ética práctica) pero esenciales para traducir la «teoría» de la evaluación a la acción práctica concreta y «situada» (tabla 4.2).

TABLA 4.2
Traduciendo los valores en acción: pasos

1. Seleccionar los valores relevantes para el caso y la situación encarada; aclarar y especificar su significado ético para los sujetos y la situación.
2. Graduar la valía moral de cada valor en relación al conjunto seleccionado, modulando subjetiva y contextualmente esa valía.
3. Relacionar e interconectar los valores, jerarquizándolos según el mérito moral acordado (2) para resolver la competencia o el conflicto de valores al elegir entre opciones.

1. *Seleccionar* qué valores son relevantes para el tema, los actores y la situación específicos, y aclarar *cómo* son relevantes (cuál es el significado del valor A para el problema y situación X con los actores concretos implicados).
2. *Graduar* moralmente cada uno de los valores, en vista de su mérito moral y significado para los sujetos, el caso y el contexto sociopolítico específico; eso debería permitir ordenar *jerárquicamente* «aquí y ahora» la constelación de valores elegida.
3. Averiguar las *relaciones* entre los distintos valores, lo que, junto a la jerarquización antes establecida, posibilitaría, por un lado, crear un plan de acción realizable y coherente y, por otro, dirimir los conflictos y contradicciones entre pautas de comportamiento derivadas de distintos valores.

El proceso trifásico aquí sugerido guarda cierta semejanza con el ofrecido por Beauchamp y Childress (1999) para la bioética: especificación de principios (y reglas), ponderación de su importancia relativa y supeditación de unos principios a otros. Como resultado de su recorrido (que no debe imaginarse lineal o exclusivamente racional), el analista debería ser capaz de establecer qué pautas y líneas de actuación vamos a primar y por dónde empezar en vista de los medios disponibles. O qué hacer cuando del valor A se deriva una pauta de acción M y del valor B una pauta divergente o directamente opuesta a M: la posición jerárquica respectiva de los valores A y B nos dará la respuesta.

Maticemos. Las constelaciones de valores nunca son estrictamente «horizontales»: cada practicante o línea de acción psicológica o social singular tiene preferencias valorativas genéricas que establecen un perfil u *orientación moral* básica en la acción profesional. Así, en la ética individual, en el clásico binomio autonomía-beneficencia, mientras unos primarán la beneficencia (el bien que el profesional puede hacer), otros pueden pensar que promover la autonomía decisoria o finalista (capacidad de tomar decisiones o lograr la autonomía vital) es más importante que la beneficencia concreta producida por una acción. O, en el campo social, una corriente puede hacer de la autonomía personal o colectiva el eje moral de la acción, otra puede tomar la justicia social y la equidad como centros de gravedad moral, y aún otra puede considerar que lo principal es promover la solidaridad y la comunidad frente al autointerés y el individualismo dominantes.

Estos perfiles u orientaciones básicas no sólo introducen una cierta «verticalidad» en la constelación «horizontal» de valores elegida, estructurándola en torno a un valor fundamental (beneficencia, autonomía, justicia social, solidaridad social), sino que también muestran claramente la posibilidad de distintas «soluciones» al problema moral enfrentado en función del perfil moral erigido sobre ese valor fundamental. Como según lo explicado, las orientaciones o perfiles morales son opciones singulares (derivadas de un tronco o unos núcleos de valores centrales), una exposición general de orientación práctica como esta sólo puede aspirar a proponer un cuadro «horizontal» de valores (y principios de actuación), junto a las pautas de comportamiento asociadas, introduciendo «indicaciones de verticalidad» o relevancia en torno a ciertos valores prominentes (o especialmente «valiosos»), según criterio propio o de determinadas corrientes o autores respetados. Se pueden también señalar algunas relaciones (concurrentes o divergentes) genéricas entre los valores, que pueden o no dar lugar a conflictos prácticos.

Y es que no siempre las dicotomías valorativas (libertad-justicia, beneficencia-autonomía, seguridad-libertad, etc.) se traducen en verdaderos conflictos o dilemas que impliquen *opciones excluyentes,* es decir, en alternativas en las que el apoyo del valor A en la situación X supondrá un perjuicio cierto para el valor antagónico B. De otro modo, el conflicto o dilema «frontal» de valores sólo se dará si no hay ninguna opción viable que favorezca a la vez (o permita combinar, aunque en distinto grado) los valores antagónicos A y B. Puede, por ejemplo, existir una opción concreta que permita combinar libertad y seguridad o beneficencia y autonomía; sólo en el caso de

que no dispongamos de —o no podemos vislumbrar— esa opción, tendremos un verdadero conflicto de valores, o, si se quiere, un dilema práctico de elegir entre opciones, más o menos deseables o indeseables, pero incompatibles entre sí.

1.2. Sistema valorativo psicosocial: valores deontológicos y valores sociocomunitarios

Abordo ahora la descripción de los valores y principios *deontológicos* y sociocomunitarios y de las pautas de comportamiento asociadas. En el caso de los valores deontológicos, dedico más atención a aquéllos —beneficencia, no maleficencia y autonomía— que fundamentan la acción profesional en nuestra cultura. La naturaleza primordialmente individual de esos valores exige poner de manifiesto, al mismo tiempo, las limitaciones teóricas y prácticas de muchos de ellos en el terreno psicosocial, y tratar de modificarlos y redefinirlos en una dirección más social que extienda su pertinencia y aplicabilidad al ámbito psicosocial. Eso es particularmente cierto en el caso de la autonomía, donde es preciso postular una autonomía compartida de titularidad colectiva que libere al valor de la implacable tenaza individualista a la que la cultura y la deontología la han sometido secularmente.

He añadido dos principios que, aunque usualmente ignorados por la deontología, se antojan esenciales para cualquier forma de práctica: la veracidad, necesaria para regular moralmente la obtención de conocimiento e información y su manejo en la interacción profesional y la evaluación de resultados; y el autointerés razonable del practicante, que garantice su integridad personal y la viabilidad humana y técnica de su trabajo para otros. Incluyo una visión a la vez vaga y restrictiva de la justicia social, que, dada la naturaleza radicalmente social del valor, sólo alcanza un desarrollo y concreción acorde con su relevancia moral entre los valores *sociocomunitarios*. Aparte de la justicia social, astro rey de cualquier moral social, la particular constelación valorativa elegida subraya la solidaridad como valor de indiscutible centralidad moral pero de limitada efectividad funcional en nuestras sociedades, marcadas por el individualismo, la utilidad y el egoísmo moral.

2. VALORES Y PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS EN LA APS

Los valores y principios deontológicos tienen una base clínica e individual ligada a la deontología médica: están pensados para guiar la actuación profesional con clientes individuales en problemas de salud. Su validez en la APS es, pues, limitada, tanto más cuanto más alejadas estén las situaciones abordadas de los temas biomédicos y de la práctica individualizada. Así, mientras en los niveles microsociales (familia, grupos pequeños) las condiciones se aproximan más a aquellas interindividuales en que los principios deontológicos mantienen cierta vigencia, en los niveles meso y macrosociales las limitaciones de esos principios son más visibles y la necesidad de valores sociocomunitarios más patente. Parece por

tanto aconsejable usar los valores deontológicos sólo como punto de partida, teniendo en cuenta sus límites e insuficiencias en la APS y haciendo una lectura marcadamente social de ellos que mejore su sintonía con las orientaciones y los temas psicosociales.

La *deontología* pivota sobre tres valores que vienen a corresponder con cada uno de los actores básicos que concurren en la acción profesional: la autonomía, el valor del cliente, la beneficencia del cliente, el valor asumido por el profesional y la justicia social, el valor de la sociedad. Basta añadir la veracidad y la confianza como valores sustentadores de la relación entre profesional y cliente, y el interés propio, como segundo valor del profesional, para tener un conjunto de seis valores (autonomía/autodeterminación, bienestar, justicia social, verdad, confianza y autointerés) y siete principios (autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia social, veracidad, confianza y autocuidado) que expongo brevemente y que resumen las cuatro tablas adjuntas (4.3 a 4.6) junto a algunas pautas de actuación derivadas de cada principio.

2.1. Beneficencia y no maleficencia

Los principios de beneficencia y no maleficencia se limitan a reiterar en la acción profesional la misión general de la ética: procurar el bien y evitar el mal de sus clientes, actuando y relacionándose con ellos de una manera que les resulte beneficiosa. Aunque la amplitud y vaguedad de ese mandato permite generalizar los principios de beneficencia y no maleficencia a través de las culturas y sociedades, deja a las profesiones y a los destinatarios el trabajo de especificar su contenido: en qué consiste «el bien» a conseguir y «el mal» a evitar. Como se concluyó en el capítulo 3, la *definición* de la beneficencia y la maleficencia en una acción cooperativa orientada al desarrollo humano debe ser fruto del acuerdo entre destinatario y practicante, pero si el acuerdo no es posible la definición corresponde al destinatario, como sujeto primero del bien o mal a lograr a través de la acción profesional y, por tanto, de su identificación inicial.

Beneficencia —y no maleficencia— implican en el profesional una actitud benevolente y benefactora, característica de las llamadas «profesiones de ayuda», y se puede «traducir» en dos valores más concretos: la *eficacia* de la actuación profesional y el *bienestar* del destinatario (tabla 4.3). Promover la beneficencia supondrá, entonces, que el practicante, animado por una actitud benefactora, actúa eficazmente en promover el bienestar —y la evitación del daño— de aquéllos con quienes trabaja, entendiendo que, en general, la evitación de daños significativos debe primar sobre la producción de beneficios. Estas pautas simples y generales dejan, sin embargo, numerosas dudas y cabos sueltos. Así, «bienestar» no equivale a «bien»: el bienestar inmediato y subjetivo no es necesariamente lo mejor para una persona o colectivo en el largo plazo, que suele incluir esfuerzo, sacrificio, postergación de satisfacciones inmediatas, «negociaciones» con otros y planes globales de vida.

TABLA 4.3

Principios deontológicos: beneficencia y no maleficencia

Beneficencia: hacer el bien y ser eficaz en la acción psicosocial

- Actitud benefactora y benevolente hacia aquellos con quienes trabajamos.
- Ayudar y «servir» al otro, no a sí mismo.
- No utilizar al otro en beneficio propio.
- Adquirir y ejercer la competencia profesional:

  — Realizar una evaluación adecuada y suficiente de los temas encarados, los mejores métodos para abordarlos y las situaciones para las que cada método es apropiado.
  — Obtener preparación y entrenamiento en los métodos y procedimientos válidos y eficaces de APS.

- Supervisión que optimice la eficacia y competencia del practicante y su desarrollo personal, moral y profesional.
- Elegir técnicas en función de su efectividad en el asunto encarado, no de las preferencias del practicante.

No maleficencia: evitar el daño, la ineficacia y la malevolencia

Incluye, además de las pautas de conducta derivadas de la beneficencia:

- Evitar/minimizar efectos secundarios (psicológicos, sociales, etc.) negativos.
- Supervisión que minimice daños causados por el practicante a otros (y a sí mismo).
- Realizar pruebas piloto (sobre todo en acciones nuevas, difíciles o con temas desconocidos).
- No desencadenar procesos cuyos efectos no podemos controlar durante la duración de la acción.
- Compensar —psicológica, económica o socialmente— por los daños profesionalmente causados.

Aunque el concepto de beneficencia (y no maleficencia) es amplio y difuso, su orientación y sentido general en la ética individual es bastante claro: se trata de procurar beneficios al cliente mediante la técnica y la relación profesional. En la APS, en cambio, ese sentido (y la focalización en un cliente individual) se *diluye y globaliza* notablemente, pues, al ser varios los actores implicados y tener intereses potencialmente divergentes, el beneficio buscado (y el perjuicio a evitar) debe ser global, incluyendo a todos los actores aunque se prime al destinatario primario de la acción. Sólo en la medida en que podamos jerarquizar a los actores, en base a criterios morales o de otro tipo, podremos por tanto tratar de *graduar* la beneficencia (y la maleficencia) a conseguir.

Pero, en la práctica, la pretensión moral de beneficiar a todos en grados variables, según la «importancia» moral, psicológica, social o de otro tipo de cada uno, puede resultar inviable. Si además introducimos en la ecuación el factor maleficencia (independiente hasta un punto de la beneficencia), tratando de proteger del daño a los actores más débiles o vulnerables aunque sean minoritarios, tendríamos unas pautas y esquemas de actuación difícilmente trasladables a la práctica en su literalidad. La pauta moral general sería la sugerida en el capítulo 3 para identificar al destinatario combinando los valores beneficencia y justicia social: primar el beneficio (y la evitación del daño) de los más débiles y buscar, en segundo lugar, la beneficencia del conjunto de actores relevantes, con la esperanza de que ambos criterios sean compatibles, pero estableciendo, en cualquier caso, un «suelo» moral de maleficencia que en ningún caso o actor debe ser rebasado.

Parece lógico identificar genéricamente la beneficencia o maleficencia de una acción con las *consecuencias* reales que la acción tiene para los participantes y afectados (especialmente para aquellos definidos como destinatario), que siempre implican, en todo caso, el significado que los efectos «objetivos» de la acción (su impacto) tienen para los afectados. Las consecuencias supondrán un criterio empírico útil para valorar la beneficencia de las acciones, pero no totalmente objetivo, ya que el significado de esas acciones (y sus consecuencias) para los distintos participantes viene en gran parte definido por los valores e intereses de esos participantes, con lo que la valoración de las consecuencias está, a fin de cuentas, tamizada por la subjetividad valorativa de los actores y puede (suele) ser, ya se ha repetido, marcadamente polivalente.

La aplicación del principio de primar la *evitación de daños* (psicológicos, sociales, económicos, etc.) sobre la producción de beneficios debe también ser matizada en tres direcciones. Primero, llevado al extremo ese principio conduce a la inacción total, ya que cualquier actuación humana (profesional o no) comporta riesgo de daños a unos o a otros, o al uso de técnicas o métodos «blandos» y conservadores que minimizan los riesgos pero también la potencia de los resultados favorables a obtener. Segundo, la experiencia muestra que las técnicas más potentes o eficaces en términos de resolver problemas o producir efectos buscados son las que generan también más efectos secundarios negativos para algunas personas o sectores sociales. El mandato genérico de promover la beneficencia y evitar la maleficencia en la APS es, entonces, demasiado simple y deberíamos quizá cambiarlo por el de *maximizar la beneficencia y minimizar la maleficencia*. Pero tampoco ese mandato estrictamente cuantitativo es suficiente, porque, en tercer lugar, no incluye algunos datos morales relevantes:

1. Hay *daños moralmente inaceptables* (la vida de una persona, el sufrimiento extremo, los grandes conflictos o injusticias, etc.) que conforman un «suelo» moral infranqueable para cualquier acción, por muchos beneficios generales que pueda generar al conjunto de actores.
2. La maximización de la beneficencia y minimización de la maleficencia no puede ser un criterio meramente numérico, «horizontal», sino que ha de ser «verticalmente» cualificado por otros valores morales (como la justicia social, la seguridad personal o la vida humana) y por factores psicológicos y sociales asociados a la acción, como la vulnerabilidad personal o los «desequilibrios» sociales existentes.

Requiere, de nuevo, un juicio moral ponderado a la luz de la extensión y significado de los beneficios esperables, los daños no evitables pero también de la vulnerabilidad de las personas que, por pocas que sean, pueden resultar seriamente perjudicadas.

2.2. Autonomía individual y autonomía compartida

Frente a la permisiva vaguedad y general aceptabilidad de la beneficencia, la

autonomía presenta un perfil moral mucho más rotundo y preciso, pero también, y precisamente por eso, mucho más polémico. La generalización del valor clave de la modernidad occidental y su asociación con el individualismo, la desvinculación social y el egoísmo moral cuestionan su aptitud para convertirse en guía moral universal. Y al ponerlo en el centro de la constelación moral profesional estamos introduciendo un punto de vista radicalmente moderno y occidental en la acción profesional y asumiendo las potencialidades, pero también los riesgos, de esa orientación cultural, que puede chocar frontalmente con las orientaciones de clientes o actores procedentes de culturas más comunitarias o solidarias.

El practicante psicosocial debe en esos casos ser consciente de las diferencias valorativas implicadas, evitando extrapolar un valor «naturalmente» asumido como universal cuando trabaja con colectivos social o culturalmente diferentes (como los inmigrantes), que pueden preferir otros valores más relacionales o sociales como la solidaridad, la interdependencia o la comunidad. Pero la autonomía es también fuertemente cuestionada entre nosotros, centrando un debate polarizado y lleno de aristas: la autonomía tiene muchas caras y, visto desde el prisma práctico que aquí interesa, la cuestión de su relativismo o universalidad valorativa rezuma ambivalencia. Nada más «natural», cabe pensar, que la aspiración personal o comunitaria a establecer sus propias metas y dirigir su vida rechazando que las unas o la otra le sean impuestas por algo o por alguien ajeno. El logro, en ese sentido, de la autonomía *negativa* —la liberación de condiciones, imposiciones y dependencias externas como la ignorancia, la pobreza, la enfermedad, el designio divino o el poder externo arbitrario y omnímodo— parece de entrada una aspiración o valor universal y «objetivo», sea o no reconocida subjetivamente por una persona o agrupación social singular.

Las dificultades aparecen, sin embargo, cuando, dando un paso más, tratamos de establecer la titularidad de la autonomía (a quién corresponde la autonomía en cada asunto y esfera vital) y su significado positivo, preguntándonos:

1. Autonomía ¿de *quién*?
2. Autonomía ¿para qué, cuáles son sus contenidos morales y vitales?

Un primer problema es que, al ser entendida como autonomía *individual*, como un atributo cuyo titular es el individuo, la autonomía exige —y fomenta en la conducta personal y social— la erosión de la solidaridad y el egoísmo ético. No es entonces de extrañar que, entronizada como valor supremo, la autonomía haya sido atacada desde ciertos sectores (Waterman, 1981; Bellah *et al*., 1989), acusándola de ser un peligroso disolvente social y un baluarte del egoísmo moral. Tampoco puede extrañar que al intentar trasladarla a otras culturas que no han seguido la senda occidental de individualismo, racionalidad y secularización, sea a menudo vista como una imposición cultural a rechazar.

Un abordaje más amplio y cabal del tema exige, en primer lugar, trascender el habitual sentido negativo del término y concretar —en respuesta a la pregunta «autonomía ¿para qué?»— los contenidos y el potencial positivo del valor autonomía.

Y requiere, en segundo lugar, que se reconozca un sujeto *titular* diferenciado y variable en función del nivel de afectación humana del tema tratado: autonomía individual, si el asunto concierne sólo a individuos; autonomía familiar, si corresponde al conjunto de miembros de la familia; autonomía comunitaria, si se refiere a la conjunción de sus componentes; autonomía institucional, referida a la sociedad en un área X; o autonomía social, si pertenece y afecta a la sociedad en su conjunto. Podemos, en conclusión, definir la autonomía como la *capacidad* (suma, por tanto, de *libertad y poder) singular o compartida de las personas de crear y realizar un proyecto de vida personal o colectivo* en los distintos *niveles* en que las personas *interactúan y* definen sus *proyectos vitales*.

Autonomía personal y autonomía compartida (tabla 4.4). Esa visión de la autonomía sintoniza mejor, de entrada, con la ética psicosocial aquí buscada. Cabe, sin embargo, preguntarse a continuación: ¿qué condiciones adicionales debería reunir la «nueva» autonomía para convertirse en guía moral válida y aceptable en la APS? En esencia, esa autonomía habría de converger con el fin de desarrollo humano del campo (o ser al menos compatible con él) cumpliendo dos condiciones:

1. Trascender la meta de liberación negativa de fuerzas, relaciones u opresiones destructoras (autonomía *de*), incluyendo también, y sobre todo, la meta de desarrollar las potencialidades *positivas* de personas y grupos (autonomía *para)*.
2. Reconocer la reciprocidad e *interdependencia* personal y ser compatible con el ejercicio de una solidaridad social que permita recrear la comunidad y realizar proyectos colectivos compartidos.

La *combinación* de *autonomía positiva y solidaridad* (que llamaríamos *autonomía compartida* o autodeterminación colectiva) debería permitir, en fin, el desarrollo tanto de la individualidad y los proyectos personales como de la cooperación social en pos de objetivos compartidos o negociados que trascienden las metas estrictamente individuales. No sería ya, como se ve, la autonomía meramente individual, social y moralmente disolvente, al uso.

TABLA 4.4
Principios sociodeontológicos: autonomía individual y compartida

Autonomía individual y colectiva. Facilitar y promover la capacidad de autodeterminación (tomar decisiones y dirigir vida propia) de personas y colectivos sociales
• Tratar a personas y colectivos como sujetos agentes de sus propias decisiones y acciones, no como objeto de las acciones, intenciones o fines del practicante (u otros participantes en APS). • Respetar la dignidad y capacidad personal de elegir, decidir y actuar por sí mismo/a. • Pactar con el destinatario los fines de la acción y obtener su consentimiento voluntario e informado. • Informar a los participantes sobre la acción a realizar, consecuencias previsibles, papel a asumir y derechos y obligaciones de cada parte. • Evitar relaciones y situaciones sociales que creen dependencia, desamparo o impotencia. • Evitar el intervencionismo: no hacer por los demás lo que estos puedan hacer por sí mismos.

- Evitar el uso de técnicas y procedimientos, invasores, restrictivos o que coarten la autonomía física, psicológica o social (área problemática: valoraciones y acciones ordenadas judicialmente).
- Reconocer y recordar la necesidad de compartir con otros la capacidad de decisión y autodeterminación en asuntos de titularidad colectiva.
- Recordar la necesidad y conveniencia de participar en las decisiones y acciones colectivas que promueven la autodirección compartida e impulsar las acciones conducentes a ella.
- Facilitar la interacción y vinculación social que faciliten la definición y persecución del bien común.

Pasando ahora al terreno práctico cabe preguntarse, ¿hasta qué punto las pautas de conducta derivadas del mandato de promover la autonomía personal que rigen la deontología individual son aplicables a la APS de orientación comunitaria? Respetar la dignidad y capacidad de las personas de dirigir su propia vida y tomar sus propias decisiones, obtener el consentimiento voluntario e informado, pactar los objetivos de la acción con los clientes, y evitar la dependencia y el intervencionismo son mandatos en principio compatibles con la autonomía colectiva o comunitaria. La cuestión obvia es, en caso de incompatibilidad o conflicto entre la autonomía del grupo o comunidad y la de algunos de sus miembros individuales, ¿qué autonomía debe prevalecer?

La pregunta es relevante porque, aunque a veces las dos autonomías (la de la comunidad y la de sus miembros individuales) serán compatibles, otras se enfrentarán, poniendo al practicante ante el dilema ético (y estratégico) en que lo que debería hacer para fortalecer la autonomía de ciertas personas o grupos será diferente de lo que haría para fortalecer la autonomía de la comunidad o el conjunto de un colectivo. Dado que el practicante psicosocial trabaja para la comunidad o el colectivo, no para ciertos individuos o grupos, parece obvio que es la autonomía de los primeros la que debe prevalecer.

Autonomía colectiva, cambio social y acción profesional. El concepto de autonomía comunitaria o colectiva no resuelve, sin embargo, de un plumazo los problemas asociados a la visión individualista, planteando su «implantación» dificultades no desdeñables. En primer lugar, la dominancia cultural de la autonomía entre nosotros, y su arraigada vivencia individualista, siguen constituyendo obstáculos importantes para definir el *bien común* hacia el que debería dirigirse la autonomía colectiva. Se hace así preciso fortalecer los valores de solidaridad e interdependencia para que actúen como contrapesos de la autonomía individualista (una tarea *cultural* hercúlea, por el antagonismo revelado en el capítulo 2 con los valores fundantes de la cultura moderna y sus beneficios materiales).

Hay que reconocer, en segundo lugar, que la *realización práctica* de una autonomía positiva, crítica y colectiva que permita la participación reflexiva de la gente en la forma de vida elegida, es una empresa laboriosa y compleja que va mucho más allá de la mera promoción de la capacidad de los sujetos de tomar sus propias decisiones (autonomía decisoria) involucrada en la actuación profesional. Implica (Doyal y Gough, 1994; Sen, 1990, 1997) una organización social eficiente y justa que asegure la existencia de una transmisión cultural y social amigable con el desarrollo humano, la producción y distribución eficaz y equitativa de bienes y servicios, unos sistemas de salud y educación básica efectivos al alcance de todos y, en fin, el ejercicio democrático del poder (y la aplicación de la ley) que garantice la

distribución equitativa de derechos, deberes y recursos y la protección de los más débiles.

Ya se ve que todo eso requiere cambios sociales, culturales y políticos de gran calado que sobrepasan ampliamente las posibilidades de la APS, que, si acaso, puede hacer una contribución a esa empresa mayor. ¿En qué consistiría esa contribución? Esencialmente en promover la *autonomía decisoria* de las personas o los grupos en su conjunto (que es lo que podemos hacer en la interacción profesional). Aunque esa tarea sea necesaria, resulta claramente insuficiente por sí sola para alcanzar la autonomía vital efectiva de cada individuo o del conjunto de los grupos de la comunidad.

En resumen, aunque la autonomía colectiva propuesta sea más apropiada para la APS que la autonomía individual, resolviendo varias de las objeciones hechas a esta, plantea a su vez nuevos retos que desbordan el mandato social y capacidades del campo, al implicar la construcción de un conjunto de instituciones y sistemas que ofrezcan las *opciones colectivas* que permitan a las comunidades, grupos y personas concretas elegir —dentro de ciertos límites— una forma de vivir significativa y valiosa. La creación y realización de tales instituciones y sistemas exige, por otro lado, la introducción de otros valores —como la solidaridad y la justicia social— que, al moverse en órbitas morales y sociales esencialmente ajenas a las de la autonomía, contrapesan la insana idolatría occidental a un valor cuya persecución se revela profundamente «tóxica» para los humanos y cuyo logro final (de ser realmente viable) acabaría destruyendo la sociedad y la idea misma de bien común.

2.3. Confianza

La confianza es el valor relacional que fundamenta y mantiene las interacciones y relaciones interpersonales, haciendo posible la cooperación y la acción conjunta entre humanos con efectos benéficos para las distintas personas y grupos involucrados. En nuestro caso, la confianza sostiene la relación entre un cliente y un practicante profesionalmente cualificado que colaboran en la resolución de problemas del primero o para alcanzar objetivos acordados por las dos partes. La confianza (y la cooperación y beneficencia que hace posibles) es, entonces, un «*posibilitador*» —una condición previa necesaria— y «multiplicador» humano de la acción técnica: no sólo la hace posible, sino que, además, *potencia* el eventual efecto benéfico de las técnicas usadas. En esa línea, tiene poco sentido trabajar en un contexto de conflicto permanente entre practicante y cliente en el que la «relación» se reduce a un choque intenso y continuo entre personas, visiones o valores, y por eso algunos autores y corrientes (como la humanista) conciben la relación (un encuentro entre personas) y el clima interpersonal como la «técnica» fundamental de cambio y de crecimiento personal.

Establecer y mantener la confianza es, por tanto, el prerrequisito (y una de las metas irrenunciables) de la acción profesional individual o colectiva que algunos entienden como un proceso de «construcción» de confianza. La confianza implica en

la acción profesional (cuadro 4.5) la disposición genuina a ayudar al otro, respetándolo como persona, manteniendo la fidelidad como cliente (o destinatario) de la acción, prometiendo sólo lo que se puede cumplir, cumpliendo lo prometido, diciendo la verdad y manteniendo la confidencialidad y otras normas propias de las relaciones profesionales. Al ser un valor relacional, establecer y mantener la confianza concierne a las dos partes involucradas, practicante y cliente, aun cuando aquí sólo explicamos los deberes del primero. Sobreentendemos que el cliente hace los esfuerzos precisos y respeta las normas pactadas para llevar a buen puerto el trabajo conjunto. De no ser así, el profesional tiene el deber de recordarlo y señalar, en su caso, los efectos negativos que la actitud del cliente tiene sobre la relación y la confianza que la sostiene y sobre la marcha del proceso de colaboración, que puede, por ejemplo, estar siendo saboteado.

¿Podemos trasladar esas pautas y criterios deontológicos a la APS? Aunque la confianza sigue siendo ahí tan importante como en la acción interpersonal, su *cualidad* no puede ser la misma en relaciones interpersonales entre dos individuos que en las interacciones colectivas multilaterales, forzosamente más *difusas* y heterogéneas en términos relacionales. Aunque las posibilidades de establecer y mantener la confianza con actores o personas singulares puede ser ahí fundamental, no deberían, en ningún caso, interferir con el mantenimiento de la confianza global del grupo o la comunidad con que se trabaja. Otra diferencia relevante en la escena psicosocial es la posibilidad de que emerjan *conflictos de lealtades* respecto de distintos miembros del grupo o comunidad o tensiones entre los diversos papeles a desempeñar respecto a ellos, en cuyo caso habremos de dirimir —si los conflictos desembocan en tensiones psicológica, moral o socialmente insostenibles— cuál de esas relaciones (o los valores asociados) debe tener prioridad sobre el resto de relaciones en conflicto.

En cualquier caso, parece moralmente lógico que la ruptura de la confianza entre practicante y destinatario (u otro actor clave del proceso) sea motivo suficiente, si la confianza no se puede restablecer o recuperar mediante la clarificación y el diálogo, para dar por terminada la acción profesional.

2.4. Veracidad factual y holística

El practicante debe ser veraz, *decir la verdad* sobre los *hechos*, *datos* y sobre el *comportamiento* propio y ajeno —incluyendo pensamientos, sentimientos, intereses y valores accesibles a la conciencia personal y el conocimiento objetivo—. Decir la verdad exige, naturalmente, esforzarse antes por averiguarla. La veracidad se puede así entender como correspondencia objetiva de lo que se dice o hace con los datos y hechos concretos de la situación, con el comportamiento de los actores y con las vivencias propias. En este sentido, decir la verdad es exigible en la APS tanto para el practicante como para los actores implicados, como condición para establecer y mantener la confianza personal, pero también para asegurar la eficacia de la acción.

El practicante debe, por tanto y en primer lugar, poner los medios personales

(actitud abierta, cuestionadora y empírica) y técnicos (sistemas de evaluación y recogida de información) para *averiguar* la verdad sobre los temas encarados y las acciones a emprender, sus determinantes y consecuencias, y las actitudes de los actores (incluido el mismo) hacia esos temas y acciones. Lo cual, en segundo lugar, hará posible que el practicante conozca objetivamente los datos experienciales y fácticos y, en base a ellos, comprenda lo que sucede e ilumine al resto de actores con la comprensión informada de los temas y acciones de interés. También debería permitirle detectar y poner de manifiesto las distorsiones y construcciones falaces que los actores puedan hacer en los temas y asuntos tratados.

Si bien es cierto, por otro lado, que la existencia de una verdad «pétrea», eterna, estrictamente objetiva (*la* verdad) puede ser perfectamente cuestionable desde ciertas posiciones teóricas, no es menos cierto que la práctica psicosocial (o las relaciones humanas sin más) serían imposibles sin veracidad, sin decir la verdad, entendida según un criterio u otro (pero, eso sí, un criterio aceptado por todos los participantes en el diálogo, el encuentro o la acción). Aunque no es este el lugar para una discusión epistemológica, sí podemos (debemos) proponer algunas alternativas para el manejo de la veracidad, en una práctica que involucra actores con «subjetividades» e intereses sociales diversos.

Una visión simple, relativamente *objetivista* (como la perfilada), de la veracidad exigiría la afirmación de los datos básicos e incontrovertibles de las personas, las relaciones, la situación y las técnicas usadas en el asunto de interés. El comportamiento veraz en este sentido supondría manifestar lo que se sabe, sin tergiversar ni omitir hechos o datos básicos y conocidos. Así, el practicante no debe ignorar un dato esencial del pasado o la conducta actual de un actor o atribuir a una técnica o forma de trabajar virtualidades no avaladas convincentemente por la experiencia o la evidencia empírica. Pero tampoco debe un cliente sostener hechos o relatos manifiestamente falsos o sesgados, si es consciente de la verdad, que distorsionan el sentido de lo sucedido e inducen a actuar erróneamente.

El hecho de que las situaciones y relatos manejados en la práctica contengan, junto a los hechos y datos objetivos, numerosas apreciaciones, visiones y valoraciones *subjetivas* (cuyo cruce final daría un conjunto de «verdades» relativamente dispares y parciales), no elimina la necesidad de veracidad en el sentido «objetivista» definido, pero exige una visión más amplia e integradora. En esta segunda visión, más apropiada a la complejidad psicosocial y a las visiones fenomenológicas o subjetivistas, la verdad debería contar con, e integrar, datos y hechos objetivos con la experiencia y las vivencias subjetivas en una totalidad *holística*, inteligible y *con sentido* global. El criterio de veracidad sería en este caso el ajuste o *encaje global* (similar al encaje de las piezas de un rompecabezas para componer una imagen final) de las visiones de los actores implicados, siempre sujeto a la interpretación del observador. La comprensión del punto de vista de cada actor (las verdades parciales) se haría a la luz de las intenciones y preferencias personales y de los intereses sociales que sostienen su particular subjetividad.

TABLA 4.5
Principios deontológicos: confianza y veracidad

Confianza
• Mantener la confianza del destinatario y del resto de participantes en la APS. • Mantener la fidelidad profesional debida al cliente y a otros participantes en la APS. • Prometer sólo lo que se puede cumplir. • Cumplir lo que se promete. • Respetar al otro como sujeto y agente de sus propias decisiones y proyectos. • Ayudar al otro necesitado o vulnerable, estar profesionalmente disponible y comunicarlo a él/ella. • Mantener la confidencialidad y normas —implícitas/pactadas— de la relación profesional.
Veracidad
• Averiguar y decir la verdad sobre los hechos, datos, personas y conductas implicados en la APS, en la medida en que son objetivamente conocidos por procedimientos consensuadamente aceptados por la comunidad científico-técnica. • Tratar de captar de forma empática, crítica y abierta las visiones, estados de ánimo y valores de las personas o grupos con los que trabajamos. • Verificar empíricamente los datos relevantes de los sujetos, temas sustantivos, métodos de actuación y valores implicados necesarios para analizar y realizar eficazmente las acciones psicosociales. • Conocer y tener en cuenta los significados, sentimientos, valores subjetivos e intereses sociales de los actores que permitan entender las actitudes y conducta de cada actor y la coherencia o encaje holístico y dinámico del conjunto. • Integrar social y dinámicamente la subjetividad (personal o colectiva) y los intereses sociales con los datos objetivos, para alcanzar un todo significativo o articulado que permita a cada participante alcanzar sus propia interpretación a partir de su particular subjetividad e interés social.

¿Podemos traducir esa formulación a criterios prácticos? Creo que sí. Si la visión simple y objetivista es aplicable a muchos temas y aspectos de la APS, el uso de la visión subjetivista-compleja requiere explicitar el punto de vista y los valores del actor (algo similar a la explicitación de la metodología usada en la investigación para obtener ciertos resultados), siendo una pauta de conducta particularmente importante para el practicante. Además de conocer los valores y puntos de vista de los otros, eso permite al sujeto sacar sus propias conclusiones usando los datos externos y la propia subjetividad personal, moral y social. La suma de ambos criterios complementarios —fidelidad fáctica y veracidad global-argumental— daría, creo, una aproximación aceptable al principio general de veracidad resumida en la tabla 4.5.

2.5. Justicia social (visión restringida)

Aunque la justicia social es parte de la deontología profesional, su papel y significado en ella son, como se comentó, bastante limitados. No debe extrañar: difícilmente puede un valor social ser definido (o alcanzar expresión cabal) en la práctica individual, donde a menudo cumple más un papel de adorno retórico que de verdadero principio rector y efectivo de la acción.

Sostener la justicia social en la acción profesional exige genéricamente poner los bienes y beneficios psicológicos y sociales (terapia, empoderamiento, evaluación,

acceso a la ayuda material y el apoyo social, etc.) dispensados por los practicantes al servicio de todas las personas, especialmente de las más necesitadas y vulnerables. En realidad, sin embargo, la aplicación del principio de justicia social en la acción profesional individual se reduce casi exclusivamente al mandato de no discriminar por razones de raza, sexo o posición socioeconómica y, si acaso, la exhortación de dispensar un trato «justo» (sea cual sea el significado de ese término) y mantener una relación equitativa con el cliente en las interacciones profesionales (tabla 4.6).

2.6. Interés propio y autocuidado: derechos básicos y optativos

Modificando la propuesta de Thompson (1989), he añadido también un sexto valor, el *interés propio* del practicante, ligado al cuidado de sí mismo y entendido más como un suelo ético para sostener psicológica y moralmente al practicante o un principio modulador (o limitador) de los otros —sobre todo la beneficencia— que como un valor básico para orientar la acción profesional. El mandato de autocuidado (y el valor de interés propio o *self-interest* en que descansa) se derivan de la extensión al practicante de la cualidad de sujeto ético —no de mero objeto o medio técnico para el bienestar del cliente— y de la consiguiente aplicación del principio de no maleficencia que le garantice la misma protección de la que goza el cliente en la acción profesional. Se limita en ese sentido a reafirmar la universalidad ética, en el ámbito de la deontología profesional.

Sin embargo, tiene una motivación práctica y estratégica añadida: evitar que, al ponerse al servicio de sus clientes, el profesional pueda ser utilizado por estos más allá de lo que es psicológicamente saludable (y moralmente aceptable), lo que produciría la «quema» *(burn out)* del profesional y la consiguiente ineficacia e insostenibilidad temporal de su actuación. Poner *límites* psicológicos a la *disponibilidad del practicante* es, en resumen, una exigencia ética y estratégica relevante para proteger personalmente al practicante y para garantizar su competencia y beneficencia profesional a largo plazo. Con ese propósito, el autocuidado reconoce al practicante (tabla 4.6) una serie de derechos: a mantener la propia integridad y autoestima, a no ser utilizado por el otro para sus propios fines (más allá de lo profesionalmente pactado y moralmente admisible), a no implicarse emocional o personalmente en los problemas del otro, a los medios (información, motivación, colaboración, etc.) precisos para alcanzar los fines acordados, a unas condiciones de trabajo dignas y a mantener su reputación profesional.

TABLA 4.6
Principios deontológicos: justicia social (genérica) y autocuidado

Justicia social (visión genérico-restringida)
• Tratar a todos de manera igual en lo que tienen de humanos y de forma específica según su singularidad biopsicológica, sociocultural o económica. • Poner las técnicas y beneficios de la APS a disposición de todas las personas y grupos, incluyendo a los

más necesitados, vulnerables o socialmente desafortunados.
- No discriminar en función del sexo, la etnia, el grupo social o el nivel económico.
- No condicionar ideológica, psicológica, social o económicamente la ayuda.
- Ayudar psicosocialmente —y facilitar el empoderamiento de— los grupos necesitados/vulnerables (la sociedad debe aportar medios precisos), discriminándolos positivamente respecto de otros grupos.
- Sostener la equidad relacional (equilibrio entre lo que se da y se recibe) en el intercambio profesional, para compartir el poder y ayudar al empoderamiento de los más vulnerables.

Autointerés razonable, autocuidado (marca «suelo» ético, límites humanos a otros principios; permite al practicante trabajar eficaz y sostenidamente para otros)

- Cuidarse a sí mismo: el profesional es también sujeto, no sólo medio técnico del bien del cliente.
- Derecho a mantener la integridad física y psicológica.
- Derecho a no ser utilizado por el otro y a no implicarse afectiva o personalmente en su vida y problemas más allá de lo exigido por la beneficencia general y la buena praxis.
- Derecho a los medios (información, motivación y colaboración, medios económicos, etc.) precisos para alcanzar los fines pactados.
- Derecho a mantener una reputación profesional y a condiciones de trabajo dignas.

La correcta comprensión y uso del autocuidado aconseja distinguir unos derechos *básicos* («obligatorios» o irrenunciables) de otros, más personalizados u optativos, que el practicante puede modular según sus preferencias, capacidades y vulnerabilidades. Así, entiendo que los derechos a la integridad psicológica, a los medios para lograr los fines (y a unas condiciones dignas de trabajo) y, si se quiere, a la reputación profesional, son básicos. Pero el derecho a no ser usado o a no implicarse emocionalmente admite —como se explicó en el capítulo 3— bastantes matices y posibilidades: no sólo es difícil trazar un límite claro entre la implicación personal y la profesional, sino que la comunicación de emociones positivas (como la empatía) o la muestra genuina de un interés hacia la persona del otro (que excluye verlo y tratarlo como un mero objeto de acción técnica) son factores fundamentales de humanización (y motivación) psicosocial.

Tampoco se me ocurre ninguna razón definitiva para condenar moralmente el comportamiento de un practicante que por alguna razón quiera ser utilizado más o menos benévolamente por un cliente (y, siendo consciente de ello, «se lo puede permitir» psicológicamente), aunque, seamos claros, la continuada subyugación psicológica de un sujeto (profesional o no) a otro suele conducir a la degradación psicológica y moral del primero y a la ofuscación megalómana del segundo. (Siempre podrá aducirse, desde la implacable lógica kantiana, la contradicción en que incurre un sujeto que se niegue a sí mismo la condición de fin que, como norma relacional universal, reclama para sí y para otros en el trato humano). La consideración de derechos *opcionales* dada a estas pautas de autoprotección profesional señala simplemente que pueden ser usados, no que deban serlo, mientras que en el caso de los derechos básicos deberían ser obligados («categóricos») para todos los practicantes, pues marcan los límites del daño y la dignidad personal o el reconocimiento social que consideramos moralmente infranqueables.

3. VALORES Y PRINCIPIOS SOCIOCOMUNITARIOS

A diferencia de los valores deontológicos, los valores y principios sociocomunitarios han permanecido generalmente implícitos, lo que impide saber el grado de consenso profesional y de aceptación social de que gozarían en caso de haberse explicitado las distintas propuestas presumiblemente existentes, así como la viabilidad práctica de esas propuestas a la luz de criterios operativos concretos. A pesar de ello, se pueden rastrear en la literatura comunitaria y psicosocial general un cierto número de propuestas de valores morales, sociales y epistemológicos: Benne y otros, 1975; Glidewell, 1978; Laue y Cormick, 1978; Knitzer, 1980; Levine y Perkins, 1987; Mitroff, 1983; Seidman, 1983; Timms, 1983; Tropman y Cox, 1987; Colomer, 1988; Conner, 1990; Trickett y Levin, 1990; Banks, 1997; Prilleltensky, 1997, 2001; Nelson y Prilleltensky, 2005; Sánchez Vidal, 1999, 2004a, 2004b; Uriz, 2000; Bermejo, 2002; Kofkin, 2003; Winkler y otros, 2012b. El examen de los sistemas ofrecidos revela numerosas coincidencias y solapamientos, pero también diferencias apreciables en ciertas áreas y valores.

La propuesta de Prilleltensky destaca en ese conjunto como la más explícita y elaborada. Comprende tres tipos de valores (personales, relacionales y sociales), que deben ser combinados y equilibrados para alcanzar una sinergia deseable entre ellos. Los valores personales o individuales son la autodeterminación, el cuidado y la compasión y la salud; los relacionales, ligados a las relaciones entre las personas, incluyen la colaboración, la participación y el respeto por la diversidad; y los sociales, la justicia distributiva y el apoyo a la comunidad. La visión comunitaria de la ética psicosocial aquí adoptada —compatible con el esquema tripartito de Prilleltensky— combina valores sociales generales (como la justicia social o la solidaridad) con valores más específicamente comunitarios (como el empoderamiento o el desarrollo humano) para construir una constelación valorativa razonablemente coherente (aunque, como casi todas las existentes, relativamente arbitraria) en cuanto a los valores seleccionados, aunque no tan claramente perfilada como la constelación deontológica, cuyos valores y principios son más familiares y están más nítidamente definidos.

Antes de explicarla debo hacer, sin embargo, tres precisiones para aclarar el papel y significado de los distintos valores y su empaste final.

En primer lugar, y a diferencia de los deontológicos, los valores y principios aquí descritos son *sociales;* y lo son en un doble sentido, ya apuntado al considerar en el capítulo 2 el carácter social de la ética. Primero, su titular es social (la comunidad o la sociedad) por su doble condición de cualidades deseables de una comunidad o sociedad o, al menos, psicosocial (el caso del empoderamiento y el desarrollo humano), que implican interacciones personales o transacciones persona-sociedad. Segundo, son valores (y principios) de la sociedad, de los actores sociales, no, como en el caso de los deontológicos, del practicante profesional.

Conviene hacer, en segundo lugar, una distinción (no absoluta) entre valores *finalistas* e instrumentales: mientras que los primeros tienen una «valía» moral intrínseca que los cualifica para marcar los objetivos o fines de la acción, el mérito moral de los valores *instrumentales* depende de aquéllos valores finalistas que

contribuyen a promover, por lo que tienden a marcar los métodos o procedimientos a seguir en la acción. Esa distinción, relevante y útil para el razonamiento moral y la práctica psicosocial, no es absoluta: los valores suelen tener un mínimo de valía intrínseca, aunque el grueso de su mérito estribe en apoyar instrumentalmente la realización de otros. Un valor X puede tener consideración esencialmente instrumental en una cadena valorativa determinada y finalista en otra; o puede ser parte de múltiples cadenas de dependencia instrumental. Así, si consideramos la justicia social y el desarrollo humano como los valores finalistas últimos (figura 4.1), el empoderamiento será un valor instrumental para el logro de ambos, pero puede a su vez ser considerado finalista respecto de la participación o la eficacia de las acciones encaminadas a la adquisición de poder. Participación y eficacia serían, en fin, valores instrumentales para el logro de un empoderamiento que sería finalista respecto a ellos, pero instrumental respecto a los valores últimos (finalistas) de justicia social o desarrollo humano.

La tercera aclaración es que no existe un consenso transversal a las áreas, corrientes ideológicas y profesiones psicosociales sobre el contenido concreto de los valores centrales, de manera que las constelaciones valorativas pueden variar según las áreas (en el trabajo con empresas prima la eficacia y el beneficio, en las áreas «sociales» la solidaridad y la justicia social), las orientaciones ideológicas y las tradiciones profesionales. La constelación o sistema aquí propuesto combina valores sociales básicos (justicia social, responsabilidad social, compromiso social, solidaridad) con valores comunitarios —empoderamiento y participación— y otros como la diversidad, el valor posmoderno y la eficacia deseable de cualquier actuación profesional. Son sintetizados, junto a las pautas de comportamiento asociadas, en las tablas 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10. Se suele considerar que mientras la justicia social es el valor social «construido» (a conseguir mediante la acción social) más importante, la solidaridad social es el valor «natural» fundacional que permite (y facilita) la actuación colectiva.

3.1. Justicia social: Justicia distributiva, mínimo vital y equidad relacional

Aunque la justicia social ya fue descrita en el sentido restringido que correspondía a la parte deontológica, sólo en este apartado social podremos desarrollarla en toda su amplitud. Y es que, como valor de titularidad social, es al conjunto de la sociedad a quien corresponde definirla y perseguirla. De este modo, los actores y sectores sociales específicos sólo tendrán papeles parciales y limitados (deseablemente complementarios y convergentes) en el logro de la justicia social, en función de los aportes (educativos, económicos, psicológicos, etc.) propios de cada sector y de la contribución que el manejo de esos aportes puede hacer a la justicia social global.

Por eso la acción profesional individual tenía poco que decir respecto a la justicia social, más allá de evitar la discriminación y tratar igualitariamente a los clientes (pese a que en la lectura hecha aquí se incluyeran otros principios —como la equidad relacional y la ayuda a los más vulnerables— virtualmente ausentes de la práctica,

aunque no de la teoría, deontológica). Y por eso la APS debería tener un papel más relevante, aunque a su vez más limitado, que el de la política, la economía y la acción redistributiva de poder y rentas del gobierno. Antes de definir ese papel, debemos perfilar el concepto general de justicia social para precisar la tarea que, en el marco de ese perfil general, corresponde a la APS en función de los «bienes» psicosociales socialmente valiosos que el campo puede aportar y de cómo actuar para garantizar el acceso equitativo (sea cual sea el significado de ese término) de todas las personas y grupos a esos bienes.

Como valor central de una sociedad, su cualidad moral más valiosa (Rawls, 1971), la justicia social, ha recibido una gran atención en la literatura política y social y ha sido definida conceptual y operativamente de distintas maneras en función de la concepción de justicia social e igualdad personal a la que se aspire. La breve descripción que sigue tiene como punto de partida los tres componentes del concepto identificados por Bellah y otros (1989), que, en mi opinión, especifican razonablemente los ejes básicos de la justicia social pertinentes para guiar una APS orientada a hacer realidad el valor: un componente sustantivo o «de mínimos»; la redistribución de bienes y recursos sociales (el componente central y con el que mejor se puede identificar la justicia social en su conjunto); y el componente procesal, de relación con los demás (tabla 4.7).

1. Justicia *sustantiva*, de mínimos: es el conjunto de bienes que una persona necesita para alcanzar la humanidad y llevar una vida digna, el «suelo» o base de la justicia (y la humanidad) sobre el que se puede erigir una justicia social más amplia, añadiendo la distribución equitativa de bienes y recursos sociales. Este componente sustantivo define un *mínimo vital* humano que incluiría la provisión de bienes materiales y socioeconómicos (como alimentación, vivienda, trabajo, salud y educación básicas) pero también bienes psicosociales como la dignidad, la seguridad personal, la autoestima, la autonomía personal, la vinculación interpersonal y la pertenencia y participación social.
2. Justicia *distributiva: se trata d*el núcleo central y la noción dominante de la justicia social. Es la distribución equitativa de riqueza, poder, estimación y otros recursos sociales valiosos, de manera que cualquier persona o grupo social tenga iguales posibilidades y oportunidades de obtener los bienes materiales e inmateriales que contribuyen al desarrollo humano personal o colectivo. La clave para aclarar y hacer aplicable esa noción de justicia distributiva es la especificación del significado y criterios operativos de la *equidad* en la distribución de bienes sociales y de la *igualdad* humana que de ese modo queremos conseguir: en qué cualidad o aspecto pretendemos, de otro modo, que las personas sean iguales (lo que implicará necesariamente «desigualarlas» en otras cualidades o aspectos).

   El uso en la acción social de criterios como una cantidad dada o un mínimo de bienes y recursos (el mínimo vital del punto anterior), la necesidad, el esfuerzo realizado o el mérito personal, los logros conseguidos en el trabajo y

el estudio, o la igualdad de satisfacción y bienestar (Doménech, 1989) conduciría a un tipo u otro de equidad (y de justicia social) y también al aumento de la igualdad de las personas en unos aspectos a costa de diferenciarlas en otros. Así, si primamos los criterios de necesidad (buscando satisfacer los diferentes grados de necesidad personal o social) estaremos descuidando los criterios de mérito o esfuerzo e ignorando las aportaciones diferentes que las personas hacen a la sociedad en esos aspectos. Pero si, al contrario, el mérito o el logro son los únicos ejes organizadores de la redistribución, de forma que se premie a aquellos que aportan más a la comunidad, los menos aptos (y los más vulnerables y necesitados) resultarán diferencialmente perjudicados.

¿Moraleja práctica? Parece que lo más aconsejable es combinar varios criterios —a menudo necesidad o vulnerabilidad y mérito o logro— para amortiguar las desigualdades generadas por la igualdad unilateralmente inducida por un solo criterio y aunar los incentivos a la producción de bienes y recursos sociales (maximizados cuando se premian esfuerzos y logros) con la redistribución de esos bienes y recursos (usando criterios, más «morales», de necesidad o vulnerabilidad). Así, en el caso de la asignación de becas y ayudas al estudio parece razonable compaginar criterios de necesidad (en este caso de la familia del estudiante) con criterios de mérito o logro académico de los estudiantes.

3. Justicia *procesal* o de trato: tratar a los demás y relacionarse con ellos de forma justa y equitativa. Aquí tropezamos, sin embargo, con la misma piedra semántica y práctica ya encontrada en el asunto de la equidad: ¿significa eso tratar a todas las personas de la misma manera o, teniendo en cuenta el valor diversidad, tratar a cada uno según sus concretas cualidades personales y circunstancias socioculturales. La respuesta teórica es obvia: debemos tratar a todos de la misma manera en aquello que tenemos de nuclearmente humano, diferenciando el trato en función de los aspectos que nos diferencian psicológica, social o económicamente en la dirección de favorecer al más necesitado, débil o desvalido (principio de la diferencia).

Pero esa «solución» no nos acaba de aclarar en la práctica dónde comienza el núcleo humano que demanda igualdad y dónde empieza la diferencia que demanda singularidad desigual, algo lamentable por la importancia de los aspectos relacionales en la APS. Otro aspecto polémico de la justicia procesal es la llamada «discriminación positiva» (favorecer en la acción a los grupos más vulnerables o perjudicados social o económicamente): ¿contribuye esa discriminación positiva al progreso del grupo favorecido y a su igualación con los otros grupos sociales o, por el contrario, contribuye a perpetuar la desigualdad al no premiar el mérito sino la adscripción a un determinado grupo excluido o maltratado (la mujer, los negros, los inmigrantes, etc.)?

Conclusión: podemos decir que una sociedad o comunidad es justa cuando sus

miembros disponen de un mínimo de bienes materiales y psicosociales necesarios para llevar una vida digna, son tratados (y se relacionan entre sí) de forma igual en lo humano, respetando sus legítimas diferencias socioculturales y su singularidad psicológica, y cuando los bienes y recursos sociales existentes son distribuidos de forma equitativa, asegurando que, además de tener en cuenta el esfuerzo y mérito psicológico y social en la generación de esos bienes y recursos valiosos, todos tienen acceso a ellos de acuerdo a la respectiva necesidad y aspiración al desarrollo personal.

TABLA 4.7
Principios sociocomunitarios: justicia social, concepto y componentes

- Acceso a los bienes materiales y psicosociales necesarios para llevar una vida humana digna y valiosa, siendo tratado de forma igual en lo humano (pero respetando la singularidad psicológica y la legítima diferencia sociocultural) y promoviendo la distribución equitativa de los bienes y recursos sociales valiosos en base a la necesidad humana y a la contribución que personas y colectivos hacen a la producción de esos bienes y recursos.

Componentes

- **Justicia sustantiva**; mínimo vital garantizado para todas las personas que cubra.
  - — Necesidades materiales y biofísicas: alimentación, vivienda, trabajo, salud y educación esenciales.
  - — Bienes y aspiraciones psicosocales básicos: dignidad, seguridad, autoestima, autodeterminación, vinculación interpersonal y pertenencia social.
- Justicia **distributiva:** distribución equitativa de poder y bienes sociales; igualdad de oportunidades y acceso de personas y grupos sociales a bienes y recursos. Clave o criterio de *equidad* usado (tipo de igualdad promovida): mínimo universal (justicia sustantiva), necesidad, esfuerzo, mérito, logro (o una combinación de varios criterios).
- Justicia **procesal:** trato humanamente igual a todos (pero singularizado según cualidades biopsicológicas, socio-culturales y merecimientos personales).
- Favorecer a los más débiles/necesitados (principio de la diferencia; discriminación positiva).

El papel de la APS en la justicia social. Dado que, como se ha indicado, la promoción de la justicia social corresponde a la sociedad en su conjunto, ¿qué papel tiene el practicante psicosocial? Desde mi punto de vista, a la APS le corresponden tres tareas fundamentales.

— Cumplir en su trabajo habitual los principios sustantivos y relacionales indicados, garantizando, sobre todo, la *equidad relacional* en los intercambios con los actores sociales en un contexto relacional igualitario en que el practicante *grosso modo*, equilibra lo que recibe y lo que aporta.
— *Denunciar* las *injusticias* y desigualdades, haciendo a la sociedad consciente de aquellas situaciones y casos de injusticia y desigualdad que conoce a través del trabajo y la investigación con grupos y comunidades.
— *Asegurar* que todas las personas y grupos tienen *acceso a los bienes psicosociales* que «administra» el practicante psicosocial, con independencia

de la situación social y la capacidad de cada uno (persona o grupo) de pagar los servicios profesionales que dan acceso a esos bienes en el mercado. Esta garantía de *«igualdad de oportunidades»* o de acceso de todos a los bienes psicosociales debería sostenerse sobre dos patas: la obligación de la profesión de aportar servicios para todos los que no puedan pagarlos (algo similar a la asistencia letrada «de oficio» en los procesos judiciales) y la de la sociedad de reconocer la necesidad de esos bienes y servicios y pagar a los profesionales por su realización. Todo ello requiere la concienciación de profesionales y sociedad sobre la conveniencia (¿necesidad?) de servicios públicos concretos que, al aportar los bienes psicosociales básicos, contribuyan al desarrollo humano de todas las personas, sin distinción de características biológicas, personales, socioculturales o económicas.

3.2. Solidaridad y comunidad

Aunque comparte con la justicia social la condición de valor central de la acción social, la solidaridad social se diferencia por su condición histórica y socialmente «natural», en la medida en que, como «poso» resultante de la interacción social, difícilmente puede ser únicamente «construido» o desarrollado artificialmente mediante la acción social o política. Como valor y concepto, la solidaridad está emparentada con la *comunidad,* que puede ser entendida como una forma de solidaridad orgánica y natural generada en relaciones «primarias» (interacciones personalizadas sin ulteriores intereses utilitarios) en contextos sociales próximos, en cuyo núcleo se sitúan la interdependencia, la mutualidad y la pertenencia. Digamos que la solidaridad es más natural que la justicia social, pero menos que la comunidad, que es la variante más «cálida» y humanamente cercana que la solidaridad adopta en los contextos comunitarios.

Como se ha indicado, la solidaridad social primitiva ha sido seriamente *erosionada* en Occidente por la modernidad y posmodernidad, cuyas exigencias y lógica operativa socioeconómica han alimentado el individualismo, el egoísmo ético y las relaciones humanas secundarias (interesadas, orientadas a la utilidad económica o social), debilitando la interdependencia, el altruismo y las relaciones primarias propias de la comunidad preindustrial. Se ha producido así una situación de desequilibrio humana y moralmente funesta que es preciso corregir. Pero la *necesidad* de *restablecer el equilibrio* entre autonomía personal, por un lado, y solidaridad e interdependencia social, por otro, es, como ya se indicó, tan necesaria en la teoría como difícil de abordar en la práctica. Y eso tiene importantes repercusiones para el proceso de socialización y para cualquier forma de acción humana encaminada a lograr el desarrollo humano; en la medida en que este implica tanto la posibilidad de individuación como el mantenimiento de la interdependencia, la solidaridad social aparece como un contrapeso imprescindible de la autonomía individual.

Pero, de otro lado, la solidaridad efectiva existente en las sociedades modernas es del todo insuficiente no sólo en el plano moral señalado (para contrapesar la

voracidad sociomoral del autonomismo individualista) sino en el plano social y *estratégico*: la viabilidad de la acción social descansa sobre la asunción de que los problemas y aspiraciones de un grupo X son empáticamente compartidos por el conjunto de la comunidad o la sociedad, convirtiéndose en problemas o aspiraciones *de todos,* lo que lleva a la implicación solidaria en esos problemas. La dificultad estriba en que esa asunción empática sólo se produce en comunidades regidas por una solidaridad efectiva y generalizada. En las condiciones de fragmentación y egoísmo ético dominante en el mundo actual, cada cual «va a lo suyo» y se enfrenta a sus propios problemas con sus propios medios: los problemas (y aspiraciones) de X son *sus* problemas, no los del conjunto de la comunidad. La erosión de la solidaridad social tiene así consecuencias *corrosivas* devastadoras para cualquier forma de *acción* de base *social* desembocando en la competencia por los recursos (económicos y de ayuda) escasos y, al final, en la imposición de la «ley del más fuerte» sobre la del conjunto de actores mayoritarios pero débiles, desunidos y a menudo enfrentados.

El *dilema* del *practicante* psicosocial es tan sencillo de enunciar como difícil de resolver: atrapado en esa situación de divergencia entre lo moralmente deseable y lo estratégicamente posible, no sólo precisa, para realizar efectivamente la APS, un grado de solidaridad social que no existe aquí y ahora, sino que, además, el aumento de esa solidaridad social no está en su mano, puesto que es generada en el largo plazo por el conjunto social. ¿Solución pragmática al dilema? Por un lado, la APS debe contribuir a *concienciar* a la sociedad de la falta de solidaridad y los deletéreos efectos que esa carencia tiene sobre la vida y la acción social, *promoviéndola* como ideología sociomoral propia del campo en su conjunto (si ese es el consenso, la propuesta necesita debate). Pero debe ser, por otro lado, exquisitamente *realista,* reconociendo, como punto de partida de la acción, el nivel de solidaridad existente, no el que le gustaría tener.

Un mandato adicional razonable sería utilizar *métodos* y *enfoques* de trabajo (grupales o de otro tipo) que *refuercen* la interdependencia *y solidaridad social* y sean efectivos para lograr los objetivos planteados, lo que daría credibilidad ante los actores sociales a los enfoques usados y los valores solidarios implicados. Eso es estratégicamente relevante porque, como se sugirió al abordar la viabilidad de la ética comunitaria, el riesgo de la promoción de valores altruistas y contraculturales es que «suenen» bien, pero no resulten efectivos desde el punto de vista de lo que la gente quiere lograr (metas y objetivos, solución de problemas). La tabla 4.8 resume algunos de los principales mandatos derivados del principio de solidaridad social.

3.3. Compromiso social y responsabilidad social

Los valores de *compromiso social* y responsabilidad social se refieren de distinta manera al mismo tema ético: la posición moral del sujeto ante la injusticia social y ante el sufrimiento y las penurias de los demás. Mientras que el compromiso social implica una *opción personal* que obliga directamente a quien se compromete con alguien o con algo, la *responsabilidad social* es un valor abstracto que reconoce

despersonalizadamente los deberes y obligaciones individuales o colectivas en algún área social (tabla 4.8). El compromiso social implica y obliga a una persona ante otras sin esperar contrapartida alguna; la responsabilidad social recuerda más difusamente deberes sociales preestablecidos mediante algún tipo de contrato o convención social implícito o explícito que incluye derechos y deberes.

TABLA 4.8
Principios sociocomunitarios: solidaridad y comunidad, compromiso social, responsabilidad social

- **Solidaridad** social y **comunidad**: valores sociales «naturales», debilitados en las sociedades industriales modernas.
- Reconocer la comunidad humana básica de todas las personas.
- Promover la conciencia de lo común/compartido en problemas, aspiraciones, recursos y en las actuaciones psicosociales encaminadas a resolver problemas y realizar aspiraciones.
- Defender el espacio público en el planteamiento de problemas y aspiraciones psicosociales y en las actuaciones para solucionar los primeros y cumplir las segundas.
- Reconocer y fomentar la interdependencia, reciprocidad y mutualidad de personas y grupos en los temas y actuaciones psicosociales.
- Ahondar la conciencia de la dimensión social y el bien común en los asuntos humanos que permita formular correctamente y abordar solidariamente los problemas y aspiraciones psicosociales.
- Desanimar y combatir el individualismo egoísta y disolvente sin negar la individuación.

- **Compromiso social** con un grupo humano (los más débiles, necesitados o desvalidos) o con un valor (justicia social, desarrollo humano, otro) como opción profesional individual o colectiva.

- **Responsabilidad social,** obligación de implicarse en el planteamiento, solución de los problemas y necesidades colectivas, especialmente las de los grupos más vulnerables y necesitados.
- Deber de involucrarse en las aspiraciones colectivas y el logro del desarrollo humano de todos, en especial de las personas menos dotadas y de las más desafortunadas socioeconómicamente.

Uno se compromete primariamente con una persona o grupo (por ejemplo con los pobres o con las víctimas), y sólo secundariamente con una idea o un valor (como la justicia o la verdad). Sin embargo, acepta la responsabilidad genérica ante una comunidad o sociedad, hacia la que se asumen ciertos deberes como contrapartida de los derechos o «prestaciones» aportadas por esa comunidad o sociedad.

En la APS el compromiso social con los más débiles o necesitados puede ser entendido como un valor instrumental en el logro de la justicia social, en la medida en que comprometerse (y actuar en consecuencia y con eficacia) no sólo debe contribuir a reducir el sufrimiento y la privación y a aumentar el bienestar de aquéllos, sino también a aumentar su poder y a reducir la desigualdad. El caso de la responsabilidad social es más genérico, impersonal y adireccional, de forma que —como se vio en el capítulo 3— hay que precisar el contenido de esa responsabilidad involucrada (la del practicante hacia la comunidad o colectivo en nuestro caso) y su destinatario específico (ante quién es responsable el practicante), para dar significado concreto a la responsabilidad social genérica.

Otra diferencia entre los dos valores radica en su «distribución» social y el

eventual grado de acuerdo respecto a ellos. Mientras que ese acuerdo es generalizado en el caso de la responsabilidad social (aunque puedan variar el contenido, alcance o límites asignados), el caso del compromiso social es diferente: al tratarse de una opción personal de valencia social diversa (en algunos contextos es casi una norma prescriptiva, mientras que en otros es poco más que una pieza retórica), acaba siendo un *valor «polarizador»*. De forma que mientras algunos practicantes (especialmente en contextos de pobreza y desigualdad) optan —casi obligadamente, valga la contradicción— por la postura comprometida, otros se decantan por la de imparcialidad o neutralidad, que puede parecer preferible en situaciones sociales complejas con gran número de actores y valores y ausencia de desequilibrios sociales o penurias personales donde el compromiso social no tiene un papel tan relevante o un destinatario tan claro.

3.4. Diversidad y derecho a la diferencia

La diversidad (tabla 4.9) es el contrapunto posmoderno de la igualdad, con la cual mantiene una relación *dialéctica* tejida de complementariedad y divergencia conflictiva. En ciertos temas humanos, la *diferencia* conductual, personal, social o cultural *no supone desigualdad indeseable*; así, las diferencias raciales o de costumbres y muchas diferencias personales no suponen inferioridad o superioridad intrínseca de una categoría sobre otra. Pero en otros temas o aspectos, cuantificables y sujetos al escrutinio y la valoración social, las diferencias suelen verse en términos de desigualdad y se convierten en objeto de deseo o de repudio social.

TABLA 4.9
Valores sociocomunitarios: diversidad y eficacia

- **Diversidad.**
- Reconocimiento de la diversidad y pluralidad biopsicológica, social, cultural y económica.
- Derecho a la diferencia psicológica, social o cultural significativa sin implicación valorativa (inferioridad o superioridad) o sanción psicológica o social.
- Tolerancia ante los diferentes y sus comportamientos (no lesivos para los demás).

- **Eficacia** de los enfoques analíticos, métodos de actuación, valores y acciones para mejorar la vida de la comunidad y de los más vulnerables de forma cooperativa y respetuosa con las capacidades de los actores implicados.
- Promover el uso de los medios (métodos, valores, enfoques) más eficaces para alcanzar la justicia social y el desarrollo humano con los mínimos costes humanos (sufrimiento, esfuerzo innecesario y dañino, conflicto social, pérdida de solidaridad y vinculación social, etc.), técnicos y económicos.

Es lo que sucede en asuntos como los ingresos económicos, la autoestima o el respeto y la aceptación de los otros: la gente prefiere ser rica a ser pobre, tener autoestima a carecer de ella y ser respetada y aceptada por los otros a ser rechazada o excluida. La desigualdad en esos aspectos tiende, por ende, a ser vista como indeseable; como también lo es, de todos modos, la pertenencia a categorías

personales o socioculturales cualitativas, como la raza, la costumbre o la conducta, tenidas por socialmente indeseables (en función de parámetros similares a los que afectan a las categorías cuantificables) y sujetas, por tanto, al escrutinio, la discriminación y el estigma social.

Es en esos dos tipos de situaciones donde el derecho a la diferencia puede *colisionar* con la exigencia de igualdad, planteando al practicante psicosocial dudas y problemas respecto a cuál de los dos valores, igualdad o diversidad, debe primar en el trato a las personas y grupos y en la orientación del contenido de la acción. La solución de principio apuntada en el apartado de la justicia social era genéricamente clara: se debe buscar la *igualdad* de aquellos aspectos *esencialmente humanos,* respetando las legítimas diferencias que, como «periferia» psicológica, social o cultural, acompañan a ese núcleo esencial de humanidad. Pero la traducción práctica de ese principio en los diversos temas que componen la casuística humana y social puede resultar más problemática. Ya se mencionó, como ejemplo, el polémico caso de la discriminación positiva. Se podrían añadir muchos otros temas y situaciones donde mandatos como mantener la igualdad de derechos y deberes o la igualdad de oportunidades respetando las diferencias legítimas no siempre se traducen en pautas de actuación moralmente claras e indiscutibles.

3.5. Desarrollo humano personal y colectivo

El desarrollo humano (tabla 4.10) puede tener un titular individual o colectivo, según se refiera al desarrollo de las personas o al desarrollo colectivo, de la humanidad en su conjunto o de una parte —una sociedad o comunidad— de ella. En ambos casos el desarrollo humano se refiere al despliegue armónico de las capacidades potenciales (de personas o sociedades), e implica no sólo autodirección personal o colectiva (autonomía), sino también vinculación social, equilibrio (entre distintos aspectos o capacidades) e integración de esos aspectos en un proceso sensiblemente unitario y autogobernado por el sujeto.

TABLA 4.10
Principios sociocomunitarios: desarrollo humano

Desarrollo humano, mejora personal
• Promover el despliegue integral y autodirigido de las potencialidades y *capacidades personales,* en interacción dinámica con un contexto sociocultural que lo facilite. • Apoyar la posibilidad de las personas de diseñar y realizar un proyecto de vida propio y significativo. • Ayudar a crear contextos psicosociales (familias, grupos, etc.) que faciliten el desarrollo humano responsable y desanimen relaciones y estructuras innecesariamente represivas o coartadoras. • Ayudar a *ampliar la gama de opciones socioeconómicas y culturales* entre las que la gente puede elegir efectiva y responsablemente lo que puede ser o hacer (el tipo de vida que quieren llevar). • Desarrollo humano = «suma» de: — Autodirección decisoria o vital (ligada a autonomía). — Relación interpersonal y cooperación social.

— Igualdad de acceso a, y la distribución de, medios sociopolíticos y jurídicos (participación política, seguridad e igualdad jurídica, igualdad de oportunidades sociales...).

Ya mostramos los estragos sociales y morales que la preponderancia indiscriminada de la autonomía individual (y su asociación con el egoísmo ético y la utilidad económica) podía causar en la vida social, y cómo ese valor resultaba insuficiente, y hasta peligroso, para guiar la acción profesional, si no era complementado con otros valores como la interdependencia o la solidaridad. La rotunda especificidad del valor autonomía, su claro sesgo sociocultural y las indeseables consecuencias sociales y morales de su visión individualista aconsejan, por tanto, proponer el desarrollo humano como valor moral alternativo tanto para el trabajo individual como para la APS.

Y es que, como concepto (y valor) más amplio y abarcador, el desarrollo humano retiene la noción de *autodirección* de personas o colectivos —el aspecto válido y aceptable de la autonomía—, reconociendo, además, la *interdependencia* y la *vinculación social* como aspectos clave tanto del desarrollo de la humanidad (individual y colectiva) como de los procesos de toma de decisiones y de actuación que conducen a su logro. Y eso hace el concepto de desarrollo humano particularmente apto para una APS que debe combinar las asunciones de autodeterminación humana (en el nivel personal o colectivo) y causalidad social (en el doble plano de interacción personal e influencia institucional y sistémico-social).

Pero el desarrollo humano presenta también algunos problemas como concepto y valor orientador de la acción. Primero, es un concepto todavía vago, cuyo contenido y dinámica deben ser perfilados si ha de guiar eficazmente la acción individual o psicosocial, especificando tanto las cualidades de la persona (o la comunidad) desarrollada como los mecanismos o procesos que conducen a su desarrollo. Es preciso, en segundo lugar, liberar el concepto de «desarrollo» de la lectura meramente cuantitativa (crecimiento o aumento de tamaño) que se suele hacer de él, reconociendo su carácter esencialmente cualitativo (la constitución de algo sustantivo y estructurado). Se entiende así que el desarrollo personal implica, además de crecimiento, control, equilibrio e integración unitaria que doten al desarrollo de una dirección intrínseca o «endógena» dirigida por un yo o *self* efectivo. Tampoco en el plano colectivo debe identificarse desarrollo humano con crecimiento económico (que será en todo caso un *medio* para el verdadero desarrollo), abarcando además —y como características más definitorias— las dimensiones sociales, culturales y morales, junto a los procesos de coordinación, integración y equilibrio (equidad) promovidos por instituciones sociales eficientes.

Eso implica, en las celebradas palabras de Lebret (1966), el desarrollo de «todo el hombre» y «de todos los hombres», es decir, el desarrollo del potencial —específico y singular— de cada persona, pero también el desarrollo de todas las personas (no sólo de unos cuantos individuos privilegiados), lo que —como en el caso de la autonomía compartida— conlleva la existencia de equidad social y de vínculos y relaciones entre personas y grupos y también de instituciones sociales eficaces y

apoyadas participativamente por la gente.

3.6. Empoderamiento

El término «empoderamiento», traducción del término inglés *empowerment*, hace referencia tanto al proceso de adquisición de poder como a su resultado sustantivo, al grado de poder efectivamente adquirido. Podemos considerarlo como un valor instrumental para los fines de desarrollo humano (que exige libertad de elección y poder de realización) y justicia social, que involucra la equidad en la distribución de poder y recursos sociales y psicológicos a partir de un mínimo vital básico.

Se suele asumir (Sánchez Vidal, 2013) que el empoderamiento se logra mediante la comunicación entre personas y grupos, y la organización y participación en acciones eficaces para conseguir recursos sociales valorados mediante la cooperación, que permite compartir el poder con otros, o el conflicto, que fuerza su redistribución a favor de los más débiles. En ese sentido, el empoderamiento es un valor procedimental clave para la justicia social, pero también para el desarrollo humano, al fortalecer o potenciar las capacidades de realización intrínsecas de las personas, los grupos y las comunidades (tabla 4.11).

TABLA 4.11
Principios sociocomunitarios: empoderamiento, participación y organización social

Empoderamiento: adquisición de poder personal participando en acciones colectivas para alcanzar fines sociales valiosos y legítimos
• Impulsar el sentimiento *subjetivo* de potencia (sobre todo en colectivos marginados y pobres) que genere expectativas de empoderamiento. • Promover y fortalecer los procesos de *comunicación social* para posibilitar la elaboración de objetivos comunes, la organización colectiva y la participación en acciones conjuntas que ayuden al empoderamiento de los que tienen menos poder. • Ayudar a discriminar los contextos sociales que permiten el empoderamiento *cooperativo* y sinérgico de aquellos en los que hay que usar el *conflicto* y la confrontación para redistribuir el poder. • Asesorar/facilitar la realización de *acciones eficaces* en la consecución de bienes sociales valiosos que permiten la adquisición efectiva de poder y confirman las expectativas subjetivas iniciales.
Participación social
• Participación de los grupos y personas en la fijación de objetivos, las decisiones y las acciones psicosociales en los asuntos que les conciernen. • Reconocer los grupos y personas como sujetos agentes de sus propias vidas y tratarlos como tales. • Compartir decisiones y poder social con aquellos con quienes trabajamos.
Organización social para alcanzar el empoderamiento colectivo
• Ayudar a definir y priorizar problemas y aspiraciones y a identificar las acciones conjuntas para resolver los problemas y colmar las aspiraciones. • Ayudar a formular y negociar metas y objetivos relevantes y compartidos. • Facilitar los medios logísticos y los métodos y procedimientos psicosociales que aseguren la viabilidad técnica y estratégica de las metas establecidas por la comunidad.

3.7. Participación y organización social

Como valores metodológicos o procedimentales, la participación en acciones iniciadas por otros y la organización colectiva para alcanzar objetivos compartidos hacen posible, junto a la comunicación, la adquisición de poder: la participación permite compartir el poder con otros en climas cooperativos; la organización social hace posible obtener ese poder en climas más conflictivos o a partir de la iniciativa propia de los grupos que reivindican más poder (tabla 4.11).

3.8. Eficacia

No basta aportar buenas intenciones o valores socioculturales: es necesario que las acciones y programas psicosociales sean eficaces y eficientes (produciendo resultados acordes con lo esperado con el mínimo coste humano y técnico), de forma que contribuyan efectivamente al avance de valores como el empoderamiento, la justicia social o la responsabilidad social. La eficacia debe, pues, ser menospreciada: por muy buenas que sean las intenciones y valores en que nos sustentemos, no habrá posibilidades generalizadas de bienestar, responsabilidad social o justicia social si las instituciones y organizaciones sociales no funcionan o si la APS no es eficaz.

En la APS, la eficacia recuerda la importancia de las exigencias objetivas de la ética, involucrando la competencia profesional y social del practicante y el correcto manejo de las técnicas adecuadas y los conocimientos válidos aplicables (tabla 4.9). Tiene especial relevancia en las áreas «organizativas» (las empresas), donde es uno de los ejes que debe ser compatibilizado con el bienestar de los trabajadores. En general, la eficacia es, quede claro, un valor instrumental para los valores finalistas (como la justicia social y la responsabilidad social), pero también para valores intermedios como la participación y el empoderamiento: la eficacia o productividad de una organización o institución (una empresa, una escuela, un hospital) no tiene mérito *per se*, sino sólo en la medida en que contribuyan a mejorar la vida de la gente o la justicia social de la comunidad.

4. SISTEMA SOCIOCOMUNITARIO DE VALORES

La descripción anterior permite esbozar una constelación o sistema valorativo sociocomunitario agrupando y jerarquizando los valores y principios en torno al eje medios-fines. Obtendríamos así una pirámide, en cuya cúspide estarían los valores finalistas (que definen las metas de la APS de orientación comunitaria) y en cuya base se situarían los valores instrumentales que contribuyen a hacer realidad los valores finalistas, orientando el uso de métodos, medios y procedimientos apropiados para esa realización (figura 4.1). El desarrollo humano y la justicia social coronan ese sistema, como valores finalistas para los que el compromiso social, la responsabilidad social y el empoderamiento son valores instrumentales inmediatos; la participación (y organización) social serían, a su vez, valores instrumentales para el empoderamiento

(medios, por tanto, de los medios de desarrollo humano y la justicia social) y, en fin, la eficacia sería un valor instrumental genérico para el resto de valores.

Quedan «descolgados» tres valores que no acaban de encajar en el eje medios-fines ni en el esquema operativo de acción humana que asume ese eje: la *solidaridad* y la *comunidad* como valores «naturales» no sometibles al esquema finalista y constructivo asumido (en el cual la solidaridad, «forzada» a ser un medio para la APS, podría también ser vista como un fin valioso en sí y un punto de partida o umbral preciso para una acción psicosocial fructífera); y la *diversidad,* que —aun entendida como derecho a la diferencia pueda generar criterios y pautas de actuación — difícilmente puede ser situada como medio o fin de algún otro valor (si acaso podría ser un punto de partida evaluativo a reconocer).

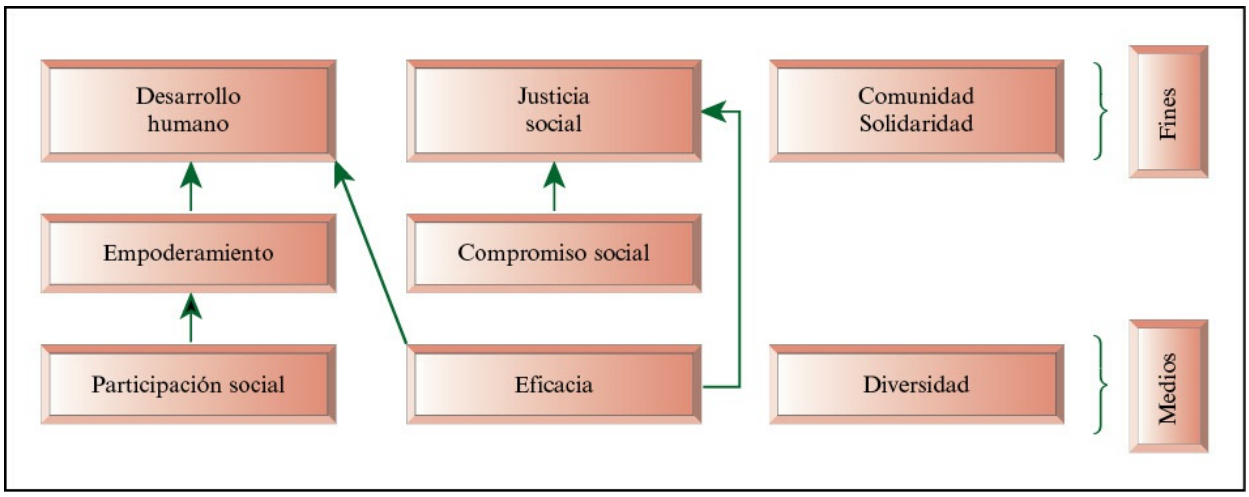


Figura 4.1.—Sistema sociocomunitario de valores.

RESUMEN

Los valores encarnan lo humanamente valioso en la interacción y acción humana. Tomando como punto de partida los valores y principios de la deontología profesional, y ampliándolos y complementándolos con otros valores y principios sociocomunitarios, este capítulo trata sobre los valores y principios morales pertinentes para la acción psicosocial con orientación comunitaria.

Los valores (y principios) morales tienen en esa acción una doble función:

1. Iluminar y aclarar moralmente los temas y orientaciones teóricas y metodológicas psicosociales.
2. Orientar éticamente —junto a las consecuencias previsibles— el abordaje de los problemas y dudas asociadas a la acción práctica. El análisis y actuación psicosocial consiguiente precisa un enfoque holístico o sistémico que, tomando en consideración el conjunto de valores pertinentes para un caso y situación, su modulación subjetivo-contextual y la interrelación de los valores, permita jerarquizarlos y resolver los conflictos entre ellos y elegir una opción como

mejor o moralmente más correcta (a la luz de los valores y las consecuencias) entre las existentes y estratégicamente realizables. Todo ello permite «traducir» los valores morales en acción práctica mediante los principios y pautas de comportamiento derivadas del conjunto limitado de valores seleccionados.

A partir de ahí ofrezco un catálogo relativamente «horizontal» de valores deontológicos y sociocomunitarios congruentes con la APS. Aunque los valores y principios *deontológicos* tienen una base clínica y están pensados para guiar la actuación profesional con clientes individuales, atañen a temas éticos básicos de la acción humana y gozan de un amplio acuerdo entre los profesionales: es preciso, por tanto, modificarlos y hacer una lectura marcadamente social de ellos para que resulten pertinentes a la APS. La deontología gira en torno a tres valores asociados a cada uno de los actores básicos de la acción profesional: la autonomía individual o colectiva del cliente, su beneficencia —asumida como valor central del profesional— y la justicia social, el valor de la sociedad. Basta añadir la veracidad y la confianza, soportes de la relación entre profesional y cliente, y el interés propio, segundo valor del profesional, para tener un conjunto coherente de valores y principios deontológicos.

Aunque los valores y principios *sociocomunitarios* sean, de entrada, más apropiados para iluminar analíticamente y orientar prácticamente las dimensiones éticas de la APS de orientación comunitaria, su formulación es más difícil y aventurada, ya que, como no han sido debidamente explicitados y discutidos, ignoramos el grado de consenso profesional y aceptación social del que una u otra propuesta podría gozar. En base a las escasas discusiones escritas, y a mi propia experiencia y criterio, propongo un sistema sociocomunitario de valores y principios (finalistas e instrumentales) que gira en torno a la justicia social y la solidaridad como valores nucleares («construido» el primero, socialmente «natural» el segundo) e incluye también el compromiso y la responsabilidad social, la diversidad, el desarrollo humano, el empoderamiento, la participación y organización social, y la eficacia. Muchos de estos valores pueden ser considerados instrumentales (medios) para los valores sociales nucleares que definen las metas de la APS.

En conjunto, los valores y principios socio-comunitarios complementan y redondean la lectura psicosocial hecha de los valores deontológicos. Si beneficencia, no maleficencia y autonomía compartida eran los ejes rectores de la deontología, justicia social, solidaridad social y desarrollo humano (que incluye no sólo la autodirección asociada a la autonomía, sino también interdependencia y adscripción institucional) serían los núcleos centrales de la constelación moral psicosocial. Combinados, según los criterios expuestos y complementados por el resto de valores seleccionados, formarían un conjunto coherente y pertinente para guiar la APS de orientación comunitaria.

PALABRAS CLAVE

- Valores.
- Orientaciones valorativas.
- Valores y principios deontológicos.
- Beneficencia.
- No maleficencia.
- Autonomía individual.
- Autonomía compartida o colectiva.
- Confianza.
- Veracidad factual y holística.
- Justicia social (visión restringida).
- Interés propio y autocuidado.
- Justicia social.
- Justicia sustantiva-mínimo vital.
- Justicia distributiva-igualdad.
- Justicia procesal-equidad relacional.
- Solidaridad.
- Comunidad.
- Compromiso social.
- Responsabilidad social.
- Diversidad.
- Desarrollo humano.
- Empoderamiento.
- Participación social.
- Organización social.
- Eficacia.
- Sistema valorativo sociocomunitario.

5

Temas y cuestiones éticas psicosociales: tipos y contenido

Este capítulo examina algunos temas generales y cuestiones concretas de la ética psicosocial que, aunque han desfilado ya más o menos episódicamente por los capítulos anteriores de la mano de sus respectivas temáticas, reciben aquí atención directa y sistemática. Y es que, en efecto, no sólo ha ido surgiendo en esos capítulos un sinfín de dudas y problemas concretos de la práctica, sino también muchas cuestiones éticas y valorativas suscitadas por los distintos tópicos tratados: el contexto sociocultural (capítulo 1), el concepto e ingredientes básicos de la APS (capítulo 2), la constitución de una ética profesional de carácter psicológico y social (capítulo 3), y los valores profesionales y sociocomunitarios en la práctica psicosocial (capítulo 4).

Hagamos inventario de los temas ético-valorativos que han emergido en esos capítulos: tecnocracia; fundamentalismo moral; retórica «buenista»; utopismo ideológico; anomia normativa; sobrerresponsabilidad personal y profesional; viabilidad práctica de la ética psicosocial; viabilidad social de esa ética; límites de la autonomía profesional en la acción colectiva y/o autodirigida; límites del poder técnico psicosocial; objetividad y neutralidad (frente a implicación personal y compromiso social); heterogeneidad y multiplicidad de las relaciones socioprofesionales; posibilidades de colaboración con grupos y comunidades; límites del servicio a otros; quién es el «otro» (orientación de la responsabilidad socioprofesional); contenido, alcance y límites de esa responsabilidad; multiplicidad y multivalencia de las consecuencias; criterios prácticos de definición del bien y el mal, la bondad y la maldad de las consecuencias; responsabilidad y corresponsabilidad; responsabilidad por efectos negativos; papel del contexto y los sujetos en evaluación moral; influencia del poder y la política en la evaluación y actuación ética; diferencias de valores entre practicante y actores sociales; papel de la subjetividad y el interés social en la definición de la «veracidad holística»; acción solidaria en un mundo insolidario; compromiso social personalizado frente a responsabilidad social despersonalizada; dialéctica diferencia-igualdad, o definición y criterios de equidad.

Ya vemos al examinar esa lista que en el terreno psicosocial la temática ética es variopinta y elástica: no sólo abraza los problemas y dilemas de la práctica, sino también un sinfín de interrogantes sobre la naturaleza y constitución de la ética

psicosocial y sobre sus relaciones y viabilidad en el mundo actual. Tampoco debe sorprendernos: es más fácil preguntar que responder; mientras los problemas son ilimitados e irrumpen con descaro, sus soluciones —y los recursos para hacerlas realidad— son limitados, nebulosos y difíciles de forjar. Recuerdo que, en nuestro caso, las «soluciones» (orientaciones) valorativas fueron propuestas en el capítulo 4, donde se justificó la opción de presentar las «soluciones» antes que los problemas morales a los que dan respuesta, frente a la posibilidad alternativa de introducir los problemas antes que las «soluciones».

La ventaja de ese proceder expositivo es que ya podemos asociar ciertos valores a las cuestiones que ahora plantearemos, con lo que tenemos andada una parte del camino para su respuesta. Sólo falta incorporar los parámetros concretos del caso (la situación, los actores, las relaciones, etc.) para poder especificar el análisis del problema moral y las opciones y alternativas entre las que elegir, en vista de las consecuencias previsibles. La casuística que conjuga los ingredientes básicos (el problema, los actores, los valores, las opciones y las consecuencias) en una situación concreta es presentada en el capítulo próximo, una vez explicado el esquema AVOC que los ordena metodológicamente.

Mi propósito en este capítulo es sistematizar y catalogar las cuestiones y problemas de la ética psicosocial en los dos niveles que la constituyen: en el nivel abstracto o general, los *grandes temas éticos* de la APS y las cuestiones previas a la actuación; en el nivel concreto, las *cuestiones* y problemas de la práctica. Ya se verá, de todas formas, que los dos niveles (temas generales y cuestiones concretas) no son estancos, sino que están conectados e interactúan constantemente, como también lo hacen, por otro lado y en cada caso, los valores y principios del nivel general con los actores, relaciones y parámetros situacionales del nivel concreto. Así, el tema genérico del intervencionismo psicosocial remite a cuestiones concretas sobre cuándo y cómo intervenir; el tema general de la elección de destinatario está conectado con los conflictos de intereses y lealtades; y, en fin, la intencionalidad y subjetividad del practicante puede estar (positiva o negativamente) asociada con las consecuencias, que a su vez remiten a factores como la competencia profesional y científica del practicante y su perspicacia analítica y valorativa ante la situación concreta.

Organizo este capítulo en torno a tres núcleos de contenido:

1. Las cuestiones ético-sociales previas que enmarcan la APS.
2. Los grandes temas éticos.
3. Los problemas y dilemas concretos de la práctica cotidiana.

En el caso de los temas generales y las cuestiones concretas, ofrezco un catálogo sumario, remitiendo, cuando es pertinente, a otros pasajes del texto donde se han abordado las cuestiones y sus eventuales soluciones. Las cinco cuestiones previas seleccionadas (contradicción medios-fines, legitimidad, autoridad, intencionalidad y racionalidad) son consideradas más detenidamente e incorporadas también al listado de cuestiones generales al que, por lógica, pertenecen.

Creo conveniente abordar, antes de entrar en el catálogo sustantivo de temas y

cuestiones, los tipos de dificultades y problemas éticos, así como las situaciones de la práctica psicosocial en las que la aparición de esas cuestiones es más frecuente y esperable.

1. TIPOLOGÍA DE LOS PROBLEMAS ÉTICOS: CONFLICTO Y ANOMIA

¿Qué tipos de cuestiones y problemas éticos plantea la práctica psicosocial (la práctica profesional en general)? ¿Qué situaciones y factores constituyentes, más o menos característicos de la APS, son más propensos a generar esos problemas? Trato de responder a esas preguntas distinguiendo (Sánchez Vidal, 1999, 2002, 2007) dos clases de problemas éticos prácticos —conflicto y anomia— y exponiendo situaciones psicosociales en las que, al abundar la novedad, la indeterminación o la multiplicidad potencialmente divergente, florecen los problemas de una u otra clase.

1.1. Conflictos: Valores, actores, opciones y consecuencias

Valores y actores. Tradicionalmente las dificultades éticas se codifican y discuten como conflictos de valores. Sin embargo, esa es sólo una de las categorías de la problemática práctica que debemos ampliar si queremos tener un retrato cabal de esa problemática.

Es preciso, en primer lugar, extender el *conflicto* al resto de ingredientes éticos del análisis y la acción psicosocial (actores, opciones y consecuencias), reconociendo que no todas las divergencias o confrontaciones observables están ocasionadas por la disparidad u oposición entre valores morales.

Así, en la vertiente del *análisis* ético, el conflicto entre *actores* puede no reflejar un conflicto entre los valores de esos actores, sino más bien rivalidades personales, luchas por el poder o el liderazgo o enfrentamientos por el reconocimiento social (tabla 5.1). La distinción es importante, porque el abordaje práctico diferirá según el origen del problema: si la situación expresa un conflicto de valores (que, según lo explicado en el capítulo 4, puede —o no— ser soluble, dependiendo de la existencia o inexistencia de opciones compatibles con la promoción conjunta de los valores enfrentados), se impone la clarificación valorativa y el arbitraje moral. Si las raíces del problema son, en cambio, psicológicas o sociales deberemos usar estrategias más propiamente psicosociales, como facilitar el contacto y la comunicación o la transacción de los ingredientes (poder, reconocimiento social, autoestima, etc.) generadores y mantenedores del conflicto.

TABLA 5.1
Problemas éticos: conflictos AVOC y «soluciones» orientadoras

AVOC	Conflictos	Soluciones
Valores	Entre valores.	Identificar, aclarar, relacionar, jerarquizar

	Intravalores.	valores; intermediar entre actores.
Actores	De valores (morales). Psicológicos y sociales (rivalidad, celos de liderazgo, prejuicios).	Identificar mínimos irrenunciables, «líneas rojas»; buscar zonas de acuerdo y «negociar» otros valores (igual que conflictos de valores). Intermediar entre actores, facilitar comunicación y «negociación» (autoestima, poder, influencia social).
Opciones	Excluyentes: «conflicto» frontal (Inclusivas: divergencia en reparto beneficencia/maleficencia).	Elegir opción en base a valores y consecuencias. Aportar opciones.
Consecuencias	Divergencia en reparto entre actores de beneficencia y maleficencia (consecuencias múltiples + multivalentes).	Aclarar alcance y significado de consecuencias. Ayudar a actores a elegir. Optimizar combinatoria beneficencia/maleficencia de opciones según valores y vulnerabilidad de actores. Mediar en la negociación del reparto beneficencia-maleficencia sin sacrificar valores básicos.

Segundo, el enfrentamiento no tiene por qué darse entre valores diferentes (beneficencia y autonomía, por ejemplo), sino entre actores que pugnan por un mismo valor, con lo que tendremos un conflicto *intravalorativo.* Puede así suceder que las opciones existentes para incrementar el bienestar de uno de los actores perjudiquen (en una coyuntura concreta) el bienestar de otros, o que los dispositivos institucionales u organizativos impidan maximizar al mismo tiempo el bienestar de los distintos actores, de manera que para que unos actores, estén bien y sean beneficiados por una acción profesional (así, una coordinadora), otros (los trabajadores) van a resultar perjudicados (Sánchez Vidal, 2002). O viceversa, el beneficio del grupo puede exigir, bajo las condiciones organizativas o institucionales existentes, sacrificios humanamente dañinos a otros actores.

Opciones y consecuencias. En la vertiente de la *acción* pueden existir conflictos de opciones y consecuencias. Aunque, bien mirado, lo que realmente entra en conflicto no son las opciones, sino, como señalé en el capítulo 4, las consecuencias que esas opciones tendrían para los actores presentes, según sus respectivos valores e intereses. Se trata, pues, de conflictos entre las *consecuencias* sociopersonales de las distintas opciones: mientras una opción A beneficia a unos y daña (o no beneficia) a otros, otra B daña (o no beneficia) a los que la opción A beneficiaba, pero beneficia a aquellos que resultaban perjudicados en la primera opción. En un escenario poblado por un cierto número de actores en el que se contemplan varias opciones, la casuística conflictiva es casi ilimitada, no derivando tanto de la mera cantidad de combinaciones de beneficencia y maleficencia con el número de actores afectables y de las opciones posibles como, sobre todo, de la imposibilidad de cumplir en la práctica la regla de maximizar el bien de todos minimizando el mal general. ¿Por qué?

Porque, como ya se ha indicado en otros capítulos, *beneficencia y no maleficencia* no son estrictamente independientes, sino que a menudo están *psicológica y socialmente* vinculadas, de forma que, en las condiciones de actuación real con recursos técnicos, logísticos y humanos limitados, beneficiar a unos (mediante una

opción o alternativa de actuación concreta) a menudo *implica* perjudicar (o no beneficiar) a otros. Traducido a términos morales, la beneficencia no es en realidad, como parecen asumir los «utilitaristas», una cuestión matemática de sumas y restas, máximos y mínimos, sino que implica siempre en la práctica, con recursos finitos, a la *justicia social*; es una cuestión de *reparto* de recursos *limitados* (la beneficencia posible) y variadamente interconectados en el plano social (a menudo y en condiciones de pluralidad valorativa, inversamente: lo que beneficia a unos va a perjudicar a otros, y viceversa).

Ya se ve, en fin, que la casuística planteada por las opciones y sus consecuencias en el terreno psicosocial es casi inabarcable, de forma que catalogar las diversas situaciones de divergencia de consecuencias como «conflictivas» es convenientemente vago, porque la métrica de esas consecuencias para los diferentes actores no es homogénea —al erigirse en buena parte sobre los valores de cada actor — y no puede, por tanto, ser tomada como criterio empírico taxativo y definitivo. Sumar —y restar— consecuencias para maximizar las positivas y minimizar las negativas equivaldría, en ese sentido y exagerando un poco, a sumar peras y manzanas.

El tipo de conflicto presentado por las *opciones* es algo diferente: pivota, en primer lugar, sobre su carácter *excluyente* (debo elegir entre X *o* Y) o *inclusivo* (puedo combinar X *e* Y, que son alternativas compatibles). Es también importante detectar, en segundo lugar, si las opciones A y B inicialmente contempladas *no* son las *únicas,* existiendo terceras opciones moral y estratégicamente tan meritorias, o más, que X o Y. Si, por ejemplo, debemos elegir (caso A, capítulo 6) entre seguir un tratamiento ordenado por un juez o negarnos a actuar porque la anuencia con el mandato judicial conlleva la violación de una norma ética fundamental, el consentimiento voluntario e informado. O si (Sánchez Vidal, 2007) en el curso de una evaluación práctica debemos denunciar un comportamiento lesivo para el interés público (o para un grupo vulnerable), o abstenernos de hacerlo en nombre de la confidencialidad debida a la institución o al cliente privado. O si, en fin, en un caso de maleficencia (Sánchez Vidal, 2002), ocasionada por una mala praxis no intencionada, el profesional puede limitarse a no hacer nada al finalizar la intervención pactada, o si debe, por el contrario, actuar para reparar los daños causados.

La clave, en esos —y otros muchos— casos, es la existencia, o no, de *terceras* vías que marcan la diferencia entre los *dilemas* «inescapables» de actuación y los conflictos asociados a la correcta identificación de opciones o a la mejor manera de combinar esas opciones desde el doble punto de vista de los valores y las consecuencias. Así, en el caso (Sánchez Vidal, 2002) de una coordinadora psicológicamente perjudicada por una deficiente actuación grupal, las opciones inicialmente contempladas (no hacer nada o reparar el daño) son excluyentes (el profesional no puede obviamente desentenderse del daño ocasionado, sino responsabilizarse de su reparación). Pero las opciones subsiguientes —cómo actuar y qué hacer respecto a los cambios psicológicos y socioinstitucionales a realizar— son

compatibles y combinables, no excluyentes. El practicante puede, por ejemplo, proponer ayudar en la orientación laboral y vital de la coordinadora, a la vez que sugiere —y se implica en— la realización de cambios organizativos sobre la manera de hacer las reuniones y tomar las decisiones con las trabajadoras.

Esto revela, en fin, una tercera característica de las opciones en la APS: su frecuente *interconexión* temática o secuencial. En el caso, las opciones sobre qué hacer y cómo actuar en el segundo momento de la intervención están *temporalmente* encadenadas a la primera opción: sólo tienen sentido si el practicante elige actuar, careciendo de él si la opción moral (incorrecta) es abstenerse de actuar, no hacer nada. Pero algunas opciones están también *temáticamente* entrelazadas: si el practicante elige (con buen criterio estratégico) introducir cambios en la forma de la relación y la toma de decisiones de los equipos laborales, debe contar con la autorización del responsable de la institución, además, por supuesto, del consentimiento de la coordinadora y las trabajadoras que deben aceptar —y llevar a cabo y valorar— las reformas propuestas.

1.2. Anomia AVOC

La segunda categoría de problemática psicosocial es la anomia, la *ambigüedad* o incertidumbre respecto de la identidad y el contenido de los ingredientes de la ética psicosocial: no sabemos quiénes son los actores, cuáles son sus valores, qué opciones diferentes existen o cuáles son las consecuencias previsibles de esas opciones para los actores (tabla 5.2). Examinemos las dudas e incertidumbres asociadas a cada ingrediente.

TABLA 5.2
Problemas éticos: anomia AVOC y «soluciones»

AVOC	Anomia/indeterminación	Tareas/«soluciones» orientadoras
Actores	«Quién es quién» en la APS	Aclarar identidad y papel de cada actor (practicante, destinatario, cliente, etc.). Identificar valores propios sin proyectarlos sobre otros. Identificar valores de actores (a través del discurso, la relación y las acciones pasadas). Aportar/sugerir valores pertinentes a cada situación/caso.
Valores	De cada actor (pertinentes al caso o situación).	
Opciones	¿Excluyentes o inclusivas?	Identificar/aclarar/aportar opciones diferenciadas. Establecer carácter (excluyente-inclusivo/combinable). Examinar dinámica (interconexiones, interdependencias) y viabilidad estratégica (aquí, ahora, con medios existentes). Identificar consecuencias previsibles (desde valores de actores y experiencia y evidencia válidas). Explicar y aclarar a actores consecuencias previsibles.
Consecuencias	¿Encadenadas?	
	¿Estratégicamente viables?	

Actores. No tenemos claro «quién es quién» (los actores) en la acción y qué *papel desempeña* cada actor en la parte actuante o en aquellos a quienes se dirige —o va a

afectar— la actuación, y las instituciones u organizaciones marco: quién es el destinatario de la acción, quién el cliente, qué papel juegan determinados grupos y actores, qué función tiene cada miembro del equipo actuante, etc.

Valores. Podemos ignorar cuáles son los valores de los actores o sospechar que esos están asumiendo los valores de otros o el discurso moral dominante (y queremos saber cuáles son sus verdaderos valores). Puede también suceder que les estemos atribuyendo valores que o no son los suyos o corresponden sólo a una parte del grupo, pero no al resto. La clave para despejar ese conjunto de dudas e incertidumbres es establecer algún método práctico razonablemente fiable para identificar los valores de los actores, evitando extrapolar a ellos nuestros valores o asignarles más o menos arbitrariamente los valores que les son estereotipadamente atribuidos por otros. Ello exige que el *practicante*:

1. *Identifique* primero *sus propios valores,* de forma que, siendo consciente de ellos, evite proyectarlos sobre —o atribuirlos a— los demás.
2. Disponga de procedimientos empíricos razonablemente válidos para identificar aquello que los actores juzgan humanamente valioso. Procedimientos que pueden incluir vías subjetivas —como la empatía o la intuición moral— para la detección inicial de los valores, pero deben también añadir algún sistema posterior de verificación empírica de las intuiciones iniciales.

¿Qué procedimientos prácticos podemos utilizar? El análisis del *discurso* o del *comportamiento pasado* de los actores (sobre todo en temas similares al de interés) y las declaraciones escritas (los estatutos, reglamentos, declaraciones de principios y demás, en el caso de instituciones y organizaciones) son tres métodos útiles. Los valores de los actores vendrán revelados por aquello que subyace a los *temas recurrentes o enfatizados* en el discurso hablado o escrito de los actores personales o institucionales. La *coherencia* entre discurso y acción (entre lo que se dice y declara y lo que realmente se ha hecho en el pasado) aportará valiosas pistas sobre las concordancias y discrepancias entre valores explícitos y valores (antivalores o intereses) implícitos a tener en cuenta en el análisis y la actuación final.

Opciones. La incertidumbre se centra aquí en qué opciones realmente *diferentes* (entre todas las existentes que debemos explorar inicialmente) contemplamos en un primer momento. Esas opciones pueden ser sometidas, en un segundo momento, a la criba de la *viabilidad*, reteniendo finalmente sólo aquellas que son viables con los medios disponibles. Conviene también examinar, en base al análisis anterior del conflicto, si las opciones identificadas son excluyentes o complementarias, si están encadenadas temática o secuencialmente y, si ese es el caso, cómo están interconectadas. Ya hemos visto antes cómo la existencia o no de terceras opciones, y su correcta identificación, es crucial para dilucidar si estamos ante un enfrentamiento entre opciones excluyentes (el «verdadero» conflicto dilemático) o si simplemente se trata de dudas asociadas a la elección entre varias alternativas diferenciadas más propias de esta categoría —la anomia— de problemas éticos.

Consecuencias. Albergamos dudas sobre el contenido de las consecuencias

(anticipadas a partir de los valores de los actores) que las opciones tendrán para los actores en las circunstancias dadas. Pero como ni todo el comportamiento humano está determinado por valores morales ni todas las consecuencias de las acciones psicosociales se pueden predecir sólo en base a esos valores, siempre existirá una zona «extramoral» de previsión a llenar con los datos válidos de la experiencia y la evidencia en el concreto tema de trabajo. La anomia consecuencialista puede entonces derivar tanto de las dudas existentes o los errores cometidos al identificar los valores de los actores, como de la imperfección de los procedimientos de predicción empírica (explicable por el relativo desconocimiento de los asuntos encarados y de los métodos técnicos para abordarlos) y de la falta de destreza del practicante que utiliza esos procedimientos.

Esa anomia será, por tanto, mayor y más relevante en problemas y *temas* psicosociales nuevos y *poco conocidos,* que entrañan a la vez ambigüedad e incertidumbre en los valores relevantes *y* en las consecuencias esperables, cuyo abordaje requiere —además de mejorar la base informativa y los métodos de evaluación y actuación— *diálogo* con los clientes y grupos sociales involucrados (vital para conocer a esos sujetos, los temas psicosociales que les ocupan y los valores morales en juego), *discusión* y puesta en común *profesional de experiencias y estrategias* de afrontamiento, y la recogida y análisis de *datos empíricos* pertinentes.

1.3. Orientaciones y «soluciones» a la anomia y el conflicto ético psicosocial

¿Qué solución tienen los problemas de anomia y conflictividad detectados en la APS? Dada la vocación práctica de este libro, es preciso contemplar algunas respuestas a las dudas y problemas que acucian al practicante y ofrecer soluciones, siquiera tentativas, a las dificultades y problemas éticos identificados en su trabajo cotidiano.

El carácter diferente de los dos tipos de problemas detectados exige líneas distintas de actuación en respuesta a las dos categorías de necesidades o demandas funcionales subyacentes. Mientras que las situaciones de anomia e indeterminación ponen de manifiesto *déficits*, desconocimiento o insuficiencia en cada ingrediente (actores, valores, opciones, consecuencias) de la ética psicosocial, la divergencia o conflicto en cada uno de esos ingredientes (ya conocidos) entraña (y expresa) un *enfrentamiento* más o menos frontal y soluble entre personas o grupos, que requiere conciliación si queremos trabajar armónica o unitariamente con todos los actores. La respuesta ha de ser, por tanto, distinta: los problemas de anomia exigen colmar déficits, aportar algo que falta o es desconocido, mientras que los conflictos llaman a pacificar actitudes y relaciones, a destensar situaciones.

Anomia. La respuesta genérica correcta a los problemas de anomia e indeterminación es la aportación de los ingredientes ausentes, indefinidos o inciertos: actores, valores, opciones y consecuencias previsibles. La tabla 5.2 especifica las orientaciones apropiadas para cada ingrediente. Si asumimos la APS como un

proceso de colaboración entre unos actores capaces y activos en la búsqueda y generación de valores y opciones, y un practicante técnica y moralmente competente que activa y *estimula* el *proceso* (pero no lo protagoniza), la misión de ese ante las situaciones de anomia consistiría en acompañar el proceso de búsqueda sin renunciar a hacer *aportaciones* (sugiriendo valores, opciones o consecuencias previsibles) cuando el proceso se atasca, dilata excesivamente o entra en vías muertas o patentemente improductivas. Aunque ese proceder resulte más lento y trabajoso que el «aleccionamiento» o la intervención moral directiva, es la única forma de promover el aprendizaje significativo y la agencia efectiva de los sujetos.

Eso no implica, quede claro, dejación moral alguna por parte del practicante, que puede (debe) tener un papel *decisivo* (aunque *no* necesariamente *decisorio*: el grueso de las decisiones debería recaer en los actores, la comunidad), en la medida en que *clarifica* y ordena las *discusiones* y debates de los actores sobre valores y opciones, sugiere u ofrece valores u opciones complementarias desde su propia perspectiva (externa) y usa, en fin, sus conocimientos y pericia técnica (psicosocial y moral) para descubrir dimensiones de los valores, las opciones o las consecuencias esperables que complementen las visiones de los actores e iluminen moral (y estratégicamente) el análisis y la toma de decisiones.

Conflicto. Las orientaciones de actuación en los casos de divergencia o conflicto son menos claras y resolutivas que en los de anomia, al no manifestar demandas funcionales tan nítidas. Como el conflicto puede tener diversos determinantes, la primera tarea es averiguar las causas originarias (así como los factores que mantienen el conflicto), haciendo de *mediador* técnica y moralmente cualificado entre las partes discrepantes o enfrentadas y facilitando el encuentro, la comunicación y la clarificación de significados (en los actores, sus valores, las opciones y sus consecuencias), para asegurarse, primero, de que se trata de un conflicto *real* y no un mero desencuentro verbalmente construido sobre prejuicios, incomprensiones y malentendidos que puede tener una solución relativamente sencilla y expeditiva. Y, segundo, habrá que averiguar la naturaleza del conflicto: entre actores, entre o intra valores, entre opciones excluyentes o respecto del reparto de beneficencia y maleficencia de las consecuencias para los distintos actores.

La intermediación debería tratar en ese caso de *destensar* las relaciones y discusiones grupales, ayudando a los actores a negociar las diferencias y colisiones de valores (y las divergencias en las opciones preferidas), estableciendo «líneas rojas» o suelos morales irrenunciables para todos, así como prioridades y zonas negociables tanto en los valores como en el reparto social y psicológico del beneficio y perjuicio de las opciones excluyentes (o complementarias) entre los actores implicados. Una última contribución relevante del practicante consistirá en ayudar a consensuar reglas y procedimientos de relación entre actores y de discusión de los temas que faciliten el diálogo interpersonal y la discusión sociomoral fructífera.

1.4. Situaciones y factores generadores

La tabla 5.3 acoge los dos tipos de situación (de anomia y conflicto) examinadas, junto a otras que, al contener aspectos de déficit o conflicto de los ingredientes éticos, tienden a producir problemas éticos en las APS. Revisémoslas brevemente:

— El excesivo *utopismo* e idealismo —frecuente en los enfoques psicosociales— del practicante suele ser fuente de propuestas de actuación irrealizables, creando un sentimiento de fracaso profesional y personal.
— La carencia de *información* o la incorrección de la información disponible en el momento de diseñar la actuación, de tomar decisiones o de actuar, o la irrupción de datos o acontecimientos imprevistos que obligan a modificar el curso de la actuación —y, a menudo, el rol del practicante— en direcciones no acordes con las expectativas de los actores sociales, siendo frecuentemente rechazadas por éstos.

TABLA 5.3
Situaciones que generan problemas éticos en la APS

- Casos y situaciones ricas en ambigüedad e incertidumbre respecto de actores, valores, opciones o consecuencias (anomia AVOC).
- Casos y situaciones pobladas de multiplicidad y heterogeneidad de actores, valores, opciones o consecuencias (divergencia y conflicto AVOC).
- Al repartir recursos (económicos, ayuda, tiempo, estima psicológica y prestigio social, etc.) escasos.
- Cuando la información disponible es insuficiente o inadecuada para el asunto y la acción concretos.
- En temas nuevos o desconocidos para el practicante (y poco tratados en la literatura) o ante la irrupción de datos nuevos que modifican la evaluación de la situación o el curso de acción.
- Existen varios destinatarios potenciales.
- Temas no incluidos en los códigos deontológicos de las profesiones psicosociales.
- Acontecimientos nuevos o imprevistos, circunstancias sociales mudables que exigen cambios en la línea de actuación y en el rol del practicante.
- Agendas ocultas (fines no explicitados) de los actores.
- Excesivo idealismo o utopismo del área de actuación o del practicante singular.
- Los sucesos exigen (o el practicante decide) hacer cambios de papel incompatibles entre sí.
- No existe contrato de actuación o el contrato pactado no es claro o suficiente para resolver dificultades nuevas o imprevistas.
- Heterogeneidad/diferencia entre valores o cultura de los actores sociales o entre los del practicante y los actores.

— Demandas funcionales o sociales (de la situación o de los actores) para asumir *papeles* diferentes de los tradicionales y *cambios* de rol durante la actuación con los que el practicante o no se encuentra cómodo (y preparado) para asumir o son incompatibles entre sí (pasa de ser activista partidario a mediador neutral, por ejemplo).
— La *escasez de recursos,* que dispara los conflictos entre los actores sociales y limita seriamente el diseño de la actuación más adecuada (con frecuencia la más costosa), obligando a realizar acciones que no son las beneficiosas o fructíferas para el conjunto de actores.
— La *pluralidad* de *destinatarios* potenciales, que puede fácilmente provocar en

el profesional conflictos psicológicos y morales como los papeles duales (o múltiples) o las lealtades enfrentadas hacia distintos actores (padres, hijos; un grupo comunitario y otro; el líder y un sector del grupo; etc.).

— La inexistencia, ambigüedad o complejidad de los *contratos* explícitos o implícitos y las agendas ocultas (fines no explicitados de los actores) son terreno abonado para la incertidumbre, el malentendido y la interpretación divergente, que suelen acabar ocasionando conflictos varios.

— La adopción en la AP de pautas *deontológicas,* pensadas para la actuación clínica, que resultan inadecuadas y sesgadas en la dirección de ciertos valores y clientes (individuales casi siempre) o insuficientes para analizar y diseñar la solución de los problemas éticos psicosociales.

— La *diferencia de valores* o de cultura entre los actores comunitarios o entre estos y el practicante, que, a falta de una efectiva comunicación (a menudo inexistente o irrealizable en el curso de una actuación real), haga explícitas y ayude a paliar tales diferencias, conlleva frecuentes malentendidos, riesgos de imposición de valores y conflictos imprevistos.

Las situaciones de inexistencia o insuficiencia del contrato y las agendas ocultas son retomadas más adelante al tratar las cuestiones prácticas concretas.

Dado que cada una de las circunstancias descritas por las situaciones repasadas son el «pan nuestro de cada día» de la APS, el practicante debe estar preparado para afrontar un sinfín de problemas y dilemas éticos ligados a cada una de ellas o a su combinación, que, como se ve por los ejemplos ofrecidos, mezcla a menudo la anomia y el conflicto.

2. CONTENIDO DE LA PROBLEMÁTICA ÉTICA PSICOSOCIAL: CUESTIONES PREVIAS

Una vez auscultados los tipos de problemas éticos psicosociales y las situaciones que los generan, debemos abordar ahora su contenido, tanto en los niveles más generales como en sus expresiones más concretas y frecuentes. Examino, en primer lugar, cinco premisas de la APS, especialmente en su orientación comunitaria. Aun cuando ciertos temas (como la contradicción medios-fines) conciernen sobre todo a las líneas más directivas o intervencionistas de actuación psicosocial, las cuestiones suscitadas son pertinentes en mayor o menor grado para todo el campo, aunque, debido al enfoque micro y casi acontextual dominante en el tratamiento de la problemática y la acción psicosocial, han sido clamorosamente omitidas en la discusión y publicación.

Examino a continuación las eventuales contradicciones éticas y estratégicas internas (entre medios y fines) de la APS, sus premisas ético-políticas (legitimidad y autoridad) y ciertos aspectos ético-técnicos (intencionalidad y racionalidad), ya tocados tangencialmente en los capítulos precedentes. Resumo, para ello, discusiones anteriores (Sánchez Vidal, 1990, 1999 y 2007), proponiendo en cada caso opciones o

respuestas prácticas congruentes con los valores fundamentales de la postura ética comunitaria bosquejada en el capítulo 3 y valorativamente explicitada en el capítulo 4.

2.1. Contradicción medios-fines: actuación externa y desarrollo humano autodirigido

La objeción que puede hacerse a una parte de la APS (especialmente en sus planteamientos más dirigistas o interventivos) es la oposición entre los fines de desarrollo humano y autonomía personal o colectiva propios del enfoque comunitario que la sustenta moralmente y los medios profesionales —la actuación externa— utilizados para conseguir esos fines. ¿Se trata de una contradicción real? ¿No es un contrasentido tratar de obtener autonomía, empoderamiento y desarrollo de capacidades personales a través de la actuación profesional externa, en vez de fomentar y apoyar la autogestión grupal o comunitaria? ¿Pueden conciliarse los extremos —autodirección personal, el fin, y la actuación externa como parte de los medios— en aparente oposición? No estoy planteando una cuestión puramente retórica, sino manifestando una tensión observable en la práctica entre la lógica comunitaria (procesal, autodirigida desde abajo por los sujetos, cooperativa) y la lógica profesional tradicional (directiva, externa, vertical, orientada a la eficacia y los resultados), que puede o no cristalizar en conflictos visibles.

¿Es posible resolver esa contradicción de *principio* y armonizar las dos lógicas subyacentes? Creo que sí. ¿Cómo? Considerándolas como lo que son: dos lógicas o enfoques no excluyentes, sino complementarios, que pueden ser más o menos fructíferamente combinados en muchos programas y líneas de APS. Nada impide, por ejemplo, crear un programa de promoción de la salud o desarrollo comunitario que combine los conocimientos y esfuerzos de médicos, ingenieros, psicólogos y trabajadores sociales con la iniciativa de la gente para establecer sus necesidades y aspiraciones prioritarias y perseguirlas con la colaboración y apoyo profesional e institucional. Hacer compatible la acción profesional y con la autodirección grupal o comunitaria exige, sin embargo, que aquella incluya, además de la actuación externa más o menos planificada, el estímulo de las capacidades organizativas y recursos de los personales y colectivos.

Al suprimir las aristas más intervencionistas de la acción profesional, esa concepción haría, como se indicó en el capítulo 2, superflua la distinción entre intervención psicosocial y acción psicosocial. Admitiría, en fin, una serie de perspectivas de actuación, incluyendo como posibilidad real una «autogestión asistida» que, si existen iniciativas vivas en los colectivos, podría resultar muy fructífera. Resumiendo, la divergencia de la autodirección y autogestión colectiva (fin) y el intervencionismo profesional (como uno de los medios) desaparece si la APS (tabla 5.4):

TABLA 5.4

Cuestiones previas: contradicción medios-fines

Cuestión	Opciones/«Soluciones»
Contradicción entre: **actuación** profesional **externa** y **autodirección** colectiva	Actuación incluye/subraya: • Desarrollo de recursos personales y comunitarios. • Iniciativa y participación grupos/comunidad en acciones psicosociales. • Respeta los valores/fines de la comunidad/grupo sin imponer los propios; se puede (debe) aportar o sugerir valores/fines apropiados que los sujetos pueden usar para articular sus propias metas.

— Incluye el *desarrollo* de *los recursos* personales, grupales y comunitarios: vinculación y solidaridad, interés y motivación, organización colectiva, liderazgo, educación, capacidad de identificar metas y objetivos, etc.
— Fomenta la *participación* e iniciativa de los actores sociales en aquellos procesos y actividades que, por su carácter o nivel, precisen coordinación y planificación global, como la organización de servicios colectivos, la constitución de instituciones representativas o la acción política pública.
— *Respeta* los *valores y fines* fundamentales de los grupos y comunidades e intenta evitar la imposición de fines y valores propios o ajenos, lo cual no excluye la posibilidad (el deber) de ofrecer valores y *sugerir* metas, que puedan iluminar moralmente y articular operativamente la acción. La clave es el modo de relación. No es lo mismo ofrecer recursos que el otro puede libremente usar y hacer suyos, que imponer —aunque sea inadvertidamente— valores o metas propios; lo primero ayudará al desarrollo humano de los sujetos, generando conocimiento, poder y autonomía, mientras que lo segundo generará impotencia, dependencia y conocimiento distorsionado (ideología).

Naturalmente que la «solución» propuesta no borra de un plumazo las divergencias entre fines de desarrollo personal y colectivo y los medios profesionales más o menos intervencionistas usados para conseguirlos (o, si se prefiere, entre la forma tradicional de trabajar de los profesionales y las aspiraciones autogestionarias de ciertos colectivos y movimientos sociales). Tampoco suprimirá los conflictos de la práctica cotidiana que deben ser abordados. Sí sostiene, en cambio, la afirmación de que *no tiene por qué* haber *oposición* de principio entre el fin genérico de desarrollo humano y la APS profesional, como medio para su logro. Y pueden darse, en cambio, problemas de *orientación* y de *grado*: de la orientación intervencionista, no comunitaria de la APS, y de la medida en que, para asegurar la eficacia de la acción, se utiliza un grado de control técnico y dirección profesional que merme la autonomía y capacidad de decidir y adquirir poder de los grupos o comunidades. El problema práctico es, entonces, cómo alcanzar el equilibrio óptimo entre la eficacia deseable de la actuación externa y el respeto ético de la capacidad de los otros y de su cualidad de verdaderos sujetos agentes de la acción psicosocial.

3. LEGITIMIDAD, INTERVENCIONISMO Y DEBER DE AYUDAR

Al introducir aquí los temas de legitimidad y autoridad nos estamos interrogando, respectivamente, sobre la *justificación sociomoral* de interferir en la vida y relaciones de la gente y sobre las «credenciales» sociales y técnicas exigibles a los profesionales autorizados para llevar a término esa interferencia. Planteamos, de otro modo, la doble legitimidad, de la APS por un lado, y del practicante psicosocial, por otro, que puede hacerse a dos niveles: uno genérico, en el conjunto de actuaciones (y profesionales) psicosociales, y otro específico, en cada actuación (y practicante) singular. Como esta es una cuestión multidisciplinar y compleja —escandalosamente ausente de la literatura psicosocial— que desborda el enfoque práctico de este libro, me limito a ofrecer algunas líneas analíticas y orientaciones resolutivas elaboradas a partir de escritos previos (Sánchez Vidal, 1990 y 1991) sobre la intervención social y la legitimidad de la intervención comunitaria.

La intervención profesional externa se puede en principio justificar por dos razones:

1. Se sabe (en base a datos objetivos) que el grupo o comunidad destinatario ha perdido su habitual capacidad de autogobernarse y resolver sus problemas, por lo que precisa ayuda externa.
2. El profesional reúne las cualidades técnicas y morales —la autoridad— para actuar eficaz y benéficamente.

Existe, simplificando, una aspiración, necesidad o problema psicosocial irresoluble o inalcanzable para sus titulares, que un profesional técnica y moralmente cualificado puede ayudar a resolver o alcanzar. Pero, ojo, no basta simplemente asumir —en base a vagas intenciones o preferencias ideológicas— la incapacidad operativa colectiva, debiendo constatarla fehacientemente. Es preciso que el practicante aporte algún criterio razonablemente *objetivo* (es decir, desligado de la propia subjetividad intencional e ideológica) que justifique la actuación.

Podemos abordar el tema de la legitimidad desgajándolo en tres subtemas interconectados:

1. El intervencionismo social, la alternativa genérica de actuar o no actuar en la vida social.
2. El intervencionismo profesional, el grado de imposición que conlleva la acción profesional según la forma que esa adopte.
3. La calidad de derecho o deber de la APS, ligada respectivamente a la doble responsabilidad —por acción y por omisión— implicada.

La tabla 5.5 resume la discusión de la legitimidad, incluyendo también algunas respuestas sociomoralmente aceptables a las cuestiones asociadas.

3.1. Intervencionismo social: liberalismo y planificación socialista

Aunque su establecimiento no competa al profesional, las filosofías de la acción social le atañen y afectan, al establecer las coordenadas sociopolíticas en las que habrá de situar sus proyectos y actuaciones concretas. Examinemos las dos ideologías polares —liberalismo y planificación socialista— y su posición frente a los problemas sociales y la acción social. Ante un problema o cuestión social, el liberalismo aboga por la no intervención, «*laissez faire*»: las cosas funcionan mejor en un sistema social cuando este resuelve por sí solo sus problemas. La APS no tiene pues lugar en el liberalismo «puro». Algo similar sucede en la sociedad socialista planificada: carece de sentido hablar de intervención ocasional, ya que todo está intervenido y organizado —en un nivel central— por el Estado.

Ambas posturas ideológicas (que no pocos dan, según vimos en el capítulo 1, por agotadas) resultan, para nosotros, inaceptables. La primera, el liberalismo «puro», porque, aunque movilice el gran dinamismo y expansividad social y económica desencadenadas por el egoísmo moral y la libertad individual, genera desigualdad y destruye la solidaridad y la responsabilidad social, dejando a los más débiles y vulnerables indefensos frente a las poderosas e inhumanas fuerzas económicas y sociales desatadas por las exigencias y «leyes» del mercado. La segunda, la planificación socialista, porque, aun cuando permita alcanzar altas cotas de igualdad y solidaridad, conduce a un régimen totalitario y centralizado en el que, al negar la subjetividad y la agencia personal, individuos y comunidades quedan reducidos a poco más que engranajes de un sistema absorbente y homogeneizador.

En otras palabras, y según los tres modelos de solidaridad comunitaria propuestos por Kirpatrick (1986), mientras el liberalismo promueve un sucedáneo de comunidad erigida sobre la base de unos individuos independientes sólo vinculados por el interés racional, el socialismo comunista auspicia una comunidad orgánica que niega la individualidad, sacrificándola al todo. Ninguno de los dos modelos es, por tanto, aceptable para la APS de orientación comunitaria aquí propugnada. Como ideología social parece claramente preferible la tercera alternativa de Kirpatrick, la solidaridad comunitaria basada en la relación y la mutualidad y orientada a la realización personal. Como base de la acción social, no podemos aceptar ni la inacción ante el sufrimiento y la injusticia (implícita en el liberalismo) ni la organización total de la vida social (resultante del proceso de «construcción» del socialismo), que excluye la intervención temporal y ocasional (no total y permanente), complementaria (y corresponsable) y promotora de las capacidades personales y colectivas.

La actuación profesional aquí propuesta se sustenta sobre los valores (capítulo 4) de *solidaridad social* (los problemas de algunos deben ser solidariamente asumidos por todos, contribuyendo a su solución conjunta), *responsabilidad pública* en la solución de esos problemas y, en el nivel profesional, *corresponsabilidad* del practicante y de los actores sociales que permita el empoderamiento y el desarrollo humano conjunto.

3.2. Intervencionismo profesional y desarrollo humano

Si la primera cuestión, el intervencionismo social, al ser más periférica, puede ser resuelta con un razonamiento externo relativamente lineal, la segunda, el intervencionismo profesional, no admite escapatorias retóricas, pues interpela directamente nuestra praxis. Y es que plantea la alternativa (ya discutida en el capítulo 2) entre ciertas líneas de APS más impositivas y dirigistas de actuar y otras —el fomento de recursos y capacidades y la activación social— más comunitarias y orientadas al desarrollo humano «inmanente». No se trata de cuestionar la legitimidad genérica de la APS, sino el *grado* de imposición implicada y la *forma* de actuar que, teniendo en cuenta la eficacia de la acción y los valores implícitamente promovidos (autonomía compartida, justicia social y solidaridad), «garantice» el empoderamiento y el desarrollo humano conjunto.

Desde esa perspectiva, la actuación psicosocial no sólo puede *no* ser positiva o deseable, sino que, en la medida en que interfiere con los procesos colectivos de enfrentar problemas, puede resultar contraproducente, al impedir o frenar el desarrollo de capacidades y la asunción de responsabilidades de los sujetos en vez de potenciarlos. Pero debemos tener también en mente el reverso del argumento intervencionista: el riesgo que entraña la pasividad y la inacción ante el sufrimiento o los problemas de los demás. ¿Cuándo podemos considerar, entonces, teniendo en cuenta los dos riesgos —intervencionismo y pasividad cómplice— implicados, legítima una APS? Cuando —ampliando el argumento sobre la contradicción medios-fines— la actuación cumpla tres condiciones:

1. Está motivada o *justificada* porque la actuación:

   a) Añade algún elemento clave (conciencia y conocimiento, formas de evaluar o actuar, etc.) ausente en el grupo o comunidad y necesario para conseguir los objetivos propuestos.
   b) Induce o echa a andar algún tipo de proceso (reflexión, contacto y comunicación social, reivindicación, etc.) necesario para «activar» psicosocialmente a los grupos o la comunidad que de otro modo no emergería.
   c) Potencia técnicamente procesos de búsqueda de soluciones y actuación ya existentes, pero insuficientes por sí solos para alcanzar las metas proclamadas.

   Estoy, como se ve, proponiendo una modalidad de *actuación* más *aditiva y complementaria* que impositiva.
2. Adopta una *doble perspectiva* finalista y temporal, ayudando, por un lado, a *resolver los problemas* actuales y *estimulando,* por otro, la *capacidad* del grupo o comunidad de enfrentarse a retos similares en el futuro. Este enfoque resuelve de algún modo —sobre el papel— el dilema medios-fines antes planteado.
3. La acción que se promueve es congruente —o al menos *compatible*— con los deseos y *valores* básicos del grupo o comunidad y con su *participación* activa

en los cambios.

Hay que apuntar, sin embargo, dos reservas o áreas donde estas indicaciones pueden resultar insuficientes o problemáticas.

Primera, en las acciones *impositivas* o cuando no existe demanda; por ejemplo, en actuaciones ordenadas por un juez u otro agente socialmente autorizado, o en aquellas donde el profesional está en desacuerdo con los objetivos propuestos por el grupo o comunidad. Eso sucedería, por ejemplo, en casos de maltrato, en el trabajo con delincuentes que han infringido la ley y causado daños personales, o cuando un gobierno quiere instalar un equipamiento o servicio (un centro para drogodependientes o una mezquita) al que la mayoría local se opone.

La segunda reserva, la *legitimidad* de los *medios* de actuación, no está ni social ni moralmente garantizada por la legitimidad de los objetivos o las acciones propuestas: *ha de ser establecida per se,* asegurando que las técnicas utilizadas no violentan valores morales básicos como la dignidad, la vida humana, la autonomía personal o compartida o la justicia social (sobre todo el mínimo vital de supervivencia). Es preciso, en resumen, asegurar la legitimidad moral de los fines perseguidos *y* la de los medios para alcanzarlos.

3.3. Responsabilidad profesional por acción y por omisión

Pero, como se ha indicado, el riesgo de intervencionismo —excederse por paternalismo, celo profesional o lo que fuere— no es el único presente en la APS. Existe otro riesgo simétrico, y de igual o mayor relevancia: no actuar cuando, ante una situación de necesidad, daño o injusticia, habríamos de hacerlo. Al igual que el exceso intervensionista, la inacción comporta una responsabilidad, en este caso por *omisión,* asociada a la violación por parte del profesional de los principios de solidaridad social y responsabilidad que obligan a toda la sociedad (y también a sus élites intelectual y técnicamente cualificadas) a actuar para acabar con —paliar al menos— la pobreza, la desigualdad, el sufrimiento personal o la explotación humana. Desde ese punto de vista, la APS no es sólo un derecho, sino también un *deber*, que concierne al practicante y a la sociedad en su conjunto. Un deber avalado por una autoridad moral que, como veremos enseguida, trasciende la mera autorización política o técnica.

La perspectiva dual de riesgos de acción y de omisión sitúa el tema de la legitimidad en sus justos términos y pone la base para responder equilibradamente a la cuestión de la actuación impositiva (intervención), que debe contemplar tanto los efectos de actuar cuando deberíamos abstenernos como los de no actuar cuando tenemos razones morales para hacerlo. Revela, también, los *límites* de los *enfoques* autogestionados de APS, que sólo actuarán en respuesta a una demanda o iniciativa comunitaria o para complementar y activar el fermento de cambio existente, dando lugar a preguntas incómodas pero necesarias: ¿Y si no hay fermento de cambio? ¿Qué pasa con la injusticia o la violencia estructural y socialmente «aceptada» que no

provoca resistencia abierta en quienes la sufren?

4. AUTORIDAD E INTENCIONALIDAD

Abordo ahora los temas éticos de autoridad e intencionalidad, más ligados a la subjetividad del practicante (y a sus cualidades) que a la APS como tal. La APS se asienta, de entrada, sobre dos tipos concurrentes de autoridad: la autoridad política y la científico-técnica. Examinemos sintéticamente sus características (tabla 5.5).

TABLA 5.5
Cuestiones socioprofesionales: legitimidad y autoridad de la APS

Cuestión	Opciones/«Soluciones»
Legitimidad: justificación para interferir en la vida personal y social. ¿Derecho o deber?	Premisas valorativas: solidaridad social, responsabilidad pública y corresponsabilidad practicante-actores sociales. Justificación concreta, la acción: • Añade capacidades procesales o sustantivas al colectivo. • Respeta los valores básicos del conjunto. • Usa enfoque temporal dual { Ayuda a resolver problemas actuales. / Estimula competencias para enfrentarlos en el futuro.
Autoridad para actuar	Autoridad política = mandato democrático; establece marco general de la APS. Autoridad técnica = conocimiento válido y pericia práctica; diseñar realizar + evaluar APS. Autoridad moral = violación de valores éticos básicos en situaciones de grave sufrimiento personal, injusticia, explotación humana, etc.

4.1. Autoridad política, técnica y moral

La autoridad política deriva del mandato democrático otorgado por la comunidad a sus representantes, elegidos para ayudar a resolver los problemas y alcanzar las metas de aquella (y de las personas y colectivos que la componen) usando el poder y los recursos materiales y sociopolíticos colectivos. Compete a la autoridad política establecer los marcos políticos y prioridades sociales globales en que transcurre la APS en su conjunto, e impulsar y dotar a esa acción de los medios materiales y humanos necesarios para que pueda ser realizada y resulte beneficiosa para la comunidad.

La autoridad científico-técnica deriva de la experiencia y conocimientos teóricos u operativos válidos y de las habilidades técnicas precisas para diseñar, evaluar y ejecutar eficientemente las actuaciones y proyectos psicosociales concretos. Es la autoridad del experto o practicante, cuyas competencias son diseñar, organizar y realizar acciones psicosociales idealmente, en congruencia con las políticas sociales trazadas por la autoridad política y con las necesidades y deseos de la comunidad (las cuales deberían, a su vez, converger entre sí).

La autoridad moral. El practicante psicosocial carece, por tanto y de entrada, de autoridad política: ni está avalado por un mandato democrático de la comunidad, ni

de sus conocimientos o habilidades prácticas se deriva, en principio, autori-dad política alguna. Y, sin embargo, las profesiones psicosociales no pueden ser pensadas como portadoras asépticas de técnica o meras ejecutoras del mandato político: la APS tiene siempre una dimensión ética y política ¿Qué pasa, por otro lado, con la acción social, no profesional, desde abajo? ¿Carece de legitimidad y autoridad alguna?

Parece evidente que en el esquema bipartito anterior falta una autoridad que complemente los fundamentos político y técnico, reconociendo la legitimidad y conveniencia tanto de la *acción social desde abajo* (el activismo social, los movimientos sociales o el «tercer sector») como de la dimensión ético-política de la APS profesional. Se trata de una autoridad *moral*, ya que está sostenida por los principios morales de solidaridad social, responsabilidad pública (y corresponsabilidad profesional) que respalda la actuación en situaciones y problemas donde valores éticos básicos —como la dignidad humana, el derecho a la vida y la subsistencia, las libertades básicas o la justicia social— son flagrantemente violados sin tener respuesta de los políticos y expertos titulares de las otras formas de autoridad.

Entiendo que la autoridad moral tiene un carácter general más *complementario* que sustitutivo: no se trata de suplantar a las otras dos formas de autoridad (se corre entonces el riesgo de *deslegitimar* la acción institucional mediante atajos y caminos ilusoriamente simples), sino de suplementarlas en los casos y situaciones en que aquellas formas de autoridad no atiendan a necesidades y problemas significativos o lo hagan de forma ineficiente o moralmente inaceptable. Eso confiere, por otro lado, a la autoridad moral y a sus portadores una función de «vigilancia» de la acción institucional realizada por las autoridades política y experta. Parece entonces deseable una actitud de *colaboración* entre los tres tipos de autoridad que excluya el monopolio de cualquiera de ellas y facilite su convivencia en las dos modalidades de APS: la *intervención institucional* desde arriba (desde la autoridad político-técnica) y la *acción social* desde abajo (desde la autoridad moral). Aunque, en fin, el practicante o experto suele operar desde la órbita institucional, nada le impide participar, con distintos papeles, en la acción social desde abajo (o implicarse políticamente en la intervención institucional, en cuyo caso deja de tener un papel primariamente técnico para asumir uno político).

4.2. Intenciones, resultados, autobeneficio y agendas ocultas

Comparado con otros temas, como las consecuencias, la legitimidad o la autoridad, las intenciones son un tema esquivo y «opaco» en la APS. Por su carácter esencialmente subjetivo, implican e interesan a sus portadores; a los demás actores les trae sin cuidado la motivación interna de las acciones, pues lo que les interesa son los efectos —potencialmente benéficos o maléficos— que para ellos puedan tener. Pero, como las intenciones, además de expresar la subjetividad personal, son vectores interpersonalmente orientadores y tienen también importantes repercusiones externas, seleccionando con quiénes queremos trabajar y en qué temas. Se acaba estableciendo

así un juego de espejos en el encuentro social, tejido por la visión interna del practicante —en parte generada por sus intenciones— y la externa, del receptor de la acción, ligada no sólo a los resultados visibles de la acción sino a la percepción de las intenciones que, en base a sus intereses, valores o experiencia, atribuye al practicante (no le quiere, por ejemplo, ayudar: sólo está tratando de obtener un beneficio para sí; o, al contrario, es una buena persona en quien, aun sin evidencia relacional suficiente, «sabe» que puede confiar).

Obviando la abigarrada dinámica y casuística psicológica, social y estratégica de la intencionalidad, examino aquí tres cuestiones asociadas y relevantes para la APS: intenciones y resultados; intenciones latentes y «autobeneficio» del practicante y de los actores sociales; riesgos del intervencionismo social o profesional asociado al abuso de las buenas intenciones (tabla 5.6).

TABLA 5.6
Cuestiones éticas psicosociales: intencionalidad y racionalidad

Cuestión	Opciones/«Soluciones»
Riesgos del **abuso** de **buenas intenciones**: ineficacia, ocultar autobeneficio y anular al otro.	• Desvelar y controlar psicológica y socialmente las intenciones propias (del practicante). • Autobeneficio legítimo, autocuidado (practicante). • Vigilar «agendas ocultas» de actores sociales (y propias). • Pactar explícitamente un contrato. • Usar técnica y estrategia correcta; evaluar resultados y realizar programas piloto previos a la acción más extensa.
Racionalidad, en duda en APS por: • «Efectos secundarios». • Relevancia de vínculos y lógica relacional. • Relevancia de lógica política.	• Formación teórica y técnica. • Evaluación de programas. • Programas piloto. • Tener en cuenta y gestionar vínculos y relaciones. • Considerar y gestionar reparto de poder (dimensión política). • APS; postura política practicante: ¿imparcial/neutral o partidista?

Intenciones y resultados. Si las intenciones encarnan la vertiente *subjetiva* de la APS, han de ser controladas desde su contraparte objetiva, los resultados reales. No es suficiente, desde el punto de vista ético, que las intenciones sean buenas para que lo sea la acción resultante. Precisamos, *además* de intenciones benéficas, buenos resultados, lo que realmente ayuda a la gente. Eso significa que la APS debe erigirse sobre un doble y sólido fundamento, *intencional* (las intenciones personales, los idearios morales de las instituciones y organizaciones sociales) y *racional*, utilizando una técnica y estrategia adecuada y eficaz que, a partir de un conocimiento válido y de una evaluación contextual y temática correcta, permita llevar la acción a buen puerto, evaluar sus resultados y extraer lecciones del proceso.

Intenciones latentes y *autobeneficio del practicante.* La experiencia enseña que el practicante psicosocial no puede aceptar como verídicas las declaraciones verbales altruistas y benéficas. Bien al contrario, debemos sospechar que, junto a ellas, existen intenciones que, por su carácter egoísta o «autobenéfico», tienden a permanecer latentes. Intenciones egoístas que, como se explicó en el capítulo 3, suelen estar ligadas al poder y al prestigio social: mantenimiento de la estima y reputación del practicante, compensación monetaria o simbólica (reconocimiento externo), obtención de poder y estatus social, etc.

¿Cómo gestionar en la APS las intenciones latentes autobenéficas del practicante? Ofrezco dos reglas que veo moralmente aceptables y estratégicamente útiles:

1. Reconocer y acotar un autobeneficio *legítimo* (capítulos 3 y 4), que incluya el mantenimiento de la integridad física y psicológica del practicante y el derecho a los medios (información, motivación, reputación merecida, etc.) para alcanzar los fines pactados, excluyendo otras formas ilegítimas de egoísmo profesional.
2. Concebir el autobeneficio como «suelo» moral y psicológico de la APS (en lo que se refiere al reconocimiento del practicante como sujeto) y como principio secundario, subordinado a la beneficencia del destinatario de la actuación en el resto de aspectos: el practicante no trabaja para sí sino para el otro.

Como se indicó en los capítulos precedentes, esas reglas persiguen preservar tanto la integridad psicológica y moral del practicante, reconociendo su calidad de sujeto (fin) y no de mero medio técnico de otros, como la sostenibilidad temporal y la eficacia de la actuación profesional.

Agendas ocultas. A diferencia del autobeneficio del practicante, las agendas (propósitos, programas implícitos) ocultas se refieren a los motivos egoístas de otros actores o participantes en la APS. Estas intenciones socialmente «inconfesables» (y, por tanto, no confesadas) de los actores sociales, son harto frecuentes en todo encuentro social, girando en torno a los mismos contenidos (búsqueda de poder, prestigio y reconocimiento social) que las intenciones latentes del practicante, expresando otra variante del mismo fenómeno, el autobeneficio. Dado que, aun cuando permanezcan latentes, esas intenciones son poderosos determinantes de la conducta de los actores (creando a menudo una llamativa incongruencia con la conducta que esperaríamos de las intenciones benéficas confesadas), las agendas ocultas resultan difíciles de manejar en la práctica: están, pero no están; si se sacan a la luz para ser discutidas suelen ser negadas, pero si no se explicitan no pueden ser discutidas y, por tanto, «gestionadas» abierta y conscientemente por el grupo.

Una fórmula razonablemente eficaz de gestionar las agendas ocultas de los actores es el establecimiento de un *contrato* de actuación (tema retomado más adelante en las cuestiones éticas concretas), uno de cuyos apartados es, precisamente, la determinación de los objetivos de actuación. Cuando el destinatario (y otros actores relevantes) hayan de pactar tales objetivos habrán de *explicitar* (y discutir abiertamente) ciertos propósitos quedando el resto no explicitado, excluido del trabajo posterior. Los actores pueden, de ese modo, ser confrontados y remitidos a lo

pactado si otros propósitos o intenciones ocultas emergen de forma más o menos torticera en las interacciones y discusiones con el practicante.

4.3. Límites de la racionalidad científico-técnica: efectos secundarios y lógicas relacional y política

Se supone que, al tener una base científica que permite predecir sus efectos en función de las acciones realizadas y las técnicas usadas, la APS es *racional:* se trata de identificar (con el auxilio de las ciencias humanas y sociales) y usar ordenadamente los mejores *medios* técnicos para alcanzar *fines* preestablecidos. Esa es la teoría. En la práctica, tres datos cuestionan seriamente la racionalidad científico-técnica, revelando la existencia de lógicas no racionales en la APS: la abundancia de «efectos secundarios», la importancia de las relaciones interpersonales y la pareja formada por la relevancia del poder y los aspectos políticos. Los efectos indeseados contradicen frontalmente la racionalidad instrumental científico-técnica; la potencia de los factores relacionales y políticos desafía —en los planos psicosocial y macrosocial— el supuesto monopolio de esa lógica (que guía el diseño de soluciones a los problemas psicosociales), añadiendo otras dos lógicas (la relacional y la socio-política) imprescindibles para la correcta concepción y práctica de la APS. Examinemos los tres factores y las dos lógicas sugeridas.

Los *efectos secundarios* indeseados son endémicos en la APS, debido —entre otros factores— a la imperfección de la base científica y técnica que la fundamenta: sea porque se usan enfoques ideológicos imprecisos e inapropiados para las situaciones encaradas, sea porque el arsenal técnico es limitado o carecemos de indicaciones claras sobre qué técnica funciona y con qué problemas o aspiraciones, sea porque el conocimiento científico es aún bastante primitivo o está plagado de lagunas, errores y subjetividad desubicada, lo cierto es que la frecuencia e importancia de los efectos secundarios negativos desmiente la pretensión de absoluta racionalidad científico-técnica de la APS, complicando notablemente, como vimos en el capítulo 3, la asunción de responsabilidades. Habida cuenta de sus fallos e imprevisiones, sólo podemos sostener que, como cualquier forma de acción humana, la APS es *sólo en parte racional*, albergando otras lógicas que debemos tener en cuenta si hemos de mejorar la previsión y el dominio de sus efectos reales.

La relación interpersonal. La importancia práctica del vínculo relacional fue ya resaltada en el capítulo 3 al examinar la relación profesional. Se explicó que, como en cualquier acción inter-humana, la existencia en la APS de una relación entre las personas (y agrupaciones) implicadas es, primero, condición imprescindible para poder estar y trabajar con ellos, funcionando, segundo, como estimulador y multiplicador de los efectos de las técnicas utilizadas. De forma que, mientras la convergencia de una relación interpersonal de confianza con unas técnicas apropiadamente elegidas y utilizadas maximizará la eficacia (y presumible beneficencia) de las acciones, la ausencia de relaciones armoniosas o la presencia de relaciones negativas minimizará —o incluso suprime del todo— la eficacia de las

técnicas y su potencial beneficioso, sembrando, probablemente, las semillas de la desmotivación, el conflicto y los efectos perjudiciales.

La racionalidad política. La lógica sociopolítica asume un concepto «interesado» de los humanos, según el cual estos persiguen maximizar el propio *interés* en su comportamiento e interacciones sociales. Esa asunción es corroborada por la constatación del papel decisivo que los intereses sociales y políticos tienen en los asuntos psicosociales y, en general, en la acción social. Así, se observa que, aunque en teoría y según la lógica científico-técnica la correcta documentación de un estado de necesidad o riesgo psicosocial es la clave para poner en marcha un proyecto de actuación, en la práctica factores como la presión comunitaria, la denuncia en los medios de masas, la influencia política de un grupo o la cercanía a los que deciden tienen tanto o mayor peso que las razones científico-técnicas para decantar la decisión y lograr la realización del proyecto. Debemos, por tanto, añadir a la lógica relacional una segunda lógica (o racionalidad) política, diferente y divergente de la racionalidad instrumental científico-técnica.

Los fallos de previsión y la presencia de lógicas complementarias (como la emocional-relacional y la sociopolítica) cuestionan el concepto tradicional —esencialmente técnico-racional— de la APS, reivindicando una concepción mestiza y plural donde la racionalidad instrumental es sólo una dimensión entre varias. La visión tridimensional (técnica, relacional, política) resultante no supone sólo una desmitificación conceptual de la APS, teniendo también repercusiones prácticas relevantes. Primero, la mejora de la previsibilidad de la APS y del dominio de sus efectos técnicos exige tomar en consideración los ingredientes extrarracionales (divergentes, al menos de la lógica medios-fines) como el carácter e intensidad de las relaciones establecidas y los intereses sociopolíticos en juego. La introducción de las lógicas complementarias relacional y política obliga, en segundo lugar, a incluir la *creación* y la gestión de vínculos y *relaciones interpersonales* e intergrupales *y la evaluación y gestión del poder* y los intereses socio-políticos entre los componentes primordiales del papel psicosocial.

Cabría concluir que, de un lado, el rescate de las lógicas extrarracionales en la APS se limita a reconocer lo evidente: la importancia que la emoción, el vínculo relacional y el poder tienen en cualquier forma de interacción humana —incluida la profesional—, siempre movida por pulsaciones psicológicas y políticas. El fin del monopolio de la racionalidad instrumental, base del modelo científico-técnico, echa por tierra, de otro lado, la creencia de la suficiencia del papel de experto neutral tradicional asociada a ese modelo. Y replantea, en fin, cuestiones de largo alcance, como la manera de incorporar las dimensiones emotivas y políticas al papel psicosocial o la posición relacional y política moralmente más deseable y estratégicamente más conveniente.

5. TEMAS Y CUESTIONES ÉTICAS GENERALES DE LA APS

Es hora de recoger de forma sistemática los temas éticos generales que hemos ido

proponiendo y examinando a lo largo de los capítulos anteriores y en las páginas precedentes de este. A partir del conjunto de literatura escrita (capítulo 3), y de lo extraído de debates, medios de comunicación y discusiones de casos, ofrezco en la tabla 5.7 una panorámica sistemática de los temas —o aspectos procesales— éticamente relevantes del campo psicosocial, incluyendo las cuestiones previas recién discutidas. La fuente inmediata de esa recopilación son las elaboraciones anteriores (Sánchez Vidal, 1996, 1999 y 2007). Algunos de los temas generales aquí recogidos resuenan, o son retomados, en las cuestiones más frecuentes y menudas de la práctica psicosocial que se consideran en el siguiente apartado.

Además de ofrecer un catálogo de la temática moral de la APS, la lista ofrecida puede usarse para *controlar* la *«calidad ética*» de una actuación psicosocial recorriendo sus distintos aspectos y áreas: legitimidad y justificación de la actuación externa; autoridad que la fundamenta; destinatario y forma de identificarlo; intencionalidad del practicante personal, grupal o institucional; objetivos de la actuación y valores subyacentes; implicaciones éticas de la metodología y las técnicas usadas; evaluación de resultados y criterios valorativos implícitos; alcance y contenido de la responsabilidad del practicante; valores implícita o explícitamente promovidos por la actuación; papel del practicante y tipo de relación establecida con el grupo o la comunidad; contrato explícito o implícito pactado, y postura sociopolítica del interventor e implicaciones éticas y estratégicas.

TABLA 5.7
Temas éticos generales de la APS

- *Legitimidad y justificación* de la actuación: derecho y/o deber de intervenir en la vida social frente a autonomía personal y colectiva; condiciones de legitimidad y límites de la actuación profesional externa; contradicción entre fines de desarrollo humano autodirigido y medios, la acción externa; compatibilidad entre autonomía de los actores sociales y eficacia de la APS.
- *Autoridad* que fundamenta la actuación: política, científico-técnica; autoridad moral.
- *Destinatario:* quién es (la comunidad, el gobierno, el cliente que paga, actor o grupo más vulnerable); quién y cómo se identifica: ¿hay formas de participación efectiva de los actores sociales en el proceso decisorio?, ¿se elige al destinatario en base sólo a criterios técnicos o se incluyen también criterios valorativos?, ¿existen varios destinatarios potenciales?, ¿son sus valores y fines congruentes o compatibles entre sí?, ¿son esos valores y fines compatibles con los del practicante?
- *Intencionalidad* del practicante personal, grupal o institucional: contenido; intenciones latentes y agendas ocultas; autobeneficio ilegítimo del practicante; condicionamiento ideológico de la ayuda (¿está condicionada la actuación por las intenciones personales o preferencias políticas del practicante o la institución, de forma que sólo se ayuda —o se ayuda más— a los que piensan como ellos o votan al partido político que sostiene la institución?; control psicológico e institucional de la intencionalidad y su eventual beneficencia o maleficencia para los actores.
- *Objetivos* de la actuación, valores que los guían y forma de establecerlos (¿existen sistemas o procedimientos efectivos para que participen los actores en el establecimiento de objetivos?); conflictos potenciales entre los objetivos de distintos actores sociales o entre los de esos y el practicante.
- *Metodología* técnica: ¿se eligen los métodos en base a criterios éticos —los valores que promueven implícitamente los métodos y la relación aparejada— además de los técnicos? Valores implícitamente promovidos por el proceso técnico y las relaciones establecidas y respeto de la autonomía y de la capacidad de las personas y la comunidad.
- *Resultados*: ¿existe una forma acordada con los actores comunitarios de evaluar las consecuencias?; criterios de relevancia para valorar los datos, su integración e interpretación.

- *Responsabilidad* por los resultados: orientación (ante quién es el practicante responsable; quién es el destinatario); alcance (de qué es responsable el practicante; efectos secundarios negativos); y contenido, responsabilidades concretas hacia los distintos actores sociales y compatibilidad de las distintas responsabilidades.
- *Valores promovidos* explícita o implícitamente en el proceso de actuación: en la selección de los fines, el rol de los actores, las técnicas usadas y en las consecuencias reales de la acción; respeto de los valores de los actores sociales; ¿participan estos en la elección, directa o indirecta de los valores y principios que guían la actuación?
- *Rol* y *relación* con el grupo o comunidad. Postura relacional (horizontal, de «arriba abajo», de «abajo arriba») y valores éticos promovidos: corresponsabilidad, dependencia, empoderamiento comunitario, etc.; papel resultante para el practicante psicosocial (colaborador, director técnico, catalizador o «activador» social, servidor de la comunidad, etc.) e implicaciones éticas; posibilidad y límites de la colaboración igualitaria en la situación concreta. Ambigüedad y conflictos de rol y lealtades enfrentadas; problemas del practicante para integrar funciones divergentes y transiciones de rol a lo largo del proceso; papel del resto de actores implicados.
- *Contrato* explícito o implícito. Identidad de cada actor, «quién es quién»: practicante, cliente, destinatario, etc.; derechos y obligaciones de cada uno; acuerdo o desacuerdo sobre los fines perseguidos y la forma de evaluar los resultados; grado de iniciativa y participación de los actores en el proceso y posibilidad de afectación de terceros no contratantes.
- *Postura sociopolítica del practicante* (experto neutral, simpatizante o agente partidista comprometido) y efectos éticos y estratégicos: fortalecimiento del «orden» establecido, reducción de desigualdades, imposibilidad de trabajar con toda la comunidad, utilización del practicante por unos frente a otros, perjuicio para los más vulnerables, agudización de conflictos, etc. Grado de generalidad de la postura sociopolítica en función de los actores y el contexto social; principios y consecuencias «determinantes» de la postura sociopolítica: «rentabilidad» social y profesional de la acción frente a mérito moral.

6. CUESTIONES Y PROBLEMAS ÉTICOS FRECUENTES EN LA APS

Las cuestiones y dilemas éticos *en* la APS son a menudo gajos menores de los «grandes temas» tratados (la ética de la APS), que pueden a su vez ser vistos como agrupaciones más o menos abstractas y generales de las cuestiones concretas encaradas en el trabajo cotidiano. De modo que, aunque el criterio de selección de los grandes temas sea la relevancia, y de las cuestiones concretas la frecuencia con que aparecen en la práctica (y el grado en que preocupan a los practicantes o la dificultad de su abordaje), ni esos criterios son ajenos entre sí ni se pueden separar nítidamente. Así, mientras la cuestión más frecuente en muchas áreas psicosociales es la confidencialidad, los temas del consentimiento informado o la imposición implícita de valores se me antojan harto más relevantes y difíciles de abordar que aquella. Se pueden citar otras cuestiones, como las demandas manipuladoras o los efectos perversos de las buenas intenciones, que, siendo relevantes y abundantes, son frecuentemente ignorados en la discusión práctica.

Como las cuestiones éticas de diferentes tipos, formatos y temáticas son casi ilimitadas y no tenemos un censo definitivo de ellas en la APS (ni lo vamos a tener, pues cada área de trabajo y contexto sociocomunitario tendrá sus propios problemas singulares, que podrán o no tener puntos de encuentro con los de otras áreas o contextos), ofrezco una lista (tabla 5.8) de 26 cuestiones éticas relativamente frecuentes en el trabajo psicosocial. Dado que varias de esas cuestiones han sido examinadas (y a veces discutidas con alguna profundidad) a lo largo de los capítulos precedentes y el espacio de este libro —y de mi propia capacidad y experiencia— es

limitado, comento brevemente algunas cuestiones adicionales que considero especialmente relevantes o acuciantes para el practicante o sobre las que veo conveniente hacer aclaraciones analíticas o resolutivas.

Veamos, en primer lugar, las cuestiones *ya atendidas* de una u otra forma en las páginas anteriores. El intervencionismo (1) y sus temas-satélite han sido ya examinados en este capítulo. El tema del destinatario de la intervención (2) fue examinado en el capítulo 3, al igual que los conflictos de intereses entre actores (3) y los diversos conflictos de fines (11) que han moteado las páginas de distintos capítulos, incluida la consideración de los distintos tipos de conflicto hecha en este. El tema de las buenas intenciones (10) fue introducido en el capítulo 3 y ampliado en el presente. La responsabilidad por los efectos secundarios (14) fue abordada en el capítulo 3, sirviendo las pautas allí establecidas también, en general, para la afectación de terceros no contratantes (15). El papel de las diversas formas y elementos de subjetividad en la acción profesional (18) ha sido comentado en distintas partes de los capítulos 2, 3 y 4, al hilo de los aspectos subjetivos de la ética psicosocial, del tipo de conocimiento del campo, del significado global de la veracidad, de los valores morales y del concepto de desarrollo humano. La responsabilidad del interventor (20) en condiciones de libertad restringida fue, en fin, tratada en el capítulo 3.

TABLA 5.8
Cuestiones éticas frecuentes en la APS

1. *Cuándo* es correcto *intervenir* y cuándo es mejor abstenerse de actuar (legitimidad de la actuación) y riesgos asociados por acción y por omisión.
2. Quién es el *destinatario* (o destinatarios); ¿cambia durante la actuación? ¿tienen los distintos «clientes» intereses divergentes (pero compatibles) o contradictorios?
3. *Conflictos de intereses* entre varios clientes/destinatarios y respuesta adecuada.
4. *Roles duales* (amigo-profesional, miembro del grupo-interventor externo) o múltiples.
5. *Demandas manipuladoras* (nos quieren utilizar para sus propios fines o para actuar sobre un tercero que no ha hecho ninguna demanda ni desea ser parte de la actuación).
6. Demandas de actuación *contrarias* a nuestros *principios* o valores (profesionales, personales o propios del método que usamos).
7. *Competencia* profesional y *formación* adecuada para ejercer la APS en general o en un área X.
8. *Confidencialidad* y uso de la información en la relación y acción profesional; conflictos entre confidencialidad y derecho a la información pública.
9. *Consentimiento voluntario e informado*; actuación en casos de tratamiento judicialmente mandado.
10. *Buenas intenciones* (altruismo, solidaridad social, etc.) y *autointerés*: autobeneficencia legítima, condicionamiento institucional o profesional de la ayuda, dialéctica intenciones-resultados, estrés y «quema» profesional.
11. *Conflictos de fines* practicante-destinatario en programas y acciones concretas.
12. *Elección de técnicas* interventivas y afectación de valores básicos (técnicas invasivas o dañinas; «persuasión» o manipulación psicológica en campañas de salud; incentivos en programas de control conductual o de la natalidad; programas de «reducción de daños»; etc.).
13. Discrepancia de *criterios de valoración de programas* (entre quien paga, quien lo realiza, los destinatarios, etc.).
14. Responsabilidad por *efectos secundarios* y consecuencias imprevistas negativas.
15. *Afectación de terceros* que no han pedido ayuda ni participado en el pacto del contrato.
16. *Maltrato institucional*, responsabilidad individual, grupal y colectiva; institucionalización (carcelaria, psiquiátrica, centros semiabiertos, etc.) y efectos psicológica y socialmente dañinos; alternativas

abiertas y trabajos en beneficio de la comunidad.

17. *Uso* por *otros* de recomendaciones, información y *técnicas psicosociales* generadas por las ciencias conductuales y sociales; responsabilidad de vigilar y controlar el uso por parte de otros de materiales psicosociales.
18. *Papel de la «subjetividad»* (preferencias, creencias, afectos, valores) personal, profesional y social en la evaluación y acción profesional; veracidad e intencionalidad: usos positivos y negativos.
19. *Incumplimiento* por alguna parte del *contrato* explícita o implícitamente pactado y consecuencias del incumplimiento sobre el proceso de actuación (modificar, confrontar cliente, finalizar, etc.).
20. Responsabilidad del practicante en condiciones de *restricción de la libertad* de acción (medios insuficientes, denegación de información, falta de motivación o compromiso de actores, condicionamiento ideológico de medios y líneas programáticas, etc.).
21. Situaciones *críticas* y emergencias en las que no es posible analizar ni planificar el curso de la acción a seguir ni el comportamiento éticamente correcto y positivo.
22. *Publicidad institucional* partidista, implicación profesional en el diseño y ejecución de acciones asociadas y actitud ante ella.
23. Legitimidad de la *influencia social* en campañas masivas (afectan a muchas personas que no han dado su consentimiento explícito) y en actuaciones *preventivas* (con o sin consentimiento en problemas que «aún no existen»).
24. *Apropiación indebida* de poder y recursos colectivos por parte del profesional o el político.
25. *Confusión* de los espacios *público y privado* en el diseño, realización y evaluación de acciones psicosociales; privatización de la acción social y responsabilidad profesional.
26. Cuestiones y problemas asociados a *Internet* y redes sociales (violación de intimidad/privacidad, adicciones virtuales y sociales, ciber-acoso, «derecho al olvido», etc.) o planteadas por su uso como herramienta profesional.

6.1. Algunas cuestiones éticas psicosociales

Comento ahora cinco temas adicionales, clarificando la cuestión implicada o su ocurrencia práctica y sugiriendo opciones o alternativas para abordarlas de forma moralmente aceptable (y estratégicamente viable): los roles duales, la confidencialidad y el consentimiento informado, el maltrato institucional y el cambio social, la necesidad y conveniencia del contrato y la actuación en situaciones de crisis.

6.2. Roles duales

En principio, los roles duales (4) no tienen por qué suponer un conflicto moral: sobre el papel, un profesional psicológicamente maduro y técnicamente competente debería ser capaz de sostener varias relaciones o demandas de rol moderadamente divergentes. A menudo, sin embargo, el conflicto aflora (o debería aflorar) cuando el practicante es consciente de que las exigencias de uno de los roles son incompatibles con las de otro (y lo vive como desgarramiento personal o como un conflicto de lealtades hacia distintos actores) o, más precisamente, cuando lo que debería hacer para sostener uno de los roles o relaciones es diferente de lo que habría de hacer para mantener la beneficencia del destinatario de la acción.

El problema es más grave si, debido a su implicación emocional o ideológica, el practicante *no* es consciente de esa encrucijada, por lo que —a menos que sea advertido por otros a tiempo— no hace nada para resolverlo y elegir el camino moralmente correcto. También puede suceder, por ejemplo, cuando ciertos

sentimientos personales del practicante interfieren seriamente con su relación y comportamiento profesional beneficioso para el cliente, o cuando la implicación subjetiva con un grupo o posición social le impide percibir ciertos datos esenciales de la realidad o trabajar con otros grupos comunitarios moral y estratégicamente relevantes. La solución a tales situaciones en que la multiplicidad de roles puede derivar en la mala práctica profesional es obvia: hay que elegir uno de los papeles y explicar con claridad la opción y lo sucedido a los actores implicados. El problema moral suele ser el daño ya producido en los clientes o el que el cese de la relación profesional (o la implicación personal, según la opción) pueda causarles y su reparación.

6.3. Confidencialidad y consentimiento voluntario e informado

La confidencialidad y el consentimiento libre e informado son mandatos ligados moralmente al mantenimiento de la confianza (el valor superior del que derivan, añadiendo, en el caso del consentimiento voluntario e informado, la autonomía) y, técnicamente, a la comunicación interpersonal y social y, más específicamente, a la gestión de la información en las relaciones interpersonales o colectivas. Y aunque las dudas y dilemas ligados a la confidencialidad suelen primar en la frecuencia y preocupación de los profesionales, los problemas planteados por el consentimiento informado son más importantes, entre otras razones porque, en la acción profesional, ese consentimiento es el núcleo inicial de la autonomía de los clientes. Y lo es hasta tal punto que la obtención del consentimiento voluntario e informado debe ser ahí considerada un deber casi sagrado, que sólo puede ser quebrantado en contadísimas ocasiones y ante la presencia de valores o motivos humana o moralmente muy poderosos (ver caso A del capítulo 6).

¿Cuál es el significado de la *confidencialidad* y por qué preocupa tanto en la acción profesional? La información sobre el comportamiento y la vida de las personas y grupos sociales es esencial para analizar las situaciones y entender los problemas, motivaciones y capacidades de los implicados, de modo que, para asegurar que los clientes le facilitan datos personales o sociales (a veces escabrosos, aberrantes o inconfensables), que nunca se revelarían a un extraño, el practicante debe garantizarles una amplia confidencialidad que sólo en contadas ocasiones (comisión de delitos, riesgo inminente de daños personales no evitables por otros procedimientos, etc.) puede ser quebrantada. Pero la confidencialidad estricta sólo es posible en la práctica clínica con clientes individuales en un gabinete privado. No lo es cuando salimos de ese entorno: trabajando en contextos rurales —donde todos se conocen y la privacidad es casi imposible— o con grupos e instituciones (en la APS) donde la actuación implica interacciones multilaterales con diversos grupos y de estos entre sí, de modo que la frontera entre profesionalidad e intimidad o entre asuntos y temas públicos y privados puede ser sumamente tenue o borrosa.

¿Cómo se puede mantener la confidencialidad en situaciones psicosociales en los que sigue siendo importante para sostener la confianza de las distintas partes?

Estableciendo, primero, una divisoria entre la información estrictamente privada de las personas, que debe ser preservada, y la información, individual o colectiva, que el practicante necesita para mantener las relaciones, hacer una evaluación correcta de la situación y el problema y diseñar y llevar a cabo un plan acordado para atajarlo. Es vital para la viabilidad de la actuación que esa información relevante circule apropiadamente entre los distintos actores sociales, de forma que no sea incluida en las áreas de secreto profesional: si eso sucediera el practicante estaría atado de pies y manos, aceptando que le nieguen un medio esencial (la información) para lograr los fines pactados y, quizá, siendo manipulado por una persona o parte a la que ha prometido confidencialidad sobre algo que nunca debió ser confidencial («pero eso no lo diga, ¿eh?» o «de esto no podemos hablar porque...»).

¿Como evitar estas trampas y hacer compatible la confidencialidad personal con la viabilidad estratégica de la actuación? Haciendo *pactos* claros y explícitos de confidencialidad con los grupos sobre qué es confidencial y qué no lo es, y especialmente sobre los *procedimiento*s de comunicación entre los distintos actores, proponiendo, por ejemplo, que, en el caso de reuniones multilaterales del practicante con diversos grupos concernidos por un problema común, el propio practicante haga un resumen de lo tratado en una reunión con el grupo A ante el grupo B, o bien que un representante del grupo A haga un resumen ante el grupo B en presencia del profesional, incorporando siempre un turno de añadidos o correcciones para evitar olvidos o distorsiones («¿algo que añadir a lo dicho?», «¿me he dejado algo que debería haber dicho?», etc.). Aunque no resulte fácil, un proceso de retroalimentación continua de ese tipo, respetando el secreto de los detalles discrecionales y privados, puede funcionar razonablemente bien para preservar la confidencialidad general y la confianza de las distintas partes.

La importancia moral del *consentimiento* libre e informado es obvia: respetar al otro como ser humano, así como su autonomía y capacidad de desarrollo autodirigido, exige en el trabajo profesional pedir su consentimiento para participar en la actuación profesional en unas condiciones (y con unas expectativas de beneficio) acordadas. La *voluntariedad* del consentimiento exige garantizar, primero, que el sujeto puede decidir libremente aceptar o rechazar la ayuda ofrecida, pudiendo *negarse* a trabajar con el profesional. Implica también que el proceso está libre de otros condicionamientos psicológicos, sociales o económicos que los legítimamente pactados para hacer viable la acción y obtener la beneficencia acompañante (motivación para trabajar, información necesaria, espíritu de colaboración, pago de servicios, etc.). Todo ello abre un amplio flanco de problemas éticos ligados a la presencia de condicionamientos, como el uso de técnicas (por ejemplo, los «refuerzos») de las que el cliente no es consciente (o se mantienen deliberadamente fuera de su control), la aceptación de programas por parte de grupos vulnerables en base a los beneficios económicos que aporten (donaciones de órganos, control de la natalidad, etc.), los condicionamientos políticos de los programas sociales y un largo etcétera.

Para que el consentimiento sea *informado* es preciso que el cliente disponga de la

información fidedigna y suficiente para tomar la decisión de aceptar o rechazar la ayuda profesional (y cualquiera de las sucesivas decisiones relevantes que jalonan el proceso de colaboración practicante-cliente). El practicante (y la institución en su caso) deben, por tanto, aportar información veraz, relevante y directa sobre los ingredientes y pasos básicos de la actuación, los cuales, como se verá, sustentan el contrato con el cliente: identidad del practicante (e institución de la que es parte, en su caso), objetivos de la acción y razones que la motivan, papel y actividad esencial de cada parte (practicante, destinatario, otros), y criterios generales para evaluar los resultados y dar la actuación por finalizada. La información puede ser suministrada verbal y directamente (lo más deseable) o por escrito, pero siempre de una forma lo más simple y clara posible —adecuada al nivel de comprensión del receptor—, asegurando se dé que este entiende su contenido y que se trata de una decisión voluntaria, por lo que puede aceptar o rechazar ser parte de la acción, hacer preguntas o sugerir cambios.

Los dilemas morales más agudos en la órbita del consentimiento informado derivan de las actuaciones y tratamientos psicosociales ordenados judicialmente a sujetos que han cometido delitos que conllevan penas de cárcel u otras formas de privación de libertad para expiar el daño causado a las personas y la comunidad en su conjunto. Este tipo de situaciones introducen un importante elemento en la ecuación ética, ausente en el examen del consentimiento informado en las áreas clínicas: la *responsabilidad social* de los sujetos frente al daño personal y social causado y frente al daño que, si no se rehabilitan, pueden causar en el futuro, y la responsabilidad del propio practicante de contribuir a evitar o reducir esos daños futuros a través del tratamiento psicológico y el cambio social (ver caso A del capítulo 6).

6.4. Maltrato institucional, responsabilidad colectiva y cambio socioinstitucional

El maltrato institucional es infligido por una institución u organización, como un todo, sobre aquellas personas que voluntaria o involuntariamente están sometidas a sus rutinas y actividades organizadas, como programas para cumplir objetivos residenciales, de custodia, terapéuticos o rehabilitadores; por ejemplo, una prisión, un hospital psiquiátrico, una residencia para personas mayores con grados variables de validez, un centro para la rehabilitación de adolescentes que han cometido delitos o un centro para inmigrantes ilegales. En estos casos el maltrato es ocasionado por un programa inadecuado o dañinamente restrictivo, por los administradores o técnicos autorizados por los reglamentos o procedimientos existentes, por otros residentes, o por la insuficiencia del personal o de medios precisos para realizar un trabajo eficaz y beneficioso con los residentes.

Al mentar el maltrato institucional nos referimos a la existencia de perjuicios verificables para los destinatarios del programa o a que hay una distancia considerable entre lo que un buen programa (o práctica institucional y personal) habría de ser desde el punto de vista ético (y técnico) y lo que, obviando la motivación e intencionalidad subjetiva, es realmente. Esto es, advertida o

inadvertidamente, la institución o el programa en su conjunto no sólo no tratan bien (o lo mejor posible) a sus usuarios o destinatarios, sino que los tratan mal, ocasionándoles algún perjuicio absoluto y constatable o relativo (alejado del ideal o la norma de buena práctica). Por ejemplo, el abuso de menores por parte de algunos pares o guardianes, la excesiva sedación de ancianos o personas con problemas psiquiátricos para facilitar su control, o un programa inadecuado o mal realizado en una prisión o centro de menores. En sentido estricto, todo programa o acción que no entregue el máximo de beneficencia posible para aquellos a quienes va destinado es maltrato para estos y mala práctica por parte de los profesionales y las instituciones responsables.

El tema del maltrato institucional se inscribe en la rúbrica de *responsabilidad colectiva* del conjunto de personas e instancias institucionales (ya tratada en el apartado de la responsabilidad del capítulo 3), que, como ya se dijo, *no* invalida las respectivas responsabilidades individuales sino que las delimita, matiza y encadena relacional y temporalmente. ¿*Qué* debe *hacer* el practicante psicosocial atrapado en un entramado organizativo o programático que maltrata a sus usuarios? Primero, ser consciente del maltrato, reconocerlo y hacer lo que esté en su mano para mejorar la práctica o las técnicas o procedimientos organizativos usados para eliminar o reducir ese maltrato. Segundo, debe averiguar si sus colegas y compañeros tienen la misma percepción o si se trata de un sesgo parcial y subjetivo propio (o de un mecanismo más o menos inconsciente de evitación a reconocer el malfuncionamiento institucional de los demás por miedo al despido o a las represalias).

Si el maltrato tiene una base objetiva y se extiende, como suele suceder, a las distintas instancias de la institución u organización, quienes lo conocen deben denunciarlo a las instancias directivas —que tienen la autoridad de introducir cambios sistémicos en el programa o en los procedimientos implicados— para que tomen las medidas pertinentes. La solución del problema no presentará mayor dificultad estratégica o moral si el maltrato es reconocido por diversas instancias y por la dirección y hay una voluntad de colaborar para evitarlo. Sin embargo, en ese caso el cómo, la forma técnica de modificar el programa y la organización pueden ser mucho más difíciles de acordar e, incluso, teniendo claro el método puede faltar la voluntad o los medios materiales para hacer realidad los cambios necesarios. Tampoco es infrecuente en actuaciones de una cierta complejidad que los cambios introducidos resuelvan ciertos problemas y mejoren algunos aspectos del funcionamiento institucional, pero a costa de empeorar otros antes funcionales.

Existen, por otro lado, varios factores que dificultan o bloquean el cambio cooperativo desde dentro, como el miedo a las represalias, el desinterés político o profesional por el tema, los prejuicios ideológicos (los internos «tienen lo que se merecen» o «siempre ha sido así, no se pueden cambiar las cosas», etc.), o la presencia de una dirección o estructuras burocratizadas impermeables a la crítica y el cambio. En tal caso, las personas conscientes del maltrato y deseosas de evitarlo y mejorar la institución o el programa tienen dos opciones:

a) Dejar el trabajo, para evitar ejecutar acciones que violentan su conciencia y perjudican a los usuarios de los programas, buscando un empleo que les depare la debida satisfacción psicológica y moral.
b) Recurrir a vías socio-políticas (sindicatos, organización social, vías parlamentarias, presión política sobre la dirección, etc.) que permitan obtener y a través del conflicto y la presión externa lo que no se puede lograr cooperativamente desde dentro.

6.5. La necesidad del contrato

La conveniencia de pactar explícitamente un contrato con el cliente o destinatario que estipule las condiciones básicas del proceso de actuación y los derechos y deberes de cada parte ha sido ya justificada al tratar los temas del consentimiento informado y las agendas ocultas, para las que se propuso como remedio. La inexistencia de un contrato es, según se dijo, fuente cierta de anomia, pudiendo generar malentendidos y conflictos varios a lo largo del proceso de actuación. La obtención del consentimiento voluntario e informado y el pacto de un contrato con el cliente (a la que esa obtención debe en general preceder) es, por tanto, una recomendación estratégica y moral de primer orden, que debería ayudar a aclarar tanto las zonas de acuerdo como las de desacuerdo sobre los asuntos a tratar y las tareas a realizar, facilitando la «construcción» de la confianza con los actores sociales y evitando —o reduciendo— la aparición de agendas ocultas u otras formas de manipulación posteriores.

El contrato debe ser pactado con el cliente (y con el destinatario, si es diferente de aquel) y con aquellos actores relevantes que sean necesarios para entender correctamente la situación y para cambiarla en la dirección deseada. Y su contenido básico —aquello sobre lo que se debería llegar a un acuerdo— incluye (tabla 5.7): la *identidad profesional* e institucional del practicante (quién es y de qué institución es, en su caso, parte); los *objetivos* generales de la acción y las razones que la motivan; el *papel de cada parte* (practicante, destinatario, otros) y las tareas principales que le competen; y los *criterios* generales para *evaluar* los *resultados* (no el contenido y procedimiento de la evaluación, que son responsabilidad del técnico) y dar por terminada la actuación.

6.6. La actuación en situaciones de crisis

La particularidad de las emergencias y situaciones de crisis es que no permiten realizar la planificación técnica ni el análisis moral, siempre aconsejables en la APS. La solución, o al menos el procedimiento recomendable en esos casos, es bastante simple: hacer *después* de la actuación el trabajo que no se pudo hacer antes de ella, añadiendo, también, la reparación en los profesionales de los efectos del esfuerzo —casi sobrehumano a veces— que la intensidad y concentración temporal de las tareas exigidas por la crisis exigen de los profesionales.

Por tanto, la *recuperación* de los ayudadores profesionales sometidos a un severo estrés cognitivo y emocional es la primera tarea poscrítica. Esa recuperación permite, en primer lugar, la reintegración de la experiencia vivida (pero no asumida conscientemente), imposible de realizar cuando el sujeto es bombardeado por un cúmulo de impresiones y exigencias y por la urgencia de actuar ante los múltiples riesgos y peligros y el mínimo tiempo disponible, y en segundo lugar la clarificación cognitiva o composición e integración consciente de un relato de lo sucedido (y de la actuación y responsabilidad del profesional) y la «recarga» de los recursos emotivos y afectivos (muy probablemente agotados por las extenuantes demandas conductuales y emocionales asociadas a la crisis), que deberían permitir la restauración del funcionamiento emocional y cognitivo habitual de los profesionales, que así podrán retomar su vida y prestar atención a otras tareas.

¿Qué tareas? Las que corresponden a la segunda fase de la acción postcrítica: el *aprendizaje* técnico y estratégico sobre cómo actuar en el futuro en situaciones similares y, lo que aquí nos atañe, la contemplación de los problemas éticos surgidos (prioridades de atención, perjuicios causados, métodos y estrategias erróneas o mejorables, preparación para actuar en situaciones de estrés severo, etc.) y las alternativas de solución para el futuro. Ambas líneas de aprendizaje, técnico y moral, deben ser provechosas para aquellos practicantes que se enfrenten a situaciones similares a las analizadas.

RESUMEN

Temas y cuestiones éticas

Complementando y sistematizando los contenidos y preocupaciones de la ética psicosocial surgidos en los capítulos precedentes, éste se ocupa de los temas generales y las cuestiones éticas concretas de la APS.

La primera parte del capítulo trata sobre los *tipos* de problemas éticos en la APS, las *situaciones* que los producen y sus posibles soluciones. Identifico dos tipos de problemas: anomia y conflicto en cualquiera de los cuatros ingredientes (actores, valores, opciones y consecuencias; AVOC) que componen la ética psicosocial. Analizo los *conflictos* de valores (entre o intravalorativos), entre actores (que pueden o no reflejar conflictos de valores), consecuencias (divergentes o enfrentadas en el reparto de la beneficencia y maleficencia) y opciones mutuamente excluyentes. Examino también los problemas de *anomia* o indeterminación en los actores (y roles desempeñados), valores patentes y latentes, opciones existentes y consecuencias derivadas. Sugiero algunas alternativas de respuesta a ambos tipos de problemas: la mediación para aclarar los ingredientes AVOC y negociar acuerdos (y desacuerdos) en el caso de los conflictos, así como la clarificación y aportación de esos ingredientes en el caso de la anomia o indeterminación analítica o de incertidumbre operativa. E identifico, en fin, diversas situaciones que propician la aparición de

problemas, dudas y dilemas en la APS.

La segunda parte del capítulo se ocupa del *contenido* de los temas y problemas éticos en tres niveles: premisas y cuestiones ético-técnicas y ético-sociales previas, temas generales (los «grandes temas» éticos de la APS) y cuestiones y problemas prácticos concretos, a menudo asociados a los grandes temas generales o previos.

Cuestiones previas incluyen las contradicciones entre medios y fines, la legitimidad y autoridad, la intencionalidad y la racionalidad de la acción profesional en general y, más específicamente, de la APS. La divergencia o contradicción entre los *fines* de desarrollo humano autodirigido y la acción profesional externa, el *medio* para lograrlo, se pueden salvar si esa acción incluye el desarrollo de recursos y capacidades, la participación social y el respeto por los valores y fines de la comunidad. La *legitimidad* de la acción profesional descansa sobre los supuestos de solidaridad social y responsabilidad pública asumidos; en la acción de orientación comunitaria esa legitimidad está supeditada a los condicionantes —enfoque de recursos, participación de los actores y el respeto de sus valores básicos— mencionados y a que añada algún elemento procesal o sustantivo necesario para alcanzar sus fines que los actores no poseen. Ello compone un concepto más aditivo o complementario que interventivo de la APS, al que hay que añadir la posibilidad de actuar en situaciones de problemática personal o social severa, donde la acción profesional e institucional no será sólo un derecho sino, también, un *deber* cuya omisión puede ser tan merecedora de censura moral como el exceso de intervención, que sofoca, en vez de promover, el desarrollo de las capacidades de los actores.

Defino dos formas iniciales de *autoridad —política* y *técnica*— en la APS socioprofesional. La primera deriva del mandato democrático y establece el marco general de actuación profesional, mientras que la segunda descansa sobre la pericia técnica (y su fundamento científico) y abarca las competencias de diseñar, realizar y evaluar las acciones concretas realizadas en ese marco. Propongo una tercera autoridad, la *moral*, que fundamenta la acción social desde abajo en supuestos de violación de valores morales básicos producida en situaciones de problemática personal o social grave (sea de tipo deficitario, sea por la presencia explícita de problemas y conflictos). Examino las estrategias para controlar técnica y moralmente los riesgos del abuso de la *intencionalidad* personal o institucional, como las agendas ocultas, pactando explícitamente un contrato y evaluando los resultados reales de las acciones. Y expongo, en fin, las evidencias de irracionalidad (o extrarracionalidad), como los efectos secundarios o el poder de las relaciones y los factores políticos, que exigen limitar la reivindicación de *racionalidad* instrumental científico-técnica de la APS y añadir en la teoría y en la práctica dos «racionalidades» o lógicas —relacional y política— complementarias.

Se ha ofrecido un listado de *temas éticos generales* (en los que se incluyen las cuestiones previas), que puede ser utilizado como control de calidad de los distintos aspectos de la ética psicosocial: legitimidad y justificación de la acción externa; autoridad que la fundamenta; destinatario y forma de identificarlo; intencionalidad del practicante personal o institucional; objetivos de la acción y valores subyacentes;

implicaciones éticas de los métodos y técnicas usados; evaluación de resultados y criterios valorativos implícitos; alcance y contenido de la responsabilidad del practicante; valores implícita o explícitamente promovidos por la acción; papel del practicante y tipo de relación establecida con los actores sociales; contrato explícito o implícito; y postura sociopolítica del interventor e implicaciones éticas y estratégicas.

También se ha propuesto un catálogo de 26 *cuestiones* más *menudas* y frecuentes en la práctica psicosocial, señalando los capítulos en que algunas de ellas han sido comentadas y discutidas con mayor o menor intensidad. Por último, se ha abordado cinco cuestiones pertinentes, novedosas o específicamente psicosociales, ofreciendo orientaciones y «soluciones» morales y estratégicas que pueden ser útiles: los roles duales, la confidencialidad y el consentimiento informado, el maltrato institucional, el contrato y su significado ético y estratégico, y la actuación técnica y moral en situaciones de crisis.

PALABRAS CLAVE

- Tipos de problemas éticos.
- Conflicto de valores.
- Conflicto de actores.
- Conflicto de consecuencias.
- Opciones excluyentes.
- Anomia de valores y actores.
- Anomia de opciones y consecuencias.
- Soluciones orientadoras a conflictos AVOC.
- Soluciones orientadoras a anomia AVOC.
- Contradicción medios-fines.
- Legitimidad de acción profesional.
- Intervencionismo social.
- Intervencionismo profesional.
- Responsabilidad por acción.
- Responsabilidad por omisión.
- Autoridad política en la APS.
- Autoridad científico-técnica.
- Autoridad moral.
- Intenciones y resultados.
- Autobeneficio del practicante.
- Agendas ocultas.
- Límites de la racionalidad científico-técnica.
- Lógica relacional en la APS.
- Lógica política.
- Temas éticos generales.
- Roles duales.
- Confidencialidad.
- Consentimiento voluntario e informado.
- Maltrato institucional y cambio social.
- Contrato socioprofesional.
- Actuación en situaciones de crisis.

6

Metodología práctica y casuística: el esquema AVOC

La metodología práctica debe explorar los procedimientos más apropiados para analizar los problemas éticos de la APS y para descubrir y evaluar el mérito moral de las opciones existentes, permitiendo elegir una de ellas —«la solución»— como mejor, o menos mala, que el resto.

1. EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MORALES: INTUICIÓN, RACIONALIDAD Y APRENDIZAJE SOCIAL

El examen de la metodología práctica del campo revela una llamativa dualidad. Las propuestas formales encontradas en la literatura ética están en su gran mayoría armadas por una lógica deductiva donde las soluciones derivan de un razonamiento moral lineal y aparentemente objetivo en términos de valores (o de consecuencias). La observación de la discusión de casos en grupo (o del diálogo y la reflexión internos en la medida en que son observables) revela, en cambio, un proceso dendrítico, serpenteante y discontinuo, guiado por la intuición, que conduce a un hallazgo o comprensión final global que en psicología se suele llamar *insight.*

¿Cómo se explica esa dualidad? ¿Sigue el análisis y solución de problemas éticos un razonamiento moral esencialmente lineal y objetivo (objetivable, al menos), tal y como muestran los escritos y explicaciones *a posteriori*, o es, en verdad, un proceso intuitivo, esencialmente extra-racional e inconsciente —y por tanto no objetivable—, como revela la observación de los procesos subjetivos y sociointeractivos reales?

1.1. Inducción intuitiva y deducción racional

Esa dualidad (tabla 6.1) no es inesperada en un campo, la ética, empapado en su inicio de subjetividad y sentimientos como la generosidad, la empatía o la indignación, pero sometido también a la objetividad social de las consecuencias de las acciones realizadas y que, como se recalcó, sólo es del todo comprensible y realizable si se tienen en cuenta las dos formas, inductiva y deductiva, de conectar el nivel abstracto y general de los valores y principios con el nivel real de las acciones y los problemas concretos. Pero, ¿cómo se conectan esos dos polos —objetivo y subjetivo, racional e intuitivo— procedimentales y los dos métodos que

fundamentan? Creo que podemos trasladar sin mayores problemas al terreno de la ética la perspicaz explicación del filósofo Michael Polanyi (1966; a no confundir con su hermano Karl Polanyi, el historiador económico conocido por su crítica al capitalismo) sobre la naturaleza del conocimiento. Polanyi sostiene que este es, inicialmente al menos, tácito y personal, aunque sólo cuando es codificado y hecho explícito puede ser sometido a debate público y verificación empírica.

TABLA 6.1
Vías de evaluación y acción moral

Vía	Fuente	Carácter
Intituitivo-inductiva.	• Intuición moral y psicológica. • Conciencia moral.	• Idiosincrásico, discontinuo. • Extrarracional. • Psicomoral. • Comunicable de forma empática, no verbal.
Deductiva.	• Valores, principios. • Normas externas.	• Generalizable. • Codificación simbólica. • Comunicable verbalmente. • Permite debate público y la verificación empírica.
Imitación social. Diálogo.	• Otros (personalidad, virtudes). • Su comportamiento general o ante ciertas situaciones. • El diálogo interpersonal y la deliberación conjunta.	• Analógico: — Implica admiración (empática) de la persona (sus virtudes), de su trayectoria vital o de sus obras. — Genera imitación/emulación de persona o conducta. — Dialógico. — Implica diálogo e iluminación moral recíproca.

Lo mismo podría decirse —con mucha mayor propiedad, en razón de la subjetividad y emotividad que la impregna— del juicio y la evaluación moral: aunque aflora al exterior como razonamiento moral objetivo, esa evaluación está en gran medida tejida con los retazos de la experiencia personal, ensamblados por la *intuición* y la apreciación erigida sobre la conciencia moral. La valoración moral discurre, de otro modo, por caminos intuitivos y apreciativos esencialmente idiosincrásicos y *personales*, que apenas vislumbramos observando desde fuera el *proceso* que la sustenta. Parece, entonces, que los razonamientos y propuestas deductivas son, de un lado, la expresión verbal explícita de procesos implícitos, intersubjetivamente opacos, que permiten, como decía Polanyi, el debate público racional y explícito (cuando están codificados como valores, actores, opciones y consecuencias que los debatientes reconocen) y, también, supongo, una cierta verificación empírica. Pero tales razonamientos tampoco dejan de ser, de otro lado, una *racionalización* de emociones y valoraciones extrarracionales que permite sostener la naturaleza racional de la ética y justificar socialmente las acciones y elecciones en base a esa supuesta racionalidad.

Ello explica que, por una parte y como se indicaba al principio, la mayoría de procesos y esquemas analíticos encontrados en la literatura sean esencialmente racionales. Y que, por otra parte y como veremos a continuación, la manera de plantear las discusiones de casos y problemas prácticos no es, en absoluto, inocente, dirigiendo, por el contrario, a los sujetos en una u otra dirección (el razonamiento explícito en base a valores o a consecuencias o la exploración intuitiva y personal) y «activando» primariamente uno de los dos circuitos hasta aquí identificados: la intuición moral basada en la experiencia y en las preferencias morales personales o el razonamiento «objetivo» (objetivo en términos de valores o consecuencias) reconocible por los debatientes.

1.2. Imitación y emulación social

Si embargo, la detección de las dos vías de evaluación moral precedentes es incompleta. La observación del comportamiento personal y de los procesos de análisis y solución de problemas morales revela la presencia de un tercer camino dualmente fundado en la interacción social:

1. Lo que, a falta de un nombre mejor, podemos llamar «ósmosis» o imitación social, basado en la interacción simbólica.
2. El diálogo y la interacción social material.

En la primera senda del camino social, el sujeto valora el mérito moral no en función de su propia intuición y conciencia interna ni de la norma moral externa, sino de la apreciación de otras personas y su comportamiento (de su personalidad y conducta) como admirables y dignos de ser imitados o emulados. El término *ósmosis* parece vago e incorrecto: la valoración o el comportamiento moral no «pasan» de una persona a otra por procesos mecánico-químicos, como lo hacen los fluidos que atraviesan una membrana. El término *inducción,* de resonancia eléctrica, se acercaría más a lo que buscamos, pero deja la sensación de que la causalidad va del inductor al sujeto, algo cierto en algunos casos pero falso en muchos otros.

El término *imitación* ha hecho fortuna en psicología, aunque tampoco acaba de describir con fidelidad lo que ocurre realmente, y ello por tres razones principales. Una, la explicación conductista de la imitación (prevalente dentro y fuera del campo) es palmariamente insuficiente; la imitación del comportamiento ajeno no se explica sólo por las consecuencias positivas de la conducta observada, que excluye la imitación de comportamientos con consecuencias materiales o sociales negativas (por ejemplo, en los niños o en relaciones mediadas por la amistad o el afecto). Lo que la gente imita no es, en segundo lugar, sólo la conducta de otros (como asume el uso corriente de la palabra, particularmente en su explicación conductista), sino la *persona* como resultado, no tanto —al menos no sólo— por su éxito social o económico sino, a menudo, por su carisma o atractivo para otros. En este y otros casos la gente no trata tanto de imitar a alguien como de *emular* a la persona o su actitud vital. Esta tercera extralimitación conceptual de la imitación es

particularmente interesante para nosotros, porque nos sitúa en el terreno de la virtud personal y la transmisión de valores en los terrenos interpersonal y social, centrales a esta tercera vía de evaluación y acción moral, y también en la senda del heroísmo y «la tarea del héroe» (Savater, 1981), quizá excepcional, pero de gran interés en el campo ético.

La segunda senda de este tercer camino social —el *diálogo* interpersonal y la *deliberación colectiva*— está asociada a la interacción social cara a cara (inductora, también, de imitación y emulación) y resulta crucial para una ética psicosocial realizada por sujetos colectivos obligados, por tanto, a dialogar entre sí y deliberar conjuntamente. Pero no sólo por eso; interesa también porque, al ocuparse de asuntos psicológicos y sociales frecuentemente novedosos y complejos, para los que no existen normas éticas claras y apropiadas, el recurso a la intuición y la conciencia moral por un lado, y al diálogo y a la deliberación social con propósitos éticos, por otro, es vital.

1.3. Educación moral: cultivo de potencialidades, aprendizaje de normas e interacción social

Las tres formas de contemplación de los problemas morales y sus soluciones conducen (tabla 6.2) a cuatro métodos complementarios de aprendizaje (y crecimiento) moral: el desarrollo de capacidades psicomorales; el conocimiento y aplicación de los códigos éticos; la imitación y emulación de los otros; y el diálogo interpersonal y la deliberación conjunta.

TABLA 6.2
Cuatro procedimientos de evaluación (y aprendizaje) moral

Método	Mecanismos implicados	Ámbitos/fuentes
Intituitivo-inductivo	• Desarrollo del contacto consigo mismo (autoconciencia), empatía, conciencia moral y otras capacidades internas. • Análisis inductivo de casos.	• Socialización familiar («otros significativos»). • Educación formal analógica/trasversal (humanidades, artes, ciencias sociales, ética).
Deductivo	• Razonamiento moral. • Conocimiento de valores y normas morales. • Aplicación a casos/situaciones concretas, diversificados según áreas de actuación. • Análisis deductivo y discusión de casos.	• Sistemas morales aplicables. • Valores y principios morales que inspiran acción social e instituciones públicas. • Códigos deontológicos profesionales.
Imitación Transmisión social	• Exposición a personas virtuosas. • Imitación de personas ejemplares. • Imitación de conductas normativas. • Captación del comportamiento heroico excepcional. • Capacidad crítica de distanciamiento y	• Socialización familiar primaria. • Socialización con superiores e iguales. • Educación formal transversal (biografías ejemplares, historias heroicas). • Exposición crítica a medios de masas. • Diálogo y debate guiado (ficción y

	discriminación de personas y situaciones.	realidad).
Diálogo Interpersonal y social	• Intercambio de valores y criterios morales. • Interacción personal (afectivamente cargada) + influencia sociomoral. • Deliberación conjunta (gestión de la diferencia y la convergencia moral).	• Encuentros «naturales» (en familia, iguales, comunidad). • Espacios socialmente construidos (grupos de encuentro y debate, reuniones, foros presenciales o virtuales, etc.).

El *cultivo* de las *capacidades* psicológicas y morales internas debe ser realizado de forma a la vez creativa (fomentando y desarrollando selectivamente potencialidades) y crítica, no dejándose llevar por las apariencias y teniendo en cuenta las implicaciones valorativas y las consecuencias de las intuiciones. Ese desarrollo psicomoral puede ser alentado tanto en la socialización familiar (orientada directamente o mediante la educación parental por expertos) como en la educación formal, a través de la exposición sistemática o narrativa a casos, historias o materias en que se reconoce (y «refuerza») la presencia de los factores y formas de obrar intuitivas, el contacto consigo mismo y las propias capacidades (intelectuales, valorativas y emocionales), y también la empatía hacia los otros y la conciencia moral (según el momento evolutivo en que se encuentre el sujeto).

La *socialización familiar* es particularmente importante en este cultivo por dos razones: los intensos afectos y sentimientos (deseablemente positivos) que la tejen facilitan cualquier aprendizaje interno (como este) o externo (la emulación e imitación de los seres queridos), formando, por otro lado, la trama básica (la *impronta*, si se quiere) inicial sobre la que se fijarán las experiencias y aprendizajes posteriores.

El *conocimiento y correcta aplicación deductiva* de las diversas *pautas morales* (sistemas filosóficos, idearios sociales, códigos deontológicos, etc.) externas es la forma más conocida y usada en el aprendizaje de solución de problemas morales. La selección de esas pautas y su aplicación selectiva a casos (situaciones y actores) concretos son, como se verá más adelante, la médula de la mayoría de esquemas metodológicos existentes. El desarrollo de un *razonamiento moral* es, en todo caso, crucial para justificar ante otros la opción elegida, mostrando las razones por las que esa (y no cualquiera de las restantes) es la mejor —o menos mala— en la coyuntura psicosocial y estratégica concreta. El razonamiento moral tendría, según he argumentado, una doble finalidad:

1. Justificar moralmente ante los demás la opción elegida (en base a la bondad de los valores o las consecuencias previstas).
2. Asegurar la generalización de la «solución» moral (en vista de los actores, medios y parámetros situacionales específicos), convenciendo a otros sujetos (o practicantes) de que deben hacer la misma opción (sobre todo, se entiende, en circunstancias situacionales y psicosociales similares).

Respecto a la *interacción* con, y *exposición selectiva* a, personas u obras

«virtuosas», cuya personalidad («virtudes realizadas» si se quiere), trayectoria vital u obras concretas son dignas de *imitación normativa* («ser como ellos», «imitar su vida» u «obrar como ellos») o *emulación heroica* (actuar o encarar la vida de manera extremadamente valiente o digna de elogio y sólo esperable de personas o situaciones excepcionales, no como norma habitual y general), cada vez somos más conscientes en las ciencias humanas de la importancia de esa forma analógica (o desiderativa) de aprendizaje moral, que puede ser potenciada (y productivamente orientada) tanto en la socialización familiar como en la interacción posterior con los superiores y con los pares (Caplan, 1964) y, en fin, en la exposición a los medios de comunicación verbales o audio-visuales (e Internet) que cautivan la atención e imaginación popular, ejerciendo una poderosa influencia en la forja de los proyectos y modelos vitales de los adolescentes.

El *diálogo* interpersonal y la *deliberación* conjunta y el *debate* colectivo (sobre asuntos de relevancia moral, se entiende) conforman el cuarto método de aprendizaje y formación de criterios morales. Usualmente esas variantes de aprendizaje sociomoral asumen distintas formas de interacción cara a cara que —además de permitir la imitación y emulación— implican una vinculación emocional y un intercambio de valores, criterios y puntos de vista morales que, si están debidamente argumentados sobre la base de unas reglas procedimentales pactadas, pueden resultar sumamente enriquecedores para los participantes. A medida que el tamaño de la unidad de intercambio aumenta, el diálogo interpersonal afectivamente mediado se verá sustituido por la discusión colectiva (mediada por la influencia social). En los dos niveles (interpersonal, cara a cara, mesosocial, colectivo) sería deseable que se produjera una deliberación conjunta que, en base a la gestión pactada de las divergencias, pudiera arrojar acuerdos compartidos sobre los temas o problemas debatidos.

Aunque la vía dialógica está siempre presente en mayor o menor grado en los grupos sociales «naturales», es conveniente facilitarla a través de espacios grupales o de otro tipo artificialmente formados para el propósito específico del intercambio y la discusión. También se puede ampliar a los foros «virtuales» en Internet, que, aunque carecen de muchos de los importantes acompañantes psicológicos y sociales de la verdadera interacción personal o social y están condicionados por el grado de competencia digital de los participantes, permiten intercambios verbales múltiples entre sujetos que serían imposibles si estos se hubieran de reunir físicamente en un momento y lugar dados.

1.4. Preparación para resolver problemas morales

¿Qué métodos deberíamos usar para aprender a resolver los problemas morales? Dependiendo del objetivo y la situación concreta de aprendizaje, combinaríamos de una u otra forma las tres vías y cuatro procedimientos propuestos. Mientras que el cultivo de la intuición, la conciencia moral y la empatía interpersonal deberían abordarse desde la infancia (dentro y fuera de la familia), como base para posteriores

ampliaciones y correcciones, la exposición selectiva a las personas y comportamientos virtuosos (y el estímulo del interés por ellos) parece más apropiado para etapas posteriores, como la adolescencia y la incorporación plena a la vida social (contando con la matriz inicial forjada por la familia). Y el conocimiento de los valores y normas morales codificados sería más fructífero y adecuado en etapas en que, estando forjada la personalidad (y sus estructuras morales básicas), la persona puede incorporar tales normas y confrontarlas con lo ya desarrollado y aprendido en su experiencia previa.

En el caso del aprendizaje *profesional*, para resolver los problemas éticos de la práctica parece de nuevo conveniente combinar los métodos según el objetivo concreto y la etapa de aprendizaje en que se encuentren los educandos. Si el objetivo es ejercitar las capacidades (empatía, conciencia, razonamiento moral) y *formar criterios* morales de actuación, una combinación de la discusión abierta de historias humanas y casos prácticos (extraídos, por ejemplo, del entorno vital o comunitario o de los medios de comunicación), la reflexión pausada y lo más singularizada posible (cada persona suele seguir su propio proceso de confrontación y «absorción» de los materiales expuestos) y el diálogo en pequeños grupos puede ser la base del trabajo. Ese formato será, en principio, preferido y viable (siempre que la organización educativa permita el trabajo extendido en el tiempo con grupos pequeños) en la formación académica del profesional. Si el objetivo es, en cambio, *resolver* sobre el terreno los *problemas* y dudas de la práctica, el reconocimiento y aplicación de valores y normas consensuados como apropiados a los problemas recurrentes encarados será, según se explicó en el capítulo 4, prioritario, lo cual tampoco debe descartar el aprendizaje inductivo y recíproco producido en la discusión grupal de casos en base a las reacciones, comentarios y el ejemplo de otros.

Los casos de discusión pueden ser seleccionados en función de su potencial pedagógico o de la frecuencia con que se presenten o de la preocupación que susciten entre los profesionales del área. De lo ya argumentado se deduce que la manera de plantear la tarea no es inocente, pues dirige al analista en una determinada dirección, activando preferentemente alguna de las tres vías —psico-intuitiva, deducción práctica, imitación y aprendizaje interactivo— descritas para el abordaje y solución de problemas prácticos. Así, ante un caso o problema moral no es lo mismo preguntar: «¿Qué *haría* usted», «¿qué *debería hacer* usted?» o «¿qué debería hacer *el practicante*?». Las dos primeras preguntas, al ser personalizadas, están dirigidas a un sujeto singular (X), no a una categoría humana genérica (un practicante, una persona abstracta, sin atributos externos ni sentimientos o condicionamientos internos) y le interpela sobre su propia conducta, no sobre la ajena. La diferencia entre ellas es que en la segunda pregunta la naturaleza moral de la tarea queda explicitada, por lo que X debe examinar cómo *debería* obrar, desechando, en principio, sus preferencias, temores, deseos o autobeneficio (que pueden, en cambio, motivar, junto a los valores morales, la respuesta a la primera pregunta).

Debemos también ser conscientes de que una cosa es lo que X considera que debería hacer y otra lo que realmente hará, según las motivaciones internas y los

condicionantes relacionales, sociales o contextuales implicados. Así, ante el dilema de copiar o no en un examen en que un compañero fiable conoce una respuesta que X ignora, puede haber una distancia considerable entre lo que a X le conviene (o prefiere hacer) y lo que debe hacer, lo cual, si es sincero, le llevará a contestar a la pregunta según su propio criterio. Según el análisis precedente, mientras la primera pregunta activará primordialmente las *vías intuitivas* y experienciales (sin mayor filtro o «censura» moral interna) de búsqueda de respuestas, la segunda llama a complementar o corregir esas vías con las normas o deberes morales externos socialmente reconocidos, que funcionarían, o deberían hacerlo, como filtros morales de las preferencias, deseos o temores iniciales del sujeto. Aunque X preferiría (le resulta más conveniente y menos trabajoso) copiar, puede acabar reconociendo que no debería, porque hacerlo contraviene una norma moral socialmente valorada (el mundo escolar no podría sostenerse ni moral ni socialmente sobre la base de la trampa y la impostura) y porque además es probable que, si ha desarrollado una conciencia moral apropiada, después se vea acosado por unos merecidos remordimientos, al haber violado tal norma.

1.5. Los límites de la racionalidad práctica: valoración, emoción y relación social

A diferencia de las dos anteriores, la tercera pregunta (qué debería hacer el practicante) *no* implica personalmente a X, sino a un ente genérico (la *categoría social* «practicantes psicosociales»), sobre cuyo comportamiento moral nos interpela. Esa forma de plantear la cuestión incita a X a considerar de un modo *racional* y genérico (al menos le «da permiso» psicológico para hacerlo) lo que los miembros de ese ente colectivo deberían hacer, abstrayéndose de sus motivos y preferencias internas y de las valencias y constricciones externas. Estamos así situando la tarea práctica en las coordenadas del filósofo Kant, buscando el modo de conducirse que pudiera convertirse en ley universal del comportamiento humano (en el ámbito psicosocial en nuestro caso). Aunque ese mandato tiene el mérito de enfocar con vigor y relativa simplicidad formal la tarea ética en la dirección del deber —al que desde luego podemos asociarla—, rezuma un racionalismo individualista y un universalismo que acaban extraviando la naturaleza de la práctica ética.

Y es que, aun cuando vaya precedida por la cláusula analógica (el «como si»), la exhortación del filósofo acaba derribando el muro que separa la valoración interna, subjetiva y optativa propia de la ética, de la ley externa coercitiva y universalmente obligatoria en un determinado ámbito social, haciéndonos, además, creer que, armado de la todopoderosa razón, el individuo puede conquistar por sí sólo, y sin una constante consulta con su propia intuición y «sentimientos morales» y una continuada interacción y debate con los demás, la iluminación y realización ética, lo cual es, como sabemos hace tiempo, falso. Ya reconocimos en las cuestiones previas del capítulo anterior la conspicua presencia de dos lógicas o racionalidades (la relacional y la política) a añadir a la lógica instrumental medios-fines con que se suele identificar en la acción humana la «racionalidad» en su conjunto. Una modesta

observación que puede, quizá, desdeñarse, aunque no estoy ni mucho menos solo en el reconocimiento de la multidimensionalidad y extrarracionalidad psicológica y social de los actos humanos.

Así —por citar a uno de los destacados críticos de la racionalidad—, el sociólogo Max Weber (1922) necesitó cuatro ejes o lógicas para abarcar el espectro de la acción humana: el racional con arreglo a fines (la racionalidad instrumental para nosotros), el racional con arreglo a valores (la racionalidad ética propiamente dicha), el afectivo (ligada a nuestra lógica relacional) y el tradicional. El sociólogo está, como se ve, corrigiendo el estrecho racionalismo ilustrado en dos direcciones: ampliando el ámbito de la racionalidad humana de modo que abrace los valores, además de los fines, y añadiendo lógicas no racionales (la emotivo-afectiva y la tradicional; sin embargo, se echa en falta la lógica política, tan prominente en la acción social). Está, de otro modo, admitiendo la pluralidad de fundamentos y motivaciones de la acción humana (incluyendo «lógicas» valorativas y emotivas, ajenas a la mera racionalidad instrumental o finalista), a las que podríamos agregar la interacción y la vinculación humana elocuentemente defendida por los dialógicos teóricos o prácticos (Habermas, Dewey, Sullivan, Freire, Rogers, etc.) y bien establecida por la psicología moderna (Erikson, Piaget, Kholberg, Loevinger, etc.).

¿Qué conclusiones prácticas podemos extraer de este breve excurso teórico por los confines de la racionalidad práctica y de los complementos humanos —valores, emoción, poder e interacción social— necesarios para entender, y buscar solución a, los problemas morales? Volviendo a la manera de enfocar la tarea ética práctica, puede ser muy instructivo combinar, en uno u otro orden, las tres cuestiones presentadas, preguntando, por ejemplo, a los estudiantes, en primer lugar y sin mediar ninguna preparación o reflexión, qué harían ante la situación presentada. A renglón seguido, y una vez recogidas las respuestas a la primera pregunta, cuestionar (con o sin contra-argumentación del profesor-tutor): «eso es lo que harían, pero ¿qué deberían hacer?» (o «¿qué debería hacer el practicante?»).

Esa última pregunta debería poner en marcha los «circuitos morales» de valorar y ponderar, pensar (y sentir), descubriendo muy probablemente diferencias significativas entre lo que uno tiende a hacer y lo que, tras ciertas consideraciones y reflexiones sobre valores y consecuencias generalizadas (cómo sería el mundo —o la profesión— si *todos* los humanos —o todos los profesionales— obraran de esa forma), al estilo kantiano, piensa que habría que hacer. El proceso invertido (hacer primero la pregunta de qué deberían hacer los profesionales y después la de qué haría realmente el sujeto inmerso en la situación) resulta también provechosa, al situar a la persona singular ante la conducta o pauta moral general derivada inicialmente y sus consecuencias previsibles, no siempre placenteras, como el rechazo o la incomprensión social, la pérdida de la confianza de algunos clientes o de los contratos por parte de otros, la cárcel ante la desobediencia al juez (caso B, discutido más adelante), etc.

2. PROCEDIMIENTOS DE ABORDAJE DE LAS CUESTIONES ÉTICAS:

PROPUESTAS PSICOSOCIALES

Si, como he argumentado, una parte sustancial de la evaluación y búsqueda de soluciones a las cuestiones morales transita por caminos de intuición personal e interacción social, ¿qué utilidad práctica real pueden tener los métodos y esquemas generales en esa tarea idiosincrásica y singular para cada sujeto, caso y situación? Aunque los métodos no pueden sustituir esa parte del proceso, sí pueden ayudar a ordenar este, aportando anclajes (en lo posible organizados temporalmente) que *guíen* la parte *intuitiva* (el *insight)* y sociointeractiva de la evaluación y búsqueda de soluciones. Pueden, también, facilitar la codificación objetiva, y *presentación ordenada,* de los *resultados* del proceso de búsqueda (planteamiento del problema y eventuales soluciones) y del *razonamiento moral* que lo respalda. Desde este punto de vista, una tarea prioritaria de la investigación ética es averiguar empíricamente los métodos y procedimientos que los individuos y equipos profesionales enfrentados a la variada casuística psicosocial utilizan en la práctica.

Examinemos a continuación algunas propuestas metodológicas hechas en la literatura ético-individual y ético-social, procedentes tanto del campo de la psicología y la intervención social como del trabajo social, en el cual, como se puede apreciar, predominan los enfoques deductivos y el recurso a la norma moral explícita, los códigos deontológicos.

Un proceso detallado para la toma de decisiones éticas en clínica. Tymchuk (1981) propone un procedimiento analítico-decisorio que puede ejemplificar muchos esquemas deductivo-consultivos usados en distintos campos de actuación individual. Consta de los ocho pasos siguientes.

1. Describir la situación de partida.
2. Definir las cuestiones morales presentes.
3. Consultar las guías éticas y deontológicas disponibles (códigos deontológicos, leyes y regulaciones aplicables, principios generales, etc.) para orientar la respuesta correcta a cada cuestión.
4. Valorar los derechos, responsabilidades y bienestar de los diversos afectados.
5. Generar alternativas para cada cuestión.
6. Enumerar las diversas consecuencias (económicas, sociales, psicológicas, etc.) previsibles de cada alternativa a corto y largo plazo, en tiempo y esfuerzo preciso y en cuanto a riesgos y beneficios esperables.
7. Recoger evidencia sobre las consecuencias y beneficios de cada opción.
8. Tomar la decisión.

Este esquema detallado y esencialmente deductivo fía la toma de decisiones a la consulta de diversas guías deontológicas explícitas. Esto, por un lado, deja poco o ningún espacio (explícito al menos) a la consulta de la conciencia e intuición moral interna o a la discusión interpersonal, y por otro lado ignora los aspectos dinámicos de la evaluación y búsqueda de soluciones morales: el conflicto entre valores, actores,

opciones o consecuencias (nunca resuelto, casi nunca planteado en los códigos deontológicos) o la anomia valorativa y normativa propia de las áreas sociales y psicosociales, donde, a diferencia de las clínicas, apenas disponemos de guías éticas y deontológicas a las que apela el autor. Da la impresión de que este esquema, como otros tantos, están más pensados para dar una falsa seguridad al sujeto que para colocarlo frente a las opciones y decisiones reales a encarar. Parece, también, como si la consulta de las guías morales externas fuera a resolver por sí sola los problemas éticos y no necesitáramos recurrir a las voces morales internas y al diálogo externo con los demás sujetos actuantes.

Proceso deductivo en el trabajo comunitario. En el área comunitaria, Laue y Cormick (1978) han sugerido e ilustrado un proceso ético de cinco fases.

1. Asunción básica (ideal o modelo de hombre asumido).
2. Valores directrices de la acción deducidos de esa asunción.
3. Principios operativos derivados de esos valores.
4. Decisión a tomar en base a esos principios.
5. Actuación de acuerdo a la decisión tomada.

A diferencia del anterior, este es un modelo esencialmente teórico, bastante canónico, pensado en realidad para la generación deductiva (a partir de una asunción moral inicial) de un sistema coherente de valores y principios en un área práctica que los autores ejemplifican elegantemente en las disputas comunitarias. Aunque el esquema es más ajustado a las realidades psicosociales, la omisión de las consecuencias y de la posibilidad de modificar la acción en base a la retroalimentación de los datos en los efectos del proceso lo hacen poco apropiado para el afrontamiento práctico de las cuestiones éticas.

2.1. Derechos y deberes recíprocos en el trabajo microsocial

John Glidewell (1978) ha utilizado un interesante método para el análisis ético del trabajo grupal, basado en el examen del juego recíproco de derechos y deberes entre los agentes implicados. Esa concepción de los valores como derechos y deberes entrelazados entre sí y la reciprocidad moral y comportamental de los actores es la principal aportación del método. El carácter plenamente *psicosocial* del entorno aporta una segunda ventaja: aunque el grupo de encuentro es un espacio microsocial concebido para la interacción personal y relativamente bien estructurado, contiene ya los ingredientes morales básicos (actores, valores, opciones y consecuencias), planteando muchas de las cuestiones éticas relevantes de todo el espectro psicosocial. Puede, en consecuencia, ser útil para el análisis ético general en la APS.

Espacio psicosocial, valores y actores. Resumo aquí los fundamentos (la concepción del espacio social, los valores y actores presentes y la trama relacional) del modelo, ilustrado luego en un área concreta.

El *grupo de encuentro* es un espacio microsocial que permite usar deliberadamente las fuerzas generadas por las interacciones producidas en su seno para el desarrollo autosostenido de los recursos personales (por ejemplo, mejorar la autoaceptación o la relación con otros), enfatizando el «aquí y ahora», la autoconciencia y la experiencia.

Valores morales básicos en el encuentro grupal son: la *vida* (y la seguridad personal); el *bienestar*; la *justicia* en la distribución de recursos —como el tiempo, la ayuda profesional o los valores— limitados y divergentes, por la reciprocidad y complementariedad de los intercambios; la libertad, la *verdad* (como conocimiento y representación válidos de sí mismo y del mundo) y el *desarrollo de los recursos* o potencialidades personales (lo que aquí he llamado desarrollo humano).

Y tiene como *actores* principales: el agente de cambio (el conductor del grupo), los sujetos participantes y la «sociedad interesada», compuesta de aquéllos (empleadores o clientes), pero también la familia y amigos de los participantes indirectamente afectados por el desarrollo y los resultados del proceso grupal (e interesados en su buen funcionamiento y en el cumplimiento de las condiciones pactadas).

Un aspecto clave de los procesos grupales son las *relaciones* entre los actores, que, como toda interacción social, conllevan *derechos y deberes* morales *recíprocos y complementarios,* de modo que el derecho de uno define el deber de otro(s) y, viceversa, el deber hacia otros lleva aparejados ciertos derechos (o al menos la expectativa de cumplimentar esos derechos). En síntesis, la trama relacional (la interacción psicosocial) conlleva —y exige— una reciprocidad moral (derechos y deberes) y social (expectativas y normas generalizadas) que ha de ser sostenida por la conformidad de la conducta de los actores con las expectativas y normas sociales y, en lo que nos interesa, con los derechos y deberes definidos.

Si, por ejemplo, los participantes han de tener el derecho a desarrollar sus potencialidades personales, al agente de cambio le corresponde el deber de facilitar ese desarrollo, pero los participantes tienen a su vez el doble deber de pagar por los servicios de aquel y de participar activamente en el proceso grupal para beneficiarse de él. O si, desde otro ángulo, a la sociedad le asiste el derecho a disponer de recursos humanos que le resulten valiosos (como la comunicación interpersonal efectiva), ha de aceptar el deber de aportar al practicante el poder social necesario y los medios para evaluar la actividad de los grupos de encuentro y la eventual beneficencia (o maleficencia) de sus resultados reales.

La tabla 6.3 resume los derechos y deberes mínimos de los actores implicados en los grupos de encuentro, ilustrando la lógica recíproca del modelo. Las relaciones establecidas en el espacio grupal implican también el intercambio más o menos equitativo de recursos, valorados diferencialmente por los actores sociales dependiendo de sus distintos sistemas de valores y del momento *temporal* en que se genera cada recurso. Así, en las interacciones entre el agente de cambio y los participantes (A y P) estos ceden bienestar y la libertad a corto plazo (pago monetario de servicios, pérdida de intimidad y privacidad, al participar en los intercambios

verbales del grupo, ansiedad ante lo desconocido y la nueva situación) a cambio de verdad (conocimiento de uno mismo o su comportamiento) y desarrollo de sus propias capacidades a largo plazo.

TABLA 6.3
Derechos y deberes mínimos de los actores en los grupos de encuentro

		Derechos a esperar		
Deberes a cumplir		Agente de cambio (A)	Participantes (P)	Sociedad interesada (S)
	A		Posibilidad enriquecedora de desarrollar recursos humanos	Desarrollo de recursos humanos socialmente valorados
	P	Participación Pago servicios		Utilización de recursos humanos desarrollados
	S	Poder social Reputación, estima social	Protección contra explotación	

El examen del contenido de los distintos intercambios y cuestiones asociadas a las cuatro áreas de la acción social sugeridos por Kelman y Warwick —elección de fines, definición del blanco, selección de los medios interventivos y evaluación de las consecuencias— resulta doblemente esclarecedor, mostrando el interés y potencial del método en espacios psicosociales, pero descubriendo también un buen número de cuestiones e ingredientes básicos comunes a todo el espectro de actuación psicosocial.

He hecho uso del enfoque deberes-derechos de análisis ético en temas y situaciones que implican una clara reciprocidad de los valores (que pueden ser fácilmente traducibles a deberes y derechos), afectando a un número relativamente pequeño de actores (si el número es elevado, las posibles combinaciones e interacciones diádicas de valores se vuelven tremendamente complicadas). Así, en un caso (Sánchez Vidal, 2007) de mal uso de un informe psicológico por parte de una institución, el valor central afectado, la verdad, deviene el deber de una parte (la institución debe decir la verdad, veracidad) y el derecho de otra (la comunidad). Pero el deber institucional de veracidad exige como contrapartida la veracidad de la información aportada por la comunidad al ser preguntada (y también la dotación de medios económicos para sostener la evaluación social). En el caso (Sánchez Vidal, 2002) de las tensiones en un equipo de salud de un hospital, el derecho a la salud de la población exigía el deber del equipo de prestar una buena atención. Pero la reciprocidad moral y social no es aquí tan clara, porque el deber de proteger y mantener la salud de los usuarios (el valor en juego) no corresponde sólo al equipo en cuestión, sino al hospital (y al conjunto de instancias y equipos médicos, técnicos y administrativos), lo que limita notablemente la aplicabilidad y eficacia analítica del

esquema de reciprocidades cruzadas bilateralmente que lo constituye.

2.2. Externalizando el diálogo interior: un enfoque inductivo de toma de decisiones

Ronald Lippitt (1983), un seguidor de Kurt Lewin, ha esbozado e ilustrado un proceso de toma de decisiones éticas apropiado para espacios psicosociales, intermedios entre la interacción individual y la multirrelación social. Pese a la apariencia formal deductiva de las fases, el método es esencialmente inductivo. La narración subjetiva y en primera persona del proceso resulta, por otro lado, más realista y creíble que la habitual narración pseudo-objetiva en tercera persona, en la que el análisis parece fruto exclusivo de la aplicación de normas externas en vez de lo que en realidad es: una serie de interacciones entre la escucha de los procesos interiores, el examen externo de normas y el diálogo interpersonal (hurtado, en este caso al lector, al actuar el consultor en solitario, no en equipo).

El practicante profesional confronta, para el autor, tres *tareas* iniciales (que recuerdan lo ya argumentado en capítulos precedentes) *previas* al análisis y acción propiamente dichos: *clarificar* los *valores* propios en relación a las decisiones y acciones implicados en el proceso de ayudar a los demás; *desarrollar* las *destrezas* necesarias para usar esos valores en las decisiones y acciones consiguientes; y recoger en las interacciones con los clientes los datos que permitan *revisar* nuestros *valores* y la utilización que de ellos hagamos en futuros procesos de ayuda profesional. Pero no basta con clarificar los valores implicados: es preciso, además, que el profesional adquiera la capacidad de articularlos operativamente, desarrollando las habilidades conductuales precisas *para representar y expresar sus valores* en la acción, pues ese es uno de los elementos críticos (quizá *el* más crítico) de la actuación. El desarrollo de esas destrezas (fase 6 del proceso) exige, en consecuencia, una práctica y retroalimentación continuas que han de ser parte integral de la formación del practicante.

Ejemplo: ¿Quién es el cliente? El consultor recibe una petición de ayuda de un administrador (D) de un centro de servicios comunitarios para resolver un problema de duplicidad de competencias de un servicio de ayuda domiciliaria en la comunidad, dirigido por un psicólogo y un equipo de voluntarios encabezado por un trabajador social.

La tabla 6.4 resume para este caso las seis fases del proceso de análisis y toma de decisiones que el practicante narra en primera persona, como externalización del diálogo interno (la «voz de la conciencia») que ese mantiene consigo mismo (y que podría complementarse con el diálogo externo en el caso de un equipo multipersonal).

TABLA 6.4
Consulta en un conflicto de competencias profesionales

1. *Identificar la cuestión:*
   ¿Quién es el cliente: el administrador o los servicios (ayuda domiciliaria y voluntarios) en conflicto?

2. *Alternativas:*
   Aceptar como legítima la demanda del administrador (D).
   Pedir a D que involucre a los dos servicios en el proceso y consiga que acepten mi ayuda.
   Decir a D que debo reunirme con los jefes de los servicios para saber si aceptan ser mis clientes.
   Pedir a D que convoque una reunión de las dos partes conmigo para explorar la posibilidad de empezar a trabajar con D.

3. *Criterios valorativos* a tener en cuenta:
   D tiene el derecho y el deber de intervenir para mejorar la calidad del servicio que prestan sus trabajadores.
   No veo ético tratar de influir en la conducta (y decisiones) de personas que no han aceptado mi ayuda.
   Muchas personas necesitadas de ayuda no aceptan esa necesidad o no se sienten capaces de pedirla: me parece, por tanto, apropiado que alguien trate de convencerlos para que utilicen mis servicios.
   D es, probablemente, una pieza clave del sistema de servicios; debo trabajar con él para buscar una solución válida y realizable.
   Creo que soy un recurso profesional apropiado para enfrentar el problema.

4. *Decisión y actuación:*
   Le digo a D que estoy interesado en el problema y que puedo ayudar a resolverlo, pero no puedo trabajar sin obtener el consentimiento de los jefes de los servicios enfrentados.
   Dado que D puede tener dificultades para conseguir la colaboración voluntaria de los jefes (por su previsible resistencia contra-dependiente), me ofrezco a «venderles» mis servicios si él me respalda.
   Dejo claro que, si los dos servicios consienten en trabajar conmigo, tendría una reunión a tres bandas (incluyendo a D) para alcanzar un acuerdo general sobre mi papel, uso del tiempo, papel de D, acceso a los servicios, etc. Ellos (D y los dos servicios) serían mi «cliente».

5. *Principios valorativos* usados:
   El contrato de trabajo deber ser *voluntario*, o convertirse en tal, al comienzo del proceso.
   La definición del *cliente* debe incluir a todos aquellos que deban ser influidos para alcanzar —y mantener— el resultado perseguido.

6. *Habilidades* utilizadas:
   Explicar a D las razones de la actuación para que no se sienta amenazado por la intervención externa y se convenza de que el consultor sabe lo que hace y puede ayudarle a resolver el conflicto.
   Reunirse, por separado o conjuntamente, con los jefes de los servicios para favorecer la comunicación abierta sobre la situación-problema y obtener su cooperación para buscarles solución.
   Diseñar las tareas a realizar y conseguir el visto bueno y apoyo de los jefes para trabajar con el personal de los dos servicios.

2.3. Un proceso para la acción social

En la presentación de su recopilación sobre el tema, Kelman y Warwick (1978) sugieren un enfoque genérico para el análisis y solución de los problemas éticos de la intervención social, que puede ser concretado en cuatro pasos sucesivos.

1. Identificar los *valores y grupos sociales* relevantes que —más allá del cliente, el destinatario y el profesional— están significativamente implicados en la situación en que se interviene.
2. Hacer explícitos los *valores a promover* y la *forma* en que fueron *derivados*: a partir de una teoría social o psicológica, de universales empíricos, mediante la

discusión grupal, partiendo del razonamiento, etc. Especificar el modo de derivar los valores debe reducir la arbitrariedad de las propuestas, permitiendo la discusión de las eventuales diferencias entre los valores básicos sostenidos por los distintos grupos involucrados.

3. *Adoptar* un conjunto de *valores, ponderando* los valores sostenidos por los distintos grupos. Dado que los valores a ponderar corresponden a grupos sociales con intereses divergentes, a menudo enfrentados, la cuestión es «qué valores» se puede convertir en los valores *«de quién*». La elección y jerarquización de los valores a promover en un escenario social exige tratar de alcanzar un equilibrio global entre los valores de los distintos grupos.
4. *Resolver los conflictos* entre valores incompatibles, *optimizando el balance global*, tratando de maximizar los valores considerados primarios, sin sacrificar —o sacrificando lo menos posible— los secundarios: el equilibrio global (en función del grado de relevancia atribuido a los distintos valores), no la elección de uno u otro sistema de valores, es, subrayan los autores, la cuestión ética clave en la acción social. ¿Cuánta libertad se debe, por ejemplo, sacrificar en favor del bienestar y la supervivencia en el campo del control de la natalidad? ¿En qué medida debe ceder la cultura tradicional en favor de la modernización en un programa de cambio social?, etc.

Así, si en el tema del control de la natalidad valoramos la supervivencia colectiva (valor primario) por encima de la libertad (valor secundario), trataremos de maximizar aquella sin afectar a esta. Ahora bien, en el momento en que la supervivencia colectiva choque con el mantenimiento de la libertad personal intentaríamos actuar de modo que se garantice la supervivencia colectiva en un grado que perjudique lo menos posible la libertad de los sujetos participantes en la actuación.

A pesar de su relativa vaguedad y esquematismo, la propuesta de Kelman y Warwick reúne dos de los requisitos exigibles a cualquier ética social (o psicosocial) práctica: reconocer la *pluralidad ética y social* del campo (que lo distancian nítidamente de la ética deontológica) y tomar en consideración los conflictos (de valores en este caso) y otras *interacciones dinámicas* de los distintos ingredientes, que constituyen el epicentro del trabajo ético social. Como se ha recalcado en los capítulos precedentes, la «receta» para resolver los problemas éticos no puede limitarse a la socorrida consulta a los códigos deontológicos; debe incluir también algún sistema de selección y especificación de valores, así como la ponderación o graduación (y modulación) del conjunto de valores mediante criterios de mérito moral y social, así como también las consecuencias previsibles de las diferentes opciones o cursos de acción considerados, algo que no pocas propuestas pasan por alto.

Conviene también subrayar la importancia (instrumental) que la *participación* social adquiere en el esquema comentado, al posibilitar la clarificación de los distintos juegos de valores implicados impidiendo la imposición unilateral de los

valores del practicante (o de los grupos dominantes). Más adelante haré uso, en el método AVOC, de varias ideas de este enfoque genérico, añadiendo la consideración de las consecuencias conspicuamente ausentes en él.

3. MODELOS Y ENFOQUES DE SOLUCIÓN DE DILEMAS ÉTICOS EN EL TRABAJO SOCIAL

Uriz (2004) ha presentado cinco modelos de solución de dilemas éticos propuestos en el ámbito anglosajón del trabajo social. Las propuestas varían en el enfoque subyacente —con un predominio del deductivo sobre el inductivo— y en el grado de concreción metodológica y práctica. Aunque los agrupo en un apartado separado en función de su procedencia, no difieren en muchos de sus ingredientes y pasos de varios de los ya descritos. Aunque la autora los asume apropiados para enfrentar los dilemas éticos (entendidos como conflictos de valores), deberían ser útiles para el conjunto de problemas éticos prácticos, en los que, como vimos, el conflicto de valores es sólo una categoría. Los modelos elegidos son el bioético, el de Levy, el de toma de decisiones de Loewnberg y Dolgoff, el proceso ETHIC y un modelo colaborativo interactivo.

El *modelo bioético* sigue la clásica presentación de Beauchamp y Childress (1999). Los autores, tras resumir críticamente las diversas teorías morales (utilitarismo, formalismo kantiano, ética del carácter, liberalismo individualista, comunitarismo, ética del cuidado, casuística y teorías basadas en los principios), adoptan un enfoque ecléctico basado en principios morales desde los que, a través de distintos métodos, deducen reglas —sustantivas, de autoridad o procedimentales— y juicios particulares, acogiéndose a los cuatro principios de la deontología ya explicados (y críticamente integrados en un sistema valorativo más amplio) en el capítulo 4: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

El criterio base del *enfoque de Levy* (1993) es que la acción del practicante sea ética *en* y *para* las *circunstancias* concretas en que se realiza. Se trata, por tanto, de un enfoque deductivo particularizado para la coyuntura y condiciones específicas del caso. El autor propone un proceso ordenado de seis pasos para elegir los principios a utilizar en la acción y toma de decisiones en base a ciertos parámetros y características de la situación, como las funciones que el practicante debe asumir, las metas propuestas, las condiciones y necesidades de los usuarios y los datos disponibles que el practicante debe observar e interpretar de manera realista. Las seis fases del proceso son presentadas en el cuadro 6.5, siguiendo la exposición de Uriz.

TABLA 6.5
Seis pasos para analizar asuntos éticos

1. Averiguar qué *principios* son *aplicables* a la situación concreta y a quiénes son aplicables.
2. *Justificar* el orden de *prioridades* de los principios y las personas o intereses concernidos.
3. *Anticipar consecuencias* y riesgos eventuales derivados de los juicios éticos a realizar en la situación

práctica.
4. *Seleccionar* ciertos valores y consideraciones convincentemente preferidos a otras alternativas.
5. Prever las *necesidades* estratégicas y las *precauciones* a tomar, según las consecuencias de los juicios y las acciones que se vayan a realizar.
6. *Evaluar* la *responsabilidad* ética y profesional por las decisiones tomadas y las acciones realizadas.

El *modelo de Loewnberg y Dolgoff* (1996) especifica en once pasos un proceso deductivo de *toma de decisiones* comúnmente usado en el cambio planificado. Los pasos incluyen: la identificación del problema (y los factores que lo mantienen), junto a las personas e instituciones relacionadas y los valores relevantes; la identificación de las metas y estrategias de intervención, asegurando la efectividad de cada una; y la toma de la decisión de realizar la estrategia apropiada y su evaluación. La propuesta de Reamer (1990) deriva de la teoría moral de Gewirth algunas indicaciones generales bastante razonables, que pueden ayudar a *ordenar* los distintos tipos de *criterios valorativos y normativos* (daños vitales básicos, bienes públicos, derecho a la propiedad privada, bienestar esencial, derecho a la autodeterminación personal, obediencia a la ley y las reglas establecidas, etc.) en caso de duda o conflicto. Las fases iniciales del proceso explicitado se asemejan a muchas de las ya descritas: identificar las cuestiones, valores y blanco de la acción, averiguar las posibles acciones y sus riesgos, así como las razones a favor y en contra de cada opción, etc. Se añade, como particularidad, la consulta a otros colegas y expertos antes de tomar la decisión definitiva y la evaluación de las consecuencias de la acción una vez realizada.

El *modelo ETHIC de Congress* (1999) preconiza cinco pasos (cuyas iniciales en inglés componen el acrónimo que le da nombre) para encarar los dilemas morales sociales: examinar los valores relevantes y sus eventuales conflictos; considerar cómo se pueden aplicar los correspondientes códigos deontológicos y leyes relevantes; plantear las distintas alternativas (hipótesis) y sus consecuencias; identificar a los beneficiarios y damnificados en cada alternativa; y concretar con la ayuda de supervisores y colegas la opción más correcta.

Se presenta finalmente un *modelo colaborativo,* auspiciado por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que permite la discusión de casos en foros colectivos, estructurándola en torno a los elementos recogidos en la tabla 6.6.

Uriz concluye señalando los aspectos comunes de las distintas propuestas. A saber:

— La necesidad de consultar el correspondiente código deontológico.
— El eclecticismo teórico: los enfoques mezclan teorías morales y enfoques evaluativos deontológicos (o «principalistas») y teleológicos (consecuencialistas).
— La aceptación convergente de los cuatro principios deontológicos básicos (beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia), aunque la forma de jerarquizarlos varía.
— La obediencia a la ley y la consulta con supervisores y colegas.

Este ramillete de enfoques éticos supone una estimable aportación a la metodología de análisis y solución de problemas en la APS. Contienen un buen número de coincidencias con los esquemas y modelos ya explicados, pero también algunas diferencias reseñables, como la insistencia en consultar a colegas y expertos (que vendría a ser un pálido amago del diálogo aquí preconizado), el examen de los códigos deontológicos (sobre cuya utilidad y límites ya me pronuncié en el capítulo 2) y la obediencia a la ley, un asunto que, creo, requiere matización. Naturalmente que el practicante psicosocial debe, en principio, obedecer las leyes y reglamentos que regulan la vida social y el ejercicio profesional; como todo el mundo. Se entiende que esa es una cuestión de especial relevancia en un campo, el trabajo social, asociado al uso y distribución de recursos sociales escasos (económicos o de otro tipo) y directamente conectados, por tanto, con la justicia social y las normas (leyes, regulaciones, etc.) que, en principio, deben materializar el concepto de equidad que la sociedad o comunidad considera mejor.

TABLA 6.6

Puntos para la discusión colectiva de problemas morales en el trabajo social

1. *Principios* básicos del código deontológico concernidos.
2. *Contexto* de la acción (incluyendo análisis ético y político de los valores morales y fuerzas sociales que enmarcan y condicionan la acción).
3. Especificación de los *motivos* para actuar como forma de adquirir conciencia de por qué se actúa.
4. *Orientación moral* (cooperativa, paternalista, promotora de autonomía) de la acción.
5. *Consecuencias* previsibles para las distintas personas y grupos.

Pero no siempre es así, pudiéndose dar diversos conflictos entre la justicia social y la justicia penal (que son cosas diferentes aunque relacionadas) y casos en los que el criterio moral y la ley o el criterio penal (que normalmente van paralelos) se crucen o colisionen. No veo ninguna razón por la que en tales casos deba primar una ley que puede ser moralmente injusta. ¿Es, por ejemplo moralmente admisible —incluso legítimo— en una situación de necesidad imperativa violentar una ley de contenido económico (que regula los subsidios al paro) si el sujeto no dispone de otros medios para garantizar la supervivencia personal y familiar? En la discusión del caso B (ver más adelante) sostengo el criterio de que —en el contexto de una sociedad injusta que ni satisface el derecho al trabajo ni aporta ayuda económica sustantiva, ni persigue con el mismo celo y eficacia el gran fraude que a la defraudación menuda del trabajador— la violación de esa ley puede ser no sólo un derecho, sino hasta un deber, en tanto no haya otros medios de subsistencia o se reformen los sistemas de redistribución social para que garanticen el mínimo vital de todas las personas.

4. ACTORES, VALORES, OPCIONES Y CONSECUENCIAS: UNA PROPUESTA

Aun cuando la metodología para evaluar los problemas éticos psicosociales y sus soluciones está aún en estado embrionario, hemos podido encontrar un cierto número de procesos y esquemas con orientaciones y contenidos diversos, aunque predomine el recurso a la norma externa (el código deontológico) frente a la intuición interna (la conciencia moral), la apariencia organizativa deductiva (que, como hemos visto, enmascara a veces formalmente procesos morales inductivos) y los contenidos deontológicos extraídos de la clínica médica. Aunque las propuestas exhiban un buen número de coincidencias significativas, parece prematuro hacer una propuesta procesal integradora, que podría resultar incluso contraproducente por, al menos, dos motivos. Primero, la ya señalada naturaleza tridimensional de la evaluación moral (intuitivo-inductiva, racional-deductiva y analógico-social), difícilmente capturable en esquemas casi siempre organizados sobre el eje de la deducción racional, al ser el más accesible a la representación y secuenciación verbal.

Segundo, es dudoso que un solo esquema o procedimiento sea universalmente apropiado para los diferentes contextos sociales y tipos de problemas aparejados: parece preferible seleccionar uno u otro proceso en función de los problemas y las circunstancias en que se presentan, como ya sugieren de hecho algunos de los modelos examinados. Esas son las razones por las que, tomando en consideración los métodos y procesos descritos, ofrezco aquí un esquema bastante simple para plantear los problemas éticos y sus soluciones en la APS, basado en los cuatro ingredientes básicos de la ética psicosocial ya identificados y descritos en el capítulo 3: actores, valores, opciones y consecuencias, cuyas iniciales forman el acrónimo AVOC con que lo he designado.

Sólo falta recordar la limitada utilidad atribuida a los métodos y esquemas verbales genéricos en la tarea idiosincrática y singular de mezclar las vías de intuición personal, aplicación de la norma externa e interacción e imitación social. Aunque esos métodos no pueden sustituir la vía interna y la interactiva del proceso de evaluación moral, sí pueden ayudar a organizarlas y ordenarlas guiando la intuición moral y la interacción social y facilitando, en fin, la presentación escrita de los resultados del proceso de búsqueda y la justificación moral de la opción seleccionada.

Antes de describir el método y hacer algunas consideraciones sobre la dinámica interactiva de los ingredientes que lo forman, debemos identificar sintéticamente los enfoques generales de evaluación moral, sugiriendo, en base a lo explicado en el capítulo 3, algunos criterios orientadores complementarios.

4.1. Enfoques de evaluación moral

La valoración ética de las acciones psicosociales se puede hacer desde dos enfoques complementarios que vienen a corresponder con las dos áreas (ética de la convicción y ética de la responsabilidad) establecidas por Max Weber (1919) e implícitamente señaladas por Beauchamp y Childress (1999): los principios o valores (enfoques deontológicos) y los fines establecidos o las consecuencias reales de las acciones (enfoques teleológicos o consecuencialistas).

— *Enfoques deontológicos*, basados en los valores, principios o deberes —como autonomía, solidaridad o justicia social— que guían la acción, y que están ligados, por tanto, a la «intencionalidad» valorativa del practicante, no a las consecuencias reales de la acción.
— *Enfoques consecuencialistas*, centrados en las consecuencias que la actuación tiene para los actores sociales (o, más genéricamente, en el grado de cumplimiento de las metas propuestas). Mientras que la evaluación deontológica puede preceder a la acción, la consecuencialista debiera ser, en principio y si se busca la constancia empírica, posterior a ella. Para incorporarla a la planificación previa debemos, por tanto, tratar de prever las consecuencias que se van a producir a partir de los valores de los actores y de la evidencia acumulada y la experiencia personal del practicante en el asunto tratado y con el método utilizado. Esta familia de enfoques incluye los diversos «utilitarismos», cuyo criterio de valoración ética sería la medida en que la acción aporta «el mayor bienestar para el mayor número posible de personas».

A diferencia de la distinción dicotómica que Weber estableció en la arena política, para nosotros, en la práctica psicosocial, los dos enfoques no deben ser excluyentes, sino en principio combinables. Si una acción pretendía mejorar la autonomía de un colectivo o reducir su desigualdad respecto a otros colectivos en algún aspecto relevante (enfoque deontológico), la verificación de en qué medida ha aumentado la autonomía colectiva o se han reducido las desigualdades tras la actuación mostrará, a través de las consecuencias reales, los progresos valorativos inicialmente perseguidos. Es más, en la acción práctica en que —a diferencia de la discusión teórica— se generan importantes efectos —benéficos o maléficos— para las personas y grupos, la combinación de valores y consecuencias —aspectos subjetivos y aspectos objetivos— no es sólo una posibilidad plausible, sino un deber imperativo: ¿qué sentido tiene actuar movido por las mejores intenciones o los valores más excelsos, si las consecuencias reales de las acciones no son beneficiosas para los actores?

En la práctica, no habrá dificultades si la evaluación resultante de los dos enfoques, valores y consecuencias, es convergente, pero encontraremos serios problemas cuando diverjan o entren en conflicto. Cuando, por ejemplo, un programa inspirado por los mejores valores resulte ineficaz (se desea promover la escuela pública pero la escuela privada se muestra más eficaz), o cuando conseguimos buenos resultados usando medios moralmente inaceptables que degradan a las personas o violan un valor ético básico (se obtiene información sobre una red terrorista torturando a los sospechosos; se aumenta la productividad de un hospital o escuela sometiendo a los trabajadores a unas condiciones laborables inaceptables; se suministra droga a una persona adicta para «reducir los daños» psicológicos o sociales ligados al consumo de esa sustancia; o se contribuye al «bienestar» de consumidores o televidentes a través de la publicidad manipuladora o los programas «basura»).

La evaluación integral de los problemas y soluciones morales exigirá, a la vista de esos ejemplos, combinar enfoques deontológicos *y* consecuencialistas con el uso de medios y métodos éticamente correctos (además de técnicamente eficaces) en los que ni los practicantes ni los destinatarios de la acción son meros medios para alcanzar ciertos resultados. El ideal moral de la APS consistirá, de otro modo, en obtener el conjunto de *consecuencias más beneficiosas en* los *valores moralmente más relevantes* a través de acciones —y procedimientos— *que respeten éticamente a las personas a las que van destinados y a los practicantes* que las realizan. Estoy abogando, de otro modo, por actuaciones que compatibilicen los valores éticos con la eficacia técnica (resultados) mediante el uso de métodos lo más respetuosos que sea posible con la integridad ética y la capacidad de las personas y grupos destinatarios. Lo que necesariamente implica conjugar, y tratar de hacer compatibles, los valores de los distintos actores sociales desde una base ética inviolable. Ese es el reto ético del practicante psicosocial.

4.2. Criterios

¿Qué criterios básicos podemos usar para valorar éticamente la APS? A partir del razonamiento anterior, propongo tres criterios relativamente simples y genéricos, planteados como interrogantes a responder tras la actuación.

— ¿Ha aumentado la actuación el *bienestar del conjunto de las personas* y grupos (sobre todo el de los más débiles o necesitados) con las que se ha trabajado?
— ¿Han *disminuido las desigualdades* (de poder, salud, potencial y oportunidades de desarrollo humano, etc.) entre las personas y entre los grupos sociales destinatarios de la acción? Y, en la medida de lo posible, ¿esa disminución se ha conseguido aumentando el poder de los más débiles de forma que estos acaben estando mejor, en términos absolutos y respecto de otros grupos, que antes de la acción en los bienes y recursos psicosociales básicos?
— ¿Se ha conseguido lo uno y lo otro (el incremento del bienestar conjunto y la reducción de la desigualdad) a través de un *proceso* y una forma de relacionarse —y mediante el uso de unos medios y métodos técnicos— que *respeten la dignidad y capacidad* de aquellos con quienes se ha trabajado?

El mérito moral de una acción vendría dado por la respuesta positiva a las tres cuestiones (o, si se quiere, a las formulaciones contrarias de las dos primeras: «¿ha disminuido el malestar del conjunto?», «¿ha aumentado la igualdad entre las partes?»). O, en todo caso y si sólo puede aumentar el bienestar o poder de algunos, que sea (Rawls, 1971) el de los peor situados, no, como sucede con frecuencia, el de las minorías que ya están mejor que el resto. Estoy, como se ve, proponiendo combinar un criterio poblacional (la justicia social) con otro personal (el bienestar), extendido al conjunto de los afectados por la actuación (usado en sentido «social»), y con otro procesal y metodológico. Esos tres tipos de criterio fueron ya usados al definir los tres componentes de la justicia social (justicia sustantiva o de mínimos,

redistribución equitativa y justicia procesal; capítulo 4), y los dos primeros (beneficencia y desequilibrio social) al identificar al destinatario de la APS (capítulo 3). Introduzco un par de matices.

Primero, si el término «*bienestar*» es visto como un reflejo demasiado vago y «blando» del bien moral, puede ser sustituido por otros términos —como salud, desarrollo personal, poder, autonomía, autoestima, significado subjetivo o pertenencia social— que expresen con mayor precisión o concreción la concepción de lo que es bueno para la gente con que se trabaja en un ámbito dado.

Si, en segundo lugar, el primer criterio (bienestar personal conjunto) parece demasiado difuso y generalista (que lo es) podríamos sustituirlo por su reverso específico para el segmento poblacional más castigado psicosocialmente, redefiniéndolo como «en qué medida *reduce* o palía la actuación el *sufrimiento* psicológico, la *penalidad* social y la *privación* económica de los más pobres y desamparados de la comunidad o sociedad». Esa reformulación introduce un meritorio correctivo de justicia social (convergente con la aspiración igualitaria del segundo criterio) y del malestar y el sufrimiento como algo más que el mero reverso del bienestar. Pierde, sin embargo, de vista la totalidad de la comunidad o sociedad, cuyo bienestar colectivo se perseguía inicialmente aumentar, particularizando, a la vez, el destinatario de la APS en el segmento psicológica y socioeconómicamente más vulnerable, con exclusión de sus conciudadanos, que debería ser, de una u otra forma, parte de la APS y de su valoración moral.

5. PROCESO ANALÍTICO Y RESOLUTIVO AVOC

Dando por sentado que el analista puede elegir entre un cierto número de propuestas metodológicas, y teniendo en cuenta las reservas expresadas sobre esas propuestas y sus límites, propongo ahora, e ilustro más adelante, un esquema procesal basado en la identificación y análisis dinámico de los cuatro ingredientes estructurales de la ética supra-individual: actores (o agentes), valores, opciones y consecuencias. El examen sucesivo de esos cuatro ingredientes (presentes, de una u otra forma, en los modelos y procesos revisados y al que llamo AVOC), y de sus interacciones, convergencias y divergencias, nos permite plantear ordenadamente los problemas éticos (selección de los actores y valores relevantes) y sus «soluciones» (determinación de las opciones existentes y sus consecuencias previsibles para los actores identificados).

La propuesta, cuyo mérito final dependerá de la utilidad práctica que le asignen quienes la sigan en distintos casos y áreas, ni es una fórmula simple para resolver los problemas (sino, en todo caso, para plantearlos ordenadamente), ni pretende sustituir la reflexión moral personal o la deliberación dialogada e interactiva, sino más bien guiar los procesos de búsqueda y evaluación moral y la presentación final de sus resultados. No evita, de otro modo, los juicios y elecciones personales y colectivas, sino que se limita a enmarcarlas y realzarlas, al poner frente al analista los materiales éticos básicos para realizar esos juicios y opciones de forma consciente.

El proceso consta (tabla 6.7) de cuatro fases: en la primera se identifican las cuestiones o problemas éticos relevantes del caso o situación analizado; en la segunda y tercera se determinan respectivamente, y para cada problema relevante, los actores sociales implicados y sus valores, por un lado, y las opciones y consecuencias, por otro; y en la cuarta fase se elige, a partir del análisis del problema (fase dos, actores-valores) y de las alternativas de solución (fase tres, opciones-consecuencias), el comportamiento ético más correcto.

TABLA 6.7
Proceso AVOC de abordaje de los problemas éticos

1. *Identificar* las cuestiones o *problemas* éticos relevantes.
2. Determinar los *actores* significativos y los *valores* (explícitos o implícitos) de cada actor (o aquellos que sean relevantes para la situación).
3. Especificar las *opciones* existentes y las *consecuencias* (previsibles) de cada opción para los distintos actores.
4. Deducir el comportamiento éticamente correcto, teniendo en cuenta y ponderando los valores y las consecuencias.

1-2. Actores-Valores: planteamiento del problema.
3-4. Opciones-Consecuencias: planteamiento de la solución.

Las dos fases intermedias son la clave del proceso. En la segunda se identifican los *actores* sociales relevantes para el caso y situación, y los *valores* (explícitos e implícitos) básicos necesarios para —ampliando el criterio de Lippitt— *comprender moralmente la situación y a los actores* (sus «motivos» morales) y para *modificar* esa situación en la dirección señalada por los objetivos establecidos. Esos valores incluyen no sólo aquello que los actores principales consideran valioso (*sus* valores), sino también los valores que, aunque no sean explícitamente asumidos por ellos, resultan esenciales en la situación y el caso (así, la igualdad en un caso de gran injusticia, o la seguridad en una situación de abusos y maltrato).

En la tercera fase se especifican las *opciones* fundamentales que la conciencia, la documentación o el diálogo con otros ha permitido aflorar y sus *consecuencias* probables para los actores. Buscamos, en otras palabras, las *diferentes* (recalco el adjetivo) alternativas o cursos de acción y las consecuencias que para cada uno de los actores seleccionados tendrá *previsiblemente* (en la medida en que los valores de cada actor, y la experiencia y evidencia empírica acumulada sobre los efectos del método usado, nos permiten anticipar esas consecuencias). Se trata, de otro modo, de concebir las soluciones posibles y el modo en que, en principio, afectarán a los actores en vista de sus respectivos valores (e intereses). Introduzco ahora algunos matices y aclaraciones sobre la dinámica del proceso.

5.1. Dinámica operativa

En la parte de análisis del problema conviene tener en cuenta los valores *implícitos*

(generalmente identificables con intereses no confesables) en situaciones en que, en función de la gran «deseabilidad» social, sospechamos que esos valores van a tener una influencia significativa en la conducta de los actores. En el lado de las consecuencias, la dimensión temporal puede ser crucial: a menudo sucede que las consecuencias de una opción pueden ser buenas (solucionando aparentemente el problema) en el *corto plazo,* pero malas en el largo plazo, generando a veces las condiciones o el clima favorable para la aparición de nuevos problemas. De hecho, los problemas psicosociales suelen requerir, como cualquier problema humano, esfuerzos y sacrificios iniciales (que en consecuencia generan malestar) que sólo en el largo plazo, y bajo determinadas condiciones de dotación de medios, eficacia técnica y motivación de los actores, fructifica como solución satisfactoria de los problemas planteados o en forma de beneficencia más o menos generalizada para los actores.

Para una mayor claridad analítica y expositiva, el proceso AVOC se puede presentar en forma de tabla de dos por dos. La primera fila presenta el problema, alojando (tabla 6.8) en su primera columna los actores (ordenados, si es posible, de más a menos relevante) y en la segunda sus correspondientes valores. La segunda fila acoge en su primera columna las opciones (igualmente jerarquizadas, si es posible, por su valía resolutiva) y en la segunda columna a sus consecuencias previsibles (si el análisis precede a la acción; si se analiza retrospectivamente una acción, las consecuencias son conocidas, pudiendo contemplarse las consecuencias que *hubieran* tenido otras opciones que podrían haberse tenido en cuenta o que pueden tenerse en cuenta en el futuro). La tabla se puede desdoblar en dos, de forma que una parte recoja la presentación del problema, los actores y sus valores, y otra la presentación de la «solución», las opciones y sus consecuencias.

TABLA 6.8
Esquema operativo general AVOC

Actores	**Valores**
Opciones	**Consecuencias**

El *practicante* puede, o no, ser incluido entre los actores, según encontremos heurísticamente más útil verlo como parte de la acción o como un observador externo de ella, al menos en el momento del análisis inicial. Una alternativa particularmente iluminadora es colocar al practicante en una tercera columna de la primera fila (el análisis del problema), definiendo sus valores o deberes respecto de cada uno de los restantes actores (tabla 6.9), lo que permite detectar las tensiones y conflictos entre los distintos valores o deberes a que el practicante está sujeto y las funciones que debe asumir. Esa variante del esquema es ilustrada en los casos A y B que se proponen a continuación.

TABLA 6.9
Variante del esquema AVOC: planteamiento del problema

Actores	Valores de los actores	Valores del practicante (hacia los actores)

La observación de las columnas del esquema permite detectar las convergencias y divergencias de valores y consecuencias en cada opción. Las *convergencias* indicarán que el entramado social (familia, institución o comunidad) funciona como una globalidad más o menos *unitaria* en la que se puede trabajar con todos los actores, con resultados potenciados (siempre que usemos las técnicas adecuadas, claro es) por la convergencia valorativa. Las *divergencias* entre valores y entre consecuencias de cada opción señalarán, en cambio, núcleos de dificultad y *conflicto* ético y, quizá, estratégico.

Podremos también tener dificultades para identificar los actores, sus valores, las opciones existentes o las consecuencias previsibles de cada opción; esas dificultades señalarán las áreas de *anomia* o incertidumbre que deben ser aclaradas «empíricamente» (recogiendo los datos subjetivos, objetivos o interactivos en el proceso de evaluación previo a la actuación) para poder realizar un análisis y planteamiento de soluciones realista. Si, por ejemplo, tenemos dudas sobre los valores de algún actor clave, convendrá averiguarlos o confirmar las hipótesis que tengamos al respecto, viendo cómo ha actuado en el pasado o cuáles son los énfasis valorativos subyacentes a las interacciones o a sus declaraciones habladas o escritas.

Dada la relativa complejidad social y moral de las situaciones y casos psicosociales, habríamos de buscar un *equilibrio* en el *número* de elementos (actores y valores; opciones y consecuencias) que tomamos en consideración. Si por limitar ese número omitimos algún actor relevante (o alguno de los valores básicos), tendremos un déficit importante para la comprensión de la situación y la motivación de los actores involucrados. Pero, por otro lado, cuantos más actores y valores incluyamos, mayor complejidad analítica adquirirá el entramado (convergencias, divergencias y relaciones de actores y valores) y más difícil será sacar conclusiones útiles. Lo mismo sucede con las opciones y sus consecuencias: aunque no debemos omitir opciones realizables, la multiplicación de alternativas puede producir un cuadro tan complicado de consecuencias que supere nuestra capacidad de síntesis y de sacar conclusiones sobre cuál es la opción más deseable. Un correctivo útil consiste en introducir la *viabilidad* de las opciones, de forma que, aunque inicialmente consideremos un gran número de alternativas, finalmente seleccionemos sólo aquellas que, con los medios y en el contexto dado, podamos realizar.

¿Cuál será entonces la conducta éticamente correcta o, al menos, la mejor opción? La respuesta teórica es fácil: aquella que, *teniendo en cuenta el mérito moral de los valores en juego* (incluidos los valores deontológicos del practicante), *maximice las consecuencias positivas* para el conjunto de actores y *minimice las negativas*. Estamos así teniendo en cuenta tanto los valores implicados como las consecuencias

de las acciones, cuya evaluación es cualificada (como la «importancia» dada a los actores) por esos valores y no sólo por una mera cuestión de amplitud o cantidad (cuanto más, mejor) de sujetos «abarcados» por las consecuencias benéficas.

Así, las consecuencias negativas para un grupo social más vulnerable (parados, pacientes psiquiátricos, mujeres maltratadas, inmigrantes, etc.) tendrán más peso que las consecuencias para otro grupo, incluso más numeroso, si damos prioridad al valor *justicia* (incluyendo el mínimo vital) en el análisis. Esto, a su vez, hará a esos grupos vulnerables más importantes moralmente que otros grupos, quizá mayoritarios o más significativos (clases medias, industriales y comerciantes, etc.) desde el punto de vista del papel que tienen en la toma de decisiones o por su contribución productiva al sistema. La valoración sería, en cambio, diferente si primamos la *eficacia* o productividad del sistema social sobre la justicia distributiva de los bienes generados, y se hará un poco más compleja si —en vista de que cuantos más bienes se produzcan más habrá para repartir— tratamos de *compatibilizar* los dos valores (justicia y eficacia) fijando, por ejemplo, un «suelo» de mínimos (justicia sustantiva) como criterio «intocable» de base, aun cuando la aportación de ese mínimo para todos perjudique la productividad global del sistema (que, de primar la eficacia, exigiría dar más al que más produce, *no* al más necesitado).

En la vida real habrá situaciones de especial dificultad ética. Por ejemplo, cuando no hay *ninguna* opción integralmente benéfica y hay que elegir entre dos opciones más o menos malignas (el «mal menor»), o cuando el cuadro es tan ambiguo o complejo que o no percibimos nítidamente las opciones reales o no podemos elegir una como mejor que las otras. A veces las opciones pueden estar claras, pero carecemos de los medios para llevarlas a cabo; en otras ocasiones el practicante (o los actores) carecerán de las aptitudes personales o las condiciones sociales para poder elegir, e incluso otras veces los actores se niegan a sí mismos las opciones más meritorias (así, vivir sin dependencias psicológicas) porque son las que más esfuerzo requieren. Recordemos finalmente que el proceso expuesto (cualquier proceso) ni genera mecánicamente las soluciones ni exime al practicante del trabajo moral de juzgar, elegir y responsabilizarse de lo decidido y realizado; habría, eso sí, de facilitar el abordaje y solución de las dudas y problemas éticos, al ir iluminando esas dudas y problemas desde los ingredientes éticos analítica y resolutivamente básicos.

6. CASUÍSTICA: PRESENTACIÓN Y SOLUCIÓN DE CASOS

La discusión de casos es una importante fuente de aprendizaje moral práctico. Es la forma preferida del aprendizaje ético inductivo, hasta el punto de que Beauchamp y Childress (1999) lo consideran como una de las teorías éticas en la bioética. Pero puede ser también usado como campo de pruebas de la aplicación deductiva de principios (cuyos problemas revelará enseguida) y, desde luego, de lo provechoso (o problemático) que puede resultar la interacción personal y la discusión grupal en el planteamiento y solución de los problemas éticos. Este capítulo ha incluido alguna ilustración de ciertos procesos (como el de Lippitt). He ilustrado más extensamente la

aplicación del esquema AVOC en dos publicaciones anteriores. El primer caso (Sánchez Vidal, 2002) cuestionaba la responsabilidad del practicante por los efectos secundarios negativos de un trabajo grupal en un hospital; el segundo (Sánchez Vidal, 2007) giraba en torno a la veracidad, examinando la responsabilidad que un metodólogo pudiera tener en el uso fraudulento de una información poblacional por parte de una institución pública que lo había contratado para realizar una evaluación.

Presento aquí sendos casos adicionales. Han sido escogidos por su valor ilustrativo de la metodología AVOC en el terreno psicosocial; también por mostrar la clara implicación de valores morales sociales (como la responsabilidad social y la vulnerabilidad colectiva) junto a los principios y reglas típicamente deontológicas, como la autonomía, el consentimiento informado y la confianza del cliente, y las tensiones (muy propias de la ética psicosocial) entre ambos juegos de valores y principios en situaciones micro y macrosociales.

Quizá no es del todo azaroso que ambos impliquen al sistema judicial, cuyos mandatos encarnan una de las formas más extremas de exigir la responsabilidad al profesional por parte de la sociedad. Las actuaciones judicialmente mandadas figuran, por otro lado, entre las más difíciles —desde el punto de vista técnico pero también moral— del espectro psicosocial. Estoy así incumpliendo —*mea culpa*— el principio de *gradualidad* aconsejable en el trabajo de casos: empezar por los más sencillos e ir progresando en *dificultad* y complejidad, a la vez que se van variando los *temas* y asuntos encarados (principio de la *diversidad*). Más adelante ofrezco, en todo caso, una lista de casos, situaciones y cuestiones que pueden complementar los sesgos y limitaciones de los dos casos aquí discutidos y cuya solución corresponde al lector.

7. CASO A. MANDATO JUDICIAL, AUTONOMÍA PERSONAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: UN DIFÍCIL DILEMA

El caso. Un juez ordena a unos jóvenes delincuentes adictos a las drogas, que cumplen penas de prisión por delitos contra la propiedad (robos) y contra las personas (agresiones y atracos), participar en un grupo de tratamiento que debe garantizar (junto a la desintoxicación física y los distintos programas socioculturales de la cárcel) la superación de la dependencia a las drogas y la recuperación psicológica que abran la puerta a su posterior rehabilitación social. Usted es el/la psicoterapeuta de la prisión encargado (junto a un colega de apoyo) de conducir el grupo. ¿Qué debe hacer? ¿Aceptará el tratamiento judicialmente mandado, cuyo progreso condiciona la concesión de ciertos beneficios penitenciarios?

Sigo el hilo del proceso AVOC para plantear el problema y las opciones de actuación.

7.1. Planteamiento del problema: actores y valores

He reducido al mínimo el número de actores implicados, excluyendo al juez —incluido en cambio en el próximo caso—, en la medida en que en este lo veo solo

como representante de la sociedad en el ámbito penal. Limito también los valores a los más básicos, para examinar las relaciones y conflictos esenciales entre ellos (tabla 6.10).

TABLA 6.10
Planteamiento del problema caso A: Actores y valores

Actores	Valores de los actores	Valores/deberes de practicante (hacia actores)
Presos adictos	Autonomía { 1) decisoria. 2) vital (sustantiva). (Desarrollo humano-reintegración social).	Consentimiento libre e informado (autonomía decisoria; beneficencia del cliente).
Sociedad	Seguridad.	Responsabilidad social (contribuir a seguridad colectiva reduciendo peligrosidad presos; beneficencia social).

El valor central de los *presos* es la autonomía; el de la sociedad, la seguridad amenazada por los delitos contra las personas (y sus propiedades) cometidos por los adictos. La actuación ordenada por el juez afecta a la *autonomía* de dos formas. Primero, a la capacidad de decidir si quieren participar (o no) en el trabajo grupal dando su consentimiento voluntario e informado (autonomía *decisoria*, 1, legalmente negada por el juez en nombre de la sociedad y para proteger la seguridad de esta porque han dañado a las personas y a sus propiedades) (protección del orden social). Segundo, la autonomía *vital o sustantiva* (autonomía 2), que permitiría a los presos (mediante el tratamiento exitoso) liberarse de la dependencia a las drogas convirtiéndose en personas que toman sus propias decisiones y gobiernan sus vidas.

Habitualmente (capítulo 3) autonomía decisoria y autonomía vital están asociadas: la persona debería llegar a ser autónoma tomando libremente sus propias decisiones. Por eso es tan importante obtener el consentimiento libre e informado en el trabajo profesional: es la garantía de la autonomía decisoria en nuestro ámbito de actuación; el camino (o medio) procesal para conseguir la meta última de la autonomía vital (o, en términos más amplios, el desarrollo humano cimentado sobre la vinculación interpersonal que excluya la dependencia indebida de los otros). En este caso existe, sin embargo, un claro *conflicto* (1, intravalorativo): al depender de las drogas, los adictos se están *negando a sí mismos* la autonomía vital (y la posibilidad de desarrollo personal e integración social) que quizá reclamen al profesional para decidir ser, o no, parte del grupo terapéutico.

No deja de ser extraño que una persona dependiente de una sustancia reclame autonomía decisoria, salvo si es *para* acabar con la dependencia que mutila su autonomía vital. El reconocimiento de la casi-imposibilidad práctica de que los adictos superen por sí solos su dependencia debería en buena lógica llevarle a renunciar a la autonomía decisoria inicial para ponerse en manos de un profesional competente que les ayude. En condiciones normales esa es una decisión que pertenece integralmente a la persona adicta —idealmente aconsejada por un experto

competente y responsable—. La clave diferencial de este caso es que el daño infligido a otros pone la autonomía para tomar esa decisión en entredicho, con lo que la sociedad traslada al profesional, a través del juez, la responsabilidad de hacerse cargo temporalmente de la autonomía decisoria de la persona.

La autonomía decisoria estará también en contradicción (conflicto 2) con la autonomía vital sólo en aquellas personas que no quieran formar parte del grupo; no lo estará, en cambio, en aquellas (que uno esperaría fueran mayoría) que, conscientes de la práctica imposibilidad de autoliberación mencionada, decidan *renunciar* a la autonomía decisoria inicial en aras de la autonomía vital final (un agudo conflicto medios-fines, presente en todas las adicciones, confinamientos involuntarios y otras medidas coercitivas).

La *seguridad* —amenazada por las agresiones y daños ocasionados por los adictos — es el valor dominante, no sólo en las víctimas reales del pasado, sino, ojo, en el conjunto de la *sociedad*, cuyos miembros pueden ser víctimas en el futuro. Esa es la causa de la desazón real de la sociedad: el temor de que los delincuentes que ahora están en prisión, al salir (un día u otro saldrán) puedan reincidir en la conducta agresiva y violenta. Pero la sociedad *debería* estar igualmente interesada en que al salir los presos estén rehabilitados (como delincuentes y como personas), apoyando por todos los medios (como hace el juez) las terapias apropiadas en vez de insistir en el castigo y el mantenimiento del encierro a toda costa.

El *practicante* (tercera columna del cuadro) está «pillado» entre los deberes personales hacia los presos (destinatarios directos de la acción) y su responsabilidad hacia la sociedad. Asegurar el consentimiento voluntario debería fortalecer la autonomía vital (facilitando el «desenganche» de las drogas), que es la principal beneficencia del tratamiento (asumiendo que la autonomía vital ampliada al desarrollo humano habría de abarcar también la capacidad de relacionarse armónicamente con otros y de encontrar y mantener un trabajo que le permita ganarse la vida sin dañar a otros). El *dilema* del practicante deriva directamente del segundo conflicto descrito: para alcanzar la autonomía vital ha de negar (a algunos adictos al menos) la autonomía decisoria por un mandato externo (del juez, para salvaguardar la seguridad de la sociedad).

7.2. Planteamiento de la solución: opciones, consecuencias y factores moduladores

Las opciones iniciales del practicante (tabla 6.11) son claras y excluyentes: 1) realizar el tratamiento acatando la exigencia del juez; 2) negarse a realizarlo, al no garantizarse el consentimiento voluntario de los presos.

TABLA 6.11
Planteamiento de la solución al caso A: opciones y consecuencias

Opciones	Consecuencias
1. Aceptar realización del tratamiento.	↧ Autonomía 1 (decisoria) de presos. ↥ Autonomía 2 (vital; y desarrollo humano) de presos. ↥ Seguridad de la sociedad.
2. Rechazar realización del tratamiento.	↥ Autonomía 1. ↧ Autonomía 2/desarrollo humano. ↧ Seguridad de la sociedad (a la larga).

La *opción 1* (*aceptar* la realización del tratamiento mandado) tiene en principio consecuencias negativas para la autonomía decisoria de los presos (sólo la de aquellos que no quieran participar), pero positivas (si el tratamiento es efectivo) para la autonomía vital (y el desarrollo humano) de aquellos que consientan voluntariamente participar en el grupo y para la seguridad futura de la sociedad, que (al menos en lo que depende de los presos que consienten ser parte del grupo y se benefician de sus efectos) se verá fortalecida. También para el juez, cuya autoridad —y la vigencia social de la ley— se verá reforzada por la anuencia del practicante.

La *opción 2* (*negarse* a realizar el tratamiento) tendrá las consecuencias inversas para los valores y sujetos implicados. Reforzará, en primer lugar, la autonomía decisoria de los adictos (que nada bueno presagia sobre su voluntad real de prescindir de las drogas), aunque es posible que el grupo sea finalmente realizado por otro profesional menos garantista en lo que respecta a la autonomía decisoria. La opción perjudicaría, en segundo lugar, a la autonomía vital de *todos* los presos (incluida la presumible mayoría que quiere participar en el tratamiento) y la eventual mejora de la seguridad de la comunidad, que se derivaría de la vuelta a ella de unos adictos recuperados psicológicamente y «pacificados» socialmente.

Debemos, sin embargo, tener en cuenta dos factores decisivos para tomar una decisión correcta.

— La *peligrosidad real* de los adictos: la gravedad de los delitos cometidos en términos, sobre todo, del daño infligido a las personas (especialmente a las más vulnerables), que será el mejor predictor del daño (y la peligrosidad) potencial en el futuro.
— La *beneficencia* efectiva del tratamiento grupal tanto para reducir la peligrosidad a corto y medio plazo en un porcentaje razonable de personas (la reincidencia acostumbra a ser alta en las adicciones) como para facilitar la reintegración comunitaria, que será la clave del «éxito» a largo plazo.

Si la peligrosidad real de los adictos es pequeña y la efectividad demostrada por el tratamiento grupal es baja (o no existen programas comunitarios de rehabilitación social), el conflicto moral (y el dilema del profesional) prácticamente se desvanece: ¿por qué prescindir del consentimiento voluntario si no hay daños personales demostrables y, sobre todo, si el programa no aporta una beneficencia tangible a los presos y a la sociedad? Y, además, ¿por qué iba un juez a ordenar un tratamiento de eficacia insignificante?

Pero si la peligrosidad futura (extrapolada del comportamiento pasado) es real y el programa tiene unas tasas de eficacia razonables (para un porcentaje determinado de participantes), los conflictos tienen todo el sentido, y el dilema encarado por el practicante se hace acuciante, puesto que la suspensión de la libertad de participar en un tratamiento psicosocial puede evitar serios daños personales y aportar importantes beneficios a una parte significativa de los adictos y a la comunidad en su conjunto.

7.3. Opción elegida

Asumiendo la segunda hipótesis, uno podría entender que el practicante se decantara por cualquiera de las dos opciones iniciales: aceptar la conducción del grupo o negarse a hacerlo. ¿Hay, en todo caso, alguna opción más matizada que pudiera solventar el dilema del practicante sin violentar frontalmente las distintas normas éticas enfrentadas, o al menos respetando las normas primarias para la mayoría de sujetos y violentando lo menos posible las normas secundarias o que conciernen a la minoría irreductible? ¿Cómo alcanzar en la práctica un compromiso moralmente aceptable entre unas y otras normas? Dada la importancia del consentimiento voluntario en el trabajo profesional, el criterio general podría ser *aproximar* tanto como sea posible *la actuación* a la *obtención del consentimiento libre e informado* de aquellos con quienes vayamos a trabajar, sin perder de vista otros valores y normas concernidos (seguridad poblacional, desarrollo humano de los adictos, cumplimiento de la ley) y asumiendo que el tratamiento tiene una eficacia razonable. ¿Cómo puede actuar el practicante desde esa premisa moral y estratégica?

Debe, en primer lugar, *informar* al grupo de las condiciones del tratamiento y las razones (el daño infligido a personas y bienes sociales) por las que el practicante decide aceptar el mandato judicial y actuar sin consentimiento inicial —algo inusual en la acción profesional—, recabando la colaboración de los presos. Mejor aún sería entrevistarse antes con cada individuo para conocer su postura respecto al tratamiento, tratando de convencerle, explicando las ventajas personales y sociales de participar en él, así como las desventajas (para la persona y el grupo en su conjunto) de no hacerlo. Ese sería el componente informado del consentimiento, que prepara además al practicante para que la reunión inicial del grupo no presente sorpresas y resistencias (derivadas de la falta de información y del ambiente grupal) innecesarias.

Como es probable que haya un porcentaje muy alto de presos que sí consientan (una vez conocidas las condiciones y ventajas de participar), el problema será la minoría irreductible que, estando presentes en el grupo contra su voluntad, pueden sabotearlo haciendo fracasar el trabajo del practicante y el esfuerzo del resto (las *manzanas podridas* que echan a perder el resto) y suprimiendo la beneficencia que la mayoría pudiera obtener de él. Ese es el principal problema estratégico (y de viabilidad moral) del caso. ¿Cómo proceder ante esa posibilidad, teniendo en cuenta que la *presión* del propio *grupo* va a ser —junto a la motivación personal para «desengancharse» de la droga— el motor del cambio perseguido? Hay varias posibilidades.

— El practicante puede —con el apoyo activo de los interesados en el tratamiento — pactar, con los que se oponen a él, su *presencia pasiva* inicial en el grupo sin entorpecer el trabajo de sus compañeros, con la posibilidad de que, al cabo de algunas sesiones, se incorporen activamente al ver el interés y los progresos realizados.
— Disponer de actividades pedagógicas, culturales o sociales *alternativas* (programas culturales, deportes y actividades físicas acompañadas, etc.) paralelas, que, previo acuerdo con el juez y las autoridades carcelarias, permitan mantener a aquellos presos irreductibles fuera del grupo terapéutico, ajustando a la baja los beneficios penitenciarios otorgados. El punto clave (y el argumento a utilizar para convencer al juez y a las autoridades penitenciarias) es que la voluntariedad de la participación en el tratamiento y la motivación para cambiar son la base de su éxito, por lo que la exclusión de unos pocos puede ser la *única* forma de posibilitar que el resto pueda beneficiarse del trabajo profesional y la interacción en el grupo. El consentimiento voluntario e informado no es, en otras palabras, sólo una *exigencia moral*, sino también un *prerrequisito técnico* para el éxito de la actuación.

8. CASO B. FIDELIDAD AL CLIENTE VULNERABLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN PRACTICANTE ATRAPADO

El caso. Un investigador y activista en el área del paro está estudiando en una región su incidencia y efectos psicosociales, con el fin de proponer programas paliativos para el malestar generado y procedimientos para facilitar la búsqueda de trabajo. La región está inmersa en una crisis económica, y algunas organizaciones patronales y sociales han denunciado el cobro fraudulento de subvenciones de desempleo por parte de un sector de parados que mantienen al mismo tiempo trabajos esporádicos no declarados que los deberían inhabilitar legalmente para recibir las ayudas públicas. Ante las denuncias, un juez, sabiendo del estudio en curso (que incluye, entre otros, datos sobre la actividad laboral de los encuestados), exige al investigador la entrega de la documentación de que dispone para depurar las responsabilidades penales que correspondan, notificándole que la negativa a entregarla supone un delito de desacato, penado con una pena de cárcel. ¿Qué debe hacer el investigador?

8.1. El problema: valores, derechos, deberes y brechas de titularidad y legitimidad

He reducido a tres (parados, sociedad y juez) el número de actores considerados. Si incluyera todos los actores y valores relevantes, tendríamos un entramado notablemente complejo y difícil de presentar y de gestionar analítica y resolutivamente en términos de deberes y derechos recíprocos de los distintos actores. El problema es que, al limitar a tres el número de actores (incluyendo al juez, por

motivos de realismo didáctico y de su mayor relevancia resolutiva, pues puede enviar a prisión al investigador), puede suceder que haya valores (deberes o derechos) que no tengan un titular explícito en el cuadro. Así, el *titular* principal del deber de crear trabajo para cumplimentar el *derecho al trabajo* (un valor necesario para armar el entramado ético del caso) es, en una sociedad capitalista de mercado, la *empresa* privada, que no está en el cuadro. Como, por otro lado, el derecho al trabajo está recogido en las constituciones como un derecho social básico (cuyo titular es el poder público), enfrentamos un ejemplo llamativo de brecha entre derechos (garantizados por los poderes y normas públicos) y deberes (efectivamente cumplimentados por el sector privado).

Valores de los *parados* en esta situación son (tabla 6.12) la supervivencia vital (propia y de sus familias si no tienen otra fuente de ingresos), la responsabilidad social (buscar un trabajo con el que contribuir al sostenimiento y desarrollo de la sociedad), la veracidad en la declaración de su situación laboral y el derecho al trabajo (cuyo deber recíproco corresponde, como ya se ha dicho, a las empresas y también a los empleadores públicos). El valor del *juez* es la ley, la justicia penal (a no confundir con la justicia social, que es un valor mucho más amplio y abarcador —capítulo 4— pero menos coercitivo a cargo del conjunto de la sociedad) que por mandato social ha de interpretar y hacer cumplir. Y los valores principales de la *sociedad* en esta coyuntura son la justicia social (proveer un mínimo vital de subsistencia a todos sus miembros, distribuir equitativamente los excedentes materiales y psicosociales generados, auxiliando y potenciando especialmente a los más débiles y vulnerables), la veracidad como derecho a exigir para promover eficazmente el reparto equitativo de los siempre insuficientes recursos económicos (los subsidios al paro) y el deber (junto a las empresas privadas) de estimular la creación de empleos para todos los miembros de la sociedad.

TABLA 6.12
Planteamiento del problema caso B: actores y valores

Actores	Valores de los actores	Valores/deberes de practicante
Parados	• Supervivencia digna. • Responsabilidad social. • Veracidad (deber). • Derecho a trabajar.	• Confidencialidad (confianza). • No maleficencia (compromiso social).
Juez	• La ley (justicia penal).	• Veracidad, facilitar documentación.
Sociedad	• Justicia social (mínimo vital para sobrevivir + equidad distributiva). • Veracidad (derecho). • Deber de facilitar trabajo (estímulo a la actividad pública + la empresa económica).	• Veracidad (ante juez). • Producir conocimiento social útil y aplicable. • Crear y co-realizar programas para paliar problemas (paro) y aumentar el bienestar.

Ya se ve que muchos de los valores detectados están interconectados, conformando derechos y deberes recíprocos a disfrutar y cumplimentar por los distintos actores si la sociedad ha de funcionar como un entramado social y moralmente sostenible. Ya he mencionado el caso del *derecho al trabajo* y el deber de aportarlo, así como la *brecha* existente en la organización social de mercado entre la garantía nominal básica del derecho por parte del Estado y el limitado cumplimiento del deber de aportar trabajo por parte de actores privados (las empresas), en gran medida socialmente irresponsables, al regirse por la lógica de la eficacia y el lucro, no por la de los derechos sociales. La cifra de desempleados refleja esa doble brecha de titularidad (unos asumen el deber y otros tienen los instrumentos ejecutivos para hacerla realidad) y de viabilidad real (se proclaman derechos universales, inalcanzables sin los medios económicos, políticos u otros que quedan fuera de la esfera pública).

Pero, descendiendo a la arena social real, el derecho al trabajo debe ir acompañado del deber de los desempleados de buscarlo y decir la verdad sobre su situación laboral que evite el fraude, y también la percepción de que algunos miembros de la sociedad viven «a costa» del conjunto y no merecen la ayuda que reciben. En el caso de la sociedad, a las garantías de justicia social y protección de los más vulnerables (esencial para sostener la legitimidad del orden social) ha de corresponder la exigencia de veracidad y del uso responsable de los recursos socioeconómicos (como los subsidios a los desempleados).

Los *conflictos de valores y actores* están servidos: la falta de reciprocidad entre deberes y derechos, el distinto grado en que sus titulares los asumen (unos cumplen, otros no) y el hecho de que el cumplimiento de los deberes aquí y ahora está condicionado a unos derechos abstractos, genéricos o retardados en el tiempo (decir la verdad o conformarse a no percibir un subsidio ahora no implica que otros obren de la misma manera o que las promesas de justicia social se materialicen) puede derivar en la *quiebra* más o menos generalizada del «*contrato social*» establecido. Las dudas morales suscitadas por el caso nos acucian. Si el derecho al trabajo no está garantizado, ¿debe persistir la responsabilidad social de los parados?, ¿debe primar el cumplimiento de la ley (económica, el reparto de las ayudas monetarias) sobre la supervivencia y dignidad de los que carecen de los bienes básicos para mantenerse a sí mismos y a sus familias?, ¿debe cumplirse literalmente la ley que castiga a los más débiles o a las clases medias cuando la evasión fiscal y la especulación financiera está tan extendida y queda mayoritariamente impune? Estas son graves cuestiones morales, cuya respuesta decantará necesariamente la selección de la opción correcta («la solución») en una u otra dirección.

En este caso concreto, el *investigador* (que es sólo una parte del entramado actoral y moral global) está atrapado entre dos juegos de valores. El primero aglutina los deberes de confidencialidad a los desempleados (derivado del valor de confianza, que adquiere aquí especial relevancia por la vulnerabilidad de los parados y por la centralidad de su relación con el investigador), no maleficencia (derivada de la supresión del subsidio ilegalmente cobrado al revelarse las identidades de los

defraudadores) y el compromiso social con los más vulnerables. El segundo abarca la responsabilidad hacia la sociedad (concretada en la veracidad hacia el juez), el cumplimiento de la ley (de contenido distributivo) y el autocuidado legítimo que aconseja evitar la cárcel al ejercer como profesional. Esos deberes coyunturales deben ser, además, compatibles con la producción de conocimiento teóricamente relevante y socialmente aplicable que ayude a paliar los problemas psicosociales y a mejorar el bienestar social (sobre todo de los más vulnerables).

8.2. Planteando la solución: opciones, consecuencias y factores moduladores

El perfil de las dos opciones excluyentes —facilitar los datos al juez o negarse a hacerlo— es tan claro como sus eventuales consecuencias (tabla 6.13) inmediatas, aunque las implicaciones más amplias o a largo plazo (entre paréntesis) resultan mucho más ambiguas y discutibles.

TABLA 6.13
Planteamiento de la solución B: Opciones y consecuencias

Opciones del practicante		Consecuencias
Entrega datos al juez	Negativas (—) Positivas (++)	• Traiciona confianza de los parados (rompe confidencialidad). • Permite daño a parados (legalmente legítimo). • Daña reputación profesional propia. • Perjudica justicia social. • Cumple la ley (responsabilidad legal). • Evita la cárcel.
Se niega a entregar datos	Negativas (—) Positivas (++)	• Va a la cárcel. • Incumple la ley. • Ampara fraude. • Contribuye a la deslegitimación social del subsidio de paro. • Mantiene confianza/fidelidad al grupo vulnerable. • Mejora reputación profesional. • Evita maleficencia indirecta a parados. • Fortalece la justicia social a costa de la justicia penal.

Si el investigador *entrega los datos* al juez evitará la cárcel (autocuidado) y fortalecerá la confianza de la sociedad en la ley (en *esta* ley, que puede no ser la más justa o coherente con la justicia social global). Perderá, sin embargo, la confianza de los desempleados (u otros sectores desafortunados con los que pudiera colaborar), permitirá indirectamente un daño (la retirada de la subvención y quizá una sanción económica o penal) a un sector de parados que defraudaba, y su reputación profesional sufrirá un quebranto (los más débiles le considerarán «un chivato», mientras que otros sectores pueden aprobar su decisión), sin que esté claro que su actuación contribuya a mejorar la justicia social global, por la diferencia de trato legal

de los sectores más vulnerables (justicia procesal) y por el desigual reparto de las cargas fiscales y los beneficios económicos (asociados al gran fraude fiscal legal o ilegal) del capital y las grandes empresas respecto de los trabajadores y, sobre todo, los parados.

Los efectos previsibles de *no entregar los datos* serán generalmente inversos. El practicante puede ir a prisión (aunque sea temporal y testimonialmente), pero su reputación profesional y la confianza y estimación de los parados y otros sectores excluidos se verá notablemente reforzada. Incumplirá la literalidad de la ley (desobedece al juez) y, salvo que se desmarque explícitamente del fraude que algunos parados cometen, su negativa a entregar los datos puede ser interpretada como una forma de amparar indirectamente el fraude económico (no lo es realmente) e incluso de perjudicar la justicia social (lo que tampoco está claro, porque la ley puede penalizar más al pequeño fraude que a la gran evasión y la «ingeniería financiera» de las corporaciones). Un riesgo más claro es que el mutismo del practicante contribuya a desacreditar a medio plazo el subsidio de paro (ante la sensación de que existe pero no es eficaz) contribuyendo involuntariamente a su supresión o reducción futura.

Factores moduladores. Tres factores psicosociales y situacionales serán decisivos a la hora de elegir la opción moralmente correcta:

1. ¿Tiene el juez otros *medios* para *obtener la información* reclamada?
2. ¿Es la *cuantía* del *subsidio* a los parados suficiente para mantener económicamente al parado medio (y a su familia)?
3. ¿*Existen* realmente *empleos* dignos en el mercado regional de trabajo?

La respuesta a estas preguntas debería orientar la elección de una opción y matizar significativamente su sentido y significado.

Si el juez tiene otros medios legales para obtener los datos requeridos (cruce de datos oficiales, estadísticas laborales, etc.), la legitimidad moral del investigador para no facilitarlos es reforzada y el dilema se diluye hasta un punto, pero si no dispone de otros medios el dilema moral se revela en toda su crudeza. Si, por otro lado, no hay trabajo suficiente en la zona y además los subsidios no dan para que viva un parado y su familia, la cuestión no es si los parados pueden obviar una ley económica, trabajando «en negro», sino si deben hacerlo para garantizar su supervivencia personal y familiar en un orden socioeconómico (del color y carácter que sea) incapaz de generar recursos para sostener a sus miembros más vulnerables. Si, por el contrario, existe trabajo digno y la cuantía de los subsidios es razonable, el fraude *no tiene justificación* moral o social alguna, suponiendo una afrenta diferencial respecto a los parados que no defraudan, debiendo la minoría defraudadora asumir su responsabilidad ante la sociedad y la ley.

Hago explícito el razonamiento moral utilizado: estoy asumiendo que el *mínimo vital* (la justicia «de mínimos») que garantiza la supervivencia humana debe *primar* social y moralmente *sobre* la equidad general en el reparto de los excedentes materiales y psicosociales (*justicia distributiva*) y sobre los procedimientos legales

que la hacen efectiva en una comunidad o sociedad concreta. Por eso el fraude estaría moralmente justificado en el primer supuesto (no hay trabajo, subsidio inexistente o insuficiente), pero no en el segundo (hay trabajo y subsidios dignos).

8.3. Opción elegida y realización

¿Y el *investigador,* qué debe hacer? Aunque los argumentos precedentes clarifiquen el tema del fraude y la conducta de los parados y la sociedad, aportando contundentes razones sociomorales, no responden directamente las dudas del practicante ni le sacan de su agónico dilema moral: revelar o no al juez los datos sobre un grupo vulnerable. La discusión de este caso suele provocar encendidos debates entre los partidarios de una u otra opción. Ofrezco algunas orientaciones generales y puntos de vista personales para elegir.

Aunque se puede comprender psicológicamente el miedo del investigador y su deseo de evitar la cárcel (que pueden ser racionalizados como el deber de obediencia al juez y a la ley ante un caso de fraude), en mi opinión el investigador *no debe* traicionar la confianza de los parados y otros grupos vulnerables con los que trabaja; debe, al contrario, negarse a *revelar* de una u otra forma la identidad de los sujetos encuestados, aun cuando estén cometiendo un fraude legal, por las tres razones alegadas:

1. La supervivencia (justicia de mínimos) debe primar sobre la justicia distributiva y la ley concreta de contenido económico que la hace efectiva.
2. Los afectados son el grupo más débil y vulnerable, no un grupo adinerado y poderoso (lo que plantearía un caso diferente).
3. La confianza depositada en el profesional para entregar ciertos datos personales es un bien psicosocial precioso (aunque no absoluto).

¿Significa eso que el investigador legitima el fraude y la violación de la ley por parte de los que defraudan? De ninguna manera; y debe dejarlo claro *desmarcándose* de la *conducta* de *fraude* (si existen otros medios o cauces de supervivencia), diferenciando la negativa a facilitar datos confidenciales de clientes vulnerables de la aprobación del comportamiento de sus titulares (en este tipo de delitos; el argumento no vale para delitos que impliquen daños personales, en los que la discreción profesional debe ser sacrificada). El problema es, como he señalado, que el silencio del investigador contribuya al *descrédito* del *subsidio* a los parados y ponga en peligro su continuidad futura. La evitación de ese riesgo exige que, sea cual sea su opción ante la petición del juez, el investigador (y los propios parados que no defraudan) haga conscientes a los que defraudan del gran riesgo existente a largo plazo, sobre todo en épocas de crisis económica.

¿Se puede exigir al practicante que esté dispuesto a ir a prisión por obrar en la forma en que considere moralmente correcta ante un dilema que pone en juego valores profesional o socialmente relevantes? Esa es una pregunta que deben contestar globalmente las profesiones implicadas y singularmente cada practicante,

considerando en la situación concreta las alternativas existentes. Creo que cualquier practicante (cualquier persona, de hecho) debe estar dispuesta a asumir ciertos riesgos, que entrarían dentro de lo razonable y de lo que se le puede exigir normativamente en nombre del servicio que presta a la sociedad y de la causa que defiende. No creo, en cambio, que el *comportamiento heroico* deba ser una exigencia generalizada, aunque sí una expectativa minoritaria de quienes «teniendo madera» de héroes opten por actuar así o actúen heroicamente sin realizar ninguna opción consciente. El héroe o la conducta heroica cumplen el papel de espejos morales en que se miran (pueden mirarse) permanentemente el resto de personas o profesionales.

La negativa a aceptar riesgos extremos es también comprensible y, en la medida en que ponen en peligro la integridad física o psicológica del practicante, fueron reconocidos como autobeneficio legítimo. Pero marcan, también, los *límites* tanto de la *beneficencia* que los clientes deben esperar como de la confianza personal y profesional que aquéllos pueden depositar en los profesionales. Los clientes deben, en todo caso, ser conscientes de —o informados sobre— los límites humanos y técnicos de la acción profesional, y así debería ser reconocido en el contrato; no creo que ir a la cárcel o sufrir penurias extremas deba ser una expectativa generalizada de los clientes de la APS. Aunque la excepcionalidad heroica (asumida como optativa) sea un faro que ilumina moralmente un campo, no podemos esperar que cualquier practicante la asuma literalmente, a menos que tenga la disposición y fortaleza psicológica y moral necesaria. Al fin y al cabo un buen número de periodistas han ido a la cárcel por no revelar sus fuentes, y no pocos trabajadores psicológicos o sociales se juegan la vida trabajando a diario en contextos sociales altamente inflamables y peligrosos o con colectivos amenazados por caciques locales, policía corrupta, mafias o grupos armados.

Si el investigador decide (como sucedió en realidad) no entregar los datos, es bastante probable que su estancia en la cárcel sea sólo temporal (no es infrecuente que los jueces utilicen la amenaza de la cárcel para obtener confesiones y pruebas). Presumiblemente se generaría un movimiento social de apoyo (probablemente impulsado por los parados y organizaciones sindicales y sociales afines) que convertiría al investigador en un «mártir» de su causa social, ayudando todo ello, con la complicidad de los medios de comunicación y redes sociales, a denunciar la lacra del paro (y sus efectos psicosociales) y a alentar el debate social sobre el gran fraude oculto de otros grupos sociales y los límites de la protección social a los más débiles. Constituiría, de otro modo, una buena oportunidad para plantear cambios sociales más profundos y que fueran más allá de la solución del caso presentado.

Una opción correcta. Podemos resumir la opción aquí preconizada como correcta en cuatro puntos (tabla 6.14).

TABLA 6.14
Una propuesta de solución ética al caso B

1. *Negativa* a *entregar los datos* confidenciales al juez para no traicionar la confianza que el grupo

vulnerable ha depositado en nosotros ni dañar a una parte de él.

2. *Desmarque del fraude* a la ley cometido por el sector de parados que cobra subsidios y trabaja en negro.

3. *Denuncia* (si procede) de:

   a) La *insuficiencia del subsidio* a los parados.
   b) La *dificultad de conseguir trabajo* y la *ineficacia de los servicios de ayuda* para incentivar la oferta de trabajo y su búsqueda.
   c) La injusticia de las políticas económicas que favorecen a los ricos y a las rentas del capital y de una legislación que acaba perjudicando a los pobres y más vulnerables y beneficiando a los ricos.

4. La *implicación* —opcional— del investigador con otros *grupos y fuerzas interesadas en el cambio* de los sistemas que incentivan la búsqueda de trabajo, las políticas sociales de protección a los parados y otros grupos golpeados, y las políticas económicas favorables a los más ricos.

Si, como acertadamente sugiere Lippitt, abordamos la *realización efectiva* de la opción aquí elegida, debemos diferenciar dos niveles (o momentos): *a*) la acción inmediata del investigador y sus efectos a corto plazo, y *b*) la actuación activista en convergencia con otros grupos y fuerzas sociales en el medio y largo plazo. La acción *inmediata* concierne la decisión de entregar o no los datos y las consecuencias derivadas de ello (puntos 1, 2 y parte del 3 en la opción elegida); implica la *obligación* moral por parte del practicante de *elegir* una de las dos opciones (entregar los datos o denegar la entrega) y *afrontar* (presumiblemente con el apoyo del entorno profesional y social inmediato) las *consecuencias* de la opción elegida (como entrar a la cárcel o enfrentar el descrédito profesional entre los parados). La actuación partidista cooperativa sugerida en el segundo momento no es, en cambio, obligatoria sino plenamente *opcional:* el practicante puede elegir implicarse en esa acción o no, con independencia de la alternativa (facilitar o no los datos al juez) elegida en el momento inicial.

Una vez aclarado ese punto, si el practicante decide embarcarse en esa acción colectiva para generar los cambios sociales y legislativos apuntados (punto 4 y parte del 3) en el medio plazo, habrá de ser *consciente* de las dificultades implicadas en ella y valorar su disposición y capacidades al respecto, pues esa opción plantea cuestiones complejas de titularidad (quién debe hacer qué; qué papel corresponde al investigador en el esfuerzo colectivo), de viabilidad estratégica (¿se dispone de la motivación y los medios para realizar la acción elegida?) y desfases temporales entre la presión inmediata de los problemas presentes asociados (paro) y los cambios sociales y legislativos que sólo se materializarán (si lo hacen) en el largo plazo.

El investigador deberá considerar si, más allá de llevar a cabo la opción elegida de entregar o no los datos (y en su caso ir a la cárcel), está dispuesto a «*ser usado*» (por lo menos ser el centro de una campaña) social y mediáticamente para poner en evidencia las injusticias y fallos del sistema, desviándose, quizá, de su tarea habitual y metiéndose de lleno en la contienda política (aunque sea a nivel local). Esa es, repito, una opción *voluntaria*, potencialmente fructífera, pero psicológicamente exigente: hay que «tener madera» de líder, vocación sociopolítica y aguante para una exposición prolongadas a los medios de masas y las redes internáuticas. El

practicante debería, en otras palabras, *encontrarse* razonablemente *a gusto consigo mismo* realizando la opción moralmente recomendada. Si no es así —como sucede con tantas recomendaciones ajenas— creo que el sujeto —contradiciendo de nuevo la lógica imperativa kantiana— debe reconsiderar la opción recomendada o los términos de su realización concreta, ajustándolos a la singularidad de su conciencia moral y a sus capacidades y medios psicológicos de actuación.

Los cambios en la legislación y los sistemas de protección social son un asunto complejo que competen a toda la comunidad (la sociedad a nivel general), exigiendo, al menos:

— La *voluntad* de la *sociedad* de destinar parte de los impuestos a mantener sistemas de protección social para los más frágiles (considerando esos sistemas como parte integral de la justicia social), crecientemente erosionada por la marea ideológica meritocrática y neopopulista que —sobre todo en tiempos de crisis— considera la redistribución y gasto social un «despilfarro» o un sistema de ayuda «a los que no quieren trabajar».
— Los *medios económicos* que materialicen las ayudas sociales, sujetos a una endiablada y contradictoria dinámica en épocas de crisis económica, cuando, resultando más necesarios que nunca para un mayor número de personas, son más escasos por la caída de la actividad económica.
— Un laborioso proceso de *organización social y presión política* para promover los cambios políticos y legales, el cual exige tiempo, dedicación y vocación política.

9. CASOS-PROBLEMA

Ofrezco para finalizar catorce situaciones y casos de problemática ética, variados en términos de nivel y temática psicosocial y ubicación social. Están entresacados de la vida real, la literatura sobre ética o problemas psicosociales, los medios de masas o los casos presentados en seminarios docentes. Los casos ni tienen por qué ser literalmente reales ni pretenden representar el conjunto de problemas éticos psicosociales o a los de algún área particular. Los acompaño con algunas preguntas pertinentes en cada uno.

C. Esterilización y riesgo de embarazo. Unos padres preocupados por el futuro de una hija adolescente con síndrome de Down que empieza a tener escarceos con los chicos y temen que pueda quedar embarazada piden asesoramiento sobre la posibilidad de esterilizarla. ¿Cuál será su consejo?

D. Mejoría psicológica y responsabilidad familiar: un doble dilema. Entre los pacientes que debe tratar un psicoterapeuta en un hospital público al que acaba de incorporarse figura un hombre (H) de mediana edad y clase social media-baja, diagnosticado como *borderline* (trastorno fronterizo que combina problemas de

personalidad y tendencias psicóticas), por lo que le ha sido reconocida una incapacidad psicológica que le exime temporalmente de pagar la pensión compensatoria a su exmujer. A cambio, el juez le ordena seguir un tratamiento terapéutico para recobrar el buen funcionamiento psicológico y buscar un trabajo estable, lo cual debería permitirle hacerse cargo de su vida y de las responsabilidades hacia su exmujer (e hijos). Al cabo de unos meses de tratamiento, y aunque la relación profesional es cooperativa y H no presenta síntomas visibles (está medicado), no se aprecian progresos terapéuticos significativos. El juez cita al terapeuta para valorar la marcha del tratamiento de cara a tomar decisiones sobre la continuidad, o no, de la exención de las responsabilidades sociales y económicas de H. Consultado el jefe de servicio, este deja al terapeuta libertad de acción, pero le aconseja no ir a declarar, puesto que el juez ya tiene los informes pertinentes, y si se atendieran todas las citaciones judiciales y de las compañías aseguradoras los psicólogos del servicio no tendrían apenas tiempo de atender a sus pacientes.

¿Qué debería hacer el psicoterapeuta? ¿Debería atender la citación del juez? En caso de que lo haga, ¿cuál será el sentido de su declaración, vista la falta de progreso real de la psicoterapia en una patología crónica y difícilmente modificable como la implicada? El terapeuta simpatiza con H, pero es también consciente de las responsabilidades de aquel y se da perfecta cuenta del dilema de H: si está verdaderamente motivado para superar (con ayuda externa) su pasividad e impotencia, logrando un cierto crecimiento personal, deberá asumir sus responsabilidades vitales y sociales; si, en cambio, continúa el actual estado de cosas, eludirá esas responsabilidades pero al precio de estancarse en su estado de patología y pasividad vital. El terapeuta es también consciente de su propio dilema: si reconoce que la terapia no va a funcionar con esta patología y esta persona, estará admitiendo su propio fracaso profesional (y personal) y desacreditará ante el juez (y la sociedad) el recurso a la psicoterapia como medio de rehabilitación social y mejora psicológica (al menos en este tipo de casos); pero si continúa con el tratamiento de apoyo estará incurriendo en un cierto fraude social (¿o no?). ¿Qué debería hacer?

E. Negligencia familiar o tutela pública. El hijo de una familia inmigrante en una zona rural tiene problemas de absentismo escolar, dificultades de integración y un cierto retraso en el aprendizaje. Al plantear la junta escolar el problema, la policía local informa de varias denuncias de los vecinos por negligencia, ausencia y abandono materno y paterno e incluso malos tratos. Sabedor de eso, usted es encargado por el director de la escuela de emitir un informe que será decisivo para que los servicios sociales tomen medidas, que pueden incluir la retirada de la custodia del niño y su ingreso en un centro tutelado. Urge tomar una decisión, pero el consejo escolar está dividido sobre si centrar el informe en los datos y el comportamiento escolar (confirmados) o incluir también los indicios (no confirmados) aportados por la policía, que pueden ser claves para retirar o no la custodia. ¿Qué hacer? ¿Qué incluir en el informe?

F. Educación sexual y resistencia parental. Un grupo de padres y madres de un

centro de enseñanza media abordan a los profesionales de un gabinete educativo de una ciudad mediana para pedirle que les ayuden a poner en marcha un programa de educación sexual en una escuela en la que, dicen, se han registrado incidentes de acoso a las chicas y algunos embarazos no deseados que alarman a las familias. Aunque la dirección de la escuela está preocupada por el tema, no ha hecho nada al respecto ni existe un programa de educación sexual, porque un sector de padres y madres, aunque les inquietan los incidentes, están en contra de que se enseñe educación sexual en la escuela. ¿Qué deben hacer los profesionales externos? ¿Cómo deben proceder respecto a la demanda de los padres partidarios, la oposición de los contrarios y el deseo de la escuela de colaborar? ¿Deben actuar (con la escuela o externamente) o, visto el embrollo, es mejor abstenerse?

G. Los problemas de la juventud desesperanzada. Estalla un conflicto en un instituto mixto de un barrio marginal, donde los problemas (absentismo, fracaso escolar elevado, enfrentamientos, etc.) son frecuentes. Parece que ha habido una pelea masiva entre dos grupos ligada a rivalidades personales, temas de drogas y «control» de espacios del barrio donde los grupos se reúnen. Como consecuencia de la pelea y la rebeldía ante los profesores que intentaron desactivar el conflicto, se expulsa temporalmente a una decena de estudiantes. Los profesores del instituto se quejan de la indisciplina y mal comportamiento de un pequeño grupo, que dificulta la enseñanza y monopoliza su atención; también lamentan la falta de colaboración de muchos padres para abordar problemas. La situación del barrio es delicada: sufre un declive económico, derivado de la desindustrialización de la década de los ochenta y la desaparición de las ocupaciones tradicionales, la marcha de los más jóvenes, una sensación de abandono por parte del ayuntamiento y un clima de pesimismo y falta de ilusión en el que florece el consumo de drogas, la delincuencia y los conflictos sociales.

El centro cívico ha ofrecido sus locales a los jóvenes para reunirse, así como realizar algunos programas y talleres para ellos, pero apenas han encontrado respuesta. Un grupo de padres y madres, alarmados por la conflictividad del instituto, habla con el director para solicitar ayuda al equipo psicosocial del centro cívico. ¿Cómo responder, en vista de que los jóvenes no han hecho demanda alguna y no han participado en las actividades «oficialmente» patrocinadas por el centro y el barrio? ¿Qué debería hacer el equipo o recomendar que la escuela y los padres hagan?

H. Una difícil intermediación entre víctimas, comunidad y gobierno. Un grupo heterogéneo de migrantes (gitanos europeos, africanos, europeos del Este y personas marginales venidas de otras ciudades y comunidades) han ocupado una antigua fábrica, en la periferia de una gran ciudad industrial, donde malviven recogiendo chatarra, pidiendo limosna o con empleos temporales miserables, durmiendo en colchones, haciendo fuego para protegerse del frío y conectándose directamente a la red eléctrica. Los vecinos, quejosos de la suciedad, el fuego y los robos en algunas casas y obras de la zona (que achacan a los «ocupas»), se reúnen con el concejal del distrito exigiendo al ayuntamiento soluciones a los problemas. Un grupo inversor,

que ha comprado el terreno, quiere derribar la fábrica para construir un bloque de casas y en el día señalado se presentan las máquinas, pero los inmigrantes —que no han sido avisados— se niegan a desalojar el solar y, apoyados por un grupo activista local, resisten el desalojo diciendo que no se irán a menos que se les garantice otro lugar para vivir. Ante el eco suscitado en los medios de comunicación locales, el ayuntamiento renuncia a enviar a la policía para desalojar a los migrantes, pidiendo, en cambio, a sus servicios psicosociales que intervengan para facilitar el desalojo pacífico y con el menor costo material y de imagen posible. ¿Qué debería hacer el equipo? ¿Cómo afrontaría la situación y qué recomendaciones haría?

I. Cultura y trauma psicológico, ¿cómo actuar? Colaborando con los profesionales de un equipo sanitario local, un psicólogo entra en contacto con una aldea africana en la que hay un grupo de tres niños-soldados de entre 9 y 13 años que han sido reclutados por ciertas milicias y obligados a participar en la guerra cruel y fratricida. La guerra se da por terminada y al retornar a su aldea el consejo tribal les acoge de nuevo en la comunidad; en una ceremonia de «purificación» el chamán les «libera» de los espíritus malignos, pero el psicólogo sospecha fundadamente que detrás del mutismo absoluto de los chicos sobre las peripecias vividas se deben esconder atroces dramas internos, por lo que han visto hacer y por lo que ellos mismos han hecho (incluyendo la muerte de otras personas). ¿Debe actuar? ¿Si la respuesta es positiva, como lo hará teniendo en cuenta los rituales tribales y pasados? ¿Aceptará el chamán, la tribu y sus consejos la «forma de curar» blanca? ¿Cómo actuar si se oponen?

J. Gestionando la información pública: ¿anticipación o alarma? A la concejalía de salud de una ciudad han llegado datos fiables indicando que algunas personas tienen síntomas similares a los de un virus raro pero maligno, que se transmite por ciertos fluidos y gases ambientales. A lo largo de una semana los casos se acumulan, pero no existe aún certeza de qué virus se trata ni de la forma de transmisión a los «huéspedes», que por tanto no se pueden asociar a un área geográfica o acontecimiento concretos (lo que facilitaría la localización del foco de la infección). El concejal está alarmado, pero no sabe exactamente qué hacer y pide ayuda a expertos sanitarios sobre la posibilidad de convocar una rueda de prensa para informar sobre los síntomas de la infección y recabar la colaboración de los posibles afectados que aún no los hayan reconocido ni solicitado atención médica. ¿Qué le van a aconsejar, sabiendo que un retraso en dar y recibir información puede permitir que el virus se extienda, pero que la difusión de ciertos datos puede sembrar el pánico en la población?

K. La difícil parentalidad postindustrial: enfrentando el torbellino adolescente. Un grupo de padres de una escuela secundaria solicita orientación y ayuda en relación a los problemas detectados en un grupo reducido, pero significativo, de chicas y chicos: su rendimiento escolar ha bajado notablemente, algunos vecinos dicen haber visto a las chicas (y chicos) con otros colegas «con muy mala pinta» y pasar su

tiempo de ocio en botellones o asistiendo masivamente a discotecas y lugares de mala fama, donde la droga circula sin trabas y las peleas entre grupos contabilizan dos muertos en el último año. Mientras en el barrio escasean los programas y centros de reunión para el ocio joven y adolescente sano, abundan las discos y «baretos» para consumir alcohol u otras drogas. La alarma de los padres se ha disparado al observar en sus hijos/as signos visibles de estar «colocados» y por el cambio de hábitos, la baja del interés académico y las «malas compañías» de adolescentes antes aplicados y sanos. Dado que se encuentran en la edad crítica, los padres temen que sus hijos puedan deslizarse hacia una peligrosa carrera de abandono escolar y abuso de drogas sumamente destructiva, tal y como observan en cada vez más casos de su entorno.

Los padres y madres de clase medio-alta reconocen que pasan mucho tiempo trabajando, pero niegan estar descuidando a sus hijos. Algunos han comenzado a registrar los bolsos y mochilas de sus hijos y a espiar los mensajes y llamadas de sus teléfonos móviles en busca de pistas fiables sobre lo que está sucediendo. Han hablado con el jefe de estudios de la escuela, que ha mostrado su disposición a ayudar pero no sabe qué podría hacer fuera de los límites escolares. ¿Qué debería hacer el consultor? ¿Se pueden justificar moralmente los registros y el espionaje de los padres? ¿Están obrando bien los padres? ¿Debería implicarse a la escuela en la corrección de los problemas? ¿Cómo?

L. Justificación la violencia blanda ante los abusos económicos y políticos. Los habitantes de una ciudad de un país en desarrollo están teniendo problemas con el suministro eléctrico, adjudicado a una compañía local (que se sospecha está económicamente vinculada con el alcalde): se quejan de que las instalaciones son deficientes y las estaciones de transformación y distribución no están debidamente mantenidas, con lo que la luz se va con frecuencia y los frigoríficos y otros aparatos eléctricos que las viviendas y los comercios del lugar necesitan en un clima caluroso dejan de funcionar. Las quejas al ayuntamiento y ante la compañía no han surtido ningún efecto, y un grupo de jóvenes airados han asaltado transformadores e instalaciones; como consecuencia, han sido detenidos y permanecen bajo custodia policial en los calabozos locales. Los ciudadanos, hartos de la irresponsabilidad de la compañía eléctrica e irritados con la detención de sus jóvenes, se manifiestan masiva pero pacíficamente ante la comisaría de policía para exigir la liberación de aquéllos. ¿Cómo solucionar el conflicto? ¿Está justificado el vandalismo de los jóvenes? ¿Es legítimo exigir su liberación o deben permanecer en prisión? ¿Qué responsabilidad tiene la compañía eléctrica en lo ocurrido? ¿Y el gobierno local?

M. Oportunismo político-mediático y equidad: criterios de justicia social ante los dramas sociales. Un grupo de familias necesitadas, que llevan varios meses ocupando un edificio de propiedad pública, es conminado por mandato judicial a desalojar el edificio, pues el gobierno municipal lo necesita para el uso al que estaba destinado. El desalojo provoca una considerable atención mediática y pública, por lo que uno de los socios del gobierno de izquierdas que gestiona la correspondiente consejería decide, por su cuenta y riesgo, realojar a las familias desalojadas en viviendas municipales

destinadas a familias necesitadas y excluidas, y para cuya adjudicación —realizada por rigurosos criterios de necesidad y exclusión— hay una larga lista de espera (varios cientos de familias) que la titular de la consejería se salta a la torera, provocando un agudo conflicto político y social. ¿Es correcta la decisión de la consejera, tomada al calor del conflicto y bajo los focos mediáticos, o deberían las familias desalojadas someterse a los mismos criterios que el resto? ¿Qué criterios de justicia social (de mínimos, distributiva y procesal) serían aquí aplicables y cómo? ¿Debe primar alguno de esos componentes o criterios? ¿Es justificable el oportunismo político (y mediático) de la consejera que «se salta» la lista de espera? ¿Lo sería si se tratara del asalto pacífico a un supermercado para reunir comida para las familias pobres? ¿Y en el caso de la ocupación de fincas productivas pero no explotadas pertenecientes a terratenientes o entidades públicas para la explotación cooperativa popular?

N. Desarrollo económico y cambio organizativo. Como parte de un equipo de «recursos humanos», usted recibe el encargo de la dirección de un banco en un país en crecimiento económico para rediseñar el esquema organizativo y las funciones de los puestos de trabajo de base (no de los directivos, que tendrán su propia reorganización). El banco, hasta ahora público, ha estado utilizando los ingresos procedentes de la explotación de materias primas en que el país es rico para promover empresas económicas pero también importantes proyectos sociales. Algunos clientes se han quejado de la relativa ineficacia y del trato burocratizado y desdeñoso de los empleados. Pero, además, al incorporarse a una economía de mercado más competitiva, el banco no estará ya sostenido por recursos públicos sino por sus propias ganancias, por lo que, aunque conserve un sector de microcréditos a empresas de interés social, debe comenzar a competir con la banca comercial y debutar en el sector de la rentable especulación financiera. La plantilla del banco está sobredimensionada en relación a otras entidades de tamaño similar (que han automatizado o pasado a Internet gran parte de sus actividades), el clima laboral interno es agradable pero los métodos de trabajo son anticuados, y no existe ningún sistema de control del rendimiento ni del trato con los clientes (ni tampoco incentivos a la producción y el buen trato).

Las recomendaciones destinadas a «ofrecer un mejor servicio al cliente» (además de aumentar la rentabilidad) del banco, habrán de cambiar ese panorama. Se espera que incluyan tanto una importante reducción de la plantilla (como resultado de la automatización e informatización de servicios) como exigencias drásticas para elevar la productividad laboral y mejorar el trato a los clientes, la introducción de incentivos económicos (cuya utilidad real es dudosa, pues los trabajadores bancarios ya tienen un nivel salarial elevado en comparación con otros trabajadores) y un plan de formación basado en los nuevos valores. Usted es un profesional bien pagado (en relación a otros puestos a los que puede aspirar en su profesión), pero se siente algo incómodo ante el encargo. ¿Qué hará, teniendo en cuenta los sacrificios y cambios exigidos a los trabajadores, pero también los beneficios de los clientes del banco, y

ante la «inevitable» reorientación del negocio?

O. Violencia de género y partidismo. Una asociación feminista (O'Neill, 1989), alarmada por el maltrato en una zona rural, desea abrir una casa-refugio para mujeres maltratadas, para lo que necesitan apoyo económico del ayuntamiento. Aunque este quiere ayudar, recela del excesivo partidismo de la asociación, a la que pide que justifique con datos que la casa va a tener un uso real, de forma que los fondos municipales serán bien empleados. La asociación contrata a una psicóloga, que usa los registros de casos de maltrato del sistema sanitario, policial-judicial y servicios sociales de la zona, encontrando un número de casos limitado, pero suficiente para justificar la apertura de la casa. El problema es que ignora el número de casos duplicados en los distintos registros y si, por tanto, el número real de personas maltratadas justificaría en realidad la apertura de la casa. Y así lo explica al ayuntamiento, que decide avanzar sólo una parte de la financiación hasta ver si el equipamiento es realmente usado o no. Meses después la psicóloga descubre que para asegurarse de recibir las ayudas posteriores la casa está siendo usada por personas que no corresponden al perfil del maltrato. Ello es justificado por la directora (que pertenece a la asociación feminista promotora de la casa) como algo «temporal» hasta que aumente la demanda. ¿Qué debe hacer la psicóloga? ¿Hizo bien su trabajo previo de evaluación e informe al ayuntamiento? ¿Cuáles son las lecciones a aprender para el futuro?

P. Cultura, género e igualdad:¿cómo proceder? Una joven educadora social, E, trabajando en un centro de internamiento de adolescentes magrebíes, se enfrenta con cierta frecuencia a una incómoda situación. Los adolescentes —varones en su totalidad—, aunque cooperan en la realización de algunos programas y actividades del centro (como los talleres de manualidades, las nuevas tecnologías y los deportes) ofrecen bastante resistencia a la hora de aceptar las directrices y órdenes de una mujer (joven además) en rutinas diarias de higiene, mantenimiento del orden de las habitaciones y comportamiento en otros espacios. La mayoría de compañeros de E (educadores, monitores y otros profesionales) son hombres; hay también otra mujer, pero es mayor y se toma las cosas con mucha más calma, recomendando a E paciencia y cierta comprensión respecto a las reacciones y actitudes de los adolescentes, esperables por la cultura de los pueblos de los que provienen, y que sólo paulatinamente se podrán cambiar combinando serenidad y firmeza por parte de todo el personal.

Aunque el trabajo le agrada, E no se encuentra cómoda con las condiciones en que se desarrolla: no sólo por la altanera y continuada resistencia de los adolescentes, sino también por las ocasionales bromas «inocentes» de sus compañeros masculinos de trabajo, las cuales no le hacen ninguna gracia. Considera la posibilidad de pedir ayuda a sus compañeros o un cambio de responsabilidad, pero duda por el reconocimiento de la propia incapacidad que, a la vista del ejemplo de su compañera, eso supondría. Se plantea, también, dejar el trabajo en busca de otros empleos menos vejatorios y más gratificantes, pero es consciente de la dificultad de encontrar otros

tipos de empleo en la ciudad si no se tiene una cierta experiencia. ¿Qué debe hacer E? ¿Debe confrontar la presión cultural, o transigir temporalmente como le recomienda su colega? ¿Debe pedir ayuda al respecto? Si es así, ¿a quién y cómo?

RESUMEN

El capítulo explora los métodos para analizar y resolver los problemas éticos de la práctica psicosocial, ilustrando algunos de ellos con la presentación de casos. Comienza identificando tres *vías de evaluación* de problemas y «soluciones» *morales*: la inducción guiada por la *intuición* inconsciente y la *conciencia moral*; la deducción o aplicación racional de *normas explícitas* (como los códigos deontológicos) a situaciones particulares; y la *analogía* personal o conductual asociada a la exposición e *interacción* (y al diálogo) *social.* Esos caminos de reconocimiento y valoración llevan aparejados sus correspondientes métodos de aprendizaje y desarrollo moral: el cultivo de las potencialidades intuitivas y de la conciencia moral (evaluación intuitivo-inductiva); el razonamiento moral en base a normas establecidas (deontología deductiva) y el diálogo y la interacción social, así como la exposición a personas y conductas ejemplares (deliberación dialéctica y «transmisión» e imitación social).

La *evaluación* moral —y su *aprendizaje*— son, por tanto, procesos *multidimensionados,* continuos y evolutivamente interconectados, que discurren transversal y longitudinalmente en varios ámbitos de la socialización humana: la familia y las interacciones afectivamente mediadas con «otros significativos», los intercambios igualitarios cara a cara con los pares en la adolescencia, y la educación formal en sus distintas etapas. La *preparación* para resolver problemas prácticos debe incorporar las tres vías (intuitivo-inductiva, deducción racional, e imitación e interacción social), combinándolas según el propósito central sea el desarrollo de destrezas analíticas y resolutivas o el trabajo en situaciones nuevas o poco familiares (en las que primará el cultivo de la intuición y el diálogo interactivo), o la resolución de problemas en situaciones relativamente familiares y conocidas en las que debería primar la deducción razonada y la aplicación de las normas ya existentes). El aprendizaje analógico y el diálogo interpersonal e interprofesional deberían, en fin, jugar un papel importante en las áreas psicosociales más mestizas y desconocidas, en las que el ejemplo conductual y la deliberación y el diálogo resultan esenciales y no pueden ser sustituidos por la consulta de la norma y su aplicación particularizada para la situación concreta.

La multidimensionalidad real de las fuentes de valor y de los procesos de resolución moral deja, por otro lado, en evidencia el racionalismo que, como fuente valorativa y método resolutivo, monopoliza diversas teorías y enfoques operativos que acaban distorsionando la naturaleza del «hecho moral» y las aproximaciones prácticas a su evaluación y a la búsqueda de alternativas y soluciones.

Examino varias *propuestas metodológicas* existentes en la literatura individual

(dominante) propia de la bioética y en la (más escasa) literatura psicosocial, destacando algún enfoque social genérico (como el de Kelman y Warwick), el análisis cruzado de derechos y deberes en espacios grupales, y un procedimiento más inductivo (Lippitt) que externaliza el diálogo interno e incluye la consideración de las habilidades que el practicante debe desarrollar para poder formular sus valores y llevar a cabo la opción seleccionada. Reviso también varios métodos para solucionar dilemas en el trabajo social, que tienen en común el eclecticismo teórico (que permite combinar principios extraídos de diversas teorías) y la exhortación a obedecer la ley y a consultar los códigos deontológicos y a los supervisores y colegas (el recurso, en una palabra, a la norma externa).

Justifico a continuación la necesidad de combinar enfoques deontológicos (o «principalistas», basados en principios y valores) y enfoques consecuencialistas (basados en las consecuencias previstas u observadas) para la evaluación ética de las acciones psicosociales, y ofrezco tres criterios valorativos complementarios más específicos: el bienestar (beneficencia si se quiere) conjunto efectivamente generado, la reducción de la desigualdad y desequilibrios sociales (primando la satisfacción del «mínimo vital» de supervivencia), y el uso de métodos, medios y procesos de relación respetuosos con la capacidad y dignidad de las personas y grupos con que se trabaja. En base a todo ello propongo un sencillo esquema analítico y resolutivo (AVOC), basado en los cuatro ingredientes nucleares de la ética psicosocial (actores, valores, opciones y consecuencias). Más que un método formal que resuelva los problemas éticos prácticos, el esquema los presenta ordenadamente, aportando cuatro puntos para anclar los procesos inductivos, deductivos y analógicos realmente usados para formular y resolver las cuestiones éticas. Al identificar los actores y valores relevantes estamos formulando el problema, y al reconocer las principales opciones y sus consecuencias para los actores estamos planteando la solución.

Ilustro la dinámica operativa del esquema mediante dos casos, uno en el nivel institucional, mesosocial, y otro en el nivel comunitario macrosocial, ofreciendo finalmente catorce casos-problema adicionales para el ejercicio de las metodologías descritas.

PALABRAS CLAVE

- Evaluación moral.
- Solución de problemas morales.
- Vías de evaluación y solución de problemas morales.
- Intuición.
- Conciencia moral.
- Deducción racional.
- Imitación y emulación social.
- Cultivo de potencialidades morales.
- Aprendizaje y aplicación de normas éticas.
- Interacción personal y diálogo social.
- Límites de la racionalidad instrumental.
- Métodos de evaluación y solución de problemas morales.
- Métodos deductivos.
- Métodos inductivos.
- Derechos y deberes recíprocos.
- Enfoques deontológicos de evaluación moral.
- Enfoques consecuencialistas de evaluación moral.
- Criterios de evaluación moral.
- Casuística.

Referencias

Abello, M. y Gallego, J. (2007). *Intervención psicosocial, una aproximación desde el trabajo social.* Medellín: Universidad de Antioquía (tesis de pregrado).

Alvárez, A. y Maureta, M. (1997). L'ètica dia a dia. *Revista de Treball Social* (monográfico: «Ética y trabajo social»), *146,* 159-168.

American Journal of Community Psychology (1989). *17,* 323-400 (monográfico sobre «Ética de la intervención comunitaria»).

Back, K. (1978). An ethical critique of encounter groups. En G. Bermant, H. Kelman y D. Warwick (eds.), *The ethics of social intervention* (pp. 103-116). Nueva York: Halstead Press.

Backlar, P. y Cutler, D. (eds.) (2002). *Ethics in community mental health care.* Nueva York: Kluwer Academic/Plenum.

Banks, S. (1997). *Ética y valores sociales.* Barcelona: Paidós.

Banks, S. y Nohr, K. (eds.) (2012). *Practising Social Work Ethics around the World. Cases and Commentaries*. Nueva York: Routledge.

Barriga, S., León, J. M. y Martínez M. (comps.) (1987). *Intervención psicosocial*. Barcelona: Hora.

Bauman, Z. (1993). *Postmodern ethics*. Oxford: Blackwell.

Beauchamp, T. y Childress, J. (1999). *Principios de ética biomédica.* Barcelona: Paidós.

Bell D. (1976). *El advenimiento de la sociedad postindustrial*. Madrid: Alianza Universidad

Bell D. (1977). *Las contradicciones culturales del capitalismo*. Madrid: Alianza Universidad.

Bellah, R., Madsen, W, Sullivan, W., Swidler, A. y Tipton, S. (1989). *Hábitos del corazón*. Madrid: Alianza Editorial.

Benne, K., Bradford, L., Gibb, J. y Lippitt, R. (1975). *The laboratory method of changing and learning: Theory and application*. Palo Alto, Cal.: Science and Human Behavior.

Bermant, G. y Warwick, D. (1978). The Ethics of social intervention: Power, freedom, and accountability. En G. Bermant, H. Kelman y D. Warwick (eds.), *The ethics of social intervention* (pp. 379-417). Nueva York: Halstead Press.

Bermant, G., Kelman, H. y Warwick, D. (eds.), *The ethics of social intervention*. Nueva York: Halstead Press.

Bermejo, F. (1997). La ética en el trabajo social. *Revista de Treball Social* (monográfico: «Ética y trabajo social»), *146,* 58-67.

Bermejo, F. (2002). *La ética del trabajo social.* Bilbao: Desclée de Brouwer.

Bernler, G. (1997). *Teoría para el trabajo psicosocial,* 4.a ed. Buenos Aires: Espacio.

Bilbeny, N. (1992). ¿Por qué hay valores? *El Ciervo, 500,* 7-8.

Black, D. (1993). *The social structure of right and wrong*. San Diego: Academic.
Blanco, A. (1987). La ética social en la intervención psicosocial y comunitaria. *Papeles del Colegio, 6*, 15-18.
Blanco, A. y Rodríguez Marín, J. (2007). *Intervención psicosocial.* Madrid: Pearson Educación.
Bond, M. A. (1989). Ethical dilemmas in context: Some preliminary questions. *American Journal of Community Psychology, 17*, 343-345.
Brumlik, M. (1991). Is an advocatory ethic at all possible? En G. Albrecht y H. U. Otto (eds.), *Social Prevention and the Social Science* (pp. 61-69). Berlín: Walter de Gruyter.
Bueno, J. (2005). *El proceso de ayuda en la intervención psicosocial.* Madrid: Popular.
Camps, V. (1990). *Virtudes públicas*. Madrid: Espasa.
Cantera, L. (2004). Ética, valores y roles en la intervención comunitaria. En G. Musitu, J. Herrero, L. Cantera y M. Montenegro, *Introducción a la psicología comunitaria* (pp. 231-257). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
Caplan, G. (1979). *Principios de psiquiatría preventiva*. Buenos Aires: Paidós (original, 1964).
Cardozo, A. A. (2009). *Intervención psicosocial.* Barranquilla: Educosta.
Castaño, B. y otros (1994). *Violencia política y trabajo psicosocial. Aportes al debate.* Santa Fé de Bogotá: Corporación AVRE.
Castillo, J. y Winkler, M. (2010). Praxis y ética en psicología comunitaria: Representaciones sociales de usuarias y usuarios de programas comunitarios en la región metropolitana. *Psykhe, 19*, 31-46.
Colomer, M. (1988). La influencia del proceso histórico en los valores del trabajo social. *Revista de Trabajo Social* (monográfico: «Valores y trabajo social»), *12*, 16-21.
Congress, E. P. (1999). *Social work values and ethics. Identifying and resolving professional dilemmas*. Belmont: Wadsworth/Thomson.
Conill, J. (1996). Aspectos éticos de la intervención psicosocial. En A. Sánchez Vidal y G. Musitu (comps.), *Intervención comunitaria: Aspectos científicos, técnicos y valorativos* (pp. 37-54). Barcelona: EUB.
Conner, R. (1990). Ethical issues in evaluating the effectiveness of primary prevention programs. En G. Levin, E. Trickett y R. Hess (eds.), *Ethical implications of primary prevention* (pp. 3-21). Nueva York: Haworth.
Cortina, A. (1992). *Ética mínima.* Madrid: Tecnos.
Cortina, A., Innerárity, D., Castiñeira, A. y Morales, C. (2010). *Els reptes etics de la intervenció social* (I Simposi d'Ética aplicada a la Intervenció social). Barcelona: Campus Arnau d'Escala.
Cowen, E. y Gesten, E. (1980). Evaluating community programs. En M. Gibbs, J. Lachenmeyer y J. Sigal, (eds.), *Community Psychology* (pp. 363-393). Nueva York: Gardner.
Cronick, K. y García, J. A. (1998). Ideología, ética y compromiso. En A. Martín González (comp.), *Psicología comunitaria. Fundamentos y aplicaciones*, cap. 18 (pp. 241-260). Madrid: Visor.

Cruz, M. (2013). Cuando todo es campo de batalla. *El País*, 9 de junio, pp. 39-40.
Davidson, W. (1989). Ethical and moral dilemmas in community psychology: Tarnishing the angel's halo. *American Journal of Community Psychology*, *17*, 385-389.
Deci, E. L. (1975). *Intrinsic motivation.* Nueva York: Plenum.
Dewey, J. (2003). Estados Unidos SA. En J. Dewey, *Viejo y nuevo individualismo* (pp. 73-84). Barcelona: Paidós (original, 1930).
Doménech, A. (1989). Seis conceptos de igualdad. En V. Camps, S. Giner, F. Savater y otros, *L'ètica del present* (pp. 121-128). Barcelona: Fundación Caixa de Pensions.
Downie, R. (1971). *Roles and values. An introduction social ethics.* Londres: Methuen & Co.
Doyal, L. y Gough, I. (1994). *Teoría de las necesidades humanas.* Londres: McMillan.
Du Ranquet, M. (1996). *Los modelos en Trabajo social. El modelo diagnóstico o psicosocial*. México: Siglo XXI.
Ellul, J. (2003). *La edad de la técnica*. Barcelona: Octaedro (original, 1954).
Fernández González, A. y Musitu, G. (comps.) (2000). *Intervención psicosocial.* Santiago de Compostela: Universidad de Vigo.
Fromm, E. (1955). *The sane society.* Greenwich, Conn.: Fawcett.
Fromm, E. (1965). *Escape from freedom.* Nueva York: Avon (original, 1941).
Fuller, R. C. y Myers, R. R. (1941). The natural history of a social problem. *American Sociological Review, 6*, 320-328.
Galbraith, K. (1984). *La sociedad opulenta.* Barcelona: Ariel (original, 1958).
Gallesich, J. (1982). *The profession and practice of consultation*. San Francisco: Jossey-Bass.
Glidewell, J. C. (1978). Ethical issues in and around encounter groups. En G. Bermant, H. Kelman y D. Warwick (eds.), *The ethics of social intervention* (pp. 69-101). Nueva York: Halstead Press.
Glidewell, J. (1984). Training for the role of advocate. *American Journal of Community Psychology, 12*, 193-198.
Golann, S. (1969). Emerging areas of ethical concern. *American Psychologist, 24*, 454-459.
González Casanova, J. A. (1992). El verdadero Estado está aún por construir. *El Ciervo, 500*, 14-15.
Heller, K. (1989). Ethical dilemmas in community intervention. *American Journal of Community Psychology, 17*, 367-378.
Horney, K. (1937). *The neurotic personality of our time*. Nueva York: Norton.
Idareta, F. y Ballestero, A. (2013). Ética, paternalismo y burocracia en el Trabajo Social, *Revista de Trabajo Social, 13*, 27-35.
Inglehart, R. y Welzel, C. (2006). *Modernización, cambio cultural y democracia.* Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI.
Jahoda, M. (1958). *Current concepts of positive mental health*. Nueva York: Basic Books.
Keith-Spiegel, P. y Koocher, G. P. (1985). *Ethics in psychology. professional*

standards and ethics. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.
Kelman, H. C. (1965). Manipulation of human behavior: An ethical dilemma for the social scientist. *Journal of Social Issues, 21,* 31-46.
Kelman, H. y Warwick, D. (1978). The ethics of social intervention: goals, means, and consequences. En G. Bermant, H. Kelman y D. Warwick (eds.), *The ethics of social intervention* (pp. 3-33). Nueva York: Halstead Press.
Kirpatrick, F. G. (1986). *Community: A trinity of models*. Washington, DC: Georgetown University Press.
Kisnerman, N. (1970). *Ética para el servicio social.* Buenos Aires: Humanitas.
Kisnerman, N. (comp.) (2001). *Ética, ¿un discurso o una práctica social?* Buenos Aires: Paidós.
Knapp, S. y VandeCreek, L. (2006). *Practical ethics for psychologists: A positive approach.* Washington, D. C.: American Psychological Association.
Knitzer, J. (1980). Advocacy and community psychology. En M. Gibbs, J. Lachenmeyer y J. Sigal (eds.), *Community Psychology* (pp. 293-309). Nueva York: Gardner.
Kofkin, J. (2003). *Community Psychology.* Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Kohlberg, L. (1992). *Psicología del desarrollo moral.* Bilbao: Desclée de Brouwer.
Lago, E. (2013). Junot Díaz: Cada joven es un objetivo de las corporaciones. *El País Semanal,* 28 de abril, pp. 32-37.
Laue, J. y Cormick, G. (1978). The ethics of intervention in community disputes. En G. Bermant, H. Kelman y D. Warwick (eds.), *The ethics of social intervention* (pp. 205-231). Nueva York: Halstead.
Lebret, L. J. (1966). *Dinámica concreta del desarrollo*. Barcelona: Herder.
Levine, M. y Perkins, D. (1987). *Principles of community psychology: Perspectives and applications*. Nueva York: Oxford.
Levy, C. (1993). *Social work ethics on the line.* Nueva York: Haworth.
Lipovetsky, G. (1994). *El crepúsculo del deber*. Barcelona: Anagrama.
Lippitt, R. (1983). Ethical issues and criteria in intervention decisions. En S. Cooper y W. Hodges (eds.), *The mental health consultation field* (pp. 139-151). Nueva York: Human Sciences.
Loewnberg, F. y Dolgoff, R. (1996). *Ethical decissions for social work practice,* 5.a ed. Itasca, Ill.: Peacock.
López, M. (1992). *Concepto de ética y su aplicación en el trabajo social*. Madrid: Cátedra San Juan de Dios.
López Cabanas, M. y Chacón, F. (1997). *Intervención psicosocial y Servicios Sociales. Un enfoque participativo*. Madrid: Síntesis.
Luque, O. (comp.) (1988). *Intervención psicosocial en Servicios Sociales*. Valencia: Nau Libres.
MacIntyre, A. (1984). *After virtue*. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame.
Martínez de Antoñanzas, R. y Landa, A. (1997). Reflexiones sobre ética y trabajo social. *Revista de Treball Social* (monográfico: «Ética y trabajo social»), *146,* 88-93.
Maslow, A. (1991). *El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser.* Barcelona: Paidós (original, 1962).

May, R. (1972). *Power and innocence. A search for the sources of violence.* Nueva York: Norton.
Maya, I., García Ramírez, M. y Santolaya, F. (2007). *Estrategias de intervención psicosocial. Casos prácticos.* Madrid: Pirámide.
Merton, R. K. (2002). *Teoría y estructura sociales*, 3.a ed. México: Fondo de Cultura Económica (original, 1968).
Mills, C. W. (1957). *La élite del poder.* México: Fondo de Cultura Económica
Mills, C. W. (1961). *La imaginación sociológica.* México: Fondo de Cultura Económica.
Mitroff, I. I. (1983). Beyond experimentation: New methods for a new age. En E. Seidman (ed.), *Handbook of social intervention* (pp. 163-177). Beverly Hills: Sage.
Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria.* Buenos Aires: Paidós.
Mumford, L. (1969). *El mito de la máquina: Técnica y desarrollo humano.* Buenos Aires: Emecé.
Mumford, L. (1971). *Técnica y civilización.* Madrid: Alianza (original, 1934).
Musitu, G., Berjano, E., Gracia, E. y Bueno, J. (1993). *Intervención psicosocial*. Madrid: Popular.
Nelson, G. y Prilleltensky, I. (eds.) (2005). *Community Psycholoy. In pursuit of liberation and well-being.* Londres: Palgrave-McMillan.
Noble, D. (1984). *Forces of production: A social history of industrial automation*. Nueva York: Knopf.
Noble, D. (1987). *El diseño de Estados Unidos.* Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (original, 1977).
O'Neill, P. (1989). Responsible to whom? Responsible for what? Some ethical issues in community intervention. *American Journal of Community Psychology, 17,* 323-341.
Opotow, S. (1990). Moral exclusion and injustice: An introduction. *Journal of Social Issues, 46,* 1-20.
Ortega y Gasset J. (1982). *Meditación de la técnica*. Madrid: Revista de Occidente (original, 1939).
Perlman, B. (1977). Ethical concerns in community mental health. *American Journal of Community Psychology, 5,* 45-57.
Piaget, J. (1971). *El juicio moral en el niño.* Barcelona: Fontanella (original, 1932).
Polanyi, M. (1966). *El estudio del hombre*. Buenos Aires: Paidós.
Polanyi, K. (1997). *La gran transformación.* Madrid: La Piqueta (original, 1944).
Pope, K. S. (1990). Identifying and implementing ethical standards for primary prevention. En G. Levin, E. Trickett y R. Hess (eds.), *Ethical implications of primary prevention* (pp. 43-64). Nueva York: Haworth.
Prilleltensky, I. (1989). Psychology and the status quo. *American Psychologist, 44,* 795-802.
Prilleltensky, I. (1997). Values, assumptions, and practices: assessing the moral implications of psychological discourse and action. *American Psychologist, 52,* 517-535.
Prilleltensky, I. (2001). Value base praxis in community psychology: Moving toward

social justice and social action. *American Journal of Community Psychology, 29,* 748-778.
Rabinowitz, P. (2013). Ethical issues in community intervention. En B. Berkowitz y T. Brownlee (eds.), *The community tool box* (cap. 19, sec. 5). University of Kansas (http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/section_116).
Rappaport, J. (1977). *Community psychology: values, research, and action*. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston.
Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, Mass.: Belknap Press.
Reamer, F. G. (1990). *Ethical dilemmas in social service,* 2.a ed. Nueva York: Columbia University Press.
Rey, C. (1994). Intervención en lo social. *Psicología: text i context, 9,* 23-24.
Riesman, D., Glazer, N. y Denney, R. (1981). *La multitud solitaria.* Barcelona: Paidós (original, 1950).
Riger, S. (1989). The politics of community intervention. *American Journal of Community Psychology, 17,* 379-383.
Rogers, C. (1972). *El proceso de convertirse en persona.* Barcelona: Paidós (original, 1961).
Rubí, C. (1988). La ética en el trabajo social. *Revista de Trabajo Social* (monográfico: «Valores y trabajo social»), *12,* 101-104.
Rueda, J. M. (1986). Praxis psicosocial. *Revista de Trabajo Social, 103,* 7-23.
Saforcada, E. y Sarriera, J. (comps.) (2008). *Enfoques conceptuales y técnicos en psicología comunitaria.* Buenos Aires: Paidós.
San Juan, C. (comp.) (1996). *Intervención psicosocial.* Barcelona: Anthropos.
Sánchez Vidal, A. (1990). ¿Intervención comunitaria? Premisas y cuestiones previas. En *Psicología y Servicios Sociales. Comunicaciones del II Congreso del COP* (vol. 4, pp. 12-15). Valencia: Colegio Oficial de Psicólogos.
Sánchez Vidal, A. (1991). *Psicología comunitaria. Bases conceptuales y operativas y métodos de intervención*. Barcelona: PPU.
Sánchez Vidal, A. (1993). *Programas de prevención e intervención comunitaria*. Barcelona: PPU.
Sánchez Vidal, A. (1995). Potencial y límites de la intervención psicosocial. *Intervención Psicosocial, 10,* 5-15.
Sánchez Vidal, A. (1996). Fantasmas en el desván: Cuestiones valorativas en la intervención psicosocial. En A. Sánchez y G. Musitu (comps.), *Intervención comunitaria: Aspectos científicos, técnicos y valorativos* (pp. 55-75). Barcelona: EUB.
Sánchez Vidal, A. (1998). Responsabilidad del psicólogo en la acción social: ¿Quién es el «cliente»? *Revista de Psicología Social, 13,* 303-309.
Sánchez Vidal, A. (1999). *Ética de la intervención social*. Barcelona: Paidós.
Sánchez Vidal, A. (2002). *Psicología social aplicada.Teoría, método y práctica.* Madrid: Pearson Educación.
Sánchez Vidal, A. (2004a). Acción social en tiempos de conformismo: Por una ética posible de la intervención comunitaria. En A. Sánchez Vidal, A. Zambrano y M. Palacín (comps.), *Psicología comunitaria europea* (pp. 93-106). Barcelona: Publicacions de la UB.

Sánchez Vidal, A. (2004b). The values of community psychology and community action. Presentado en V European Congress of Community Psychology, Berlín.
Sánchez Vidal, A. (2005). Socioethical ecology of community psychology: Communitarian values in an individualistic era. En G. Nelson e I. Prilleltensky (eds.), *Community Psychology* (pp. 66-68). Londres: Palgrave-McMillan.
Sánchez Vidal, A. (2007). *Manual de psicología comunitaria.* Madrid: Pirámide.
Sánchez Vidal, A. (2009). *De la servidumbre mecánica a la dominación blanda. Sueños y pesadillas técnicos.* Barcelona: documento inédito.
Sánchez Vidal, A. (2012). Investigación, acción, opciones personales y condicionamientos metodológicos y sociales. Consideraciones al hilo de una experiencia. En A. Zambrano y H. Berroeta (comps.), *Teoría y práctica de la acción comunitaria. Aportes desde la psicología comunitaria* (pp. 95-128). Santiago de Chile: RIL.
Sánchez Vidal, A. (2013). ¿Es posible el empoderamiento en tiempos de crisis? Repensando el desarrollo humano en el nuevo siglo. *Universitas Psicológica, 12*, 285-300.
Sánchez Vidal, A. (2016). The ethics of community psychology: Actors, values, options, and consequences. En M. Bond, C. Keyes e I. Serrano (eds.), *Handbook of Community Psychology* (vol. 1, pp. 67-83).Washington: American Psychological Association (en prensa).
Savater, F. (1981). *La tarea del héroe.* Barcelona: Destino.
Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? *Journal of Social Issues, 4* (monográfico: «Valores humanos y cuestiones sociales»), 19-45.
Seidman, E. (1983). Unexamined premises of social problem solving. En E. Seidman (ed.), *Handbook of social intervention* (pp. 48-68). Beverly Hills: Sage.
Sen, A. (1990). Development as capability expansion. En K. Griffin y J. Knight, *Human development and the international development strategy for the 1990s*. Nueva York: Mcmillan-United Nations.
Sen, A. (1997). *Bienestar, justicia y mercado.* Barcelona: Paidós.
Serrano García, I. (1994). The power of ethics and the ethics of the powerful. *American Journal of Community Psychology*, *22*, 1-20.
Sieber, J. E. (1982). *The ethics of social research*. Nueva York: Spring-Verlag.
Snow, D. y Gersick, K. (1986). Ethical and professional issues in mental health consultation. En F. Mannino, E. Trickett, M. Shore, M. Kidder y G. Levin (eds.), *Handbook of mental health consultation* (pp. 393-431). Rockville, Md.: National Institute of Mental Health.
Snow, D., Grady, K. y Goyette-Ewing, M. (2000). A perspective on ethical issues in community psychology. En J. Rappaport y E. Seidman (eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 896-917). Nueva York: Kluwer Academia/Plenum.
Soltzhenitsyn, A. (1988, 2005, 2007). *Archipiélago Gulag.* Barcelona: Tusquets (original, 1973-1980).
Sullivan, H. S. (1953). *The interpersonal theory of psychiatry.* Nueva York: Norton.
Thompson, A. (1989). *Guide to ethical practice in psychotherapy*. Nueva York: Wiley.

Timms, N. (1983). *Social work values.* Londres: Routledge & Kegan Paul.
Trickett, E. y Levin, G. (1990). Paradigms for prevention: Providing a context for confronting ethical issues. En G. Levin, E. Trickett y R. Hess (eds.), *Ethical implications of primary prevention* (pp. 3-21). Nueva York: Haworth.
Tropman, J. y Cox, F. (1987). Society: American values as a context for community organization and macropractice. En F. Cox, J. Erlich, J. Rothman y J. Tropman, *Strategies of community organization. Macropractice* (pp. 213-231). Itasca, Ill.: Peackock.
Tymchuk, A. (1981). Ethical decision making and psychological treatment. *Journal of Pshychiatric Treatment and Evaluation, 3,* 507-513.
Uriz, M. J. (2000). *Ética social contemporánea.* Pamplona: Eunate.
Uriz, M. J. (2004). Modelos de resolución de dilemas éticos en Trabajo Social. *Revista de Trabajo Social, 175,* 6-27.
Uriz, M. J., Ballestero, A. y Urien, B. (2007). *Dilemas éticos en la intervención social. Una perspectiva profesional desde el trabajo social*. Zaragoza: Mira.
Warwick, D. (1978). Ethical guidelines for social experiments. En G. Bermant, H. Kelman y D. Warwick (eds.), *The ethics of social intervention* (pp. 267-287). Nueva York: Halstead.
Waterman, A. S. (1981). Individualism and interdepencence. *American Psychologist, 36,* 762-773.
Weber, M. (1964). *Economía y sociedad.* México: Fondo de Cultura Económica (original, 1922).
Weber, M. (1967). *El político y el científico.* Madrid: Alianza (original, 1919).
Winkler, M., Alvear, K., Olivares, B. y Pasmanik, D. (2012a). «Lo ético es trasversal y cotidiano»: dimensiones éticas en la formación y práctica en psicología comunitaria. *Acta Bioética, 18,* 237-245.
Winkler, M., Alvear, K., Olivares, B., y Pasmanik, D. (2012b). Querer no basta: Deberes éticos en la práctica, formación e investigación en Psicología Comunitaria. *Psykhe, 21,* 115-129.
Winner, L. (1977*). Autonomous technology. Technics-out-of control as a theme in political thought.* Cambridge, Mass.: MIT Press.
Wolin, S. (2008). *Democracia S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido*. Barcelona: Katz.
Zamanillo, T., Giraldez, T., Estalayo, M., Morenas, P., Roncal, C. y Vicente, M. (2011). *Ética, teoría y práctica. La responsabilidad ética del trabajo social.* Madrid: Talasa.

Director: Francisco J. Labrador

Edición en formato digital: 2016

© Alipio Sánchez Vidal
© Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 2016
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15
28027 Madrid
piramide@anaya.es

ISBN ebook: 978-84-368-3608-0

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del Copyright.

Conversión a formato digital: calmagráfica

Los enlaces web incluidos en esta obra se encuentran activos en el momento de su publicación.

www.edicionespiramide.es

Índice

Prólogo 7

Introducción 10

1. Contexto social y crisis moral: modernidad, posmodernidad, globalización... y la historia continúa 12

1. La modernidad 14

1.1. Crítica y ambivalencia del legado moderno 17

2. La revuelta antimoderna: ¿ética posmoderna? 20

2.1. Irresponsabilidad social e indiferencia personal 22

3. Globalización y crisis económica 25

3.1. ¿Fin de la historia o despertar del sueño del progreso continuo? 29

3.2. El impacto de la crisis económica y la necesidad de regeneración ética 30

4. La crisis moral 32

4.1. ¿Crisis temporal o deterioro crónico? 32

4.2. Erosión de la alteridad e instrumentalización humana 33

4.3. Desarrollo material, economicismo y anomia moral 36

4.4. Dificultades de modulación moral y elevación de los medios a fines 39

Resumen e inconclusión: modernidad, posmodernidad, acción social y crisis moral 42

Palabras clave 44

2. Conceptos básicos: técnica, acción psicosocial con enfoque comunitario y ética 46

1. Técnica 46

1.1. Relevancia temática y justificación de la técnica psicosocial 48

1.2. Retos y problemas: industrialismo, capitalismo y mundo global 48

2. Técnica y ética: relaciones y abusos 51

2.1. Interacciones 53

3. Acción psicosocial 55

3.1. Contenido: lo psicosocial 56

3.2. Tres significados de «lo social» 59

3.3. Modalidades de actuación y relación psicosocial 60

3.4. Conclusión: el significado de la APS 63

4. El enfoque comunitario 65

4.1. Ideas básicas 66

4.2. Método de actuación y posición ética 67

5. Ética 69

5.1. ¿Ética social? 72
5.2. Ética práctica: valores morales e ideales personales y sociales 73
5.3. Sistemas de valores y modulación subjetiva y contextual 74
5.4. Alternatividad, bipolaridad y bidireccionalidad de la ética 76
6. Estructura y dinámica de la acción moral 77
6.1. Aspectos subjetivos: libertad, intenciones, conciencia y emoción 78
6.2. Aspectos relacionales y teleológicos 81
6.3. Aspectos objetivos: consecuencias y responsabilidad 82
Resumen: técnica, acción psicosocial y ética 83
Palabras clave 86
3. Ética psicosocial: actores, valores, opciones y consecuencias 87
1. El descuido de la ética en el campo psicosocial 87
1.1. Actitudes y tendencias: «buenismo» retórico e insuficiencia de la deontología individual 88
1.2. Plan del capítulo 89
2. Causas y consecuencias de la desatención ética en el terreno psicosocial 90
2.1. El precio de la anomia moral 91
3. Justificación: ética, desarrollo humano y recreación del mundo 93
4. Postura básica y viabilidad: ¿es realizable la ética comunitaria? 95
4.1. Viabilidad social 96
4.2. Viabilidad práctica y autocuidado 99
5. Ética psicosocial realizable 101
6. Estructura y dinámica ética de la acción profesional 104
6.1. Aspectos subjetivos 104
6.2. Autonomía técnica, eficacia y responsabilidad profesional 105
6.3. Intencionalidad 107
6.4. Poder técnico 107
7. La relación profesional: objetividad e implicación personal 108
7.1. La relación profesional en el escenario psicosocial 110
8. El destinatario de la acción psicosocial 112
8.1. Destinatarios potenciales y concepciones de la APS 112
8.2. Criterios de elección: justicia social y beneficencia 114
9. Aspectos objetivos: consecuencias y responsabilidad 115
9.1. Alcance y límites: irresponsabilidad y sobrerresponsabilización 116
9.2. Definiendo el bien y el mal y compartiendo la responsabilidad 118
9.3. Responsabilidad por efectos indeseados: previsión científica, control técnico y reparación de daños 119
10. Práctica psicosocial: diferencias éticas 121

10.1. Diferencias en la acción 121
10.2. Diferencias en la generación y uso de conocimiento 123
11. Ingredientes básicos: actores, valores, opciones y consecuencias 126
Resumen: ética psicosocial realizable 130
Palabras clave 134
4. Valores y principios deontológicos y sociocomunitarios 135
1. Orientaciones valorativas y problemas morales 135
1.1. La tarea práctica: «traduciendo» los valores a acción 138
1.2. Sistema valorativo psicosocial: valores deontológicos y valores sociocomunitarios 140
2. Valores y principios deontológicos en la APS 140
2.1. Beneficencia y no maleficencia 141
2.2. Autonomía individual y autonomía compartida 143
2.3. Confianza 147
2.4. Veracidad factual y holística 148
2.5. Justicia social (visión restringida) 150
2.6. Interés propio y autocuidado: derechos básicos y optativos 151
3. Valores y principios sociocomunitarios 152
3.1. Justicia social: Justicia distributiva, mínimo vital y equidad relacional 154
3.2. Solidaridad y comunidad 158
3.3. Compromiso social y responsabilidad social 159
3.4. Diversidad y derecho a la diferencia 161
3.5. Desarrollo humano personal y colectivo 162
3.6. Empoderamiento 164
3.7. Participación y organización social 165
3.8. Eficacia 165
4. Sistema sociocomunitario de valores 165
Resumen 166
Palabras clave 168
5. Temas y cuestiones éticas psicosociales: tipos y contenido 169
1. Tipología de los problemas éticos: conflicto y anomia 171
1.1. Conflictos: Valores, actores, opciones y consecuencias 171
1.2. Anomia AVOC 174
1.3. Orientaciones y «soluciones» a la anomia y el conflicto ético psicosocial 176
1.4. Situaciones y factores generadores 177
2. Contenido de la problemática ética psicosocial: cuestiones previas 179

2.1. Contradicción medios-fines: actuación externa y desarrollo humano autodirigido 180
3. Legitimidad, intervencionismo y deber de ayudar 182
3.1. Intervencionismo social: liberalismo y planificación socialista 182
3.2. Intervencionismo profesional y desarrollo humano 183
3.3. Responsabilidad profesional por acción y por omisión 185
4. Autoridad e intencionalidad 186
4.1. Autoridad política, técnica y moral 186
4.2. Intenciones, resultados, autobeneficio y agendas ocultas 187
4.3. Límites de la racionalidad científico-técnica: efectos secundarios y lógicas relacional y política 190
5. Temas y cuestiones éticas generales de la APS 191
6. Cuestiones y problemas éticos frecuentes en la APS 193
6.1. Algunas cuestiones éticas psicosociales 195
6.2. Roles duales 195
6.3. Confidencialidad y consentimiento voluntario e informado 196
6.4. Maltrato institucional, responsabilidad colectiva y cambio socioinstitucional 198
6.5. La necesidad del contrato 200
6.6. La actuación en situaciones de crisis 200
Resumen: temas y cuestiones éticas 201
Palabras clave 203
6. Metodología práctica y casuística: el esquema AVOC 204
1. Evaluación y resolución de problemas morales: intuición, racionalidad y aprendizaje social 204
1.1. Inducción intuitiva y deducción racional 204
1.2. Imitación y emulación social 206
1.3. Educación moral: cultivo de potencialidades, aprendizaje de normas e interacción social 207
1.4. Preparación para resolver problemas morales 209
1.5. Los límites de la racionalidad práctica: valoración, emoción y relación social 211
2. Procedimientos de abordaje de las cuestiones éticas: propuestas psicosociales 212
2.1. Derechos y deberes recíprocos en el trabajo microsocial 214
2.2. Externalizando el diálogo interior: un enfoque inductivo de toma de decisiones 217
2.3. Un proceso para la acción social 218
3. Modelos y enfoques de solución de dilemas éticos en el trabajo social 220

4. Actores, valores, opciones y consecuencias: una propuesta 222
4.1. Enfoques de evaluación moral 223
4.2. Criterios 225
5. Proceso analítico y resolutivo AVOC 226
5.1. Dinámica operativa 227
6. Casuística: presentación y solución de casos 230
7. Caso A. Mandato judicial, autonomía personal y responsabilidad profesional: un difícil dilema 231
7.1. Planteamiento del problema: actores y valores 231
7.2. Planteamiento de la solución: opciones, consecuencias y factores moduladores 233
7.3. Opción elegida 235
8. Caso B. Fidelidad al cliente vulnerable y responsabilidad social: un practicante atrapado 236
8.1. El problema: valores, derechos, deberes y brechas de titularidad y legitimidad 236
8.2. Planteando la solución: opciones, consecuencias y factores moduladores 239
8.3. Opción elegida y realización 241
9. Casos-problema 244
Resumen 251
Palabras clave 252
Referencias 253
Créditos 261